Vicenç Fisas

LAS GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO

CATARATA

Índice

1. INTRODUCCIÓN
2. LAS GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO
    1. El reverso de la moneda. La cancelación y las guerras contra la construcción de nuevas entidades políticas
    2. Las demandas políticas de los grupos armados
    3. La financiación de los grupos armados y la pérdida de la inocencia
    4. ¿Reparto del poder o democracia?
    5. La cultura de la violencia y el belicismo
    6. La recaída en los conflictos políticos: cuando no se aprenden las lecciones del pasado
3. RADIOGRAFÍA DEL PODER POLÍTICO EN CONTEXTOS BÉLICOS
    1. Los agravios como factor promotor de demandas políticas
4. LA IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS Y SU CAPACIDAD DE PERSUASIÓN
    1. Los liderazgos de las insurgencias
    2. Los mecanismos para movilizar
5. LAS CAUSAS SUBYACENTES Y LOS DETONANTES DE LAS GUERRAS POLÍTICAS
    1. La fragilidad de los Estados
    2. Las autocracias y sus elecciones como factores BELÍGENOS
6. DE LA "BURBUJA DE LA TRIBU" A LA FLEXIBILIDD COGNITIVA, PASANDO POR LOS INCENTIVOS DE OPORTUNIDAD
    1. La flexibilidad cognitiva como antídoto
    2. La elección de la identidad y la diversidad de filiaciones
    3. La influencia de la analfabetización

7. LA DIMENSIÓN DE GÉNERO. LA MILITARIZACIÓN DE LA MASCULINIDAD Y LAS MASCULINIDADES BELICISTAS
8. NEGOCIAR SOBRE EL PODER POLÍTICO EN LOS PROCESOS DE PAZ
    1. El dividendo de la paz
    2. El poder político después de los acuerdos de paz
    3. Más allá del reparto del poder. El reconocimiento de las demandas étnicas
9. PROPUESTAS PARA EL FUTURO. LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA PAZ POLÍTICA
10. NOTAS

Vicenç Fisas

Las guerras por el poder político

COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE

© VICENÇ FISAS, 2026

© LOS LIBROS DE LA CATARATA, 2026
ZURBANO, 76
28010 MADRID
TEL. 91 532 20 77
WWW.CATARATA.ORG

LAS GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO

ISBNE: 978-84-1067-551-3
ISBN: 978-84-1067-529-2
DEPÓSITO LEGAL: M-1165-2026
THEMA: JPWS/NHTX

ESTE LIBRO HA SIDO EDITADO PARA SER DISTRIBUIDO. LA INTENCIÓN DE LOS EDITORES ES QUE SEA UTILIZADO LO MÁS AMPLIAMENTE POSIBLE, QUE SEAN ADQUIRIDOS ORIGINALES PARA PERMITIR LA EDICIÓN DE OTROS NUEVOS Y QUE, DE REPRODUCIR PARTES, SE HAGA CONSTAR EL TÍTULO Y LA AUTORÍA.

INTRODUCCIÓN

Las guerras del siglo XXI no emergen como acontecimientos aislados, sino como expresiones complejas de una pregunta insistente: qué configura el poder y cómo se legitima su ejercicio en contextos frágiles. De las 49 guerras que han existido de 2000 a 2025, 31 tuvieron como uno de los factores más importantes la lucha por el poder político, el 63% de los casos, aunque junto a otros motivos, como la etnopolítica, la búsqueda de un autogobierno, el control por los recursos naturales, la presencia yihadista o la defensa de la identidad cultural. En total, se trata de 31 guerras que han afectado a 28 países y que, sin contar las provocadas por el yihadismo, han tenido más de un millón y medio de muertos. Es de notar que, en el 78% de los casos, estos países ya habían tenido experiencias previas de guerra, un dato importante, pues significa que no se han aprendido totas las lecciones del pasado, y que pueden haber subsistido algunos motivos de fondo de las anteriores guerras. Aclaro igualmente que no se busca el poder político por capricho, aunque exista mucha codicia y ambición por parte de muchos líderes, sino que existen condiciones objetivas que propician y explican el surgimiento de grupos armados, que normalmente se enfrentan a Estados autocráticos.

En este libro, he intentado cuantificar varias cuestiones sobre este tema que expongo en gráficos con sus porcentajes, aspecto que es novedoso en este tipo de estudios. En su mayoría se trata de valoraciones e interpretaciones muy subjetivas y, por tanto, susceptibles de error en cuanto al número preciso que ha de entenderse siempre como una orientación, pero sí creo que puede ser bastante acertado el orden de prioridades, por lo que recomiendo acogerse a esta forma de valoración. Este estudio es el tercer volumen

de una trilogía sobre los conflictos armados de este siglo, donde en el primero he abordado los conflictos etnopolíticos y de autodeterminación[1], en el segundo el papel de las religiones en estos conflictos[2] y aquí los conflictos vinculados con las luchas por el poder político. Avanzo algunas de las conclusiones.

En el 54% de los casos estudiados, la mayoría, la intención y propósito era conseguir el poder a nivel nacional, mientras que en el 34% se buscó el control del poder político regional. En el 12% de los casos restantes, los grupos armados simplemente querían influir a escala nacional, pero no tomar el poder. Estos conflictos nacen de fracturas localizadas (territoriales, étnicas o comunitarias) que actúan como plataforma inicial para desafiar al Estado. Incluso en los casos en que los grupos armados lograron proyectarse a nivel nacional, la retención del control territorial regional fue decisiva, tanto para sostener la movilización como para dar credibilidad a su proyecto político.

En la "caja de herramientas" de la resolución de conflictos que usan mediadores y negociadores, los instrumentos dedicados a resolver los conflictos por el poder político son numerosos y adaptables a cada situación. Medidas no faltan. La dificultad es lograr que la otra parte las acepte. Las propuestas más recurrentes para finalizar con estos conflictos armados incluyen algunas herramientas muy efectivas, a saber, la inclusión del grupo armado en el Gobierno y en las Fuerzas Armadas, diversas formas de federalismo o de autogobierno (autonomía, en especial), integración política (conversión del grupo armado en partido político, con acceso a las campañas electorales), descentralización de todas las actividades del Estado, garantías externas y celebración de elecciones. También pueden concederse amnistías, dar garantías constitucionales o hacer cambios en la Constitución y ofrecer seguridad a las comunidades, en vez de reprimirlas.

Como he apuntado, en este tipo de guerras hay tres aspectos asociados muy presentes: el carácter etnopolítico, en el 87% de los casos; las demandas de autogobierno, en el 64%, y el control por los recursos naturales, en el 29%. Las principales demandas políticas de

todos los grupos armados que han intervenido en estas 31 guerras son las formas de autogobierno (incluyo autonomía, federalismo o independencia), el reparto del poder político o la inclusión política, la demanda de democracia, el acceso y control de los recursos naturales, finalizar con la discriminación étnica, cambiar o acceder a las fuerzas armadas, derrocar al Gobierno, poner fin a la marginación político o económica, el reconocimiento y respecto a la identidad, la retirada de las fuerzas extranjeras y los reclamos de independencia. Si observamos los logros obtenidos al final, sin embargo, la media es de un tercio de las demandas citadas, siendo las más exitosas la exigencia de retirada de fuerzas extranjeras, el reparto del poder o la inclusión política, el derrocamiento del Gobierno y los cambios o el acceso a las fuerzas armadas. Es de notar el bajo nivel conseguido respecto a las demandas de democracia, en contraste con el reparto del poder; también la consecución de la independencia que como máximo acaba siendo una autonomía, la dificultad para acceder al control de los recursos naturales, finalizar con la discriminación étnica, y acabar con la marginación política y económica. Hay, pues, una notable diferencia entre lo logrado y lo que contiene la caja de herramientas. Esto es importante de cara a buscar soluciones a los conflictos armados que todavía están en activo.

Las guerras contemporáneas se financian, sobre todo, con recursos endógenos generados en los territorios controlados, más que con grandes flujos externos o con recursos naturales espectaculares. Las formas más habituales y por orden de importancia, son los impuestos a la población que se controla, los peajes en los *checkpoints*, los apoyos del exterior, la extorsión, las redes comerciales, la explotación de minerales y petróleo, las ayudas de las diásporas y el saqueo y pillaje. La clave está en la institucionalización de la violencia como sistema fiscal alternativo, que reproduce funciones estatales (cobrar, controlar, regular), aunque de manera coercitiva. De este modo, la financiación no solo permite sostener la guerra, sino que crea la base de un poder político *de facto*, con capacidad de imponer normas, generar dependencia económica y legitimar su autoridad frente a la población y actores externos. Hoy día, más que la ideología, predominan el

pragmatismo y la comunicación, y más que el saqueo eventual importa el control estable de rentas (impuestos, peajes, recursos). Los rasgos personales e ideológicos de los líderes no solo se adaptan a la guerra, sino que se alinean con la lógica de financiación que necesitan para sostenerla.

La mayoría de las guerras del siglo XXI se han producido en Estados cuyos gobiernos eran autocráticos. Este dato es sumamente importante, pues explica el tipo de gobernantes que había en el poder y que han sido contestados militarmente por varios tipos de grupos armados. Estos dirigentes suelen tener unas características muy comunes, destacando el personalismo, el autoritarismo, el militarismo, el etnicismo, el clientelismo y la represión. En cambio, los primeros rasgos de los líderes de los grupos armados insurgentes son el pragmatismo, la capacidad oratoria y comunicativa y el carisma, tres aspectos que los diferencian totalmente de los líderes de los gobiernos autócratas contra quienes luchan. No solo estamos ante líderes perversos, sino ante un diseño institucional-psicológico que convierte el desacuerdo en amenaza existencial y bloquea toda salida no violenta. Ese diseño construye agravios colectivos (por exclusión y clientelismo), destruye mediaciones (por centralización y represión), normaliza la fuerza como lenguaje político (por militarización) y radicaliza identidades hasta hacer políticamente carísimo el compromiso. La guerra, entonces, no es un accidente, sino la consecuencia sistémica de una arquitectura del poder que, para perdurar, necesita miedo, silencio y lealtad particularista. Es por ello, que hablaré de que la flexibilidad cognitiva es un recurso psicológico y social para inmunizar a las sociedades contra el embrujo de líderes perversos, porque fomenta la duda crítica, la empatía, la apertura a alternativas y la resistencia frente a discursos simplistas que justifican la guerra.

Existe una cierta vinculación, aunque no determinista, entre la fragilidad Estatal y autocracia. La fragilidad empuja hacia arreglos autoritarios (securitización, neopatrimonialismo, rentas) y muchas autocracias reproducen características como personalización, exclusión y subinversión en capacidad. Romper este bucle exige

capacidad estatal, pacto fiscal, arreglos inclusivos y rendición de cuentas, secuenciados de forma contextual. En relación al patrimonialismo, cuando el aparato Estatal es débil, el poder se organiza vía clientelas personales, quienes controlan la cúspide, transforman el Estado en un instrumento privado, bloqueando controles y abriendo la puerta a liderazgos autoritarios. La fragilidad de los Estados es, sin duda, uno de los factores más determinantes y recurrentes para explicar el surgimiento y persistencia de grupos armados en el siglo XXI. La experiencia comparada en África, Oriente Medio, Asia y, en menor medida, América Latina, muestra que los contextos donde aparecen estos actores coinciden casi siempre con Estados débiles o colapsados, con un aparato institucional incapaz de asegurar la provisión de bienes públicos fundamentales, de garantizar seguridad, de ejercer legitimidad y de canalizar los conflictos sociales por vías pacíficas. Detrás de cada cifra aparece una lógica de gobernanza, una arquitectura institucional y un repertorio de tensiones históricas que, en conjunto, permiten entender por qué, en pleno siglo de la información y de la globalización, la fragilidad estatal sigue siendo un factor determinante.

Respecto a las manera de atraer a la gente para sumarse a una rebelión armada, destacan la buena oratoria y el buen uso del discurso, la narrativa y la propaganda, seguido por las promesas de dar seguridad y protección a la gente, el uso de las redes identitarias, las del propio grupo; el pragmatismo en el cálculo estratégico (saber qué hacer en cada momento), recurrir al sentimiento religioso, el control personal y hacer valer la autoridad del dirigente y dar incentivos para lograr futuras recompensas una vez obtenido el poder político. Las redes identitarias (étnicas, comunitarias, religiosas o culturales) aportan la base social y emocional que multiplica la eficacia del discurso. El individuo no se suma a una rebelión en soledad, sino que lo hace dentro de un entramado de pertenencia en el que la decisión se normaliza, se legitima y se refuerza. Estas identidades, cuando son activadas hábilmente, permiten movilizar a grandes colectivos en poco tiempo, al conectar con lo más profundo de su sentido de pertenencia. Estos factores conforman un ecosistema de movilización en el que el

discurso insurgente es el hilo conductor que enlaza seguridad, identidad, religión, pragmatismo, autoridad, incentivos y coerción. Juntos construyen una narrativa totalizante que convierte a la rebelión en un proyecto no solo político-militar, sino existencial: una promesa de sentido, protección y futuro, encarnada en la figura del líder y en la comunidad que lo sigue.

Las guerras civiles no pueden entenderse sin atender las desigualdades horizontales, la exclusión política de grupos étnicos, las desigualdades económicas y territoriales que refuerzan los agravios y hacen más probable la rebelión, y la combinación de agravios colectivos y oportunidades estructurales. En la base de las demandas y de los factores que desencadenan un conflicto armado, hay una serie de agravios, ofensas, ultrajes y humillaciones de las poblaciones que se rebelan. Según mis cálculos, en el 63% de los conflictos armados analizados los agravios han sido muy importantes, en el 26% secundarios y solo en el 11% insignificantes.

En el siglo XXI, los grupos armados no surgieron solo porque existieran autócratas o líderes personalistas, sino porque esas estructuras se asentaban sobre condiciones de exclusión, desigualdad y privación. La marginación territorial, la pobreza extrema y la exclusión política representan privación relativa; la fragmentación étnica y religiosa sobre desigualdad horizontal potencian la politización identitaria; la fragilidad estatal y los servicios precarios son formas de violencia estructural; la pobreza, el desempleo y la exclusión niegan necesidades básicas. Así, la guerra aparece no tanto como irracionalidad, sino como un intento, aunque destructivo, de dar respuesta a condiciones estructurales de injusticia. Los líderes armados, mediante discursos de agravios históricos, convierten estas condiciones en narrativas movilizadoras, legitimando la violencia como forma de rectificar desequilibrios percibidos. Otro elemento que voy a destacar, es la combinación de tres factores muy ligados entre sí y presentes en casi todas las guerras analizadas: la identidad comunitaria de los combatientes, la presión comunitaria y de pares, la influencia del parentesco, las redes de pertenencia y el círculo de amistades, que son factores que impulsan a apuntarse a una guerra.

Así pues, un aspecto fundamental para comprender los incentivos que llevan a un joven a enrolarse en un grupo armado no se explica solo por motivaciones individuales de estatus, reconocimiento o recursos materiales, sino también por dinámicas sociales y comunitarias. En contextos de guerra o preguerra, la presión de pares y la influencia del parentesco y las redes de pertenencia se convierten en motores decisivos.

La búsqueda del reconocimiento, el prestigio y el estatus personal, tiene un peso enorme en el reclutamiento para ir a la guerra, lo que desmitifica de buenas a primeras el carácter glorioso, épico, patriótico y altruista que se atribuyen a los guerreros. Súmase a ello el alto porcentaje de la búsqueda a un acceso a los recursos que se deriven de la guerra, que incluye también el hecho de tener asegurado el alimento diario y quizás una paga económica (la milicia como empleo). El acceso al poder político y tener un protagonismo en el futuro del país, en caso de ganar la guerra, puede añadirse a los factores antes mencionados, con lo que el factor de mejora personal adquiere una gran relevancia y está por encima de cualquier consideración política, aunque el sentido de exclusión y el cambio político estén también presentes en la lista, pero en menor medida. El cálculo individual termina pesando más que las grandes banderas ideológicas que se esgrimen como justificación. En conjunto, el vector de mejora personal pesa más que las banderas que se agitan en público. Esta lectura desmonta la épica, pues la guerra no surge de ideales puros sino de catálogos de incentivos individuales agregados, cuidadosamente activados por emprendedores de la violencia que ofrecen recompensas selectivas, identidad y protección, muchas veces ligadas al control de las propias comunidades. Así, la decisión de sumarse a un grupo armado no suele ser estrictamente personal ni puramente ideológica, sino que está profundamente anclada en la presión social inmediata. La guerra, entonces, se convierte en una experiencia de comunidad armada, donde la pertenencia y la lealtad pesan más que el cálculo racional y donde la línea entre convicción y obligación se difumina bajo el peso de los lazos comunitarios.

El análisis de la dimensión de género de este tema, ha desarrollado

varias tesis que ayudan a explicar por qué, en la gran mayoría de los casos, son los hombres quienes promueven y dirigen los conflictos políticos y armados con el objetivo de conquistar el poder político. Estas tesis se articulan en torno a estructuras de género, masculinidades hegemónicas, desigualdades históricas de acceso al poder y construcción simbólica de la guerra. Estas aportaciones se pueden sintetizar en la socialización de género (los hombres son educados para ver la violencia y el control como legítimos modos de afirmación política), las estructuras patriarcales (las instituciones militares, políticas y religiosas han sido diseñadas y ocupadas por hombres, reforzando su monopolio sobre la guerra), la legitimidad simbólica (la guerra y el poder político se codifican culturalmente como espacios de virilidad), la exclusión de las mujeres que, relegadas al cuidado, no acceden a los centros de decisión política, y la reproducción del patriarcado, pues los conflictos no solo redistribuyen poder político, sino que también refuerzan jerarquías de género.

El acceso directo al poder político, o al menos a cuotas de poder mediante el reparto pactado, se percibe como mucho más concreto y ventajoso, ya que otorga estatus social, acceso a recursos y capacidad de proteger a la propia clientela. El reparto del poder es, así, funcional a las lógicas de patronazgo que ya conocen y practican. Aun cuando los grupos armados se transforman en partidos o actores políticos, arrastran esa mentalidad vertical y clientelar, lo que favorece prácticas de control interno rígido, exclusión de voces disidentes, uso instrumental de las instituciones y resistencia a procesos deliberativos más horizontales. La democracia, que exige pluralismo, negociación y controles recíprocos, aparece para estos actores como una lógica ajena, más lenta e incierta, frente a la inmediatez del poder centralizado que les resulta familiar. Los pactos para poner fin a las guerras del siglo XXI, exista o no un acuerdo de paz formal, tienden a ser pactos de inclusión de élites más que transformaciones democráticas profundas. Los insurgentes luchan por entrar al reparto del poder político (ministerios, autonomía, recursos, representación parlamentaria, participación electoral) y rara vez impulsan la democratización como fin último. Un dato significativo es el elevadísimo nivel de corrupción

de los países analizados, tanto al empezar la guerra como en años posteriores. No es solo un síntoma del conflicto, sino un factor estructural de su génesis y reproducción, al minar la legitimidad del Estado, alimentar agravios sociales y erosionar la confianza en las vías pacíficas de cambio.

La gran paradoja de muchas guerras contemporáneas por el poder político radica en que surgen, en apariencia, de demandas profundamente legítimas: inclusión política de comunidades marginadas, participación económica equitativa, respeto a identidades culturales negadas por regímenes autoritarios o centralistas. Se presentan como rebeliones necesarias frente a sistemas cerrados, injustos y represivos. Sin embargo, la forma en que estas luchas se libran desmiente y destruye, en la práctica, el ideal que dicen perseguir. En lugar de encarnar valores emancipadores, recurren masivamente a medios de barbarie: masacres sistemáticas de civiles, bombardeos indiscriminados sobre ciudades y aldeas, ejecuciones sumarias, violaciones sexuales utilizadas como arma de terror y dominación, y saqueos que erosionan el tejido social. Estas prácticas no son episodios aislados, sino métodos recurrentes y estructurales de guerra. Convierten la violencia contra la población en un instrumento de control y legitimación, y normalizan la lógica del terror como medio político. Así, lo que comenzó como una lucha por la justicia termina reproduciendo, e incluso superando, la brutalidad del régimen combatido.

Esta paradoja también refleja un vacío estratégico y ético en muchos movimientos armados contemporáneos, pues, aunque sus reivindicaciones sean legítimas, no suelen acompañarlas de una reflexión profunda sobre el tipo de orden político y social que desean construir, ni sobre cómo los métodos de lucha afectan directamente a esa construcción. Se prioriza la toma del poder sobre la transformación política real. De este modo, la guerra se convierte en un fin en sí mismo, una vía de acceso al poder y no en un medio subordinado a un proyecto democrático o inclusivo. Al final, el poder obtenido es poder desnudo, sin contenido normativo ni institucional sólido. Otro aspecto a destacar es que esta contradicción suele verse agravada por

dinámicas externas: potencias extranjeras, redes de financiación ilícita, mercenarios y actores regionales alimentan los conflictos con armas, dinero e intereses geopolíticos, incentivando el uso de tácticas brutales y prolongando las guerras más allá de las demandas originales. Esta internacionalización pervierte las causas iniciales y desplaza el foco de la lucha de la justicia interna a la competencia por recursos y alianzas estratégicas, reforzando aún más la distancia entre fines proclamados y medios empleados.

También conviene subrayar que la normalización de la violencia contra civiles tiene un efecto corrosivo sobre la ciudadanía, al destruir la noción de comunidad política compartida y generando generaciones enteras socializadas en el miedo, la venganza y la deshumanización. Esta destrucción del "nosotros" dificulta enormemente los procesos de reconciliación, justicia transicional y reconstrucción institucional una vez terminada la guerra. No basta con firmar acuerdos de paz: hay que reconstruir la confianza, algo casi imposible cuando la guerra ha convertido a los civiles en objetivos sistemáticos. Finalmente, esta contradicción sirve como un alegato contra toda romantización de la violencia política. Ninguna causa, por justa que sea, puede permanecer intacta cuando se la defiende a través de métodos que niegan la humanidad de otros. Si el medio de lucha reproduce la lógica de la opresión, inevitablemente engendrará un orden que la perpetúe. Las guerras que buscan justicia, pero siembran terror, acaban cosechando regímenes autoritarios, sociedades divididas y generaciones mutiladas, no democracias sólidas ni comunidades políticas libres.

De esa contradicción emerge una consecuencia devastadora: incluso si los grupos insurgentes logran acceder al poder, ya sea total o parcialmente mediante acuerdos de reparto, el tipo de poder que instauran suele estar profundamente marcado por la cultura de la violencia que los llevó hasta allí. El terror practicado en el camino corrompe los fines proclamados. Ningún orden democrático, plural, respetuoso de derechos y orientado al bien común puede brotar de una praxis política que ha tenido como cimiento la aniquilación del otro y la negación de la dignidad humana. El fin no justifica los medios: los

medios configuran el fin. Gobiernos nacidos de la masacre reproducen la exclusión, líderes forjados en la represión se tornan autócratas y sociedades traumatizadas quedan atrapadas en ciclos de miedo y desconfianza. Por eso, frente a la barbarie de estas guerras, es imprescindible afirmar que ninguna causa justa puede realizarse por medios injustos sin traicionarse a sí misma, pues la forma de la lucha prefigura el tipo de poder que resultará de ella.

La afirmación central que permea estas páginas es, sin duda, que la fragilidad estatal y la tentación autoritaria emerge como un terreno fértil para la emergencia y persistencia de conflictos armados. Pero también es un llamado a la agencia colectiva, a superar lógicas de confrontación que convierten el desacuerdo político en amenaza existencial y a cultivar vías de resolución que fortalezcan la gobernanza inclusiva, la distribución de poder, la autonomía y la garantía de derechos para todas las comunidades. La reflexión crítica que sustenta este estudio apunta, finalmente, a dos dimensiones. La primera es normativa: qué tipo de orden político e institucional puede convivir con diversidad, desigualdad y conflicto, sin recurrir a la violencia como lenguaje principal. La segunda es estratégica: qué herramientas institucionales, jurídicas, financieras y culturales son necesarias para transformar la violencia endémica en política sostenible, por medio de acuerdos que integren, y que no que excluyan, a los actores conflictivos. En este sentido, la flexibilidad cognitiva que proponemos no es un mero recurso psicológico, sino una capacidad colectiva para cuestionar narrativas simplistas, ampliar horizontes de acción y abrir espacios de negociación que prioricen la dignidad, la seguridad y el bien común.

Con estas premisas, este libro invita al lector a entender no solo el *qué* de las guerras por el poder, sino el *cómo* de las salidas posibles, las condiciones que deben tenerse en cuenta para que las resoluciones, cuando ocurren, signifiquen realmente un paso hacia sociedades más inclusivas, menos fracturadas y, sobre todo, menos esclavas de la lógica de la violencia. Al final de libro señalo varias propuestas que buscan convertir la paz en una experiencia cotidiana y material, no solo en un acuerdo político. En conjunto, estos

planteamientos apuntan a crear un ecosistema de incentivos positivos que reemplace la lógica del dominio por la de la cooperación, para transformar la lógica del poder armado en una lógica de poder civil y legítimo. La clave está en ofrecer salidas realistas y verificables a los actores del conflicto que reduzcan los costos de la paz frente a los beneficios de la guerra y en crear instituciones capaces de absorber la competencia política sin recurrir a la violencia. Propongo, en definitiva, una paz que se sostiene en la justicia estructural y en la inclusión política, no en la mera regulación de la violencia. Este enfoque exige transformar las condiciones de posibilidad del conflicto, como fortalecer el Estado de derecho, institucionalizar la participación plural y promover acuerdos que hagan de la diversidad una fuente de fortaleza y no de fractura. Así, las rutas de resolución no serán meras soluciones transitorias, sino procesos sustantivos de construcción de convivencia que, con legitimidad social, puedan resistir la prueba del tiempo. Conocer lo que motiva las guerras que buscan el poder político, puede ayudar a encontrar salidas menos violentas y más eficaces para ir al fondo de los problemas que las causan, pues sin reconocer las raíces no se pueden gestionar los conflictos de manera pacífica.

LAS GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO

Una decisión que tuve que tomar al inicio de este trabajo, era si debía empezar con los conflictos que ya existían y terminaron en los años noventa Liberia, Mozambique, Ruanda, Sierra Leona, Sudáfrica, Punjab, Timor Oriental, Tayikistán, Perú, Bosnia, Croacia, Abjasia, Kosovo y Líbano), o bien, centrarme en los del siglo XXI, para dar continuidad a estudios previos que hice sobre los conflictos contemporáneos. La pregunta que me hacía era de la que hasta qué punto los conflictos de los noventa, eran o no de una generación distinta a los del siglo XXI o si más bien formaban parte de una continuidad de dinámicas (poder político, identidades, recursos, fragilidad estatal) que se reconfiguran con el tiempo.

Las características principales de los conflictos de los años noventa eran que muchos de ellos eran guerras civiles pos- Guerra Fría, surgidas del colapso de regímenes autoritarios, transiciones fallidas o disputas sobre el modelo de Estado (étnico, federal, centralista); la presencia de identidades etnopolíticas o religiosas (Bosnia, Ruanda, Kosovo, Abjasia, Sudáfrica [racia]), Punjab (sikh vs. Estado indio); también ideológicos con vinculaciones a la pos-Guerra Fría (Perú con Sendero Luminoso, Mozambique [FRELIMO-RENAMO]), o Tayikistán (comunistas, islamistas, clanes regionales). En cuanto a los actores, había presencia de grupos armados nacionales y actores no estatales, muchas veces organizados como guerrillas o milicias locales; una escasa fragmentación de actores transnacionales, salvo en Afganistán (ya en los ochenta-noventa) y cierta influencia yihadista inicial. Y en cuanto a los métodos usados, hay que destacar la violencia masiva (el genocidio de Ruanda, Bosnia), las masacres étnicas, la limpieza étnica y la violencia contra civiles como táctica central; el uso de recursos

naturales en guerras civiles africanas (diamantes en Sierra Leona y Liberia); las influencias externas, con un enorme peso de la comunidad internacional (ONU con operaciones robustas en Mozambique, Camboya, Timor; OTAN en Bosnia y Kosovo), e intervenciones regionales (Nigeria/ECOWAS en Liberia y Sierra Leona). El fin de la Guerra Fría implicó un cambio de apoyos externos, y se redujo la financiación soviética o estadounidense a regímenes y guerrillas. Los conflictos armados de los años ochenta y noventa, fueron estudiados por muchos analistas al comprobar que se utilizaban nuevos métodos y había otros actores. En un libro que tuvo gran éxito, publicado a finales del siglo pasado, Mary Kaldor las definió como "las nuevas guerras"[3], aunque ya hacía unos años que varios autores las habían definido[4].

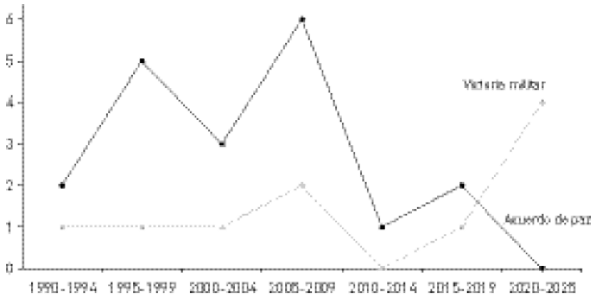
En las guerras del siglo XXI donde ha sido importante la lucha por el poder político, tanto nacional como regional que es el objeto de nuestro análisis, se han dado principalmente en contextos de Estados frágiles o autoritarios, con revueltas contra la exclusión política o socioeconómica (Tigray, Darfur, Camerún anglófono, Yemen, Siria), a menudo como continuidad de guerras anteriores, como en Sudán/Sudán del Sur, Liberia o RD Congo; un peso muy importante de la etnopolítica, es decir, grupos étnicos con proyectos políticos; un mayor peso de islam político y el yihadismo transnacional (Al Qaeda, Estado Islámico, Boko Haram, Al Shabaab); una mayor fragmentación de los grupos armados (Siria, Libia, RD Congo o Mali, por ejemplo) y la presencia de milicias híbridas (a veces mezcladas con crimen organizado). En cuanto a los métodos que iremos viendo, han existido combates convencionales, terrorismo, insurgencia asimétrica, uso de drones y ciberguerra, y la persistencia de desplazamientos masivos y hambrunas usadas como arma de guerra. Respecto a las influencias externas, las intervenciones multilaterales han sido más débiles (la ONU con misiones estabilizadoras, pero sin ambiciones transformadoras como en los noventa); han proliferado las guerras por delegación *(proxy wars)*, como en Siria, Yemen o Libia (Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, etc.); una competencia geopolítica global renovada (Estados Unidos-Rusia-China), y la emergencia de poderes regionales (Turquía,

Emiratos, Irán, Arabia Saudita, Ruanda en África).

En resumen, las guerras de los años noventa correspondían a la primera ola de pos-Guerra Fría, la desaparición de dos federaciones (la Unión Soviética y Yugoslavia), marcada por transiciones nacionales, guerras civiles clásicas y operaciones internacionales transformadoras, mientras que el siglo XXI muestra una nueva generación de guerras, más fragmentadas, más internacionalizadas y con la centralidad del poder político en Estados frágiles. En cualquier caso, la lógica de poder ya estaba en los años noventa, aunque se expresara más bajo etiquetas étnicas o ideológicas. Incluso centrados en el presente siglo, podemos distinguir dos etapas, una anterior a 2010 y otra posterior. Hay factores nuevos que han aparecido en los últimos años, como el aumento de yihadismo, un rearme brutal en todo el mundo o las guerras de ocupación, así como una mayor dificultad para lograr acuerdos de paz, mientras que han crecido los conflictos armados que han terminado con una victoria militar, como puede verse en el gráfico. El descenso de acuerdos de paz no implica necesariamente que la diplomacia haya perdido toda relevancia, pero sí indica un entorno más hostil para la negociación, debido a la fragmentación de actores, conflictos existenciales, lógicas de aniquilación, debilitamiento de la presión internacional, reconfiguración del orden mundial y debilitamiento del multilateralismo, polarización geopolítica y desilusión social. En este contexto, la paz negociada ya no es el desenlace por defecto, como lo fue en las décadas posteriores a la Guerra Fría. Las victorias militares pueden ofrecer finales más claros en el corto plazo, pero tienden a ser menos inclusivas y menos sostenibles, aumentando el riesgo de ciclos de violencia recurrente.

GRÁFICO 1

EL DESCENSO DE LOS ACUERDOS DE PAZ Y LA VUELTA AL MILITARISMO



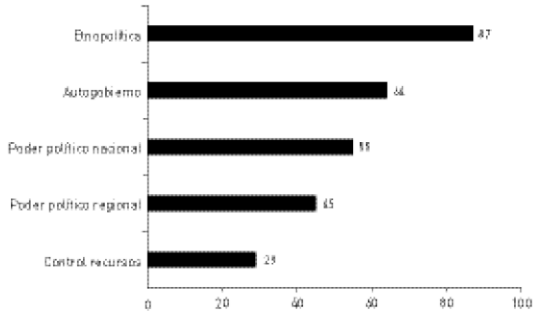
Fuente: Elaboración propia.

En 2008, el economista Paul Collier[5], que citaré varias veces, escribió un interesante libro con varias conclusiones que quedaron completamente desfasadas pocos años después, aparte de otros aspectos muy discutibles. Collier mostraba su satisfacción por la enorme expansión de las elecciones democráticas en los países pobres, cuando en realidad empezaron a aumentar los Estados autoritarios y autocráticos a partir de 2012 y seguía siendo así en 2025. También se refería a la oleada de acuerdos de paz, correcto en aquel momento, pero que empezó a descender en picado a partir de 2010. Dejo a un lado cuestiones muy discutibles de su ensayo, como la defensa de un tipo de intervenciones militares, golpes de Estado para instalar democracias o incrementar la ayuda al desarrollo, cuando se puede demostrar lo perjudicial que ha sido históricamente esta última al impedir procesos internos para conquistar soberanía y libertades, en vez de que quedar prisioneros y dependientes de la ayuda externa[6].

Como he avanzado en la introducción, en las guerras del siglo XXI donde la lucha por el poder político ha sido un factor muy destacado, hay tres aspectos asociados muy presentes: el carácter etnopolítico en el 87% de los casos, las demandas de autogobierno en el 64% y el control por los recursos naturales en el 29%, cuestiones que analizaré vinculándolas con las pugnas por el poder político. En la mayoría de las guerras civiles desde los años noventa hasta hoy, la conquista o preservación del poder político permite controlar el Estado, las instituciones coercitivas (ejército, policía, servicios de inteligencia) y, con ello, monopolizar la redistribución de riqueza, la representación y la seguridad. En Estados frágiles o autoritarios y con un fuerte componente étnico donde el acceso al poder puede significar el acceso exclusivo a los recursos (clientelismo, corrupción, rentas de

exportación), la competencia se vuelve de suma cero: ganar o quedar excluido.

GRÁFICO 2
FACTORES PRESENTES EN LAS GUERRAS DONDE LA LUCHA POR EL CONTROL POLÍTICO ES UN ELEMENTO DESTACADO, EN PORCENTAJES



Fuente: Elaboración propia.

En muchos casos, los grupos que se enfrentan al poder central justifican su lucha en términos de autonomía o autogobierno, e incluso de independencia. Esto ocurre cuando minorías étnicas, religiosas o regionales sienten que están excluidas del poder nacional, son discriminadas en la redistribución de recursos, o sus identidades son reprimidas (lengua, cultura, religión). En todos estos casos, el autogobierno aparece como vía para escapar de la dominación del centro y obtener capacidad de decisión propia. Al mismo tiempo, el poder político y el autogobierno están íntimamente vinculados al control de recursos naturales. La explotación de petróleo, gas, diamantes, coltán, cacao o tierras fértiles es la base material que permite financiar la guerra (diamantes en Sierra Leona, coltán en RD Congo, etc.), aumenta la motivación, pues el grupo que controle el territorio rico asegura supervivencia y riqueza, y justifica demandas de autonomía, con el discurso de que "nuestros recursos financian al centro, pero no retornan en desarrollo". Así pues, el triángulo poder político-autogobierno-recursos es casi inseparable, ya que, sin recursos, el autogobierno puede parecer simbólico; sin autogobierno, el control de recursos queda en manos del centro y sin acceso al poder político, las comunidades quedan excluidas de las rentas nacionales.

Aunque los discursos de los actores suelen jerarquizar una motivación (autogobierno, defensa de identidad, control de recursos,

democratización…), en la práctica suelen ir unidos. Un líder insurgente puede movilizar a la población en torno al derecho de autogobierno, mientras los mandos se concentran en asegurar recursos para financiar la guerra y la élite política busca negociar cuotas de poder. Este mosaico de razones explica por qué muchos conflictos no terminan con concesiones parciales. Si solo se otorga autonomía cultural, quedan pendientes los recursos; si solo se redistribuyen rentas, sigue viva la aspiración política de autogobierno. Por tanto, en la lucha por el poder político, las demandas de autogobierno y el control de recursos naturales no son causas independientes, sino capas interconectadas de un mismo conflicto estructural. El poder político da acceso a recursos y capacidad de decisión, el autogobierno busca escapar de la exclusión y retener recursos en el territorio, y los recursos naturales intensifican la lucha, pues hacen más costosa para el centro cualquier concesión. En otras palabras, muchas guerras contemporáneas no son solo luchas por el poder nacional o regional, sino por quién decide y quién se beneficia de los recursos territoriales, y el autogobierno se convierte en el vehículo político para esa disputa.

TABLA 1
GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO DE 2000 A 2025

	AÑOS	DEMANDAS Y CARACTERÍSTICAS	SITUACIÓN A FINALES DE 2025
África (17)			
Angola	1998-2002	Poder político, autogobierno, control recursos, etnopolítica	Victoria militar
Burundi	1993-2008	Poder político, autogobierno, etnopolítica	Acuerdo de paz
Camerún	Desde 2014	Independencia del Estado de Ambazonia. Poder político regional, etnopolítica	Activa
Costa de Marfil	2002-2011	Poder político, etnopolítica	Victoria militar
Chad	2005-2009	Poder político, etnopolítica	Victoria militar
Etiopía (Fano-Amhara)	Desde 2022	Control territorial. Poder político regional	Activa
Etiopía (Tigray)	2020-2022	Autogobierno. Poder político regional, etnopolítica	(Acuerdo de paz con tensión)
Liberia	1999-2003	Poder político y control recursos, etnopolítica	Acuerdo de paz

	AÑOS	DEMANDAS Y CARACTERÍSTICAS	SITUACIÓN A FINALES DE 2025
Libia	2011-2020	Poder político, autogobierno, control recursos, etnopolítica	Desactivada
Mali	Desde 2012	Independencia de Azawad, poder político, yihadismo JNIM desde 2017	Activa
República Centroafricana	Desde 2013	Poder político, etnopolítica	Activa
RD Congo	Desde 1993	Poder político regional, control recursos, etnopolítica	Activa
Sudán (Janjaweed)	2001-2010	Fin discriminación étnica, distribución de poder y recursos, autonomía para Darfur, poder político regional, etnopolítica	Desactivada
Sudán-SLM/A (Darfur)	2003-2006	Participación política, poder político regional, descentralización Darfur, distribución recursos, etnopolítica	Acuerdo de paz
Sudán-RSF	Desde 2023	Poder político, etnopolítica	Activa
Sudán/Sudán del Sur	1983-2004	Autogobierno, independencia, poder político regional, control recursos, etnopolítica	Acuerdo de paz
Sudán del Sur	2011-2018	Poder político, autogobierno, etnopolítica	Acuerdo de paz
Asia (7)			
Afganistán	1979-2022	Poder político, yihadismo (ISIS), etnopolítica	Victoria militar
Filipinas-MILF	1969-2014	Autogobierno, poder político regional, etnopolítica	Acuerdo de paz
India (Jammu y Cachemira)	Desde 1990	Insurgentes de Cachemira, poder político regional, etnopolítica	Activa
Indonesia (Aceh)	1976-2005	Identidad cultural, autogobierno, poder político regional, control recursos, etnopolítica	Acuerdo de paz
Myanmar-NUG	Desde 2021	Gobierno de Unidad Nacional (NUG), poder político	Activa
Nepal	1996-2006	Democracia, poder político	Acuerdo de paz
Sri Lanka	1972-2009	Autogobierno, poder político regional, etnopolítica	Victoria militar
Europa (2)			
Armenia/Azerbaiyán	2020-2023	Autogobierno, poder político regional, etnopolítica	Victoria militar
Chechenia	1994-2007	Independencia, poder político regional, etnopolítica	Victoria militar
Oriente Medio (5)			
Iraq	Desde 1991	Democracia, poder político, control recursos, etnopolítica	Activa

	AÑOS	DEMANDAS Y CARACTERÍSTICAS	SITUACIÓN A FINALES DE 2025
Líbano/Israel	Desde 2024	Poder político, ocupación territorial, etnopolítica	Activa
Siria	2011-2024	Poder político, etnopolítica	Victoria militar
Siria	2025	FFAA, drusos y beduinos, control político, poder político regional, reconocimiento cultural, etnopolítica	Desactivada
Yemen	Desde 2009	Poder político, independencia del sur, autonomía para el norte, yihadismo, etnopolítica	Activa
Total 31 (63,3% del total de guerras)		14 poder político regional (45,2%) 17 poder político nacional (54,8%)	

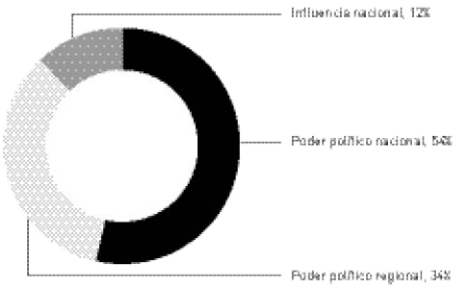
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Programa de datos sobre conflictos de Uppsala.

Como he comentado, de las 49 guerras que han existido en el siglo XXI, de 2000 a 2025, 31, el 63,3%, están vinculadas por luchas por el control político, sea a nivel nacional o regional. En el 54% de los casos, la mayoría, la intención y propósito era conseguir el poder a nivel nacional, mientras que en el 34% se buscó el control del poder político regional. En el 12% de los casos restantes, los grupos armados simplemente querían influir a escala nacional, pero no tomar el poder. Lo que no contemplo en este estudio, son las guerras protagonizadas exclusivamente por grupos yihadistas, muy presentes a partir del segundo decenio, y por no tener comparación con las intenciones y programas del resto de grupos armados.

Aunque en más de la mitad de los casos se buscó el poder político nacional, también es cierto que, en su inmensa mayoría, el 87,8% de todos los casos, la guerra empezó a nivel regional, y que una cuarta parte logró pasar de este estadio al nivel estatal, aunque sin abandonar el poder regional ya logrado, que se pudo conservar en el 93% de los casos. Por "conservar el poder regional" no quiero decir que tuvieran en sus manos la capacidad de gobernar, administrar o prestar servicios, pues eso solo se obtuvo en la mitad de los casos. En la otra mitad, el grado de gobernanza fue limitado.

GRÁFICO 3

TIPO DE CONTROL POLÍTICO BUSCADO



Nota: Como he comentado, las luchas por el control del poder político suelen ir acompañadas de otras demandas, como la autodeterminación o el control de los recursos naturales
y su carácter etnopolítico.
Fuente: Elaboración propia.

TABLA 2
INTENCIONES DE BUSCAR EL PODER POLÍTICO NACIONAL

Sí	**UNITA (Angola), CNDD-FDD, FNL (Burundi), FN (Costa de Marfil), FUC, UFDD, UFR (Chad), LURD, MODEL (Liberia), LNA/Haftar (Libia), Séléka (República Centroafricana), JEM, RSF, SRF (Sudán), SPLM-IO (Sudán del Sur), Talibanes (Afganistán), NUG (Myanmar), CPN-M (Nepal), HTS, SNA (Siria), Ansar Allah (Yemen)**
No (regional)	**Ambazonia (Camerún), Fano (Etiopía), MNLA/CMA/FLA (Mali), CNDP, M23 (RD Congo), SPLM/A (Sudán, antes de 2011), MILF (Filipinas), J&K (India), GAM (Indonesia), LTTE (Sri Lanka), Ichkeria (Chechenia), STC/Hirak (Yemen)**
Mixto (influir)	**TPLF (Etiopía), anti-Balaka (RCA), SLM/A (Sudán), Ejército de al-Mahdi (Iraq), Hezbolá (Líbano)**

Fuente: Elaboración propia.

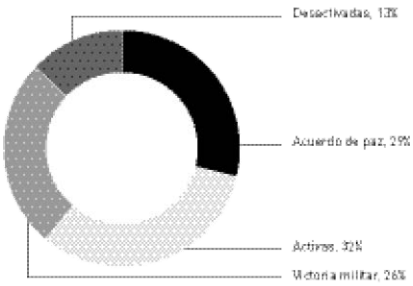
Estos datos revelan un patrón estructural: los conflictos nacen de fracturas localizadas (territoriales, étnicas o comunitarias) que actúan como plataforma inicial para desafiar al Estado. Incluso en los casos en que los rebeldes lograron proyectarse a nivel nacional, la retención del control territorial regional fue decisiva, tanto para sostener la movilización como para dar credibilidad a su proyecto político. El hecho de que una cuarta parte de los grupos consiguiera escalar de lo regional a lo nacional sin perder sus feudos locales muestra cómo la guerra se convierte en un proceso de doble nivel, ya que se aspira a transformar el centro del poder, pero sin soltar el anclaje periférico que garantiza recursos, reclutamiento e identidad colectiva. Al mismo tiempo, la observación de que solo en la mitad de los casos existió verdadera gobernanza rebelde, más allá del mero control militar o coercitivo, refuerza la idea de que muchos de estos grupos no estaban

preparados ni tenían una visión clara para administrar más allá de la lógica bélica. Allí radica una tensión clave, la diferencia entre tener poder territorial y ejercer autoridad legítima. Esa observación pone de relieve una distinción esencial en el análisis de las guerras por el poder político: el poder *de facto* no equivale al poder legítimo. Muchos movimientos armados logran dominar territorios mediante la fuerza, pero sin desarrollar estructuras de administración civil, justicia, o servicios básicos que generen obediencia consentida y no impuesta. Esta carencia revela que su horizonte político suele ser limitado, más orientado a conquistar que a gobernar, lo que impide transformar la autoridad militar en una autoridad política reconocida por la población. La tensión entre control y legitimidad explica por qué tantos procesos de posguerra terminan en el fracaso o en la reinstauración de nuevas formas de autoritarismo: el aprendizaje institucional y la construcción de legitimidad social no surgen automáticamente de la victoria militar. En última instancia, la gobernanza rebelde, cuando existe, constituye el germen de una posible transición hacia formas políticas más inclusivas; su ausencia, en cambio, evidencia que la lucha se concibió más como un medio de sustitución de élites que como un proyecto de transformación del orden político.

Finalmente, la exclusión de los grupos yihadistas de este recuento es metodológicamente consistente, pues sus objetivos (califato, universalismo religioso, destrucción del orden estatal) responden a una lógica distinta. No obstante, su presencia creciente a partir de la segunda década del siglo añade una capa de complejidad, ya que, mientras los grupos nacionalistas o etnopolíticos se articulaban en torno a la disputa del Estado existente, los yihadistas buscaban desbordarlo.

A finales de 2025, el resultado de estas 31 guerras era que el 29% habían acabado con un acuerdo de paz, otro 32,3% todavía estaban activas, el 25,8% terminaron con la victoria militar de una de las partes y el 12,9% restante se habían desactivado o no estaban resueltas. Al final del libro, explicaré cómo se hicieron los acuerdos de paz y si se cumplió lo acordado.

GRÁFICO 4
RESULTADO FINAL DE LAS GUERRAS POR EL PODER POLITICO, A FINALES DE 2025



Fuente: Elaboración propia.

¿Por qué la lucha por el poder detona tantas guerras? Como iremos viendo, existen muchos motivos. Adelanto algunos de ellos. Cuando las élites rivales no pueden creerse mutuamente promesas sobre reparto de poder, desarme o reformas futuras, optan por pelear antes que arriesgarse a perder después. Esta lógica explica muchas guerras civiles y su prolongación. Por otra parte, grupos excluidos del ejecutivo o con acceso desigual al Estado son más proclives a rebelarse; la captura del centro del poder central es el botín. Donde el poder garantiza el acceso a rentas (petróleo, minería, aduanas, contratos, etc.), la política se militariza, pues se pelea por controlar la distribución. Las economías de guerra, el clientelismo y la existencia de "señores de la guerra", complican las cosas y facilitan los conflictos armados. Otro factor es el dilema de seguridad en Estados que se fragmentan, pues cuando colapsa la autoridad (imperios, federaciones, regímenes autoritarios), las comunidades pueden sentirse amenazadas por la incertidumbre y se adelantan con fuerza para asegurar posiciones, de manera que la política del miedo actúa como motor de la violencia. En regímenes no democráticos, que son la inmensa mayoría de los aquí analizados, la política es un juego entre dictadores, élites, líderes perversos y manipulación de las masas. En suma, la competencia por el poder activa mecanismos bien estudiados (compromisos no creíbles, exclusión, rentas estatales, dilemas de seguridad, faccionalismo autoritario, reglas electorales de alto riesgo), que detonan y sostienen la guerra, y deja como legado Estados debilitados, políticas de suma cero y ciclos de recaída. En la mayoría

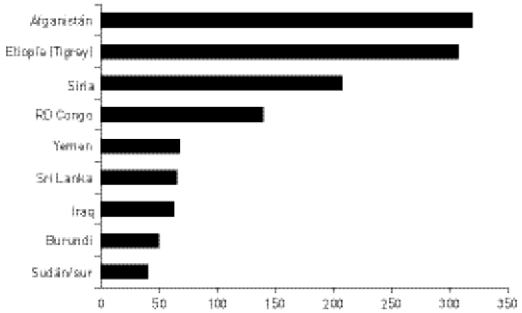
de los conflictos armados contemporáneos, no estamos ante democracias fallidas sino ante autocracias frágiles, clientelares o personalistas, en las que líderes perversos priorizan su supervivencia política y sus redes de poder. Para ellos, la guerra no es un coste, sino un instrumento de control y enriquecimiento, aunque la población pague con desplazamientos masivos, hambre y destrucción. Lo explicaré con detalle en el capítulo sobre los liderazgos.

En cuanto a la letalidad de las guerras de este siglo por el poder político, y sin contar las muertes provocadas por grupos yihadistas, los países con guerras más mortíferas han sido las de Afganistán, Etiopía (Tigray), Siria y RD Congo.

La violencia en las guerras por el poder político del siglo XXI ha tenido un carácter marcadamente intimidatorio, destructivo y ejemplarizante, orientado menos a batallas convencionales entre fuerzas regulares y más a la dominación de poblaciones civiles como medio para conquistar y retener poder. Las formas de violencia predominantes —masacres, bombardeos indiscriminados sobre ciudades, ejecuciones, violaciones sexuales sistemáticas y saqueos— revelan transformaciones profundas en la lógica de los conflictos armados contemporáneos. La violencia ya no se limita a la rivalidad entre ejércitos regulares, sino que se dirige de forma estratégica y sostenida contra poblaciones civiles para desestabilizar, desorganizar y reconfigurar estructuras sociales, políticas y económicas.

GRÁFICO 5

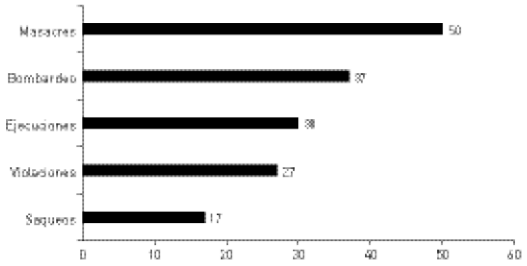
MILES DE MUERTOS EN LAS GUERRAS ANALIZADAS (SOLO EN LOS PERIODOS SEÑALADOS)



Fuente: Programa de datos sobre conflictos de Uppsala.

GRÁFICO 6

TIPOS DE VIOLENCIAS MÁS USADAS EN ESTAS GUERRAS, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

Al convertir a civiles en parte del campo de batalla, los actores armados buscan debilitar la cohesión social del adversario, socavar su legitimidad interna y externalizar costos. La violencia contra la población civil se instrumentaliza como una herramienta de coerción y señal de poder, más que como resultado colateral de operaciones militares. El miedo, la desconfianza y la desinstitucionalización que generan masacres, bombardeos y violaciones sistémicas producen efectos de desorganización social. Las comunidades quedan atrapadas entre la necesidad de supervivencia, la ruptura de redes de apoyo y la pérdida de confianza en autoridades y servicios básicos, lo que a menudo facilita la imposición de un nuevo orden *de facto* por parte de los agresores. Además de la violencia extrema, se observa un diseño logístico que busca expoliar recursos, desplazar a la población y destruir infraestructuras clave. Este patrón persigue garantizar el control de territorios y de rutas de suministro, además de debilitar la resistencia organizada a través de la coerción cotidiana y la opresión estructural. Todo ello nos invita a cuestionar las dicotomías simplistas entre "guerra entre Estados" y "violencia contra civiles" y a reconocer que, en numerosos contextos contemporáneos, la violencia política opera mediante estrategias de control poblacional, resistencia y legitimación de poder, más que por disputas estrictamente militares.

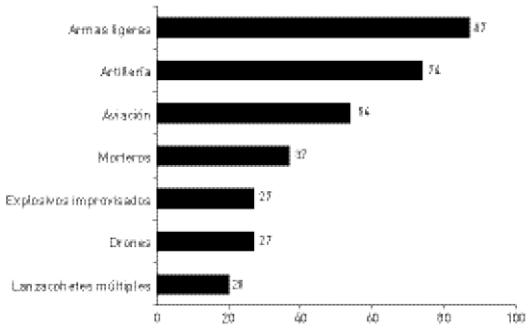
En muchos conflictos del siglo XXI, la lucha por el poder político no se libra ya en campos de batalla definidos, sino en los cuerpos, los hogares y las ciudades de la población civil. Las violencias utilizadas tienen una función política clara: desestructurar, aterrorizar, desplazar y someter poblaciones enteras para consolidar proyectos de dominación. La desproporción en la fuerza militar entre los actores estatales y no estatales y la tendencia de muchos regímenes

autoritarios a ver en la población civil el terreno enemigo, han acentuado estas tácticas. Además, el debilitamiento de las normas internacionales, la impunidad sistemática y el estancamiento de mecanismos de rendición de cuentas (por bloqueos geopolíticos en el Consejo de Seguridad, por ejemplo) han favorecido la normalización de estas violencias extremas. La centralidad de estas formas de violencia en guerras por el poder político muestra que la disputa ya no es solo por controlar el Estado, sino por redefinir quién pertenece, quién tiene derecho a vivir y bajo qué régimen de terror o sumisión. Estas violencias buscan producir un orden político mediante la destrucción social, lo cual plantea enormes desafíos para los procesos de paz posteriores, ya que no basta con reconstruir las instituciones, sino también los tejidos sociales, profundamente traumatizados y fragmentados.

Finalmente, es de destacar el tipo de armamento que se ha utilizado con más frecuencia, con un predominio de las armas ligeras y las armas pesadas de pequeño calibre[7]. La jerarquía de uso de estos armamentos que señalo en el gráfico, refleja con bastante fidelidad la lógica estratégica y material de las guerras por el poder político en el siglo XXI. Esta secuencia no es casual, sino que responde a un patrón recurrente en conflictos internos prolongados, especialmente en África, Oriente Medio y Asia.

GRÁFICO 7

PORCENTAJES DEL TIPO DE ARMAMENTO MÁS USADOS EN ESTAS GUERRAS



Fuente: Elaboración propia.

Las armas ligeras como fusiles de asalto, ametralladoras, pistolas o RPG portátiles son las más utilizadas por varias razones: 1)

disponibilidad y bajo coste. Muchas provienen de excedentes de la Guerra Fría, mercados negros, redes ilícitas o desvíos de arsenales estatales; 2) facilidad de transporte y uso, que permiten formar y mantener milicias móviles sin una infraestructura compleja; 3) control territorial difuso: en guerras políticas, especialmente al inicio, el objetivo no es destruir al enemigo sino controlar poblaciones y símbolos de poder local, para lo cual bastan estas armas; y 4) duración y reciclaje. Estas armas pueden circular durante décadas, alimentando guerras sucesivas. Esto explica por qué incluso en guerras donde existen medios aéreos o artillería pesada, el 80-90% de las víctimas directas provienen de armas ligeras.

La artillería (obuses, cañones, lanzacohetes) y los morteros aparecen como una segunda capa y está asociada a tácticas de asedio y castigo colectivo, especialmente contra zonas urbanas. En este tipo de armamento, tienen ventaja las fuerzas estatales o los grupos armados bien organizados, pues requieren logística, munición constante y cierta capacitación. Su uso indiscriminado busca forzar desplazamientos masivos, quebrar la moral civil y erosionar la legitimidad de la parte contraria. Además, los morteros y la artillería permiten castigar áreas sin necesidad de combate cuerpo a cuerpo, reduciendo bajas propias. La aviación ocupa el tercer lugar, porque solo los Estados o actores con apoyo externo significativo disponen de ella. Su uso es decisivo para campañas rápidas, bombardeos sobre centros de poder o líneas de suministro, como se ha visto en Libia (2011), Siria (desde 2012), Etiopía (2021) o Sudán (2023-2025). Se utiliza no tanto para batallas campales, sino para golpear infraestructuras, ciudades y concentraciones humanas, en muchos casos sin precisión, aumentando el impacto humanitario.

El predominio de armas ligeras y artillería sobre sistemas más complejos favorece una lógica de guerra prolongada y de baja intensidad, en la que actores armados no buscan necesariamente victorias militares decisivas, sino control territorial y social sostenido en el tiempo. En conjunto, este patrón ilustra que estas guerras no dependen tanto de tecnología punta como de combinaciones adaptativas de medios relativamente simples, lo que facilita su

prolongación y dificulta su resolución. También explica por qué el impacto sobre la población civil es desproporcionadamente alto, ya que la mayoría de estas armas, salvo algunos drones, se usan de forma indiscriminada en contextos urbanos, violando sistemáticamente el derecho internacional humanitario.

EL REVERSO DE LA MONEDA. LA CANCELACIÓN Y LAS GUERRAS CONTRA LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS ENTIDADES POLÍTICAS

Aunque el tema central de este libro son las guerras para alcanzar el poder político, podemos mirar el anverso de la moneda, es decir, ver las guerras en las que el grupo dominante, el Gobierno, ha intentado eliminar cualquier proyecto político de otras comunidades. Esta reflexión viene al caso por una guerra aquí no contemplada, la de Gaza, pues Israel no solo ha dicho repetidamente que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, sino que también se opone a que los palestinos tengan una entidad política propia, y de ahí viene el desprecio y la disminución de la capacidad de la Autoridad Nacional Palestina. Aunque este apartado sea más bien un paréntesis, creo oportuno analizarlo, aunque sea brevemente, pues es una realidad vinculada a nuestro tema.

Si definimos política de cancelación como la estrategia estatal orientada a borrar al adversario como sujeto político, desmontando o imposibilitado su andamiaje institucional, su estatus jurídico-constitucional, su representación y, si es posible, su presencia territorial, en la tabla siguiente aparecen varios casos que están vigentes.

TABLA 3

PAÍS	COMUNIDAD AFECTADA	OBJETIVO DEL GOBIERNO
Israel	Palestina	La combinación de expansión y legalización de asentamientos judíos, la fragmentación espacial y nuevas trabas de movimiento de los palestinos, ha ido imposibilitando en los hechos la materialización de una entidad política palestina viable (dos Estados), según los marcos de la ONU, y se ha procurado cancelar cualquier proyecto político propio para los palestinos.

PAÍS	COMUNIDAD AFECTADA	OBJETIVO DEL GOBIERNO
Sudán	Darfur	Las demandas iniciales de los grupos de Darfur eran de autonomía política y reconocimiento identitario dentro de Sudán, no secesión, pero la respuesta del Gobierno de Jartum (Omar al-Bashir) no fue una negociación política, sino una campaña militar de aniquilación, externalizada en milicias árabes locales —los Janjaweed— con apoyo logístico estatal. Darfur representa una cancelación doble al existir una cancelación identitaria, destruyendo la cohesión social de las etnias no árabes mediante limpieza y desplazamiento, y la cancelación política, al impedir que esas comunidades tuvieran representación institucional, voz en Jartum o posibilidad de autogobierno. El caso muestra que la política de cancelación no solo busca eliminar al enemigo militar, sino negar la existencia política del grupo mismo.
Marruecos	Saharaui	En 1975, Marruecos realizó una Marcha Verde para ocupar el territorio del Sáhara Occidental, que España, la potencia colonial en aquel momento, abandonó a su suerte. La mayoría de la población saharaui tuvo que marchar e instalarse en campos de refugiados en el desierto argelino. Desde entonces, Marruecos ha ido colonizando y explotando la zona. En 1991, Naciones Unidas inició un proceso de negociación y prometió realizar un referéndum, que nunca ha fructificado. Aunque para este organismo continúa siendo un territorio para descolonizar, a finales de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad optó para que se negociara solamente una autonomía.
Myanmar	Rohingya	Desde 2016, existe una negación de pertenencia y ciudadanía, la expulsión masiva y la destrucción de estructuras comunitarias de los rohingya. Misiones de la ONU lo describen como crímenes gravísimos, con riesgo e indicios de genocidio.
India	Jammu y Cachemira	En 2019, la revocación del estatus especial disolvió el marco constitucional propio y vació la identidad político-institucional regional, convalidada por el Supremo en 2023.
Sri Lanka	Tamiles	La victoria militar de 2006, fue diseñada para eliminar el proyecto secesionista y su administración de facto, seguida de medidas que cerraron la ventana de representación insurgente.
Chechenia (Rusia)	Chechenia	La segunda guerra en Chechenia tuvo como objetivo explícito restaurar el orden constitucional, desmantelar la aspiración de independencia e instalar una autoridad subordinada a Moscú (kadyrovización).
Armenia/Azerbaiyán	Nagorno-Karabaj	En 2023, tras la operación relámpago de Azerbaiyán, se decretó la disolución de todas las instituciones de Artsaj, y se produjo el éxodo casi total de la población armenia local, cerrando el proyecto político karabají.
Turquía	Kurda	Además de la represión del brazo armado (PKK), que abandonó la lucha armada en 2025, hay una larga historia de negación y restricción del idioma kurdo y de la expresión política kurda; aunque hubo aperturas parciales, persisten trabas que buscan diluir la identidad político-colectiva.

Fuente: Elaboración propia.

La eliminación total del proyecto político identitario (prohibición/erradicación de una entidad propia) es frecuente donde el

Estado percibe el rival como existencial o territorialmente secesionista con apoyo externo; en cambio, cuando hay costes internacionales altos o interdependencia electoral/administrativa, los gobiernos tienden a contener o pactar (autonomías, cuotas, federalismos incompletos). La hipótesis sobre la cancelación del proyecto nacional palestino por Israel, tiene paralelos claros, pero no es la norma en todos los casos, ya que una parte relevante de las guerras terminaron con algún reconocimiento institucional del rival, o su incorporación a un nuevo arreglo político.

El patrón común de la cancelación ha sido el de la desconstitucionalización (abrogar estatutos, disolver instituciones, colocar gobernadores/administradores *de facto*); la deslegitimación jurídica (terrorismo/ilegalización total de partidos/éxodos forzados); la ingeniería territorial/demográfica (asentamientos, traslados, bloqueos, barreras), que impiden la continuidad territorial y la anulación simbólica-cultural (idioma, toponimia, currículos, medios). El resultado buscado es que el grupo deje de existir como actor político, aunque sus miembros sigan existiendo como individuos.

Tras el fin o la supresión de una guerra, el primer paso suele ser la abrogación de los marcos legales e institucionales que reconocían o regulaban la existencia del grupo como entidad política o administrativa. Se anulan constituciones autonómicas, estatutos de autogobierno, parlamentos regionales o incluso simples consejos locales, bajo el argumento de restablecer la legalidad nacional. Este proceso implica la recentralización del poder y el nombramiento de administradores o gobernadores *de facto* por parte del Gobierno central, sin legitimidad democrática ni representación local. La finalidad no es solo institucional, sino ontológica, esto es, eliminar el marco jurídico que permitía al grupo ser considerado un actor político legítimo dentro del Estado o frente a él.

El segundo vector es la redefinición jurídica del grupo o de sus dirigentes como terroristas, secesionistas o traidores, borrando toda distinción entre movimiento político y amenaza a la seguridad nacional. A través de leyes antiterroristas, listas negras y órdenes judiciales, se ilegalizan partidos, se persigue a sus líderes, se

criminaliza la expresión política y se destruye su tejido civil. Se instala así una narrativa según la cual la mera reivindicación de autonomía, reconocimiento o pluralismo equivale a terrorismo o conspiración contra el Estado. La deslegitimación jurídica también se refuerza con el exilio forzado o la dispersión de las élites políticas y culturales, que impide la regeneración de liderazgos. De este modo, el grupo puede seguir existiendo como población, pero ya no como sujeto político reconocido.

La tercera dimensión es la transformación física del territorio y de la composición poblacional, mediante políticas de relocalización, colonización interna, bloqueo o aislamiento. La guerra, los desplazamientos forzados, los asentamientos de nuevos grupos leales al poder central y las barreras físicas (muros, puestos de control, divisiones administrativas artificiales) interrumpen la continuidad territorial y social del grupo. Esta "ingeniería" busca impedir que el grupo vuelva a organizarse colectivamente. La consecuencia es que la comunidad ya no tiene un lugar político desde donde ejercer su existencia colectiva, ni siquiera simbólicamente.

Finalmente, la cancelación se completa con la neutralización cultural y simbólica: eliminar la lengua, los nombres, los referentes históricos, los currículos educativos, los medios de comunicación y los símbolos del grupo. Se cambia la toponimia, se impone una lengua oficial única, se reescriben los manuales escolares y se controlan los espacios de memoria (museos, monumentos, archivos). La meta no es solo asimilar, sino borrar la posibilidad de un relato alternativo de la historia nacional.

El resultado acumulativo de estos procesos es la desaparición del grupo como actor político colectivo. Sus miembros sobreviven, pero ya no como parte de una comunidad con representación, instituciones o voz política reconocida. Se produce una forma de aniquilación política sin exterminio físico, al menos a gran escala, excepto en Gaza, el grupo se desactiva como sujeto histórico y su identidad se privatiza o se convierte en residuo cultural. En este sentido, la cancelación política no es un acto puntual sino un régimen de dominación posbélico, orientado a transformar la derrota militar en una extinción prolongada

de la autonomía política. Como explicaré en el capítulo sobre la radiografía del poder político en contextos bélicos, en términos foucaultianos es una biopolítica de la des-sujeción, donde el poder no elimina los cuerpos, sino las condiciones de posibilidad de que esos cuerpos vuelvan a constituirse como pueblo.

En los conflictos armados del siglo XXI orientados a eliminar la identidad política del otro, la victoria militar o la administración coercitiva rara vez producen paz legítima; producen, más bien, silencios forzados. Las salidas menos destructivas pasarían por restituir el sujeto político (derechos, representación y reglas claras), con garantías de seguridad para ambos lados, pues de lo contrario el conflicto solo mutaría de forma.

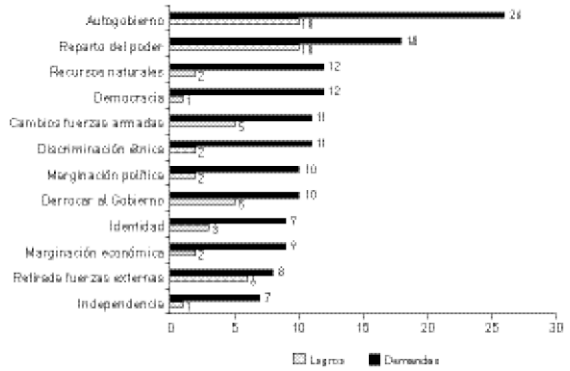
LAS DEMANDAS POLÍTICAS DE LOS GRUPOS ARMADOS

Veamos a continuación cuáles han sido, de forma más precisa, las demandas políticas de todos los grupos armados que han intervenido en estas 31 guerras, para ver después lo que hayan podido conseguir. He considerado las demandas y los objetivos de los 39 grupos armados más importantes[8], para ver, también, los logros alcanzados. Como puede verse en el gráfico 8, los principales puntos de sus agendas políticas han sido los siguientes, por orden de frecuencia: las formas de autogobierno (incluyo la autonomía, federalismo o independencia), el reparto del poder político o la inclusión política, la demanda de democracia, el acceso y control de los recursos naturales, finalizar con la discriminación étnica, cambiar o acceder a las fuerzas armadas, derrocar al Gobierno, poner fin a la marginación político o económica, el reconocimiento y respecto a la identidad, la retirada de las fuerzas extranjeras y los reclamos de independencia.

Si observamos los logros obtenidos al final, la media es de un tercio de las demandas, siendo las más exitosas la exigencia de retirada de fuerzas extranjeras, el reparto del poder o la inclusión política, el derrocamiento del Gobierno y los cambios o el acceso a las fuerzas armadas. Es de notar el bajo nivel conseguido respecto a las demandas de democracia, en contraste con el reparto del poder; también la

consecución de la independencia que como máximo acaba con una autonomía, la dificultad para acceder al control de los recursos naturales, finalizar con la discriminación étnica y acabar con la marginación política y económica. Todas estas conclusiones, sin embargo, deben relativizarse por cuestiones metodológicas, pues la lista de las principales demandas podría ampliarse y abarcar otros aspectos. En todo caso, he procurado priorizar las exigencias más notables y publicitadas por estos grupos armados[9].

GRÁFICO 8
PRINCIPALES DEMANDAS DE CARÁCTER POLÍTICO Y SUS LOGROS, SOBRE UN TOTAL DE 39 CASOS DE GRUPOS ARMADOS



Fuente: Elaboración propia.

Para entender el motivo por el que la exigencia más frecuente de los grupos armados son las demandas de autogobierno, con 10 casos de autonomía, nueve de federaciones y siete de independencia, lo que significa el 64% de todos los casos aquí analizados, hay que tener en cuenta que un alto porcentaje de estas guerras tienen una naturaleza etnopolítica y que muchos de los grupos armados pertenecen a comunidades o grupos étnicos que se han sentido marginados del poder político y económico[10]. La falta de inversión pública, infraestructuras y servicios sociales genera la percepción de ser "ciudadanos de segunda", por lo que el autogobierno aparece como un mecanismo para romper con la centralidad excluyente de las capitales y garantizar un mínimo de autogestión y redistribución. El autogobierno se convierte en una herramienta de protección identitaria y, a la vez, de reconocimiento político. La autonomía o descentralización es vista, con frecuencia, como una garantía

institucional más creíble que las simples concesiones de inclusión política en el aparato central. Además, en contextos de Estados frágiles o autoritarios, la soberanía compartida es más realista que la democratización plena. Muchas de estas regiones periféricas son ricas en recursos estratégicos, con lo que el autogobierno se exige para controlar la explotación y redistribución de esas riquezas, frente a décadas de extracción sin beneficios locales. Desde los años noventa, se ha consolidado en el discurso internacional la legitimidad de las autonomías (acuerdos de paz en Bosnia, Kosovo, Timor Oriental, Bougainville, Aceh, Mindanao, etc.). Los grupos armados aprenden de esas experiencias y plantean sus demandas en términos de autogobierno, federalismo o autonomía especial porque es un lenguaje aceptable en foros internacionales, más que la independencia absoluta que solo ha sido vindicada por siete grupos a lo largo del siglo, frente a 22 que demandaban autonomía o descentralización, una solución de compromiso que permite a los gobiernos centrales preservar la soberanía formal y ofrecer a los grupos armados un poder político real en su territorio, por lo que se convierte en la prioridad negociadora, más viable que la secesión.

Pero de los 26 casos demandados, solo 10, el 38,5%, han conseguido un autogobierno. La dificultad principal radica en que, aunque la autonomía o la federación aparecen como unas demandas pragmáticas frente al objetivo más radical de la secesión, los Estados las perciben como una amenaza a su integridad territorial. La combinación de resistencia estatal, debilidad insurgente, escasa presión internacional y problemas de implementación, explica por qué solo un poco más de un tercio de los grupos ha alcanzado resultados tangibles y en la mayoría de los casos de manera limitada. La mayoría de estos conflictos se desarrollan en Estados con baja calidad democrática, donde los mecanismos de negociación política están cerrados y prima la represión. En contextos autocráticos, los líderes priorizan la seguridad y la centralización del poder, más que fórmulas de inclusión territorial. Incluso en los casos en que se logró un acuerdo de descentralización/autonomía, hubo falta de recursos fiscales y competencias reales, por lo que el autogobierno es a menudo nominal o

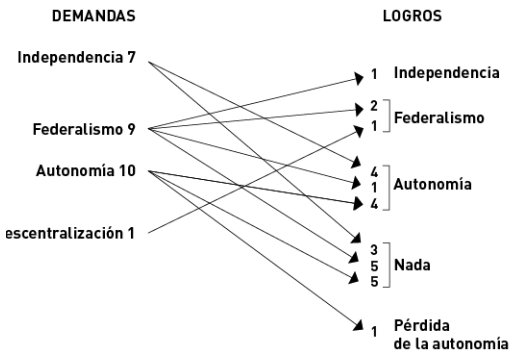
tardío, como, por ejemplo, en Filipinas con el MILF, que tardaron más de una década en implementarse. También existe una resistencia burocrática y militar, pues a menudo las élites estatales bloquean la transferencia de competencias. Por último, los grupos armados pueden dividirse entre quienes aceptan la autonomía y quienes continúan luchando para alcanzar la independencia.

Hay también cuatro casos en que la demanda ha sido la descentralización, una exigencia de menor impacto que el autogobierno. Aún así, solo en un caso ha sido posible lograr el avance a partir de una demanda inicial de descentralización, en Sudán con el RSF, pero *de facto*, no reconocido por la otra parte, la gubernamental, y en forma de federación unilateral. La descentralización implica el traslado de competencias administrativas, fiscales o políticas desde el centro a niveles subnacionales, dentro del mismo marco constitucional. Suele ser de alcance nacional (todas las provincias y municipios), con poderes acotados y reversibles y sin identidad colectiva explícita como fundamento. El foco es la gestión cercana y el reparto de funciones, no un estatuto político propio[11].

Sean cuales sean las demandas, los grupos armados necesitan cierta legitimación. Hay tres desafíos clave que estos grupos armados suelen enfrentar en relación con este aspecto: primero, necesitan legitimar el uso de medios violentos; segundo, para obtener apoyo moral y material, dependen de creencias de legitimidad; y tercero, necesitan dirigirse simultáneamente a diversos públicos nacionales e internacionales[12].

¿Cómo han terminado las demandas de autogobierno, sea mediante autonomía, federación o independencia? En la mitad de los casos no se consiguió nada, las demandas de autonomía tuvieron éxito en el 60% de los casos (Mali, Filipinas, Indonesia, kurdos de Siria y las dos partes de Yemen, aunque *de facto* en los tres últimos casos), las de federalismo en la tercera parte, y las de independencia solo en un caso, el sur de Sudán, que supone el 14% de total.

DIAGRAMA DE FLUJOS ENTRE LAS DEMANDAS DE AUTOGOBIERNO



Nota: Hay casos (Filipinas, Indonesia y Yemen) en que los grupos armados primero demandaban la independencia, pero posteriormente se conformaron con negociar una autonomía. En Camerún, los anglófilos rechazaron una propuesta de autonomía.
Fuente: Elaboración propia.

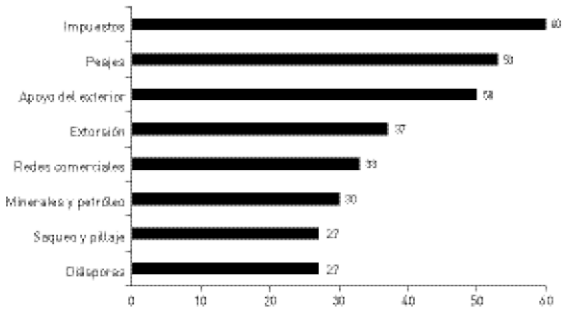
LA FINANCIACIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS Y LA PÉRDIDA DE LA INOCENCIA

¿Cómo se financian estos grupos armados para poder empezar o continuar con una guerra? Las formas más habituales y por orden de importancia, son los impuestos a la población que controla, los peajes en los *checkpoints*, los apoyos del exterior, la extorsión, las redes comerciales, la explotación de minerales y petróleo, las ayudas de las diásporas y el saqueo y pillaje. No tiene nada de romántico, como puede apreciarse.

Que el mecanismo más extendido sea el impuesto a la población y a las actividades económicas bajo control territorial, muestra que los grupos armados se comportan como proto-Estados. Recaudan impuestos de guerra sobre cosechas, salarios, comercio local, transporte, incluso sobre ayuda humanitaria. Los peajes en *checkpoints* son una variante de este mismo principio, ya que el control del movimiento de bienes y personas se convierte en fuente estable de ingresos y en símbolo de soberanía *de facto*. Esto revela que la lógica de la financiación está íntimamente ligada a la construcción de autoridad política. El apoyo del exterior, muestra la internacionalización de los conflictos. Los respaldos de Estados rivales, redes transnacionales o actores privados externos muestran que muchas guerras actuales no son puramente internas, sino que se

insertan en disputas regionales y geopolíticas. Estos apoyos otorgan no solo dinero, armas y entrenamiento, sino también legitimidad internacional. La extorsión a empresarios, comerciantes o contrabandistas refleja la hibridación entre economía criminal y economía de guerra. El uso de redes comerciales ya existentes (transfronterizas, informales, ilícitas) permite conectar el conflicto con mercados internacionales, garantizando liquidez y sostenibilidad. La explotación de recursos naturales, como minerales (coltán, oro, diamantes) y petróleo, han jugado un rol estratégico, pero suelen estar más concentrados en ciertos contextos (RD Congo, Sudán, Libia, Siria, Iraq). A diferencia de lo que se pensaba en los años noventa (diamantes de sangre), en el siglo XXI no todos los grupos armados tienen acceso directo a recursos de alto valor, por lo que este mecanismo es importante, pero no universal. Las diásporas proveen financiación más estable y políticamente motivada, sobre todo cuando mantienen vínculos identitarios o étnicos fuertes con los combatientes. Aunque relevante, suele complementar otros mecanismos más inmediatos como impuestos o extorsión. El saqueo y pillaje representa un mecanismo menos estable, más ligado a la oportunidad inmediata y a la disciplina interna del grupo. Si bien aporta recursos rápidos, suele erosionar la legitimidad frente a la población y acentuar la fragmentación interna, por lo que en muchos casos es una estrategia secundaria, no central[13].

GRÁFICO 9
PRINCIPALES FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LOS GRUPOS ARMADOS ESTUDIADOS EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

El orden del gráfico refleja que la guerra contemporánea se financia,

sobre todo, con recursos endógenos generados en los territorios controlados, más que con grandes flujos externos o con recursos naturales espectaculares. La clave está en la institucionalización de la violencia como sistema fiscal alternativo, que reproduce funciones estatales (cobrar, controlar, regular) aunque de manera coercitiva. De este modo, la financiación no solo permite sostener la guerra, sino que crea la base de un poder político *de facto*, con capacidad de imponer normas, generar dependencia económica y legitimar su autoridad frente a la población y actores externos.

El politólogo suizo-alemán Achim Wennmann[14] ha hecho una clasificación de las economías del conflicto y la estrategia militar de los grupos armados, que coinciden con mi apreciación. Las diferentes categorías en esta evolución incluyen tres sistemas:

1. Depredación-contención. La economía de conflicto es depredadora, y la estrategia militar se basa en la contención con las fuerzas gubernamentales. Los grupos armados operan en zonas formalmente bajo control estatal con el fin de desestabilizar al Estado y recaudar fondos, realizando ataques relámpago, como asesinatos, secuestros, robos o atracos a bancos. En esta etapa, los gastos necesarios son reducidos, ya que el grupo armado es pequeño y las operaciones son a pequeña escala.
2. Parasitismo-expansión. A medida que los grupos armados crecen en tamaño y alcance territorial, la economía de conflicto se vuelve cada vez más parasitaria. Las operaciones se llevan a cabo en una zona geográfica específica, en la que el grupo expande su control. La estrategia militar cambia de ataques relámpago a guerra de baja intensidad y a estrategias económicas para debilitar al Gobierno. A medida que la economía formal decae y el Gobierno pierde ingresos fiscales, un grupo armado capta una mayor proporción de la economía sumergida y se fortalece gracias a ingresos adicionales.
3. Extracción-control territorial. Los insurgentes establecen el control sobre una zona de la que el Estado está excluido. En esta zona, un grupo armado se convierte en el Gobierno *de*

facto y gestiona los servicios sociales, el arbitraje y el sistema tributario. Esto último genera fondos para continuar las actividades militares. Estas zonas pueden, en última instancia, convertirse en un Estado *de facto*, en el que un grupo armado establece el control sobre el territorio y la población, y crea instituciones.

Esta clasificación revela que la lucha por el poder político en las guerras contemporáneas, no puede comprenderse sin analizar simultáneamente las lógicas económicas que la sustentan. Los grupos armados no solo evolucionan militarmente, sino también en su relación con los recursos, las poblaciones y los territorios que controlan. El tránsito desde la depredación hasta la gestión institucional implica una mutación profunda, pues el grupo armado pasa de ser un actor esencialmente destructivo a un actor que busca reproducir formas de gobernanza, aunque sea desde la coerción o la ilegalidad. Sin embargo, esta aparente institucionalización del poder rebelde no garantiza legitimidad ni sostenibilidad, ya que el control basado en la extracción y la imposición carece de los cimientos éticos y participativos propios de una autoridad legítima. En última instancia, la economía del conflicto y la política del poder se entrelazan en un ciclo que solo puede romperse cuando el ejercicio del control territorial deja de ser un fin en sí mismo y se transforma en una responsabilidad pública genuina, orientada al bienestar de la población y no a la perpetuación de la dominación armada.

¿REPARTO DEL PODER O DEMOCRACIA?

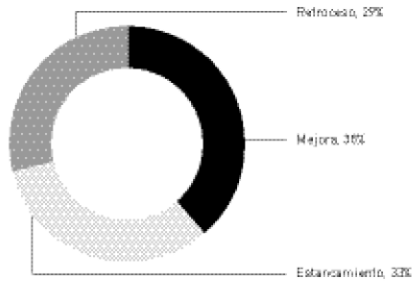
Hace años, Juan Linz[15] ya sostuvo la tesis de que, en regímenes autoritarios, los grupos armados entienden que la democratización plena es improbable, pero el reparto de poder político sí es alcanzable mediante negociación, cooptación o pactismo. Prefieren entrar en el régimen, aunque sea con lealtad limitada, antes que quedarse fuera o ser destruidos. Su marco de análisis nos puede servir para entender el comportamiento de los actores armados de la actualidad. Linz define el

autoritarismo como un régimen con pluralismo político limitado, pero no completamente abolido, donde las élites pueden negociar cuotas de poder. En estos sistemas, los grupos opositores, armados o no, saben que es muy difícil derrocar el régimen por completo; la democratización plena es poco viable. Por ello, el objetivo pragmático suele ser conseguir espacios de participación, cargos administrativos o cuotas de representación, en vez de un cambio sistémico total. Linz observó que, tanto en las transiciones democráticas como en la gestión autoritaria, los actores recurren a pactos para evitar el colapso o la represión total. Los grupos armados, en este marco, prefieren entrar en la lógica del reparto (ministerios, gobernaciones, control de recursos locales) porque les da legitimidad política, evita la derrota militar y les otorga recursos y autonomía parcial sin necesidad de transformar el régimen. Destacó que, en regímenes autoritarios, los actores aceptan lealtad limitada: los opositores pueden ser integrados parcialmente a cambio de que no desafíen la supervivencia del régimen. Los grupos armados suelen aceptar este arreglo porque mantienen cierta capacidad de movilización, obtienen beneficios materiales o simbólicos y no arriesgan la aniquilación militar. Muchos opositores en contextos autoritarios desarrollan un pragmatismo político, esto es, buscan "lo posible" (poder compartido) más que "lo ideal" (democracia plena). Esto se refleja en las guerras contemporáneas, pues en vez de reclamar elecciones libres inmediatas, los grupos armados piden autogobierno, ministerios, cuotas parlamentarias o control de fuerzas de seguridad locales. El objetivo no es democratizar el régimen, sino insertarse en él como actor reconocido. Así, la demanda principal no es la democracia liberal, sino la inclusión en el juego político existente[16].

Si ampliamos el periodo de análisis y partimos de 1990 para obtener una muestra más detallada de las experiencias de reparto del poder político en los acuerdos de paz o procesos de transición y observamos el resultado a medio plazo, podemos sacar muchas lecciones de los límites del tema, para no repetir los mismos errores en futuros acuerdos de paz y para poner sobre la mesa algunas variables que puedan estimular una negociación. Con una muestra de 24 casos (Sudáfrica, Ruanda, Angola, Mozambique, Sierra Leona, Liberia, Costa

de Marfil, RD Congo, Burundi, Bosnia, Macedonia del Norte, Tayikistán, Comoras, Afganistán, Iraq, Yemen, República Centroafricana, Sudán del Sur, Sudán, Nepal, Kenya, Zimbabue e Irlanda del Norte), en el 37,5% de los ejemplos se puede hablar de una cierta mejora en la democratización real a medio plazo, en un 33,3% hubo estancamiento y en el 29,2% restante no hubo ninguna democratización, sino un retroceso.

GRÁFICO 10
PORCENTAJE DE DEMOCRATIZACIÓN TRAS EL REPARTO DEL PODER POLÍTICO, 1990-2025



Fuente: Elaboración propia.

Los modelos seguidos han sido básicamente dos, los gobiernos de unidad o transición, y el reparto de cuotas en el Gobierno. En menor grado se han dado casos de consociación, autonomías, cuotas étnicas, vetos étnicos, vetos cruzados o alternancia (rotación). Las mejoras democráticas suelen darse cuando el reparto es transitorio, con un horizonte electoral claro, con garantías creíbles y reformas institucionales de fondo. El estancamiento o retroceso se produce cuando el reparto congela identidades o se convierte en cuotas clientelares permanentes, o cuando las élites armadas retienen palancas coercitivas. La autonomía territorial, más que cuotas nacionales, puede funcionar en conflictos centro-periferia, pero requiere reglas de competencia limpias y garantías de derechos.

Los defectos típicos de los acuerdos de reparto son los siguientes: las cuotas rígidas que cristalizan la etnicidad y vetos omnipresentes, como en Bosnia o Burundi; los gobiernos sobredimensionados y caros, diseñados para comprar paz más que para gobernar, como en la RD Congo o Zimbabue; la cooptación sin reformas, que genera impunidad, captura de recursos y corrupción sistémica, como en la República

Centroafricana o Sudán del Sur; la seguridad mal secuenciada, que produce una integración ficticia, mandos paralelos y milicias autónomas, como en Sierra Leona o Sudán del Sur; y la temporalidad elástica, esto es, transiciones que no acaban, elecciones aplazadas, provisorios permanentes, situaciones políticas en las que gobiernos, autoridades o mecanismos creados de manera provisional (por ejemplo, un gobierno de transición, un presidente interino, una administración temporal), acaban quedándose indefinidamente, sin llegar nunca a una normalidad institucional.

Los pactos para poner fin a las guerras del siglo XXI, exista o no un acuerdo de paz formal, tienden a ser pactos de inclusión de élites más que transformaciones democráticas profundas. Los insurgentes luchan por entrar al reparto del poder político (ministerios, autonomía, recursos, representación parlamentaria, participación electoral) y rara vez impulsan la democratización como fin último. Hay estudios que alertan de que la naturaleza provisional de muchas instituciones de poder compartido aumenta los incentivos de búsqueda de rentas, pues, frente a un horizonte de tiempo limitado en el cargo, es probable que las élites de búsqueda de rentas dentro de la coalición de poder compartido capturen tantas rentas como sea posible antes de tener que dejar el cargo. Por lo tanto, los países que salen de un conflicto con instituciones que comparten el poder deberían exhibir niveles agregados más altos de búsqueda de rentas, medidos como el nivel de corrupción en un país[17]. Muchos acuerdos de reparto del poder político, están asociados con una creciente corrupción ejecutiva y menos mejoras en el Estado de derecho. También hay que recordar que compartir el poder con antiguos miembros de grupos armados, puede crear divisiones en las estructuras políticas de la posguerra, y puede proporcionar un fuerte incentivo para que las antiguas partes beligerantes obtengan apoyo político principalmente de sus propios grupos y no sea incluyente[18].

Profundicemos, por tanto, por qué en muchas guerras civiles de este siglo los grupos armados priorizan la inclusión y el reparto de poder, y eso se consigue con bastante más frecuencia que las democratizaciones profundas. El poder compartido (*power-sharing*) es

muy común al terminar los conflictos armados, y en ocasiones ayuda a cerrar acuerdos de paz. Pero hay evidencias de que las transiciones democráticas amplias no son automáticas y, mal secuenciadas, pueden incluso tensar la paz; lo más habitual es seguir el principio de "primero paz y luego democratización". En teoría, el reparto del poder puede favorecer el Estado de derecho y la "democratización desde arriba/abajo", pero depende del diseño y de su implementación[19]. Dado que el reparto del poder se recomienda y aplica cada vez más en muchas sociedades frágiles y posconflicto, es importante entender qué se entiende por reparto del poder en estos contextos[20]. Algunos estudios apuntan a que los acuerdos de reparto de poder que estipulan reformas de tipo consociacional, tienen una probabilidad significativamente mayor de resolver el conflicto[21]. El modelo consociacional no busca superar las divisiones, sino gestionarlas de forma pacífica evitando la dominación de una mayoría sobre minorías, ofreciendo estabilidad en sociedades segmentadas. Esto es también válido para el reparto territorial de poder, que se utiliza a menudo en los procesos de paz para conciliar los intereses contrapuestos de las partes en conflicto por el control territorial, incluyendo las reivindicaciones contrapuestas de un Estado unitario y de secesión. Al igual que otras formas de reparto del poder, puede ofrecer una mayor inclusión, en forma de autogobierno, a los grupos que han impugnado la marginación del Estado. Sin embargo, el reparto territorial del poder puede, a su vez, generar otras formas de inclusión y exclusión que deben anticiparse y abordarse[22].

Aun sin negociación y acuerdos de paz, los comunicados y declaraciones de los grupos armados suelen girar en torno a ser reconocidos como actores legítimos, obtener territorios autónomos o puestos de poder. Una democratización real supone reformas estructurales (pluralismo, alternancia en el poder, independencia judicial, fin del autoritarismo) y esto no es fácil, pues los gobiernos suelen resistirse a cambios de régimen profundos. Los grupos armados muchas veces quieren un asiento en el poder, no cambiar las reglas del juego, y en contextos de Estados frágiles y autoritarios, la democracia plena es poco realista. Así pues, la democratización como discurso es

minoritaria por tres razones principales: 1) realismo estratégico. Cambiar todo el sistema político es mucho más difícil que reclamar ministerios, autonomía o cuotas; 2) naturaleza autoritaria del Estado. En regímenes cerrados y autocráticos, democratizar no es una opción viable, mientras que pactar poder sí puede serlo; y 3) la cultura organizacional, ya que muchos grupos armados son jerárquicos y militaristas, sin prácticas democráticas internas.

Para explicar por qué se logra más la inclusión política que la democratización, debemos tener en cuenta otros factores, además de los tres ya mencionados. Uno son los incentivos a las élites. A los gobiernos y a los líderes armados les es más fácil acordar beneficios divisibles y verificables a corto plazo (ministerios, escaños, cuotas) que abrir reglas competitivas que pongan en riesgo su supervivencia. Otro motivo es la credibilidad y la verificación. Las cláusulas de participación electoral, por ejemplo, son concretas y activan la observación y la condicionalidad internacionales; en cambio, las reformas democráticas sistémicas requieren capacidades y tiempo, que suelen faltar en la etapa del posconflicto. Un tercer elemento es la secuenciación, esto es, democratizar rápido puede reactivar dilemas de seguridad y competencia de suma cero, y de ahí surge la recomendación de secuenciar (primero reducir violencia, luego ampliar reglas). Un cuarto factor es el diseño institucional. El reparto del poder político suele venir con vetos mutuos y cuotas que estabilizan, pero también congelan clivajes, dificultando reformas liberalizadoras más profundas. Finalmente hay que tener en cuenta la estructura de poder. Donde los grupos armados son relativamente fuertes, es más probable que obtengan reparto del poder; la democratización sustantiva, en cambio, depende de factores más amplios, como la capacidad estatal, la economía o las redes clientelares[23]. La paz duradera no depende solo del cese de la violencia, sino de un nuevo pacto político inclusivo, verificable y escalonado, en el que se transforme la competencia militar en competencia política, se garanticen reglas previsibles y auto reforzantes de reparto del poder, y se ordene cuidadosamente la transición para evitar el colapso del proceso. En definitiva, la paz

sostenible emerge no como un evento, sino como un proceso de construcción institucional en el que los incentivos de los actores se alinean con la preservación de la estabilidad.

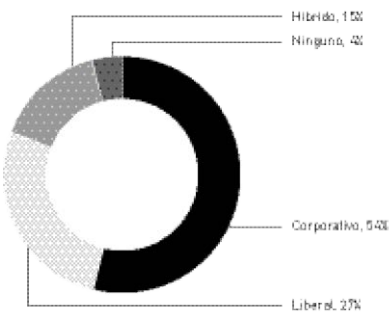
Para superar la llamada trampa del conflicto[24] que describe cómo la violencia armada genera pobreza e instituciones frágiles que, a su vez, aumentan la probabilidad de nuevos conflictos, creando un círculo vicioso difícil de romper sin intervenciones profundas y sostenidas. Algunos estudios proponen una combinación de compartir el poder militar y abordar las relaciones de poder verticales a través de pasajes que tratan la gobernanza, el poder económico compartido, la justicia transicional y los derechos humanos. Esto sugiere que los resultados de negociación más estables y pacíficos parecen ser aquellos que logran combinar una solución para la negociación horizontal de la élite, con cambios institucionales que abordan la dimensión vertical. El objetivo de los acuerdos de reparto del poder debería ser mejorar la cohesión social y enmarcar al Estado como proveedor de servicios, en comparación con la distribución de las rentas. Dicho de otra manera, la élite debe poder cambiar para proporcionar beneficios más amplios más allá de su estrecho grupo. Esto hace que los acuerdos de reparto del poder sean más robustos a los cambios en el poder *de facto*[25]. Por otra parte, también parece demostrado que el entorno ideal para compartir el poder para dar forma a la paz, es cuando las partes están equilibradas y los costos de la guerra son relativamente altos. Por el contrario, cuando los grupos están menos igualados y los costos de la guerra son bajos, compartir el poder implica distribuciones no proporcionales del poder e incentivos positivos o saboteadores. En tales condiciones, el reparto del poder puede aumentar en lugar de reducir el riesgo de conflicto civil[26].

Coincido con un estudio de Juon y Bochsler[27] que presenta evidencias sobre los efectos divergentes de dos tipos de poder compartido en los niveles de democracia. El primer tipo de reparto del poder, liberal, se basa en formas flexibles e indirectas de incluir a las minorías étnicas, como los sistemas electorales proporcionales, los bajos umbrales de inclusión en los cargos ejecutivos, los requisitos de mayoría calificada y las normas inclusivas que utilizan subunidades

territoriales no étnicas. Al incluir diversos grupos en el Gobierno, hace que la democracia sea más aceptable para las minorías y las facciones rivales, aumentando así los niveles de democracia. El segundo tipo, el reparto del poder corporativo, se basa en cuotas étnicas, derechos de veto explícitos otorgados a los representantes de las minorías y disposiciones territoriales que siguen de cerca los patrones de asentamiento étnico. Según los dos autores, estas instituciones son rígidas, dejan poco espacio para la competencia interétnica y confinan el poder a un conjunto estrecho de élites gobernantes, lo que afecta negativamente las normas democráticas de competitividad y apertura. Sus análisis indican que el reparto del poder liberal ejerce efectos positivos en los niveles de democracia y, por el contrario, los impactos generales del reparto del poder corporativo son mixtos y, potencialmente, incluso negativos.

Si observamos a los grupos armados que estamos analizando (ver nota 8), veremos que más de la mitad son del tipo corporativo, ya que buscan un reparto del poder político por pertenencia grupal, y muestra de ello es que el 39% son corporativos-territoriales y el núcleo de su solución es el autogobierno de una unidad identitaria. Los del tipo liberal, donde el poder no está basado en cuotas por pertenencia grupal, representan el 27%, la mitad de los anteriores, siendo varios de ellos muy elitistas. El 15% son casos híbridos, una mezcla de los dos tipos anteriores.

GRÁFICO 11
TIPOS DE PODER COMPARTIDO



Fuente: Elaboración propia.

Que más de la mitad de los casos caigan en la categoría

“corporativo” sugiere que, al menos entre los conflictos donde grupos armados participan en el diseño del nuevo régimen, la lógica de reparto por identidad, territorio o facción sigue siendo muy atractiva para los actores. En otras palabras, los grupos tienden (o sienten que deben) blindarse con protecciones institucionales específicas, frente al riesgo de derrota electoral o exclusión. Esto es consistente con la experiencia de muchas transiciones posbélicas, donde las élites quieren garantías explícitas para preservar su influencia.

Ya que África concentra buena parte de las guerras por el poder político, es interesante ver si en los estudios poscoloniales se han elaborado varias tesis explicativas sobre por qué en este continente los conflictos armados tienden a centrarse en la captura del poder político, más que en demandas de democratización plena o en revoluciones sociales. Las principales líneas de análisis son las siguientes:

- El Estado poscolonial como herencia del colonialismo. Los Estados africanos surgieron como construcciones coloniales artificiales, sin correspondencia con las comunidades históricas ni con un pacto social sólido. La independencia transfirió a élites locales un aparato estatal diseñado para la extracción y el control coercitivo, no para la inclusión política[28].
- Centralidad del Estado como fuente de recursos. El Estado poscolonial se convirtió en el principal distribuidor de rentas, empleos públicos y acceso a recursos (contratos, concesiones, ayuda internacional). Al carecer de economías diversificadas y de instituciones sólidas, el control del poder político equivalía al acceso exclusivo a riqueza y supervivencia política[29].
- Fragmentación étnica y clientelismo. La ausencia de un nacionalismo cívico integrador, hizo que las élites movilizaran identidades étnicas como base de legitimidad y de reclutamiento armado. La competencia por el Estado se articuló a través de redes clientelares que excluyen a los demás, alimentando rebeliones de grupos marginados[30].
- Neocolonialismo y dependencia internacional. La política

africana se inserta en relaciones de dependencia con potencias extranjeras que fomentan gobiernos aliados o intervienen selectivamente. Los conflictos armados son en parte luchas por controlar esa interlocución privilegiada con donantes, recursos estratégicos o actores globales[31].

- La violencia como forma de hacer política. Dada la debilidad de las instituciones, los golpes de Estado, rebeliones y guerras civiles se convirtieron en mecanismos habituales de sucesión política. Se normalizó la violencia como recurso para alcanzar el poder, en lugar de elecciones o pactos institucionales[32].

Los estudios poscoloniales coinciden en que la centralización extrema del Estado poscolonial, la herencia institucional del colonialismo y la economía rentista-clientelar hacen que la captura del poder político sea la vía casi exclusiva para acceder a recursos, prestigio y seguridad. Por eso tantos conflictos armados en África se centran en el poder político, porque en ausencia de instituciones inclusivas, el Estado es visto como "el botín" que todo grupo busca monopolizar.

Otro aspecto a tener en cuenta al hablar de África, es el abrumador número de golpes de Estado militares que se han producido, 110 consumados entre 1970 y 2023, y que han afectado a 41 países, el 76% de todos los países del continente. Estos golpes de Estado no pueden explicarse por una sola causa, sino por la convergencia de instituciones débiles, militarización histórica, crisis socioeconómicas, personalismo político y dinámicas internacionales. El golpe se convirtió en un mecanismo de alternancia, allí donde la vía democrática era bloqueada o carecía de legitimidad. La administración colonial dejó estructuras débiles y dependientes del poder metropolitano, la burocracia civil fue reducida, lo que facilitó que los militares, con mayor organización, ocuparan el vacío de poder. También influye la ausencia de tradición democrática, pues la transición a la independencia no estuvo acompañada de una cultura política pluralista, lo que favoreció el autoritarismo y la legitimidad *de facto* del uso de la fuerza[33].

Para finalizar, las recomendaciones prácticas para futuros procesos, y a partir de lo señalado hasta ahora, deberían incluir estos siete principios:

1. Que el reparto del poder sea un puente, un medio, pero no el destino final. Fijar en el texto una cláusula temporal con metas verificables hacia reglas generales, como celebrar elecciones competitivas, una reforma electoral, regular la financiación de los partidos y transitar de un sistema rígido de reparto de poder basado en cuotas identitarias a un sistema más flexible y democrático, fundamentado en la ciudadanía común y en criterios universales (igualdad de voto, mérito, pluralismo político, participación libre), donde las cuotas se revisan o se eliminan para favorecer la cohesión cívica.
2. Combinar varios ejes de solución (ejecutivo, territorial, militar), estableciendo límites mínimos e innegociables que garanticen gobernabilidad y eviten bloqueos. Mezclar ejes con mínimos exigibles significa no optar por un solo mecanismo de inclusión (ni solo cuotas políticas, ni solo autonomía, ni solo desarme, desmovilización y reincorporación, DDR), sino hibridar varias fórmulas, cada una con condiciones mínimas claras y con salvaguardias que eviten que las concesiones se conviertan en bloqueos crónicos. Mezclar ejes con mínimos exigibles, significa crear un entramado de inclusión múltiple, donde cada dimensión (ejecutivo, territorial, militar) tenga límites claros, reglas de juego estables y salvaguardias para que la concesión a una parte no se traduzca en parálisis para todo el sistema. Es un diseño que busca inclusión sin captura, gobernabilidad sin bloqueos y flexibilidad sin desintegración.
3. Blindar la secuencia. Por ejemplo, empezar primero por garantizar la seguridad, luego por el establecimiento de un Gobierno transicional y elecciones con garantías (observación y justicia electoral) y, por último, una reforma constitucional gradual. Esta recomendación busca evitar dos riesgos que se

repiten en numerosos acuerdos de paz, como la precipitación de reformas profundas sin que existan condiciones mínimas de seguridad y confianza entre los actores y la captura de los procesos de transición por élites o facciones armadas que aprovechan la fragilidad del momento inicial. Blindar la secuencia significa, por tanto, asegurar un orden lógico, escalonado y protegido de retrocesos en la implementación del acuerdo.

4. Antídotos a los pactos de élites, a través de transparencia fiscal y control de rentas, órganos anticorrupción con apoyo externo y con cuotas sociales que permitan la participación de mujeres, minorías y sociedad civil en gabinetes y comisiones, no solo los excombatientes. Cuando se habla de pactos de élites en acuerdos de reparto del poder político, se suele señalar el riesgo de que las negociaciones queden restringidas a líderes armados, dirigentes de partidos dominantes y sectores privilegiados, lo que cristaliza una paz excluyente: los excombatientes transformados en élites gubernamentales, con acceso a rentas y cargos, pero con una débil apertura hacia la ciudadanía. Para contrarrestar esta tendencia, se han planteado antídotos institucionales y sociales que evitan que el reparto se convierta en un mero botín de paz.
5. Reducir el poder de veto. Sustituir vetos étnicos amplios por mecanismos de doble mayoría limitados y con mediación constitucional. Esto evita la parálisis observada en sistemas consociacionales rígidos.
6. Garantías externas reforzadas, como la figura de Grupo de Países Amigos, garantes, etc., con capacidad de arbitraje rápido en caso de conflictos o incumplimiento de los acuerdos. En síntesis, se trata de pasar de un garante simbólico a un ecosistema de garantías externas, con capacidad arbitral vinculante, condicionalidad financiera, respaldo político multinivel y presencia sobre el terreno, que actúe como red de seguridad frente al incumplimiento.

7. Diseño electoral inclusivo y sin etnificar. En lugar de cuotas rígidas basadas en identidades étnicas, religiosas o comunitarias, se recomienda usar mecanismos electorales que fomenten la representación plural y la cooperación entre grupos sin cristalizar divisiones. Esto implica: a) fórmulas de representación proporcional moderadas, es decir, sistemas proporcionales que aseguren representación a minorías y corrientes diversas, pero que al mismo tiempo incentiven la formación de partidos de base amplia y coaliciones; b) umbrales bajos de representación, esto es, mantener barreras legales de entrada al parlamento (porcentaje mínimo de votos para obtener escaños) en niveles reducidos, para evitar la exclusión de minorías políticas y sociales, pero sin caer en una atomización extrema; y c) incentivos al voto cruzado, introduciendo reglas que estimulen a los votantes a apoyar candidatos o listas de diferentes comunidades, con fórmulas como listas abiertas o el voto transferible único, que al redistribuirse las preferencias, los candidatos que logran atraer votos de distintas comunidades tienen más probabilidades de ser elegidos. En conjunto, este diseño favorece inclusión política sin fijar identidades en las instituciones, ya que el acceso al poder no depende de pertenecer a un grupo étnico o religioso predeterminado, sino de la capacidad de generar apoyo plural y crear coaliciones.

En síntesis, los procesos de paz centrados en el poder político deberían concebir el reparto de poder como puente transitorio con metas verificables hacia reglas universales y competitivas; hibridar los ejes ejecutivo, territorial y militar con mínimos exigibles y salvaguardias para evitar capturas y bloqueos; blindar una secuencia de implementación (seguridad, gobierno transicional y elecciones con garantías, y luego reforma constitucional gradual); aplicar antídotos a los pactos de élites mediante transparencia fiscal, control de rentas, órganos anticorrupción con apoyo externo e inclusión efectiva de mujeres, minorías y sociedad civil; reducir vetos reemplazando los étnicos amplios por dobles mayorías limitadas con mediación

constitucional; establecer garantías externas robustas con capacidad arbitral vinculante, condicionalidad y presencia en terreno; y diseñar sistemas electorales inclusivos sin etnificar, combinando proporcionalidad moderada, umbrales bajos no atomizantes e incentivos al voto cruzado para fomentar partidos amplios y coaliciones intercomunitarias.

LA CULTURA DE LA VIOLENCIA Y EL BELICISMO

Las guerras del siglo XXI relacionadas con la conquista del poder político no pueden entenderse solo como luchas por recursos o ideologías. La cultura patriarcal de la violencia ofrece el marco subjetivo y social que legitima la militarización de la política, la figura del caudillo fuerte, la exclusión de la mediación y la reproducción de dinámicas de dominación[34]. En este sentido, el patriarcado no es un factor colateral sino un motor estructural y simbólico del recurso a la guerra. Así pues, las guerras actuales por el poder político, muestran varios rasgos que pueden explicarse desde la cultura patriarcal de la violencia. Uno es la reducción del poder a dominación, es decir, el poder no es entendido como capacidad de gestionar recursos o articular consensos, sino como dominio absoluto sobre otros. Esta concepción deriva de relaciones patriarcales de subordinación. Otra explicación es la exclusión de alternativas no violentas, pues en sociedades patriarcales las voces asociadas a la mediación, el cuidado o la búsqueda de consensos, frecuentemente vinculadas a lo femenino, son marginalizadas. Se deslegitiman prácticas de cuidado como herramientas políticas. Además, la violencia es usada como mecanismo de ascenso político. En contextos frágiles, donde el Estado carece de legitimidad, la violencia se convierte en el principal medio para acceder al poder. La violencia se presenta como el lenguaje natural de la política, porque así lo ha naturalizado la cultura patriarcal. Esto explica que muchas negociaciones fracasen, pues la masculinidad hegemónica ve el compromiso como derrota[35].

La mayoría de los filósofos de la Escuela de Frankfurt coinciden en que la cultura de dominación (ya sea racionalidad instrumental,

industria cultural, autoritarismo psicológico o colonización del mundo de la vida) es clave para entender cómo las sociedades modernas normalizan la violencia y el belicismo. Horkheimer, Adorno, Fromm y Marcuse lo hicieron de forma más directa; Habermas reelaboró esta crítica en términos de comunicación. Para Axel Honneth[36], la cultura de la dominación es aquella que niega reconocimiento a sujetos y colectivos, creando dinámicas de humillación que pueden desembocar en violencia y guerra. Así, conecta el belicismo no tanto con la razón instrumental (Adorno/Horkheimer) ni con la "represión libidinal" (Marcuse), sino con la negación de la dignidad y del estatus moral de las personas y grupos. Habla de patologías del reconocimiento, que son formas de dominación cultural donde grupos enteros son invisibilizados, despreciados o reducidos a objetos. Estas patologías erosionan la solidaridad y normalizan la violencia estructural, de manera que las guerras y conflictos no se explican solo por intereses materiales, sino por la negación del estatus y la dignidad de pueblos o comunidades. El belicismo moderno se alimenta de discursos de desprecio y deshumanización del otro, que hacen posible la violencia sistemática.

Podemos añadir más factores a los ya mencionados, como la crisis de legitimidad democrática, pues en muchos casos, los procesos electorales no han roto la cultura patriarcal de la violencia; al contrario, caudillos armados se presentan como protectores de la nación. Otro aspecto es la fragmentación y el clientelismo, ya que los líderes masculinos controlan milicias y redes clientelares como si fueran "familias ampliadas", reproduciendo la lógica patriarcal de lealtad al jefe. También debe considerarse el uso del cuerpo de las mujeres como botín o arma de guerra, una muestra de que la dominación patriarcal está en el corazón mismo de la lógica bélica. Como comentaré, la globalización mediática también juega un papel, en especial porque las redes sociales potencian imágenes de masculinidad militarizada (uniformes, armas, gestos de virilidad), como símbolos de liderazgo fuerte.

En los años ochenta, el investigador sobre paz Robin Luckham[37] escribió un importante estudio sobre la cultura de las armas, donde

afirmaba que las armas son relaciones de poder materializadas, no objetos neutros. Su producción, circulación y uso están ordenados por élites y estructuras de clase/Estado; por eso las armas expresan y reproducen órdenes políticos concretos. La militarización, por tanto, es un proceso social y cultural, no solo acumulación de *hardware*, y abarca la expansión de valores, jerarquías y prácticas militares a la política, la economía y la vida cotidiana; esa cultura armamentista normaliza la coerción como forma legítima de gobernar. Luckham analiza cómo los artefactos bélicos condensan símbolos (virilidad, honor, soberanía) y prácticas (disciplina, verticalidad), que viajan desde el cuartel al Gobierno y al barrio, alimentando una gramática de obediencia y fuerza. Vale decir que, cuando Luckham escribió este ensayo, en plena guerra fría, el gasto militar mundial era cinco veces inferior al del actual.

La cultura del belicismo no surge solo de decisiones militares o políticas, sino de un ecosistema discursivo donde los opinadores legitiman, los estrategas doctrinan, los comunicadores narran y los medios amplifican[38]. Todos, en mayor o menor medida, participan en una pedagogía social de la violencia, que puede tanto reforzar el círculo bélico como, si se reorienta, abrir espacios hacia una cultura de paz. Los mecanismos de influencia en la cultura de la violencia son los siguientes: normalización (lo bélico se presenta como parte de la vida cotidiana, inevitable y casi natural); estetización (la violencia se hace atractiva mediante imágenes heroicas, música, símbolos patrios o épicas religiosas); deshumanización (los adversarios se convierten en "ratas", "cucarachas" o "enemigos de la patria", borrando la empatía y legitimando su eliminación); polarización emocional (se movilizan miedos, resentimientos y humillaciones colectivas para justificar acciones militares); silenciamiento de voces alternativas, como pacifistas, mediadores o críticos, que son tachados de ingenuos, antipatrióticos o traidores. Así, se genera un clima cultural donde la violencia es pensable, deseable y justificable como vía rápida de resolución de conflictos. La sociedad interioriza un horizonte político reducido, con menos apertura a soluciones institucionales o negociadas, y más aceptación de la imposición por la fuerza. El ciclo

se retroalimenta: cuanto más se narra la violencia, más se cree en su inevitabilidad, lo que legitima el gasto militar y la centralidad de los actores armados[39].

De lo señalado anteriormente, podemos preguntarnos cómo la cultura de las armas, la obediencia a los mandos militares y otros elementos de la idiosincrasia de los grupos armados contemporáneos, condicionan sus objetivos políticos y explican por qué rara vez su meta es una democracia plena, sino más bien la obtención del poder político o el reparto del poder, como hemos visto en el apartado anterior. Hay varias explicaciones:

- La centralidad de la violencia como medio legítimo. En muchos grupos armados, las armas no son solo instrumentos tácticos, sino también símbolos de poder, dignidad y pertenencia. Esta cultura fomenta la idea de que el poder se consigue y se conserva por la fuerza, más que mediante instituciones democráticas.
- Prioridad de la seguridad sobre la participación. La lógica armada pone en primer plano el control territorial, la disciplina y la supervivencia frente al enemigo. Esto desplaza a un segundo plano valores como pluralismo, deliberación o rendición de cuentas.
- Dificultad para desarmar. El monopolio de las armas es la base del poder del grupo. Cederlo supone una pérdida de estatus y capacidad de presión, lo que explica por qué, incluso en procesos de paz, se inclinan más por fórmulas de poder compartido que por desmilitarización plena.
- Estructura de mando rígida. Los grupos armados reproducen la lógica castrense de obediencia absoluta a los superiores. Esto favorece liderazgos fuertes y personalistas, y dificulta el aprendizaje de prácticas deliberativas y horizontales.
- Culto al líder. La figura del líder rebelde suele ser carismática y centralizada, como comentaré más adelante. Su autoridad se legitima por el control de las armas y las victorias militares, no por mecanismos de representación democrática.

- Reproducción en la política. Cuando estos líderes acceden al poder o a cargos institucionales, trasladan esa misma verticalidad a la esfera política, privilegiando el control y la lealtad antes que la construcción de instituciones inclusivas.
- Identidad basada en la exclusión. Muchos grupos armados se articulan en torno a agravios étnicos, religiosos o regionales. La demanda no es tanto democratizar al conjunto del Estado, sino asegurar la representación o el control de "su" comunidad.
- Pragmatismo político. Los grupos armados, sobre todo tras años de guerra, desarrollan estrategias pragmáticas de supervivencia. De ahí que las exigencias centrales sean inclusión política, cuotas de poder, ministerios, gobernaciones o recursos económicos, en lugar de transformaciones democráticas estructurales.
- Desconfianza hacia el Estado. La experiencia previa con regímenes autoritarios o corruptos refuerza la visión de que la mejor garantía es controlar directamente una parte del poder, no necesariamente democratizarlo para todos.
- Economía de guerra. Muchos grupos se financian a través de recursos extractivos, contrabando o redes clientelares. Esto genera incentivos para negociar espacios de poder que permitan mantener esas redes, en vez de impulsar reformas que podrían debilitarlas.
- Mediadores internacionales. En numerosos procesos de paz, los actores internacionales promueven fórmulas de reparto de poder (*power-sharing*) como vía pragmática para detener la guerra. Esto legitima que los grupos armados conciban la paz como acceso a cuotas, no como democratización.

La cultura de las armas, la obediencia a los mandos militares y las dinámicas de identidad, exclusión y pragmatismo propias de los grupos armados del siglo XXI, hacen que su horizonte político rara vez sea la democracia plena. En cambio, la democracia les resulta difusa, lenta y difícil de controlar. El poder político o el reparto del poder es concreto, inmediato y garantiza beneficios (estatus, recursos, protección). Su

cultura interna reproduce verticalidad y clientelismo, lo opuesto a la deliberación y participación ciudadana que exige la democracia[40]. La cultura de las armas y de la obediencia jerárquica genera un ecosistema político interno que choca frontalmente con los valores de la democracia. En estos grupos, la lealtad se construye sobre la disciplina militar, la subordinación al mando y la recompensa inmediata de la participación en el botín de guerra o en los recursos controlados. Se refuerza así una lógica vertical, donde las decisiones se concentran en un liderazgo fuerte, generalmente carismático o autoritario, y donde las bases no deliberan, sino que acatan. Además, las dinámicas de identidad (étnicas, religiosas o regionales), actúan como mecanismos de inclusión y exclusión que limitan la universalidad de la ciudadanía democrática. El otro es visto como adversario, competidor o amenaza, lo que refuerza la cohesión interna, pero dificulta imaginar una comunidad política plural, en la que todos los grupos tengan igual voz y derechos. La democracia, en cambio, exige justamente abrir espacios de deliberación compartida, aceptar la diversidad y asumir la incertidumbre de los procesos electorales, donde los resultados no son controlables por un actor único. Por eso, para los grupos armados, la democracia aparece como un horizonte abstracto, difuso y lento, que no se traduce en beneficios tangibles ni en garantías inmediatas de poder. En cambio, el acceso directo al poder político, o al menos a cuotas de poder mediante el reparto pactado, se percibe como mucho más concreto y ventajoso, ya que otorga estatus social, acceso a recursos y capacidad de proteger a la propia clientela. El reparto del poder es funcional a las dinámicas de patronazgo que ya conocen y practican.

Ese patrón convierte la cultura de la violencia en un reproductor de centralismo político, pues los liderazgos tienden a concentrar las decisiones, a desconfiar de la autonomía de sus bases y a cooptar, en vez de integrar de forma abierta a potenciales rivales o aliados. El resultado es un esquema que en el terreno político se asemeja más a los regímenes autoritarios o híbridos, donde hay instituciones formales pero el verdadero poder fluye por canales de lealtades personales, patronazgo y obediencia. En contextos de transición posconflicto, esta

herencia cultural supone una barrera estructural hacia la democracia plena. Aun cuando los grupos armados se transforman en partidos o actores políticos, arrastran esa mentalidad vertical y clientelar, lo que favorece prácticas de control interno rígido, exclusión de voces disidentes, uso instrumental de las instituciones y resistencia a procesos deliberativos más horizontales. La democracia, que exige pluralismo, negociación y controles recíprocos, aparece para estos actores como una lógica ajena, más lenta e incierta, frente a la inmediatez del poder centralizado que les resulta familiar[41].

Si volvemos la mirada a lo antes explicado sobre el tipo de violencias y de armamentos más usados en estas guerras, veremos que existe una combinación entre formas de violencia predominantemente dirigidas contra civiles y el uso extendido de armamentos relativamente accesibles (armas ligeras, artillería de corto alcance, morteros, aviación de baja o media intensidad, drones), lo que refleja no solo una estrategia militar, sino sobre todo una cultura política y social profundamente militarizada y belicista. En muchos conflictos contemporáneos, la guerra no es vista como un medio excepcional para resolver disputas políticas, sino como la principal vía para adquirir, conservar o demostrar poder. Líderes de grupos armados y gobiernos autoritarios internalizan la idea de que la fuerza, y no la negociación ni la legitimidad democrática, es el fundamento último de la autoridad. Las masacres y bombardeos urbanos no son accidentes, sino actos deliberados de demostración de fuerza y terror, pues buscan quebrar la voluntad colectiva de comunidades percibidas como hostiles, eliminar bases sociales de apoyo y enviar un mensaje ejemplarizante a otras regiones. Esta lógica belicista normaliza la violencia como lenguaje político, donde la capacidad de infligir daño sustituye a la persuasión, la representación o la institucionalidad. La persistencia y sistematicidad de ejecuciones sumarias, violaciones sexuales, saqueos y destrucción cultural indican una cultura de violencia donde el enemigo no es concebido como un adversario político legítimo, sino como un otro a aniquilar, someter o despojar. En este contexto, la violencia sexual es usada no solo como arma de guerra, sino como un instrumento de humillación colectiva y destrucción de tejido social,

con claros componentes de dominación patriarcal.

En definitiva, la violencia en las guerras contemporáneas por el poder político no es solo un instrumento, sino también una forma de pensamiento político: el belicismo. Esta mentalidad se traduce en estrategias que priorizan la intimidación y la destrucción sobre la negociación, y que conciben a las poblaciones civiles como objetos a controlar en lugar de sujetos políticos. Romper este patrón exige no solo acuerdos entre élites armadas, sino una transformación profunda de las culturas políticas y de seguridad, incluyendo desmilitarización, justicia, educación cívica y creación de mecanismos reales de participación y protección civil.

LA RECAÍDA EN LOS CONFLICTOS POLÍTICOS: CUANDO NO SE APRENDEN LAS LECCIONES DEL PASADO

Como se verá, en las 31 guerras aquí analizadas, en un 78% de los casos los países afectados ya tuvieron previamente una guerra, algunas de ellas bastantes antiguas[42], lo que los sitúa en un contexto de repetición y recaída, que algunos analistas han denominado la trampa del conflicto[43], aunque se referían a conflictos armados del siglo pasado. La recurrencia de la guerra responde a una combinación de factores estructurales, institucionales, culturales y psicológicos que hacen que un país con antecedentes de violencia tenga una mayor probabilidad de repetirla. Hay varias explicaciones para entender tanta recurrencia:

- Falta de liderazgo para una buena gobernanza. La reconstrucción exitosa de la gobernanza y la administración pública después de un conflicto requiere un liderazgo comprometido. Es el liderazgo el que impulsará y apoyará el desarrollo de la capacidad humana e institucional para un gobierno eficaz y la prestación de servicios públicos, el que impulsará y motivará a la población a participar en la reconstrucción del país, a movilizar recursos y apoyos internos y externos, y el que aplicará y se adherirá a una

estricta transparencia y rendición de cuentas para generar confianza en el gobierno por parte de todos los socios, incluida la propia población[44].

- La debilidad institucional heredada. Los Estados que han atravesado guerras anteriores, suelen salir con instituciones destruidas o debilitadas, con parlamentos sin legitimidad, sistemas judiciales corruptos, ejércitos fragmentados o policías poco profesionales. Esto genera una fragilidad estatal que impide canalizar los conflictos de forma pacífica. La falta de confianza en las instituciones, hace que grupos opositores recurran nuevamente a la violencia. Por ejemplo, tras la guerra civil de los noventa, Somalia nunca reconstruyó un Estado central fuerte y la guerra continuó en forma de señores de la guerra, Al-Shabaab, etc[45].
- Falta de inclusión en la nueva política. Las demandas de relaciones inclusivas entre el Estado y la sociedad son fundamentales en las agendas de reforma promovidas por los insurgentes armados. La transición política y la restauración del monopolio estatal legítimo sobre el uso de la fuerza son procesos interdependientes y su eficacia se basa en los principios complementarios de inclusividad, participación e integralidad[46].
- Persistencia de agravios no resueltos. Muchas guerras terminan con acuerdos incompletos, amnistías o repartos de poder superficiales, pero sin resolver las causas profundas, como exclusión política, desigualdades territoriales, marginación étnica o religiosa. Estos agravios quedan latentes y resurgen en cuanto se debilita el equilibrio político. Sudán, por ejemplo, firmó múltiples acuerdos de paz, pero la exclusión y el clientelismo persistieron, derivando en las guerras de Darfur y en el conflicto entre el ejército y las RSF.
- Cicatrices sociales y memorias de violencia. Las sociedades que han vivido guerras anteriores arrastran traumas colectivos, resentimientos y divisiones comunitarias. La

memoria de masacres, desplazamientos o discriminaciones se transmite a las nuevas generaciones, reforzando identidades antagonistas. Esto alimenta discursos de revancha y aumenta la facilidad de movilización de las élites beligerantes. En los Balcanes, la memoria de las guerras de los noventa aún se utiliza en el discurso político.

- Economías de guerra y redes armadas previas. Una guerra previa deja tras de sí estructuras armadas, líderes guerrilleros, excombatientes y economías ilícitas (contrabando, diamantes, drogas, oro, secuestros). Estos actores tienen incentivos para reavivar el conflicto cuando sienten amenazados sus intereses. Así, la guerra se convierte en un "modo de vida" para quienes dependen de ella. En RD Congo, por ejemplo, las redes armadas de las guerras de los noventa siguieron activas en el siglo XXI, alimentadas por los recursos minerales.
- La debilidad de los acuerdos de paz, la falta de un proceso de desmovilización, desarme y reintegración (DDR) efectivo y las dificultades de entrar en política de los excombatientes. Muchos procesos de paz no logran un DDR completo. Hay excombatientes que quedan mal reintegrados, sin empleo ni reconocimiento y pueden volver a las armas o ser reclutados por nuevas facciones. Un ejemplo puede ser el de Mali, donde exrebeldes tuareg que se habían desmovilizado en acuerdos anteriores, retomaron la lucha en 2012[47], o las FARC de Colombia, después del Acuerdo de Paz en 2016.
- Legado de regímenes autoritarios y personalistas. Países con guerras anteriores suelen estar dominados por élites centralistas, autoritarias o clientelistas, que mantienen los mismos patrones de exclusión. Estos regímenes no generan sistemas democráticos inclusivos, sino que reproducen las condiciones de violencia. Siria, por ejemplo, ya había experimentado represión violenta bajo Háfez al-Asad; el régimen de su hijo Bashar repitió la misma lógica en 2011 y en 2025, el nuevo régimen se encontró en una situación

similar.

- La normalización de la violencia. Sociedades con guerras pasadas, tienden a bajar el umbral moral contra el uso de la fuerza. La violencia se convierte en una herramienta aceptada para alcanzar fines políticos porque ya se probó y se percibió como eficaz. Esto reduce las barreras culturales para iniciar un nuevo levantamiento armado. En Afganistán, tras décadas de guerra, los talibanes pudieron reclutar con facilidad porque la guerra era vista como un escenario "normal". Los periodos de conflictos violentos prolongados han dado lugar a una cultura de la violencia que crea un entorno socialmente permisivo dentro del cual la violencia puede continuar, incluso después de que se hayan firmado los acuerdos de paz y el conflicto político violento haya terminado[48].
- Geopolítica y patrones regionales. Las guerras anteriores dejan fronteras inestables, refugiados y armas en circulación que aumentan la probabilidad de nuevos conflictos en la misma zona. Además, vecinos que intervinieron antes patrocinando facciones, tienden a repetir ese patrón. El Cuerno de África ha tenido olas de conflictos porque Eritrea, Etiopía, Somalia y Sudán han intervenido mutuamente en sus guerras.
- Factor psicológico-político de los líderes. Líderes con memoria de victorias o derrotas previas, tienden a creer que la guerra es un medio viable para conseguir el poder político. Los "emprendedores de violencia", saben movilizar agravios antiguos y redes clientelares ya probadas.

En resumen, la recurrencia de los conflictos en el siglo XXI en países con antecedentes de guerra responde a un círculo vicioso: instituciones débiles, falta de liderazgo para una buena gobernanza, agravios no resueltos, memorias de violencia, redes armadas que persisten, liderazgos autoritarios y ausencia de reconciliación real. Cada guerra pasada deja "residuos" sociales, políticos y económicos que facilitan la aparición de una nueva. Así, el conflicto no es un

hecho aislado, sino una trayectoria histórica acumulativa.

RADIOGRAFÍA DEL PODER POLÍTICO EN CONTEXTOS BÉLICOS

No sé si la mayoría de los gobernantes que han tenido una guerra en este siglo, todos autócratas al comenzar el conflicto armado, habrán leído a Maquiavelo, Hobbes o Max Weber, pero sí han tenido claro que la violencia es potestad y monopolio del Estado y la han ejercido de sobra[49]. Seguramente son pocos los líderes de los grupos armados que hayan hecho estas lecturas, aunque me consta que algunos son buenos intelectuales y han tenido formación universitaria, pero es evidente que no participan de este principio, pues por algo se han alzado en armas contra el Estado, y no precisamente para instaurar una democracia plena, sino generalmente para tener o compartir el poder político. Hablaré de ello con datos concretos.

Como he señalado en la introducción, el 87% de las guerras por el poder político han tenido igualmente un factor etnopolítico, es decir, que tienen comunidades o grupos étnicos con demandas políticas y grupos armados con programas políticos[50]. Un tema polémico es el de si la creación de partidos con base étnica favorece el estallido de conflictos violentos. Varios académicos sostienen que los partidos políticos étnicos tienden a polarizar el espacio político, fomentando la competencia identitaria en lugar del debate programático o ideológico. Entre los argumentos clave de esta posición, figura la etnificación de la política, esto es que, al organizarse sobre una base étnica, los partidos contribuyen a reforzar divisiones sociales preexistentes y a fijar las identidades como polos de enfrentamiento político. La competencia electoral se convierte en una lucha por el acceso a recursos percibidos como exclusivos de un grupo. Otro aspecto es el de la exclusión y el sentimiento de amenaza. Si un partido étnico gana el poder, otros grupos pueden sentir que quedarán permanentemente excluidos, lo

que puede llevar a una securitización de la política y eventualmente a una escalada violenta. Un tercer argumento es el de la inestabilidad institucional. Los sistemas multipartidistas con partidos étnicos pueden generar gobiernos inestables o bloqueados, lo que reduce la capacidad del Estado para mediar conflictos. Casos ilustrativos de todo esto pueden ser los de Ruanda y Burundi, donde la política étnica institucionalizada favoreció la polarización entre hutus y tutsis, o en Yugoslavia, donde los partidos nacionalistas de base étnica fueron protagonistas del colapso del Estado y de las guerras civiles.

El estudio de Lars-Erik Cederman, Kristian S. Gleditsch y Halvard Buhaug[51] es uno de los más recurrentes en este tipo de análisis, que reabrió el debate de la codicia vs. el agravio, demostrando que los agravios colectivos, las desigualdades horizontales étnico-políticas y económicas entre grupos, son un motor robusto del inicio de guerras civiles. Cuando grupos etnopolíticos son excluidos del poder estatal o reciben menos de lo que consideran un trato justo en términos de representación, recursos y estatus, aumenta sustancialmente el riesgo de rebelión. Estas desigualdades operan a nivel de grupo, no solo como desigualdad vertical entre individuos. Para estos investigadores, la exclusión del poder ejecutivo es uno de los predictores más fuertes del inicio de conflictos y queda reforzada si existen diferencias territoriales persistentes. En cambio, las autonomías y arreglos de poder disminuyen el riesgo cuando otorgan voz y recursos reales y se sostienen en el tiempo, sumando credibilidad con garantías. Estos autores no niegan la importancia de las oportunidades (recursos, geografía, capacidad estatal), pero muestran que, medidos correctamente, los agravios colectivos explican quién se rebela y dónde.

Otras corrientes, por el contrario, argumentan que los partidos étnicos pueden canalizar demandas identitarias legítimas y permitir una representación pacífica dentro de un marco democrático. En contextos con grupos étnicos históricamente excluidos, concluyen, la existencia de partidos étnicos permite su inclusión política y disminuye el incentivo para recurrir a la violencia. Esta corriente sostiene que los partidos étnicos permiten a grupos que comparten una

identidad étnica común (lengua, religión, costumbres o historia) expresar sus demandas dentro de las instituciones formales del Estado, en lugar de recurrir a vías extrainstitucionales como la violencia[52]. Autores como Philip Roessler[53] y Leonardo Arriola[54] muestran que cuando los sistemas políticos permiten la existencia de partidos étnicos con acceso al poder, los grupos tienen menos incentivos para movilizarse violentamente, ya que tienen mecanismos institucionales para influir en decisiones políticas, presupuestos y nombramientos. En el caso de África, señalan que la inclusión partidaria de grupos étnicos en coaliciones de gobierno ha servido como mecanismo para evitar guerras civiles o secesiones al generar beneficios tangibles para las élites locales. Cuando los partidos étnicos se desarrollan dentro de sistemas democráticos y se someten a la competencia electoral, se transforman en actores que internalizan las reglas del juego democrático. Este tipo de análisis afirman que esto genera estabilidad política, ya que las élites étnicas pueden acceder a recursos y visibilidad sin necesidad de recurrir a estrategias armadas[55].

El geógrafo Roland Breton[56] ofrece una tipología comparativa de los conflictos y tensiones etnopolíticas según distintos contextos: 1) etnopolítica mayoritaria, cuando una mayoría étnica domina al resto (ej. Serbia respecto a Bosnia); 2) etnopolítica minoritaria, cuando una minoría moviliza demandas (ej. kurdos, tamiles); 3) etnopolítica de secesión, como los movimientos independentistas; 4) etnopolítica de control del Estado, cuando élites étnicas dominantes excluyen a otros grupos (ej. ruandeses tutsis o hutus en diferentes etapas); y 5) etnopolítica como resistencia: identidades étnicas como forma de oposición al colonialismo o al Estado-nación impuesto. El autor analiza el papel de las lenguas, religiones y migraciones en estos procesos, observando cómo los factores simbólicos y territoriales se entrelazan con las dinámicas de poder. Breton defiende una visión geopolítica crítica, denunciando que muchas veces los Estados niegan la realidad de las identidades étnicas o las tratan como amenazas, en lugar de integrar su diversidad. La etnopolítica, en este sentido, no es un fenómeno patológico, sino una forma de reclamo legítimo en sociedades multiculturales mal gestionadas. Breton también se sitúa

contra las tesis que criminalizan la etnicidad, recordando que muchos movimientos etnopolíticos han sido canales de emancipación frente a dictaduras, colonialismo o *apartheid*.

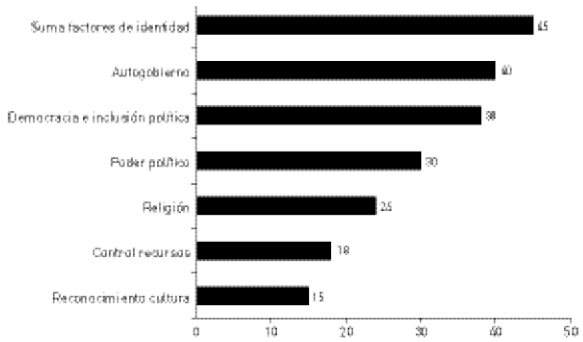
Estas reflexiones de Breton, nos sirven para ver que el entrelazamiento entre símbolos, territorio y poder se convierte en el núcleo mismo del conflicto etnopolítico armado. No se trata solo de una guerra por recursos o poder, sino por reconocimiento, pertenencia y control del destino colectivo de una comunidad. En este tipo de conflictos, el poder no se mide solo por la fuerza militar, sino por la capacidad de movilizar identidades, narrativas históricas y vínculos con la tierra. Los símbolos étnicos y culturales (lengua, religión, vestimenta, héroes nacionales, lugares sagrados, relatos históricos), cumplen funciones clave. Por una parte, constituyen la base de la identidad colectiva, permitiendo diferenciar al "nosotros" del "ellos". La etnicidad no es solo una adscripción cultural, sino también una frontera política que justifica la exclusión o la reclamación de autonomía. Por otra parte, activan memorias de agravios históricos, como genocidios, desplazamientos forzados, discriminaciones o dominaciones coloniales. Estos recuerdos son reactivados y reinterpretados en clave política, para reforzar la cohesión interna y justificar la lucha armada. Además, confieren legitimidad moral al proyecto político del grupo, especialmente cuando se alega que su supervivencia como cultura está amenazada. La movilización simbólica es, por tanto, una herramienta de poder. Quien controla el relato, controla la causa[57].

Para el sociólogo británico Anthony D. Smith[58], los conflictos etnopolíticos violentos son expresiones contemporáneas de antiguas identidades étnicas que se sienten amenazadas. La violencia surge no solo por intereses inmediatos, sino por profundas lealtades históricas, narrativas de memoria colectiva y vínculos simbólicos con territorios. La clave, para este autor, está en el profundo arraigo histórico de las identidades colectivas. Este enfoque ha sido bastante cuestionado, pues puede reificar (cosificar) las categorías étnicas, dificultando entender cómo las identidades se construyen social y políticamente en contextos específicos. El sociólogo estadounidense Rogers Brubaker,

por ejemplo, lo acusa de tratar a los grupos étnicos como actores coherentes y estables, cuando en realidad son categorías fluctuantes y situacionales. Aunque Smith analiza los aspectos simbólicos e identitarios, se le ha reprochado no atender suficientemente a las causas estructurales de los conflictos etnopolíticos violentos, como la distribución desigual del poder, la discriminación institucional, el control de recursos y las dinámicas estatales de exclusión. Su teoría no aborda suficientemente el papel de las élites políticas, los intereses económicos o las decisiones estatales en el desencadenamiento de conflictos. Por el contrario, otros autores críticos de Smith, como Donald Horowitz o Ted Gurr, aportan marcos más estructurales y centrados en la movilización política y la frustración relativa. Algunas de sus tesis se derivan del estudio de procesos históricos europeos y, por tanto, pueden no ser aplicables o relevantes en contextos africanos, asiáticos o indígenas, donde las categorías étnicas y nacionales funcionan de forma diferente.

En un libro reciente[59], me preguntaba cuáles habían sido las motivaciones de los 105 grupos armados que habían intervenido en las 43 guerras etnopolíticas que se habían producido entre 1990 y 2025, por lo que las temporalidades son diferentes las de este libro. En el 45% de los casos había sido la suma de los tres factores clave de la identidad (cultura, religión y lengua), seguido por las demandas de autogobierno, en el 40% de los casos, de los que el 24% han sido demandas de autonomía y el 12% de independencia. En tercer lugar, con el 38% de los casos, figuraban las demandas de democracia e inclusión política, seguidas de las vinculadas con alcanzar el poder político (30%), normalmente a escala nacional, la religión (24%), el control de los recursos naturales (18%) y el reconocimiento de la cultura (15%). Con porcentajes menores figuraban las demandas de justicia y rendición de cuentas, las reformas militares, el fin de la marginación económica y lingüística, las disputas territoriales y la implementación participación en procesos de paz.

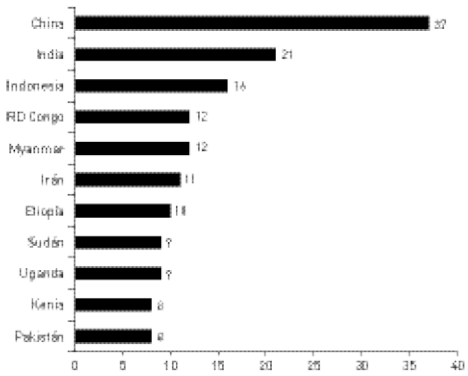
GRÁFICO 12
PRINCIPALES DEMANDAS DE LOS 105 GRUPOS ARMADOS EN LAS 43 GUERRAS ETNOPOLÍTICAS DE 1990 A 2025, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

Las reivindicaciones vinculadas con la identidad —en especial las basadas en religión, cultura y lengua— constituyen el núcleo de muchas demandas de grupos etnopolíticos que se ven envueltos en conflictos armados por varias razones. Los elementos como la lengua, la religión o la cultura son considerados por muchos grupos como factores constitutivos de su existencia colectiva. La defensa de estos elementos se convierte así en una cuestión de supervivencia simbólica. Muchos conflictos surgen en contextos donde el Estado ha aplicado políticas de monolingüismo oficial (negando el uso de lenguas minoritarias), prohibiciones o restricciones a la práctica religiosa, o represión de prácticas culturales propias. Estas acciones son percibidas como una forma de eliminación identitaria. Tal percepción exacerba el sentimiento de agravio y fomenta una respuesta radicalizada. Los Estados muchas veces no reconocen oficialmente la existencia de minorías étnicas o lingüísticas, lo cual bloquea el acceso a políticas de protección. Esto refuerza la percepción de injusticia estructural y puede llevar a demandas más intensas, incluso separatistas, como una forma de garantizar la autodeterminación identitaria.

GRÁFICO 13
NÚMERO DE GRUPOS ÉTNICOS POLÍTICAMENTE RELEVANTES



Nota: El EPR define como "grupo étnico relevante" a los que tienen reclamaciones o representación política a nivel nacional.
Fuente: EPR Atlas (ETH Zurich).

En el gráfico anterior, se puede observar como en los once países con más número de grupos étnicos políticamente relevantes, a lo largo de este siglo, siete han tenido guerras (India, Indonesia, Myanmar, RD Congo, Etiopía, Uganda y Sudán) y los otros cuatro (China, Irán, Pakistán y Kenia), conflictos armados de mediana intensidad. La coincidencia entre la altísima diversidad étnica políticamente relevante y la ocurrencia de guerras o conflictos armados en estos diez países no es casual, pues revela que la gestión de la diversidad étnica es un factor estructural central en la paz y la estabilidad, muestra que la politización excluyente de la etnicidad, combinada con Estados débiles o autoritarios, genera un terreno fértil para rebeliones, guerras civiles o conflictos persistentes, y subraya que sin arreglos institucionales inclusivos (federalismos robustos, representación proporcional efectiva, autonomías reconocidas, pactos interétnicos duraderos), la alta heterogeneidad tiende a transformarse en conflicto armado.

¿Por qué en los conflictos etnopolíticos, la búsqueda del poder político está tan cerca de las demandas de democracia e inclusión política, que tienen un peso algo mayor? ¿Qué peso tiene la ambición por el poder? Las respuestas quizás estén, por una parte, en la identidad colectiva como base de movilización, esto es, que los grupos étnicos tienden a movilizarse en torno a agravios compartidos (discriminación, exclusión, desigualdad). Muchos líderes políticos utilizan la identidad étnica, no por una convicción esencialista, sino como una herramienta estratégica para movilizar apoyos y generar

lealtades exclusivas. En contextos de Estados débiles, donde no existe un sentido compartido de ciudadanía o instituciones neutrales, los políticos tienden a recurrir a lealtades primarias, como la étnica, para consolidar clientelas. Esto ocurre especialmente en Estados poscoloniales donde la construcción nacional ha sido incompleta o excluyente. En contextos de conflicto armado, la radicalización puede brindar ventajas electorales o de liderazgo. Liderazgos moderados pierden apoyo ante la percepción de debilidad, mientras que los más agresivos se consolidan como portavoces legítimos del "dolor del grupo"[60]. Así, la ambición de poder se alimenta de la propia escalada bélica. No es que los conflictos sean inevitablemente producto de la identidad, sino que líderes ambiciosos aprovechan estas divisiones para escalar su poder. En este sentido, el conflicto etnopolítico es muchas veces menos expresión de tensiones sociales auténticas que el resultado de estrategias políticas calculadas.

Lo que buscan estos liderazgos con mayor frecuencia es autonomía, reconocimiento o control territorial, no necesariamente reformas democratizadoras del sistema nacional. También influye la desconfianza hacia la mayoría étnica. En regímenes democráticos donde una mayoría étnica domina, los grupos minoritarios pueden ver la democracia como una amenaza (la dictadura de la mayoría). Por ello, prefieren formas de autogobierno, incluso en contextos no democráticos. Otra explicación residiría en el poder como medio de supervivencia, ya que, en muchos contextos, el acceso al poder estatal significa acceso a recursos, protección y representación. El conflicto es, entonces, una lucha por inclusión o control del aparato estatal. En sociedades caracterizadas por grupos identitarios con una fuerte concentración territorial que se sienten políticamente excluidos, la devolución se utiliza para atender las reivindicaciones locales, modificando el equilibrio de poder entre el centro nacional y las regiones subnacionales. Así, en contextos previamente marcados por conflictos comunales, la introducción de la descentralización subraya la necesidad de evaluar los mecanismos locales para regular dichos conflictos. Un posible mecanismo para regularlos es la distribución del poder político local[61].

Cambio de registro y, aunque parezca extraño, rescato a Foucault[62] para ver si su concepto de "microfísica del poder" puede sernos útil para analizar el comportamiento de los grupos armados ante la búsqueda del poder político, así como la importancia de los liderazgos que explicaré en el siguiente capítulo. ¿Qué entiende Foucault por microfísica del poder? Básicamente, cinco cosas: capilaridad (el poder no reside solo arriba; circula en redes finas, cotidianas, locales), productividad (no solo reprime; produce saberes, normas, identidades, verdades y sujetos), relacionalidad (el poder existe en las relaciones, no como cosa poseída); inmanencia (no se explica por una causa soberana única; emerge de múltiples prácticas y dispositivos (escuelas, cuarteles, hospitales, prisiones, rituales, archivos, medios), y poder/saber (todo régimen de poder se ancla en un régimen de verdad, qué cuenta como "evidencia", "autoridad", "experiencia"). De los conceptos más usados por Foucault, escojo los siguientes: dispositivo (ensamblaje de prácticas discursivas, como narrativas o eslóganes, y no discursivas, como los uniformes o rituales, que orientan conductas), disciplina (técnicas de docilidad-utilidad del cuerpo, como el adiestramiento, las sanciones o la vigilancia), biopoder/tanatopolítica (gestión de la vida y la muerte de las poblaciones, gubernamentalidad (las artes de conducir conductas), subjetivación (cómo los individuos llegan a reconocerse como ciertos tipos de sujetos, por ejemplo como "combatiente", "protector", "mártir" o "pueblo auténtico"), parresia (la "franqueza" veraz, cuando el líder se presenta como quien "dice la verdad" frente a los "corruptos"), y régimen de verdad (red de instituciones, expertos, testigos y pruebas que validan lo que "es" la realidad).

Según Foucault, la legitimidad no preexiste, sino que se fabrica mediante dispositivos que articulan poder/saber. Para los actores armados, esto suele tomar la forma de: plantillas narrativas recurrentes (gramáticas de legitimación), protección a los "nuestros", autenticidad, reparación ("venimos a corregir humillaciones históricas"), eficacia frente a la inactividad del Estado, sacrificio (tanatopolítica y culto al mártir) y orden moral (códigos de conducta, modestia, disciplina, prohibiciones). También de prácticas no discursivas que anclan la

palabra, como las coreografías y rituales, escenografía, infraestructuras de verdad (radios comunitarias, Telegram/WhatsApp, etc.) y tecnologías de vigilancia (*checkpoints*, registros, informantes). En cuanto a la oratoria, el personalismo y el carisma, Foucault no "sustancializa" el carisma, sino que lo ve como efecto de una red de prácticas que producen credibilidad. En otras palabras, la voz del líder funciona porque está sostenida por rituales, cuerpos, símbolos, archivos, micrófonos y algoritmos. De esta manera, la buena oratoria es resultado de la suma de la tecnología del yo y el régimen de verdad. El líder performa franqueza, austeridad, valentía, se muestra disciplinado y ejerce de disciplinador. Concentra la dispersión capilar en una figura "legible" que simplifica la complejidad del dispositivo (un punto nodal de poder/saber) y usa estrategias retóricas bastante típicas: antítesis (pueblo/élites), deíxis (este lugar, esta sangre), enumeración de agravios, testimonios "desde abajo", cifras redondas memorables, metáforas corporales (cicatriz, corazón), promesas verificables a corto plazo (pan/seguridad/justicia rápida), etc.

Para nuestro objetivo de examinar las guerras por el poder político, ¿para qué puede servirnos el análisis de Foucault sobre el poder? Hay seis pasos que nos serán de utilidad: recolecta corpus multimodal (texto, audio, video, iconografía), codifica con código inicial (plantillas narrativas + dispositivos + régimen de verdad), mapea el dispositivo (líderes, portavoces, medios, rituales, instituciones paralelas), contrasta reclamos con hechos medibles (servicios prestados, seguridad, justicia paralela), sigue las correcciones (cuándo rectifican y quién puede corregir) que es clave respecto al "régimen de verdad", y evalúa los efectos, como cambios de adhesión, disciplina interna, reclutamiento o tolerancia civil.

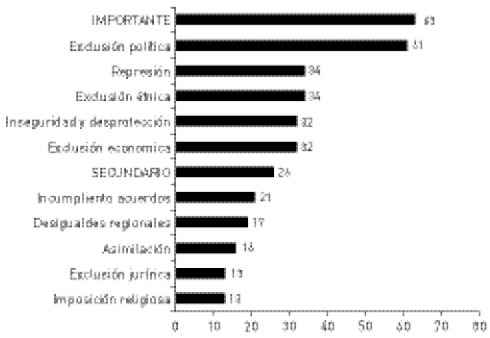
Un apunte final, prestado del filósofo Josep Ramoneda[63]: el poder es una capacidad desde la cual se ejerce y es también relación, pues está inscrito en las maneras de relacionarse de las personas y es un componente de la acción. De la misma forma, el poder es una relación transitiva, resultado de la diferencia de la capacidad (potencia) entre los dos polos de cualquier relación social. Esta conceptualización del poder como capacidad + relación + acción + diferencia de potencias

permite comprender los conflictos armados contemporáneos no solo como guerras por territorios, sino como procesos relacionales de acumulación, redistribución y disputa de capacidades políticas en torno al control del poder estatal o regional. Los grupos armados y los Estados no solo se enfrentan por el control de territorios, sino por ampliar o consolidar su capacidad de acción, es decir, la potencia que les permite influir en la sociedad y en el sistema político. El poder se convierte en una relación que se negocia y disputa en cada interacción, sea en el campo de batalla, en las negociaciones, en la administración de zonas bajo control armado o en la gestión de alianzas internacionales. El poder no es un trasfondo, sino que se ejerce en el acto mismo de hacer política, de tomar decisiones o de usar la violencia. Cada emboscada, cada discurso, cada concesión en una mesa de diálogo es un ejercicio de poder, en tanto que busca afectar la conducta del otro. Esto conecta con la idea de que el poder es inseparable de la acción colectiva: sin capacidad de movilizar voluntades (combatientes, simpatizantes, población civil) ninguna fuerza política logra sostenerse[64].

LOS AGRAVIOS COMO FACTOR PROMOTOR DE DEMANDAS POLÍTICAS

Como he ido comentando, en la base de las demandas y de los factores que desencadenan un conflicto armado, hay una serie de agravios, ofensas, ultrajes y humillaciones de las poblaciones que se rebelan. Según mis cálculos, en el 63% de los conflictos armados analizados los agravios han sido muy importantes, en el 26% secundarios, y solo en el 11% insignificantes. Un análisis más detallado de este tipo de agravios nos puede ayudar a comprender la vinculación de una cosa con la otra, los agravios con las demandas finales.

GRÁFICO 14
TIPOS DE AGRAVIOS MÁS FRECUENTES, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

De una forma muy significativa, el agravio más recurrente es el de la exclusión política, lo cual explica que las demandas de los grupos armados sean precisamente las de un autogobierno regional, el reparto del poder político nacional, la democracia y derrocar al Gobierno de turno. En segundo lugar, figura el agravio vinculado con la exclusión étnica que está vinculado a lo anterior en muchas ocasiones y que explica las demandas de inclusión y de respeto a la identidad de las comunidades que se rebelan. Al mismo nivel figura la represión, propia de las autocracias predominantes en los Gobiernos que aquí hemos observado que existen al iniciarse el conflicto armado. La exclusión económica y las desigualdades regionales también son factores de agravios, así como la inseguridad y la desprotección, propia de Estados frágiles y represivos. Estos datos encajan bastante con lo que muestran los datos y la literatura comparada más sólida sobre guerras civiles del siglo XXI, al menos en cinco aspectos:

1. La exclusión política/étnica y los agravios movilizables. La evidencia a nivel de grupos y países indica que cuando comunidades quedan excluidas del poder, o están poco representadas, aumenta de forma marcada el riesgo de rebelión. El programa Ethnic Power Relations[65] y estudios asociados, encuentran que los Estados que excluyen grandes porciones de la población en base étnica, son especialmente propensos a insurgencias; además, la segmentación competitiva del centro, también eleva el riesgo de conflictos intra-élites.
2. Desigualdades horizontales (entre grupos), como combustible

para la queja. Tanto la síntesis de Frances Stewart[66] como el estudio de Cederman, Gleditsch y Buhaug[67], muestran que privaciones políticas y económicas entre grupos (no solo desigualdad individual), alimentan agravios que facilitan la movilización violenta. La revisión más reciente de este tema llega a la misma conclusión: altos niveles de privación político-económica a nivel de grupo incrementan el riesgo de conflicto.

3. Represión y regímenes autocráticos agravan el problema. La literatura sobre represión muestra un patrón robusto al asegurar que la represión estatal tiende a escalar la contestación y puede empujar a dinámicas de violencia.
4. El papel de la "oportunidad" como complemento, no sustituto. Existe, sin embargo, un contrapeso clásico en este tema, pues, para Fearon y Laitin[68], y Collier y Hoeffler[69] lo que mejor explica dónde/cuándo prenden las guerras son condiciones de oportunidad (Estados débiles/pobres, terreno favorable, diásporas/financiación), más que las características étnicas *per se*. En la práctica, estos enfoques son complementarios, pues los agravios creíbles dan propósito y base social a la rebelión, mientras que la debilidad estatal y recursos disponibles hacen factible organizarla y sostenerla.
5. Lo que reduce la recurrencia. Cuando los acuerdos abordan precisamente esas quejas (pactos de reparto del poder, arreglos territoriales, autonomía y garantías institucionales), la probabilidad de rebrotes disminuye. La evidencia comparada de posguerras muestra efectos positivos (aunque no universales) de mecanismos de reparto del poder, especialmente cuando cubren varias dimensiones (política, territorial, militar, económica).

La revisión de los conflictos armados del siglo XXI muestra, pues, un patrón estructural consistente. Los agravios de exclusión política y étnica, reforzados por dinámicas represivas y desigualdades horizontales, constituyen el núcleo más recurrente que explica las motivaciones de inicio de las insurgencias contemporáneas, mientras

que las debilidades institucionales y estatales determinan su factibilidad operativa. Por un lado, la exclusión política y étnica, sea mediante la concentración del poder en una élite dominante, la marginación de regiones periféricas o la negación de representación efectiva a comunidades enteras, genera un profundo sentimiento de injusticia colectiva. Este sentimiento no es difuso, sino que suele estar claramente articulado en demandas políticas precisas (autonomía territorial, participación en el Gobierno central, democratización, derrocamiento de regímenes autoritarios, reconocimiento identitario). Por otro lado, la existencia de regímenes autoritarios o híbridos que combinan un alto grado de represión con una débil legitimidad y sin canales institucionales de inclusión, actúa como multiplicador del riesgo, pues al cerrar las vías pacíficas de participación política, dejan a la violencia como uno de los pocos instrumentos percibidos como eficaces para modificar el *statu quo*. Esta dinámica ha sido confirmada en múltiples contextos: desde Sudán, Etiopía o Camerún, hasta Myanmar o Sri Lanka. A ello se añade la dimensión de factibilidad organizativa, ya que los agravios por sí solos no generan guerras. Para que se produzca una insurgencia sostenida, deben concurrir condiciones de oportunidad (Estados frágiles, instituciones coercitivas débiles o corruptas, geografía favorable, redes de diáspora, recursos naturales o contrabando para financiarse) que permitan transformar el descontento en una estructura militar organizada. Esta combinación de motivación y oportunidad, es la que explica por qué algunos agravios cristalizan en guerras civiles prolongadas y otros no.

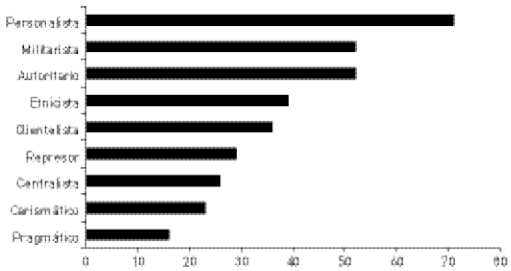
Finalmente, los estudios sobre resolución de conflictos muestran que los procesos de paz más duraderos son aquellos que abordan de manera directa y estructural estas fuentes de exclusión. Los acuerdos que incluyen mecanismos sólidos de reparto de poder, tanto político como territorial, y en ocasiones militar, así como garantías institucionales de inclusión, reconocimiento identitario y reducción de desigualdades entre grupos, tienden a reducir significativamente el riesgo de reanudación del conflicto. Esto se ha visto, por ejemplo, en Nepal (CPN), Filipinas (MILF), o parcialmente en el sur de Sudán antes de 2013. En síntesis, la relación entre agravios y demandas en

los conflictos armados contemporáneos no es anecdótica ni secundaria, sino estructural y recurrente, y se articula alrededor de la lucha por inclusión política real, reconocimiento identitario y participación en el poder. Las dinámicas represivas y la fragilidad estatal no solo generan agravios adicionales, sino que también abren el terreno para que estos se transformen en guerras. Por tanto, cualquier estrategia de prevención o solución sostenible de conflictos debe atacar las raíces estructurales de la exclusión política y étnica, reforzar las capacidades estatales de gobernanza inclusiva y crear arreglos institucionales duraderos que transformen la lógica de confrontación en una lógica de coexistencia política.

LA IMPORTANCIA DE LOS LIDERAZGOS Y SU CAPACIDAD DE PERSUASIÓN

La mayoría de las guerras del siglo XXI se han producido en Estados cuyos gobiernos eran autocráticos. Este dato es sumamente importante, pues explica el tipo de gobernantes que había en el poder y que han sido contestados militarmente por varios tipos de grupos armados. Estos dirigentes suelen tener unas características muy comunes, destacando el personalismo, el autoritarismo, el militarismo, el etnicismo, el clientelismo, la represión y el centralismo, por ese orden, tal como muestro en el gráfico. La evidencia comparada muestra además que la autocratización viene acompañada de censura, deterioro de libertades civiles y represión de la sociedad civil, patrones directamente vinculados con esos rasgos de liderazgo[70].

GRÁFICO 15
RASGOS COMUNES EN LOS DIRIGENTES POLÍTICOS QUE ESTABAN EN EL GOBIERNO AL INICIO DE LAS GUERRAS, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

Aunque aquí no trate las guerras de Ucrania y Palestina, al tratarse de guerras de ocupación y no por el poder político, sí quiero dejar presente que tanto Putin como Netanyahu comporten un perfil en cuanto a su comportamiento. Ambos son personalistas, autócratas, centralistas, militaristas, se apoyan en narrativas religiosas, son expansionistas, autoritarios, manipuladores, faltos de autocrítica, con

rigidez ideológica y buscan la supervivencia política. De pragmáticos, nada.

La explicación de por qué cuando las guerras del siglo XXI por el poder político estallan dentro de Estados, lo hacen con mucha mayor probabilidad bajo gobiernos personalistas, autoritarios, militaristas, etnicistas, clientelistas, represivos y centralistas, la clave es ver ese "paquete" como una arquitectura de poder que genera, psicológica y sociológicamente, las condiciones propicias para la violencia organizada. No son rasgos sueltos, pues juntos conforman un ecosistema político-psicológico con varios pilares que se retroalimentan.

El personalismo y el etnicismo instauran un marco de "nosotros" virtuoso y "ellos" sospechoso. Psicológicamente opera la dominancia social y el autoritarismo (preferencia por el orden, deferencia a la autoridad, castigo a los opositores) que facilitan la deshumanización de grupos ajenos. Eso cristaliza en desigualdades horizontales (grupos enteros sistemáticamente favorecidos/excluidos) que producen agravios acumulativos. El centralismo y la represión reducen los canales de participación y ahogan el disenso; el líder monopoliza la verdad. En psicología política, el alto "cierre por necesidad", es decir, el deseo o motivación de una persona por alcanzar rápidamente una respuesta clara y definitiva, evitando la ambigüedad o la incertidumbre, se imponen desde arriba y se socializan abajo[71]. La sociedad entra en cámaras de eco, es decir, aumenta la creencia de conspiraciones, se normaliza la propaganda y se penaliza la deliberación. Sin válvulas institucionales, la presión sale por vías no institucionales. Cuando las élites definen casi todos los problemas como amenazas, la solución predeterminada es coercitiva, y la seguridad se convierte en ideología. Toda la protesta pacífica será criminalizada, y sube el valor esperado de la clandestinidad y de la lucha armada, más aún si la identidad de grupo provee refugio social y logístico.

El clientelismo ofrece beneficios particulares a cambio de lealtad. Funciona como control social (castigo creíble para disidentes), y a la vez crea perdedores absolutos (territorios/grupos fuera de las redes)

que alimentan agravios mensurables, con menos recursos, menos servicios y menos voz. El reparto por lealtades debilita la administración, la justicia y las fuerzas de seguridad, degradando la capacidad estatal imparcial para prevenir conflictos. El personalismo concentra decisiones en pocas manos; el centralismo bloquea la intermediación, por ejemplo, de sindicatos, partidos o ayuntamientos. Desde la perversión del liderazgo, el narcisismo político busca una validación constante y rechaza los contrapesos. El resultado final son errores no corregidos y "puntos de no retorno" en situaciones de crisis (elecciones disputadas, protestas masivas, desastres), que, sin árbitros creíbles, se deslizan hacia la violencia. Para protegerse, el líder fragmenta la coerción, con guardias presidenciales o milicias afines, y eso reduce la profesionalidad, multiplica el número de actores armados y abarata el uso de la fuerza. En conflictos incipientes, la presencia de aparatos leales, pero poco disciplinados, intensifica los abusos y las represalias, acelerando espirales de guerra.

No solo estamos ante líderes perversos, sino ante un diseño institucional-psicológico que convierte el desacuerdo en amenaza existencial y bloquea toda salida no violenta. Ese diseño construye agravios colectivos (por exclusión y clientelismo), destruye mediaciones (por centralización y represión), normaliza la fuerza como lenguaje político (por militarización), y radicaliza identidades hasta hacer políticamente carísimo el compromiso. La guerra, entonces, no es un accidente, sino la consecuencia sistémica de una arquitectura del poder que, para perdurar, necesita miedo, silencio y lealtad particularista. Cuando fallan el miedo y el silencio porque la humillación, la pérdida o la identidad herida superan el costo percibido, la lealtad se quiebra, y la violencia se vuelve el canal residual de la política. Una arquitectura de poder de este tipo no se sostiene sobre una ciudadanía universal, sino sobre lealtades particularistas (étnicas, religiosas, familiares, regionales o partidistas), construidas y reforzadas mediante clientelismo político y económico, distribución desigual de recursos, patronazgo militar y control territorial. Esta lealtad es condicional y segmentada y se refuerza en situaciones de guerra, ya que esta solidifica identidades de grupo

frente al enemigo, bloqueando proyectos nacionales inclusivos. Los líderes utilizan la guerra para premiar a sus redes clientelares, con el acceso a botines, cargos y territorios, y castigar disidencias internas.

Prevenir guerras en estos contextos, exige desarmar ese paquete a la vez y supone abrir la capacidad de información y participación, desmilitarizar la gobernanza, romper el clientelismo con reglas impersonales y reconstruir instituciones que permitan disputar sin destruir. El punto central es que estos rasgos de liderazgo y gobernanza no son meros defectos políticos, sino que se constituyen como auténticos promotores de conflicto armado. Funcionan como belígenos sistémicos porque generan agravios materiales y simbólicos, cancelan mecanismos pacíficos de resolución y normalizan el uso de la violencia en la vida política. En este sentido, las guerras que brotan en esos contextos no pueden verse como fallas accidentales de un régimen, sino como productos lógicos de un sistema de poder que convierte el conflicto en su lenguaje natural. La prevención de guerras, por tanto, pasa por identificar y desactivar estos factores belígenos, esto es, abrir cauces de participación, institucionalizar la negociación y desmilitarizar la política para que la violencia deje de ser el camino trazado de antemano[72].

Los mecanismos que generan dependencia hacia liderazgos autoritarios, que a su vez tienen capacidad para llevar a los pueblos hacia conflictos armados, se pueden clasificar en mecanismos psicológicos, sociales, institucionales y contextuales, mostrando cómo se retroalimentan. Son los siguientes:

- Necesidad de seguridad y certidumbre. En contextos de inseguridad (económica, alimentaria, bélica) la población tiende a buscar figuras fuertes que prometan orden, aunque eso suponga ceder libertades.
- Miedo y amenaza permanente. Los líderes autoritarios crean o magnifican enemigos (internos o externos) para presentarse como únicos protectores. Esto genera dependencia emocional.
- Carisma y culto a la personalidad. El autoritarismo muchas veces se sostiene en la proyección de una imagen casi

mesiánica. El líder se convierte en referente moral y político, lo que limita la capacidad crítica.

- Conformidad y obediencia. Las personas, bajo presión de autoridad y normas de grupo, pueden aceptar acciones violentas o inmorales.
- Identidad colectiva y pertenencia. El autoritarismo ofrece narrativas fuertes de "nosotros" frente a "ellos" (pueblo vs. élites, nación vs. extranjeros, religión verdadera vs. infieles). Esto refuerza la lealtad.
- Normalización de la violencia. Cuando el discurso autoritario vincula violencia con patriotismo, defensa del honor o virilidad, se reduce la resistencia social a la guerra.
- Erosión de la deliberación pública. La censura y la propaganda impiden que circulen discursos alternativos. Se crea una burbuja donde el líder aparece como inevitable.
- Red clientelar. Los beneficios materiales (puestos, subsidios, favores, etc.), generan dependencia de grupos sociales enteros respecto al líder y su régimen.
- Control de los aparatos coercitivos. Policía, ejército y servicios de inteligencia garantizan obediencia y hacen costoso resistir.
- Centralización del poder. La ausencia de contrapesos parlamentarios, judiciales o mediáticos refuerza la concentración de decisiones en el líder.
- Debilidad del Estado de derecho. En estados frágiles o autocráticos, la legalidad se subordina al interés del líder. Se elimina la posibilidad de cuestionarlo por vías pacíficas.
- Uso del aparato educativo y mediático. Las instituciones se ponen al servicio de la reproducción ideológica del autoritarismo, educando en obediencia y miedo.
- Herencia de violencia previa. En sociedades con memoria de conflictos pasados, suelen naturalizar el recurso a la guerra como salida.
- Crisis económicas y sociales. El desempleo, la pobreza, la desigualdad o el hambre, por ejemplo, aumentan la

receptividad hacia promesas autoritarias.

- Fragilidad estatal y ausencia de instituciones inclusivas. En contextos de autocracia o Estados débiles, el líder sustituye instituciones y se convierte en la única referencia.
- Masculinización del poder. Los modelos de masculinidad ligados al control, la fuerza y la dominación, legitiman liderazgos guerreros que presentan la paz como debilidad.

A partir de ahí es como se construye al enemigo (el líder autoritario crea un adversario existencial, sea otra etnia, minoría o país vecino), se movilizan las masas (la propaganda, el control social y la militarización, generan cohesión en torno a la guerra), se reducen las opciones pacíficas al eliminar mediaciones, parlamentos o negociaciones, y solo queda la vía militar. Se hace uso de la guerra para legitimarse (el conflicto externo o interno refuerza la imagen del líder como protector indispensable) y se produce un círculo de dependencia: cuanto mayor es la violencia, más se percibe que solo el líder puede garantizar la supervivencia, reforzando la dependencia. En síntesis, la dependencia de liderazgos autoritarios surge de la combinación de miedo, identidad, clientelismo y ausencia de contrapesos. Estos líderes, al controlar los recursos simbólicos, materiales y coercitivos, convierten la guerra en un instrumento de legitimación, atrapando a la sociedad en un ciclo de violencia[73].

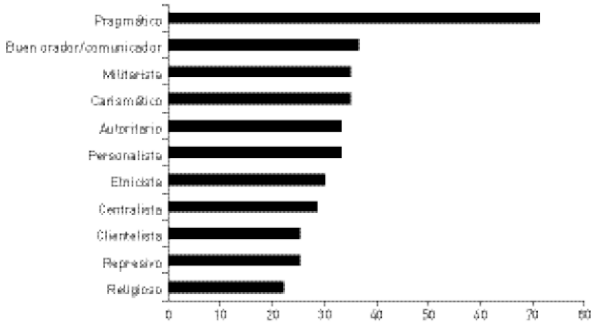
En contextos bélicos, evitar la generación de pertenencia a liderazgos autoritarios exige crear mecanismos que reduzcan la dependencia emocional, material y simbólica de figuras fuertes que emergen en medio del miedo y la desprotección. Esto requiere instituciones de mando civil creíbles, cadenas de responsabilidad transparentes y espacios donde las decisiones militares estén subordinadas al control político y social. También implica fortalecer la cohesión comunitaria desde la solidaridad horizontal, no desde la obediencia ciega, garantizar canales de información independientes que contrarresten la propaganda belicista y promover liderazgos colectivos, rotativos o colegiados en lugar de personalismos carismáticos. En paralelo, deben desarrollarse programas de educación cívico-moral y atención psicosocial que ayuden a procesar el trauma y

el miedo sin proyectarlos en la sumisión a caudillos, evitando así que la guerra se convierta en el caldo de cultivo de nuevas autocracias.

LOS LIDERAZGOS DE LAS INSURGENCIAS

Una vez vistas las características de los liderazgos de los gobernantes de las autocracias dominantes, veamos el perfil de los líderes de las insurgencias, de los grupos armados que luchan contra estas autocracias. El resultado de analizar la forma de ser de 63 líderes de grupos armados, con una media de dos por cada uno de ellos, es realmente sorprendente, puede descolocar a más de un lector y desafía a muchos estudios académicos sobre este tema[74].

GRÁFICO 16
RASGOS COMUNES EN LOS LÍDERES DE LOS GRUPOS ARMADOS EN LAS GUERRAS DEL SIGLO XXI, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

Los primeros rasgos, el pragmatismo (71% de los casos), la capacidad oratoria y comunicativa (36%) y el carisma (35%), son tres aspectos que los diferencian totalmente de los líderes de los gobiernos autócratas contra quienes luchan, que, como he comentado, sus principales perfiles son el personalismo, el autoritarismo y el militarismo, aspectos que también tienen los líderes de los grupos armados, pero en menor medida.

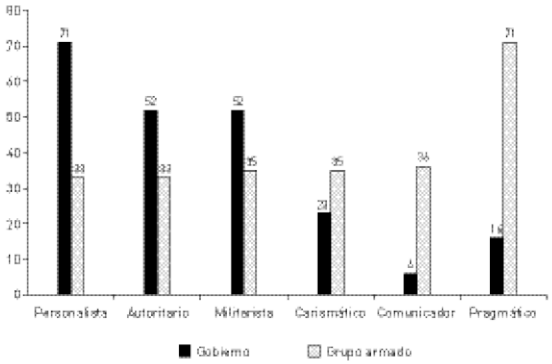
¿Qué significado tienen estos tres rasgos mencionados en los líderes de los grupos armados? ¿Qué implicación tiene el hecho tan destacado del pragmatismo? De entrada, suponen dos cosas que habrá que analizar con detalle: tienen mayor capacidad para movilizar a su gente por la capacidad oratoria y comunicativa y, también, una mejor

capacidad para negociar y entrar en un proceso de paz[75]. No hay que olvidar que el 29% de las guerras por el poder político del siglo XXI, a finales de 2025 ya habían terminado con un acuerdo de paz y que, en bastantes guerras activas, el 32% del total, también existían negociaciones, por lo que el pragmatismo de estos dirigentes pasa a ser un factor muy importante. Además, estamos en la era digital y de las redes sociales, con lo que el proceso comunicativo es muy diferente al del siglo pasado. La literatura sobre gobierno rebelde muestra que, para obtener legitimidad y recursos, muchos líderes ajustan tácticas e ideología con notable realismo situacional. El carisma genera confianza afectiva y disposición al riesgo en contextos de represión, y la literatura sobre diplomacia rebelde y comunicación digital documenta cómo esos líderes calibran mensajes y alianzas para entrar (o sostenerse) en mesas de negociación. Movilizar exige construir marcos para diagnosticar agravios, proponer soluciones y llamar a la acción. Los líderes eficaces dominan el enmarcado de agravios y soluciones, clave para sumar bases y simpatizantes, y quien comunica bien reduce costos de coordinación y neutraliza la propaganda oficial; por eso vemos tanto énfasis de los grupos armados en los discursos, las radios comunitarias, los videos y las redes. Los discursos nacionalistas, religiosos o étnicos en conflicto producen comunidades afectivas que obedecen y luchan no solo por cálculo racional, sino porque sienten[76].

Cuando hablamos de pragmatismo en este contexto belicista, no hablamos de un pragmatismo abstracto, sino de una capacidad práctica de adaptación constante a circunstancias cambiantes, como ajustar tácticas militares (guerrilla, terror selectivo, control territorial), redefinir objetivos políticos (de revolución total a autonomía o federalismo), construir alianzas con actores muy diversos (otros grupos rebeldes, diáspora, ONG, incluso facciones del régimen) y usar narrativas diferentes según la audiencia (local, nacional, internacional). El pragmatismo, por tanto, se traduce en flexibilidad estratégica y en un realismo situacional. El líder rebelde, si quiere eficacia, rara vez puede permitirse el lujo de la rigidez ideológica absoluta. La rigidez ideológica conduce a escisiones; el pragmatismo, a compromisos organizativos que mantienen cohesionada la rebelión. El

autócrata puede sostenerse por coerción y clientelismo rígido, pero el insurgente depende de la persuasión y de una negociación constante, en el interior de su grupo y hacia el exterior. Eso explica por qué, paradójicamente, los rebeldes tienden a mostrar un liderazgo más adaptativo y pragmático que los gobernantes que combaten. Algunos ejemplos de ello pueden ser los de la guerrilla kurda del PKK en Turquía, que abandonó la lucha armada en 2025, y que pasó inicialmente de querer un Estado para todo el pueblo kurdo, a demandar una autonomía en un país tremendamente centralizado, lo que finalmente les hizo evolucionar hasta quedarse con el poder local, gobernando en municipios de la región kurda. Puro pragmatismo. También es el caso de las FARC en Colombia que, de tener una agenda maximalista durante décadas, Alfonso Cano, máximo comandante de las FARC tras la muerte de Manuel Marulanda (2008), presentó en 2009 una Agenda para un Acuerdo de Paz que se caracterizaba por ser de pocos puntos y relativamente realista, frente a las extensas plataformas programáticas anteriores de la guerrilla. Esto posibilitó que, en 2012, empezara una negociación que acabó exitosamente disolviéndose como grupo armado. En Indonesia, la guerrilla del GAM dejó de exigir la independencia de Aceh para demandar una autonomía, que logró tras una negociación y acuerdo de paz en 2005. En Filipinas, las exigencias iniciales del grupo armado MILF, la independencia de Mindanao y establecimiento de un Estado islámico, pasó de pedir la independencia a aceptar una autonomía reforzada en el marco del Estado filipino, cosa que consiguió en 2014. Hay muchos ejemplos de pragmatismo en los grupos armados, al igual que de intransigencia, como el ELN de Colombia y el CNP de Filipinas, que llevan décadas negociando sin resultado, consecuencia de su falta de pragmatismo y de no ser flexibles en sus exigencias.

GRÁFICO 17
DIFERENCIAS ENTRE LOS PRINCIPALES RASGOS DE LA PERSONALIDAD DE LOS LÍDERES DE LAS GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO EN EL SIGLO XXI, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

Si comparamos la forma de financiarse con los rasgos sobre la personalidad de los líderes de los grupos armados, ¿existe una relación o una contradicción? Lo interesante es que ambos listados encajan bastante entre sí. El líder pragmático y carismático necesita recursos continuos para mantener cohesión; el personalismo autoritario se sostiene porque controla directamente el flujo económico y el etnicismo legitima la imposición de impuestos o el reclutamiento dentro de una comunidad concreta. Si se compara con otros periodos históricos, la novedad no está tanto en los rasgos de la personalidad o en las fuentes de financiación que ya existían en el siglo XX, sino en el orden de importancia. La recaudación estable en zonas bajo control, permite sostener la guerra de forma duradera y ajustar las exigencias según la coyuntura; la retórica convincente es clave para atraer ayuda internacional, justificar la causa y movilizar recursos de comunidades en el exilio; el líder carismático legitima el sacrificio y la contribución económica de la comunidad, reforzando el vínculo emocional; controlar oro, diamantes, coltán o petróleo financia la compra de armas y legitima la centralidad del aparato militar; la centralización facilita controlar redes ilícitas, y monopolizar ingresos que pasan directamente por las manos del dirigente; la capacidad de coerción permite imponer sistemas fiscales paralelos y cobrar en puestos de control, y el expolio del territorio enemigo se justifica como reparación de agravios y refuerza la cohesión intracomunitaria. En resumen, hoy día, más que la ideología, predominan el pragmatismo y la comunicación, y más que el saqueo eventual, importa el control estable de rentas (impuestos, peajes, recursos). Los rasgos personales e ideológicos de los líderes no

solo se adaptan a la guerra, sino que se alinean con la lógica de financiación que necesitan para sostenerla. En suma, es la adaptación funcional de los grupos armados del siglo XXI a contextos de Estados frágiles, economías de guerra prolongadas y a un escenario internacional que multiplica, tanto las posibilidades de apoyo externo, como los circuitos ilícitos globales.

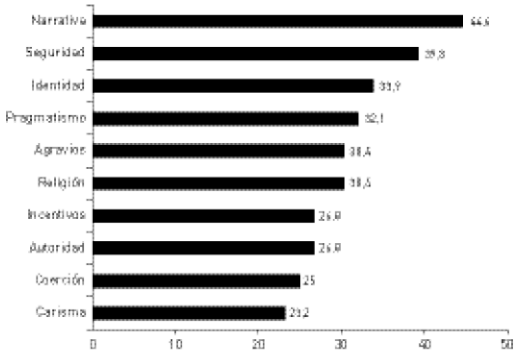
LOS MECANISMOS PARA MOVILIZAR

No se puede hacer una guerra sin antes movilizar a la población y lograr que una parte de ella se una al grupo armado, en este caso, para intentar tomar el poder político normalmente en manos de líderes autocráticos. Para movilizar a la propia población, muchas veces de una misma etnia, ya que son bastantes los conflictos de base etnopolítica, es muy importante la personalidad de los líderes de los grupos armados que antes he señalado como pragmáticos, buenos comunicadores y carismáticos, entre otros rasgos, que explican en buena medida las formas que suelen utilizar para captar adeptos para su causa y empezar una lucha armada.

Por orden de frecuencia, después de observar las manera de atraer a la gente para sumarse a una rebelión armada, destacan la buena oratoria y el buen uso del discurso, la narrativa y la propaganda, en el 44,6% de los casos, seguido por las promesas de dar seguridad y protección a la gente (39,3%), el uso de las redes identitarias, las del propio grupo (33,9%), el pragmatismo en el cálculo estratégico (saber lo qué hacer en cada momento), recurrir al sentimiento religioso (30,4%), el control personal y hacer valer la autoridad del dirigente (26,8%), dar incentivos para lograr futuras recompensas una vez obtenido el poder político (26,8%), usar métodos coercitivos en base a una personalidad autoritaria (25%), el impacto del carisma personal (23,2%), y, en menor medida, la disciplina del grupo, el clientelismo, el tejer alianzas, las promesas de que el líder va a conseguir una solución a los problemas y la capacidad para obtener apoyos externos.

GRÁFICO 18
LAS FORMAS UTILIZADAS POR LOS LÍDERES DE LOS GRUPOS ARMADOS

PARA MOVILIZAR A LA POBLACIÓN, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

Vale decir que existe una estrecha vinculación entre el buen manejo del discurso, la identidad del grupo y la utilización de los agravios históricos. Como puede verse, el dominio de la comunicación y de la narrativa es muy importante, de ahí que muchos líderes sean buenos oradores o sepan al menos lo que conviene decir para seducir a buena parte de la población, sea porque conocen sus verdaderas preocupaciones, las compartan o se aprovechen de ellas para elaborar el discurso.

Las emociones y su control juegan el rol determinante. El hecho de la guerra puede entenderse no solo como un acontecimiento político, estratégico o militar, sino también como un escenario profundamente emocionalmente codificado en el que los actores, tanto combatientes como civiles, se relacionan a través de un repertorio de emociones colectivas e individuales que moldean percepciones, decisiones y legitimidades. La guerra no es emocionalmente neutra: se presenta cargada de símbolos, narrativas y afectos (miedo, odio, orgullo, humillación, esperanza). Estas emociones no surgen espontáneamente, sino que son construidas, manipuladas y ritualizadas por líderes, élites políticas, medios de comunicación e incluso por instituciones religiosas y culturales. La guerra, por tanto, puede leerse como un teatro de emociones donde las pasiones colectivas legitiman la violencia y sostienen la cohesión del grupo. La guerra suele acompañarse de rituales simbólicos (himnos, funerales militares, banderas, conmemoraciones) que canalizan y reproducen emociones colectivas. Estos rituales fijan el significado de la guerra en clave de sacrificio, redención o venganza, evitando que las emociones se

dispersen o cuestionen la narrativa oficial. En este sentido, la guerra se convierte en un espacio de pedagogía emocional, donde se enseña qué sentir, cómo expresarlo y contra quién dirigirlo.

La codificación emocional de la guerra, no es unívoca. Para unos genera orgullo, sentido de propósito y pertenencia; para otros, produce trauma, miedo, desolación. Incluso dentro de un mismo grupo, las emociones pueden estar en tensión. Por ejemplo, la exaltación de la valentía puede coexistir con un miedo silencioso al sufrimiento. La manipulación emocional es un instrumento de poder, ya que los líderes que controlan el marco emocional controlan también la narrativa del conflicto. Ignorar la dimensión emocional de la guerra reduce la capacidad de comprender tanto la persistencia de los conflictos, como las dificultades de construir paz duradera. En síntesis: la guerra como escenario emocionalmente codificado no se limita al choque de fuerzas materiales; es también un espacio donde se definen y manipulan afectos colectivos que moldean el sentido de la violencia, cohesionan a los bandos y justifican la prolongación del conflicto.

Analicemos, para empezar, esta tríada de la narrativa-identidad-agravios. Los agravios se refieren a hechos dolorosos (represión, masacres, expropiaciones, humillaciones) o desigualdades percibidas que se condensan en un marco de injusticias, discriminaciones o marginaciones. Cualquier agravio se asigna a un "nosotros" con límites nítidos respecto a un "ellos" (quién es el pueblo legítimo, quién es el enemigo, quién es el traidor), siendo un factor identitario, ya que está socializado. En cuanto al discurso y la narrativa, el líder selecciona, ordena y dramatiza los hechos en un relato con héroes, víctimas y culpables, ofrece soluciones (prognosis), llamados a la acción (motivación) y justificaciones morales. Este encaje es el núcleo de la teoría del encuadre (*framing*) en la acción colectiva, donde hay marcos diagnósticos (qué pasa y por culpa de quién), de prognosis (qué hacer) y motivacionales (por qué ahora)[77]. Cuando el marco resuena, porque encaja con experiencias vividas, símbolos y emociones, aumenta la probabilidad de que la gente asuma riesgos y participe.

¿Por qué el buen orador importa tanto en este tema? En contextos de guerra y fragilidad estatal, la violencia no surge solo de las armas,

sino también de las palabras, símbolos y relatos. Muchos líderes insurgentes entienden que su rol no es solo militar, sino comunicativo, y se convierten en emprendedores de significados. Su capacidad de construir un marco interpretativo de la realidad legitima la violencia, convierte agravios en causas colectivas y transforma frustraciones individuales en identidades políticas. Estos líderes son expertos en la aplicación de las teorías de la comunicación aplicadas, como si fueran titulados en ciencias de la comunicación. Los líderes armados seleccionan ciertos aspectos de la realidad (pobreza, represión, desigualdad, por ejemplo) y los enmarcan en narrativas comprensibles y emocionales[78]. El encuadre da sentido a la violencia, como una respuesta legítima frente a un agravio. Un líder insurgente eficaz no discute todo, sino que instala un único relato dominante. Refuerza emociones como el miedo, la humillación o el orgullo nacional o religioso. El control de la narrativa les permite capitalizar agravios colectivos y traducirlos en cohesión de grupo. Los líderes insurgentes del siglo XXI han comprendido que la guerra no solo se libra en el campo militar, sino también en el campo simbólico y comunicativo. Su carisma, capacidad oratoria y dominio de la narrativa, transforman agravios individuales en causa colectiva, crean identidades compartidas en torno a enemigos comunes, movilizan recursos simbólicos que legitiman la violencia y convierten al líder en un referente moral y emocional, seduciendo a personas que, de otro modo, no arriesgarían su vida. En resumen, el discurso insurgente funciona como una arquitectura de persuasión, donde el carisma, la narrativa y la oratoria son las primeras armas de la guerra.

Hay al menos cinco aspectos a destacar: a) resonancia y credibilidad. Un buen comunicador adapta el mensaje a públicos diversos (rural/urbano, jóvenes/élites locales), usa lenguaje cotidiano, metáforas, proverbios y ambigüedad estratégica para unir a facciones distintas bajo un mismo paraguas[79]; b) identidad en acto. El discurso no solo describe al grupo, sino que lo hace existir. Se activan mitos de origen, símbolos y tradiciones, a veces inventadas, que legitiman la lucha[80]; c) Emociones movilizadoras, como indignación, miedo, humillación y esperanza, que se cultivan mediante historias de

víctimas y mártires, y promesas de dignidad y reparación[81]; d) compromisos sagrados. Cuando las metas se presentan como valores sagrados, la disposición al sacrificio crece y las concesiones se vuelven difíciles[82], y e) moralización y deshumanización. El orador habilidoso justifica la violencia con marcos de defensa propia, deber moral u orden natural y expulsa al adversario de la comunidad moral[83].

Pongo siete ejemplos de líderes de grupos armados que se distinguieron por su capacidad oratoria y comunicativa, cinco en guerras que terminaron con unos acuerdos de paz, y dos de conflictos todavía activos. Que sean carismáticos no quiere decir de sean recomendables, pues podían ser al mismo tiempo personajes autoritarios, represivos, personalistas y militaristas. En Angola, el líder del grupo armado UNITA, Jonas Savimbi, fue una persona carismática, gran orador y hábil *networker* internacional. Quienes lo han estudiado señalan que era un dirigente con un gran magnetismo personal, capaz de fascinar a audiencias y de tejer apoyos, en particular de Estados Unidos y círculos conservadores. Gran lector, bien instruido y con un intelecto intimidante, tuvo un discurso con gran capacidad de movilización, apelando a agravios y generando adhesiones emocionales a su causa. También promovió el culto a su personalidad y fue mundialmente conocido por su extrema brutalidad. Murió durante unos combates de 2002. Otro personaje, vivo y activo, es Debretsion Gebremichael, el líder del grupo TPLF que lucha en la región de Tigray (Etiopía). Ingeniero de formación, desde la guerrilla fue el responsable de la guerra electrónica y de montar la radio Dimtsi Weyane, un medio para difundir y unificar el relato tigrayano, y presentar las operaciones del grupo armado como respuestas preventivas y defensivas; una forma para reducir los costes morales y coordinar y elevar la disposición a combatir. En la guerra del sur de Sudán para adquirir la independencia, el líder del SPLM/A, John Garang, fallecido en accidente en 2005, articuló una narrativa ambiciosa y no etnicista de un "Sudán nuevo", un proyecto secular, inclusivo y democrático para todas las regiones marginadas. Fue descrito como carismático y que supo comunicar su visión con eficacia. Usó radio SPLA para construir un relato histórico alternativo,

cohesionar bases dispersas y proyectar autoridad en las zonas bajo su control. Ese dominio del mensaje, además de los multitudinarios mítines que solía hacer, ayudó a reclutar y a mantener la moral de combate.

En Asia, podemos citar los casos del líder del GAM, Hasan de Tiro, fallecido en 2010, años después de firmarse el acuerdo de paz de 2005, tras conseguir una autonomía para la región de Aceh, en Indonesia. Fue una persona carismática y reverenciada en la región como "héroe del pueblo", en especial cuando retornó después de décadas de exilio. Su liderazgo se sustentó en narrativas religiosas contundentes, apasionadas y con una gran carga emocional, que tenían una gran fuerza inductora en sus seguidores. En Nepal, que también logró un acuerdo de paz en 2006, después de una década de guerra, el líder del grupo armado CPN-M, el maoísta Pushpa Kamal Dahal, alias "Prachanda", tenía una gran capacidad de mitin, de oratoria y de comunicación de masas, aunque popularmente se le conocía con el apodo de "el Fiero". Combinó un relato carismático de revolución y justicia, con una estructura organizativa capilar, coacción y flexibilidad táctica para lograr una salida negociada, que puso fin a la monarquía. En conflictos todavía vigentes, también podemos citar los casos de Hassan Nasrallah, líder del grupo armado libanés Hezbolá, que mantiene un permanente conflicto con Israel. Fue asesinado en septiembre de 2024, durante un bombardeo israelí que destruyó su cuartel general subterráneo, en el sur de Beirut. Se construyó como líder-símbolo de la resistencia, con discursos televisados que expandieron su audiencia más allá del Líbano y que consolidaron su imagen de autoridad carismática, muy centrado en el discurso y la narrativa de la victoria. Finalmente, comento el caso de Burhan Wani, líder del grupo armado Hizbul Mujahideen, de India y Cachemira, Estado de la India, un personaje extraordinariamente carismático y buen orador virtual, pues a través de las redes sociales y videos se ganó el estatus de icono juvenil insurgente, utilizando una mezcla ingeniosa de ideología, religión y un profundo sentido de la persecución. Transformó la insurgencia con un enfoque estético y romántico y buenas dosis de manipulación emocional. Su muerte

provocó manifestaciones masivas y fue pionero al mostrar públicamente su rostro, proyectando una narrativa directa y accesible.

Volviendo a los datos del gráfico 18, lo que se observa es que la capacidad de movilizar a la población hacia la rebelión armada no se explica por un único factor, sino por un entramado complejo donde se entrelazan comunicación, identidad, expectativas y coerción, todo ello encarnado en la figura de un liderazgo que sabe adaptarse a contextos cambiantes. En primer lugar, el discurso, la narrativa y la propaganda funcionan como el eje central que da coherencia a todos los demás elementos. Permiten articular agravios, transformar inseguridad en causa colectiva, reforzar identidades y dotar de sentido tanto a las promesas de protección como a la perspectiva de recompensas futuras. La palabra del líder no solo transmite un mensaje, sino que crea una realidad compartida que legitima la rebelión y ofrece a los individuos un marco interpretativo, en el que sus miedos y aspiraciones encuentran cauce. Sobre ese marco discursivo se apoyan las promesas de seguridad y protección, que responden a una necesidad vital en contextos de guerra o represión. La narrativa insurgente convierte al grupo en garante de la supervivencia, lo que refuerza la confianza en que unirse a la causa no es solo un acto político, sino también un mecanismo de autopreservación.

¿Cómo los líderes justifican y legitiman la lucha armada ante su sociedad? Analizando algunos de sus discursos, pues no es fácil hacerlo con todos, hay varios elementos comunes en sus narrativas. Señalo las ideas clave:

- Agravio + protección. Se presenta la guerra como una respuesta necesaria y proporcional frente a un daño intolerable (masacres, ocupación, humillación). El mensaje no es "conquista" sino "autodefensa justa".
- Proyecto político inclusivo. La violencia se vende como tránsito hacia un orden político superior: "nuevo Sudán" (Garang) o "plural/unido" tras la guerra. Este encuadre promete derechos, igualdad y ciudadanía plena para todos, diluyendo la imagen de una insurgencia particularista.
- Nación/territorio como causa suprema, especialmente con las

demandas de independencia o autodeterminación. Se invoca la soberanía popular y el derecho a decidir como mandato moral. La independencia de Azawad proclamada por el MNLA condensó el reclamo identitario en una narrativa estatal ("paz duradera", "constitución democrática"), buscando aprobación social más allá de los combatientes.

- Guerra defensiva del pueblo (legalidad moral de emergencia). Se declara una situación excepcional que "habilita" la violencia como último recurso ante crímenes o tiranía; se llama a la población a sostener la resistencia en todos los ámbitos, como hizo el NUG en Myanmar en 2021.
- Honor, dignidad y estatus colectivo. Se moviliza el orgullo nacional/comunitario: "nuestra honra está en vuestras manos", dijo Nasrallah al dirigirse al país y a la "resistencia" como encarnación de la dignidad libanesa. Este marco convierte el apoyo social en un marcador de estatus moral.
- Promesas de orden y paz posbélica. Se asegura que la lucha abre el camino a la paz verdadera y a instituciones legítimas. Es una inversión retórica: la guerra aparece como medio racional para detener un ciclo mayor de violencia e injusticia.
- Anclajes religioso-morales y transnacionales cuando conviene. Se conectan agravios locales con marcos religiosos/universales (deber de fe, resistencia de los pueblos oprimidos) para ampliar la base de aprobación dentro y fuera del país (talibanes, Hezbolá).

A través de contextos muy distintos, en la lógica persuasiva converge el construir una narrativa de agravio y emergencia que legitime la violencia como autodefensa, enlazar esa violencia con un proyecto político superior (unidad, independencia, democracia, o "nuevo orden justo"), y envolverlo todo en marcos de dignidad y deber (nacional, comunitario o religioso) que convierten el apoyo social en una prueba de virtud. Cuando estos tres elementos aparecen juntos (agravio defensivo, promesa de orden mejor y apelación moral), la aprobación popular de la lucha armada aumenta, incluso sin dirigirse específicamente a los jóvenes.

En un libro dedicado al gran público y con referencias a la publicidad, el psicólogo Robert B. Cialdini[84] explica que hay siete principios de persuasión para conseguir nuestra conformidad: reciprocidad, simpatía, aprobación social, autoridad, escasez, compromiso y coherencia y unidad. Unos buscan el cultivo de la relación, y otros reducir la inseguridad. Aquí nos interesan dos: la aprobación social y la unidad. El primero suele utilizarse para estimular la conformidad de una persona ante una petición, informándole que muchos otros individuos (cuantos más, mejor) muestran o han mostrado su conformidad (persuasión de los semejantes). Las personas también damos nuestra conformidad a quien consideramos que es uno de los "nuestros" (unidad), experimentando identidades compartidas.

Las redes identitarias (étnicas, comunitarias, religiosas o culturales) aportan la base social y emocional que multiplica la eficacia del discurso. El individuo no se suma a una rebelión en soledad, sino que lo hace dentro de un entramado de pertenencia en el que la decisión se normaliza, se legitima y se refuerza. Estas identidades, cuando son activadas hábilmente, permiten movilizar a grandes colectivos en poco tiempo, al conectar con lo más profundo de su sentido de pertenencia. El pragmatismo estratégico del liderazgo actúa como un catalizador. No basta con tener un discurso y una identidad, sino que es necesario saber cuándo negociar, cuándo combatir, cuándo prometer y cuándo reprimir. Esa flexibilidad asegura la supervivencia de la insurgencia y transmite la imagen de un dirigente capaz de saber lo que conviene en cada coyuntura. En este marco, el sentimiento religioso no aparece como un factor aislado, sino como un recurso narrativo que otorga legitimidad trascendente y dota de sacralidad al sacrificio. La religión aquí se entrelaza con identidad, discurso y promesas de futuro, reforzando la percepción de que la lucha tiene un sentido superior. El control personal del líder, su autoridad y, en algunos casos, el carisma, completan el cuadro: no solo se trata de las ideas, sino de la capacidad de encarnarlas en una figura que concentra confianza, respeto o temor. El líder, al presentarse como guía, protector o mesías, se convierte en el punto de convergencia de todos los elementos previos. Finalmente,

el uso de incentivos materiales o simbólicos, junto con la coerción autoritaria, son las caras más terrenales de este proceso, ya que garantizan disciplina, generan expectativas de futuro y aseguran la adhesión incluso de aquellos que dudan.

En suma, todos estos factores conforman un ecosistema de movilización en el que el discurso insurgente es el hilo conductor que enlaza seguridad, identidad, religión, pragmatismo, autoridad, incentivos y coerción. Juntos construyen una narrativa totalizante que convierte a la rebelión en un proyecto no solo político-militar, sino existencial; una promesa de sentido, protección y futuro, encarnada en la figura del líder y en la comunidad que lo sigue.

Durante los primeros años de este siglo, predominó la tesis de que las guerras civiles no eran principalmente producto de agravios étnicos o desigualdades, sino de oportunidades de rebelión, incentivos económicos y debilidad estatal. Las tesis sobre los agravios, tuvieron que medirse con las de la codicia, un debate académico que todavía perdura. Para Collier y Hoeffler[85], por ejemplo, los conflictos no se explican principalmente por agravios, sino porque existen oportunidades económicas para rebelarse. Un conflicto estalla cuando los actores perciben que los beneficios materiales de la guerra (saqueo, control de recursos, financiamiento externo) superan sus costes. Aunque los agravios están presentes en casi todas las sociedades, señalan, rara vez explican por sí solos la aparición de una rebelión armada, ya que la mayoría de los países con desigualdades o represión no caen en guerra civil. El propio Collier, no obstante, más tarde matizó sus tesis reconociendo la interacción entre codicia y agravios. Los agravios se usan como narrativas movilizadoras, aunque lo que hace posible la guerra es la financiación (codicia), tesis que no puedo sustentar aquí, pues los hechos me muestran que no siempre la financiación explica el estallido de las guerras.

Algunos autores empezaron a cuestionar esta interpretación, argumentando que los agravios importan mucho más de lo que la literatura cuantitativa había mostrado, pero que debían medirse adecuadamente[86], y desarrollaron un marco que conectaba las desigualdades horizontales (entre grupos étnicos, religiosos, regionales

o lingüísticos) con la probabilidad de guerra civil. Las verticales son entre individuos dentro de una sociedad (ricos vs. pobres), mientras que las horizontales son entre grupos colectivos (etnias, regiones, religiones). Mostraron que son estas últimas las que alimentan los agravios capaces de movilizar hacia la violencia organizada y sostienen que cuando un grupo experimenta sistemáticamente exclusión política y desigualdad económica, aumenta la probabilidad de que surjan rebeliones armadas. Por tanto, no basta con mirar al "individuo pobre", sino a la posición relativa de su grupo dentro del sistema político y económico. Los autores integran el debate entre agravios y oportunidades con una tesis híbrida, en la que los agravios explican las motivaciones y las oportunidades (capacidad organizativa, debilidad estatal, geografía montañosa, redes transnacionales) explican la viabilidad.

Resumiendo, las ideas centrales de estos autores son que las guerras civiles no pueden entenderse sin atender a las desigualdades horizontales, la exclusión política de grupos étnicos y las desigualdades económicas y territoriales, que refuerzan los agravios y hacen más probable la rebelión. La combinación de agravios colectivos y oportunidades estructurales explica la mayoría de los conflictos y la inclusión política y la redistribución territorial son claves para la paz sostenible.

En los años noventa, autores como Donald Horowitz[87] o Paul R. Brass[88], entre otros, divulgaron el concepto de "emprendedores étnicos", que sirvió para designar a los responsables de las matanzas en los Balcanes. Otros analistas han querido ir más allá de lo étnico, refiriéndose también a la existencia de "emprendedores identitarios/políticos"[89], que explotan cualquier diferencia significativa (política, cultural, ideológica, religiosa, de clase o incluso de memoria histórica), para movilizar a "los suyos" contra "los otros". Podemos ampliar el primer concepto si entendemos que lo que hace al emprendedor étnico eficaz no es la etnicidad en sí, sino tres dimensiones universales: a) ambición de poder, buscando legitimidad y acceso a recursos; b) capacidad de persuasión/manipulación, creando narrativas convincentes, emocionales, con un "otro" definido,

y c) explotación de identidades diferenciadoras, no solo etnia, sino también religión, ideología, lengua, región, clase, género, memoria histórica, etc. Así aparecen los mencionados emprendedores identitarios/políticos, que yo preferiría llamar más bien "ambiciosos" o "codiciosos políticos", ya que, en la actualidad, el término emprendedor se asocia a las personas que crean negocios innovadores y en cambio aquí queremos referirnos a líderes que construyen un conflicto político presentando como "diferente" a otro grupo, y como inevitable la confrontación, que una cuestión muy diferente. No es lo mismo organizar una guerra que crear una *startup*. Los mecanismos de manipulación o de seducción más comunes de este tipo de líderes, para entrar en una guerra, ya los he señalado anteriormente.

Evidentemente, hay condiciones estructurales que favorecen su éxito, como los Estados frágiles o en transición, con baja legitimidad institucional; las crisis socioeconómicas, donde el desempleo o la inflación son terreno fértil para culpar a un "otro"; debilidad de marcos cívicos, cuando no hay instituciones inclusivas que gestionen la diversidad, y espacios comunicativos polarizados, con medios y redes sociales que amplifican el discurso. Me referiré a ello en el siguiente capitulo.

Si Marx hablaba de "condiciones subjetivas" para la revolución, hoy en ciencia política hablaríamos de agencia de élites (la capacidad de acción de los actores), ambiciosas de poder enlazar el conflicto con la identidad, usando un *framing* (encuadre) estratégico y movilización de las emociones colectivas. El *framing* estratégico se refiere al proceso de dar forma a la interpretación de un problema o situación a través de marcos de significado, de manera que se oriente la percepción y la acción de un público[90]. Estos conceptos reflejan cómo líderes ambiciosos logran transformar agravios o miedos difusos en acción armada organizada con fines de poder. En conflictos, esta agencia se concentra en élites políticas, militares o comunitarias que poseen capital simbólico y narrativo para convencer a su grupo. La teoría de la movilización de recursos[91] sostiene que no basta con tener agravios, sino que se requiere liderazgo que organice y dirija. Los líderes crean marcos de movilización[92] con narrativas que interpretan la realidad y

transforman la frustración en causa colectiva. Aquí, las condiciones subjetivas serían los procesos de persuasión, encuadre y legitimación, que hacen que la comunidad vea la violencia como inevitable, justa o necesaria. Siguiendo este hilo conductor, en la sociología política actual se insiste mucho en el papel de las emociones, como el resentimiento, el miedo, el orgullo o la humillación y las polarizaciones afectivas. Además, la teoría de las oportunidades políticas[93] sostiene que la gente se moviliza cuando percibe que existe una ventana de oportunidad para que su acción tenga efecto, por lo que las condiciones subjetivas del marxismo en la actualidad se entienden también como la percepción de que la violencia puede ser eficaz para lograr poder o seguridad. Los líderes juegan con esta percepción, para reducir los costos percibidos y exagerar las expectativas de ganancia (territorial, política, simbólica).

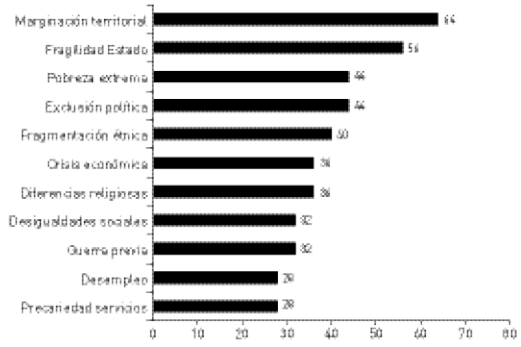
Así pues, los líderes manipulan las percepciones a través de tres grandes mecanismos: a) reducir los costos percibidos (minimizar riesgos, normalizar sacrificios); b) exagerar los beneficios esperados (riqueza, poder, reconocimiento, destino histórico), y c) alterar el cálculo racional mediante emociones y construcción discursiva estratégica (*frames*), como miedo, orgullo, victimización o inevitabilidad. Entre los instrumentos organizativos y materiales utilizados, figuran la militarización de la juventud, ofreciendo armas, salarios e identidades de guerrero; clientelismo militar, como repartir cargos, prebendas o promesas de poder a élites locales para alinearlas, y el control de la comunicación, a través del monopolizar medios, redes sociales, púlpitos religiosos o asambleas comunitarias, para repetir la narrativa.

LAS CAUSAS SUBYACENTES Y LOS DETONANTES DE LAS GUERRAS POLÍTICAS

Además de las características puramente políticas, vinculadas al tipo de régimen y del perfil de los líderes gobernantes (personalistas, autoritarios, militaristas, etc.), al iniciarse una guerra existían unas condiciones objetivas, de carácter sociopolítico en su mayoría, que pueden explicar buena parte de las motivaciones por las que surgieron grupos armados. Entre estas condiciones, destacan la marginación territorial, la fragilidad del Estado, la exclusión política, la pobreza extrema, la fragmentación étnica, las diferencias religiosas, las crisis económicas, la existencia de guerras previas e inmediatas, las desigualdades sociales, la precariedad y difícil acceso a los servicios públicos y el desempleo, por ese orden de importancia. Juntando varias de estas características, se produce un cóctel explosivo que puede desencadenar un conflicto armado.

En el siguiente gráfico, expongo estos factores en porcentajes, más o menos por el orden de frecuencia, pues es una valoración siempre algo subjetiva. No obstante, puede servir como referencia.

GRÁFICO 19
PRINCIPALES FACTORES SOCIOPOLÍTICOS Y ECONÓMICOS EXISTENTES AL MOMENTO DE INICIARSE LAS GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO



Fuente: Elaboración propia.

En el siglo XXI, los grupos armados no surgieron solo porque existieran autócratas o líderes personalistas, sino porque esas estructuras se asentaban sobre condiciones de exclusión, desigualdad y privación. La marginación territorial, la pobreza extrema y la exclusión política representan privación relativa; la fragmentación étnica y religiosa sobre desigualdad horizontal potencian la politización identitaria; la fragilidad estatal y los servicios precarios son formas de violencia estructural; la pobreza, desempleo y exclusión niegan necesidades básicas. Así, la guerra aparece no tanto como irracionalidad, sino como un intento, aunque destructivo, de dar respuesta a condiciones estructurales de injusticia. Los líderes armados, mediante discursos de agravios históricos, convierten estas condiciones en narrativas movilizadoras, legitimando la violencia como forma de rectificar desequilibrios percibidos. Antes de explicar la importancia de la marginación territorial y la fragilidad de los Estados, creo conveniente explicar cuatro conceptos que he mencionado y que nos ayudarán a entender mejor los contextos: la privación relativa, las desigualdades horizontales, la violencia estructural y la satisfacción de las necesidades básicas; aunque muchos conflictos se podrían analizar como luchas más amplias, incluyendo la territorialización del poder político en torno a reformulaciones violentas de la identidad, los medios de vida y el acceso a los recursos económicos[94].

La privación relativa, elaborada por Ted Robert Gurr en 1970[95], parte de la idea de que la violencia colectiva surge cuando existe una brecha entre lo que la gente cree que merece (expectativas) y lo que realmente obtiene (capacidades de satisfacción). Eso puede explicar factores como la marginación territorial, cuando los grupos en periferias sienten que el centro acumula los recursos y oportunidades que les son negados; la exclusión política, cuando pueblos sin representación en el Gobierno perciben que su voz y derechos son negados pese a formar parte del Estado; el desempleo y la pobreza extrema[96], ya que aumentan la frustración relativa frente a las élites enriquecidas o frente a otros grupos étnicos/religiosos con mayor acceso a oportunidades. No es la pobreza absoluta lo que genera

rebelión, sino la percepción de injusticia y de trato desigual en comparación con otros sectores o grupos.

Las desigualdades horizontales desarrolladas por la economista británica Frances Stewart[97] se refieren a las desigualdades persistentes entre grupos étnicos, regionales o religiosos, no solo individuales. Ello sirve para explicar la fragmentación étnica y diferencias religiosas, pues si coinciden con desigualdades en riqueza, acceso a cargos o servicios, las identidades se politizan y se convierten en base de movilización armada. También explica la importancia de la marginación territorial, pues cuando ciertas regiones (p. ej. Darfur, Casamance, Tigray) quedan fuera de los beneficios del desarrollo, los agravios se convierten en combustible del conflicto. Mientras las desigualdades verticales (entre individuos) pueden ser manejadas con movilidad social, las horizontales generan resentimiento colectivo y alimentan narrativas de resistencia.

En cuanto a la violencia estructural, concepto que el sociólogo noruego Johan Galtung[98] acuñó en 1969, se trata de las formas de violencia incrustadas en las estructuras sociales y políticas, que impiden a las personas satisfacer sus necesidades básicas (vida, bienestar, identidad, libertad). Esto explica, por ejemplo, la precariedad de los servicios públicos, en especial salud y educación. No es violencia directa, pero sí estructural, porque condena a grupos enteros a una precariedad o mortalidad evitable y una exclusión social. Respecto a las crisis económicas y el desempleo, hay que tener presente que la ausencia de oportunidades no es un accidente, sino un producto de estructuras globales/nacionales que reparten de forma desigual los recursos. Así, el conflicto armado surge como reacción frente a estructuras que matan "silenciosamente" y que generan agravios permanentes.

Respecto al concepto de satisfacción de las necesidades humanas básicas, surge en los años setenta y ochenta como una corriente central en estudios sobre desarrollo, psicología, conflictos y paz. Se basa en la idea de que todo ser humano comparte un conjunto de necesidades universales que, si no se satisfacen, generan tensiones, frustración y potencialmente violencia. Fue popularizado por Manfred Max-Neef[99] a

finales de los años ochenta y por John Burton[100] en 1990, y se refiere a necesidades como subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad o libertad, que son universales y no negociables. Este concepto nos servirá para entender la exclusión política cuando se niega la necesidad de participación y reconocimiento; también las desigualdades sociales, que impiden satisfacer la necesidad de bienestar y de desarrollo y la fragmentación étnica y religiosa, pues cuando se niega la identidad de un grupo se genera una motivación profunda para luchar. Los conflictos violentos persisten mientras esas necesidades no sean atendidas y los acuerdos de paz sostenibles deben incorporar mecanismos para satisfacerlas.

La marginación territorial es, como se habrá visto, el primer factor explicativo de las guerras por el control político. En conjunto, la explicación global es que la marginación prolongada territorial, política, cultural y económica produce agravios colectivos que al coincidir con identidades territoriales se convierten en proyectos políticos de resistencia. Si el Estado bloquea las vías pacíficas de resolución y surgen líderes capaces de movilizar esos agravios, el resultado es con frecuencia la formación de grupos armados que buscan transformar la distribución del poder político.

Está bastante vinculado con la etnopolítica, que es otro factor muy presente en estos conflictos armados. Es la combinación de exclusión política de territorios y sus grupos (poca o nula representación/participación en el centro del Estado); desigualdades horizontales entre regiones/grupos (en renta, servicios, infraestructura) y una baja penetración estatal en la periferia (coerción/servicios irregulares). La marginación se territorializa porque las identidades políticas, étnicas o regionales se solapan con mapas de centro-periferia. Esa superposición crea agravios colectivos, oportunidades organizativas y espacios físicos favorables a la insurgencia. En las guerras por el poder del siglo XXI, la marginación territorial destaca porque alinea tres capas, las "tres M": 1) motivaciones (agravios por exclusión y desigualdades entre territorios/grupos), 2) medios (ventajas de oportunidad y santuario en periferias), y 3) marcos (identidades y gobernanza alternativa que legitiman la disputa por el centro). Cuando

la desigualdad entre regiones/grupos se traduce en exclusión del poder y coincide con periferias de baja presencia estatal, el agravio se vuelve movilizable y los costes de insurgencia bajan. Esa convergencia explica por qué la marginación territorial aparece recurrentemente como el motor principal de guerras que buscan reconfigurar el control político, especialmente el acceso al Gobierno central o crear una autonomía.

Según la base de datos EPR (Ethnic Power Relations)[101], desarrollada inicialmente por Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer y Brian Min, la exclusión étnica sigue siendo uno de los predictores más robustos de conflictos étnicos armados. La evidencia acumulada y las revisiones recientes confirman que la exclusión o representación insuficiente de grupos políticamente relevantes, aumenta de forma pronunciada el riesgo de estallido y escalada de violencia.

TABLA 4
EJEMPLOS DE TERRITORIOS MARGINALIZADOS Y SUS CONSECUENCIAS

PAÍS	REGIÓN	AÑOS DE LA GUERRA	GRUPOS ARMADOS	SITUACIÓN	DEMANDAS
Camerún	Anglófona (oeste)	Desde 2014	ADF y otros	Eliminación del federalismo, falta de inversiones, discriminación lingüística, asimilación forzada, marginación económica	Autogobierno, restaurar el federalismo o la independencia, protección del sistema educativo anglófono, mayor representación política, redistribución de los recursos
Costa de Marfil	Norte	2002-2011	Forces Nouvelles	Pobreza, falta de inversión, diferencia religiosa, poco acceso a servicios, marginación jurídica al no tener plena ciudadanía	Derechos de ciudadanía (derogar la ivoirité), reformas democráticas, reparto del poder, elecciones inclusivas
Mali	Azawad (tuareg)	Desde 2012	MNLA	Marginación política, económica, cultural, identitaria y territorial; subdesarrollo, desempleo	Autogobierno (independencia), mejor representación en el Estado, desarrollo económico y social, reconocimiento cultural e identitario

PAÍS	REGIÓN	AÑOS DE LA GUERRA	GRUPOS ARMADOS	SITUACIÓN	DEMANDAS
República Centroafricana	Norte y este	Desde 2013	Séléka	Falta de servicios, ausencia del Estado, estigmatización, mala gobernanza y expolio, marginación política, violencia sectaria (musulmanes vs. cristianos), colapso estatal	Inclusión política y económica, derrocamiento del presidente, seguridad, desarrollo, reconocimiento y documentación de la ciudadanía, cumplimiento de acuerdos de paz
Sudán	Darfur	Desde 2001	SLA/M, JEM	Falta de inversión, pobreza, falta de servicios básicos, exclusión política, falta de seguridad, arabización forzada, militarización	Autogobierno regional, democratización, redistribución del poder, acceso a recursos, inversiones, seguridad y protección, reconocimiento identitario, autonomía o federalismo real
Sudán	Sur	1983-2004	SPLM/A	Diferencias culturales y religiosas, expolio de recursos naturales	Independencia, control recursos naturales, rechazo a la sharía, inclusión política
Sudán del Sur	Población nuer, en varias regiones del país	2011-2018	SPLM-IO	Autoritarismo y concentración del poder central, marginación política, limpieza étnica, fragilidad estatal	Reformas democráticas, mayor representación política, protección frente a abusos militares, reconocimiento derechos culturales y territoriales
Filipinas	Mindanao	1969-2014	MILF	Pobreza estructural, expolio de recursos naturales y de tierras, diferencia religiosa, falta de inversión	Autogobierno (independencia) y reconocimiento identidad cultural y religiosa del pueblo moro, control sobre tierras y recursos naturales
Indonesia	Aceh	1976-2005	GAM	Pérdida de autonomía, falta de inversión, centralismo, marginación religiosa, expolio de recursos, militarización	Autogobierno (independencia), control recursos naturales respeto a la identidad islámica
Sri Lanka	Norte y este (población tamil)	1972-2009	LTTE	Discriminación estructural (económica, política y lingüística) sobre los tamiles. Tras la guerra, existe militarización del norte, problemas de restitución de tierras y limitaciones en el uso pleno del tamil en la administración	Autogobierno (independencia), reconocimiento derechos culturales. Después de finalizar la guerra, persisten reclamos de descentralización, autonomía, igualdad lingüística y derechos humanos

PAÍS	REGIÓN	AÑOS DE LA GUERRA	GRUPOS ARMADOS	SITUACIÓN	DEMANDAS
Yemen	Saada (hutíes)	Desde 2009	Ansar Allah	De mayoría zaidí (corriente del islam chií), fue marginalizada en favor del islam suní wahabí, con recortes en inversión estatal, abandono de infraestructuras y debilitamiento de las élites tribales tradicionales	Derecho a la educación religiosa zaidí, inversión, participación política, autonomía territorial, fin del centralismo, soberanía frente a injerencias externas

Fuente: Elaboración propia.

¿Por qué este factor se acentúa en el siglo XXI? Viendo la tabla anterior, podemos citar varios aspectos:

- La mayoría de guerras son intraestatales y se dan donde hay periferias excluidas con identidad política. Se trata casi siempre de regiones alejadas de las capitales y de los centros de poder económico, político y cultural. Estas regiones quedaron al margen de la inversión estatal, la representación política y los servicios públicos. Algunos ejemplos son el Camerún anglófono (oeste) frente al dominio francófono central, el norte de Costa de Marfil frente al sur abiyano, Azawad (Mali) frente a Bamako, Darfur y el sur de Sudán (antes de la independencia de Sudán del Sur) frente a Jartum, Mindanao y Aceh frente a Manila y Yakarta, o Saada (hutíes) frente a Saná.
- Estas regiones no solo están marginadas, sino que poseen identidades propias (étnicas, lingüísticas, religiosas) que refuerzan la sensación de exclusión. Es lo que ha ocurrido con los tamiles en Sri Lanka (lengua y religión distintas a la mayoría cingalesa budista), los nuer y sursudaneses (cristianos/animistas frente al islam norteño), los tuaregs (pueblos nómadas bereberes frente a poblaciones negras y sedentarias), los musulmanes en el norte de Costa de Marfil frente a sur cristiano/animista, o los hutíes (zaydíes chiíes)

frente a élite sunní central.

- Exclusión política. Las élites gobernantes concentran el poder en la capital y lo reparten entre grupos dominantes, excluyendo sistemáticamente a las periferias. Esto genera déficit de representación política y ausencia de participación real en las instituciones nacionales[102].
- Desigualdad socioeconómica. Las regiones periféricas suelen ser más pobres y con menores infraestructuras que las zonas centrales. Muchas veces, recursos naturales locales (petróleo, oro, uranio, bosques, pesca) son explotados por el Estado central sin beneficios locales. Algunos ejemplos pueden ser el petróleo en Aceh y Sudán del Sur, el uranio y oro en Mali (Azawad), el cacao en el norte de Costa de Marfil, o el algodón y tierras fértiles en Darfur.
- Uso del agravio histórico en la movilización. Los líderes locales apelan a la memoria de agravios (colonización, pactos incumplidos, represión militar) para movilizar a la población. Se construye una narrativa de "nosotros marginados vs. ellos en el poder". Además, las tecnologías de información reducen los costes de coordinación y difunden agravios territoriales. Persisten fronteras y legados coloniales que superponen identidades y territorios de forma conflictiva.
- Por descentralizaciones incompletas y explotación foránea de los recursos (hidrocarburos, minería) que intensifican el agravio por reparto fiscal y el daño ambiental en regiones productoras, pero poco representadas.

Ante la falta de inclusión política y la represión estatal, se crean grupos insurgentes con demandas de autonomía, federalismo o incluso independencia. Por tanto, las políticas de inclusión territorial, como la representación efectiva, la inversión en servicios e infraestructuras, los acuerdos de autonomía o federalismo bien diseñados y el reparto de rentas son las que, según la mayoría de los analistas, pueden reducir el riesgo de que estalle una guerra por el poder político.

Respecto a la fragilidad del Estado[103], cuando son incapaces de garantizar seguridad, justicia y servicios básicos, se convierten en

terreno fértil para insurgencias. Hablaré de ello posteriormente. Cuando algunos de estos países han tenido guerras previas y bastante inmediatas, las memorias de violencia, la existencia de armas, redes de combatientes y estructuras paralelas, facilitan la reactivación de conflictos. La debilidad estatal genera un vacío de soberanía donde actores armados ofrecen lo que el Estado no puede: seguridad, justicia, identidad. También puede ser interesante recordar la teoría de movilización de recursos[104] que nos dice que las condiciones objetivas no bastan, y que la existencia de liderazgo, redes y recursos facilita convertir los agravios en acción colectiva. También me referiré a ello al tratar los liderazgos. Para algunos analistas, el fracaso de los países no se debe a falta de recursos ni a mala suerte histórica, sino a la persistencia de instituciones políticas y económicas extractivas, que bloquean la innovación y el acceso equitativo al poder y la riqueza[105]. Las instituciones extractivas están concentradas en manos de élites que monopolizan el poder político y económico, expropian riqueza, obstaculizan la innovación y restringen la participación ciudadana. Producen crecimiento limitado o dependiente de recursos (extractivismo), pero son incapaces de sostenerlo a largo plazo. Finalmente, y apelando a la psicología política del resentimiento[106], hemos de recordar que la humillación colectiva y la memoria de agravios pasados son catalizadores de la violencia, especialmente en contextos de diferencias étnico-religiosas[107]. Parte de la idea de que, en los individuos y en los colectivos, los agravios percibidos —ya sean reales o simbólicos— generan emociones negativas persistentes que se transforman en resentimiento duradero, el cual puede movilizar conductas políticas, desde el apoyo a líderes autoritarios hasta la violencia.

En 2022, la politóloga estadounidense Barbara F. Walter publicó un interesante libro que está estrechamente ligado al tema que nos ocupa[108]. Estudió 200 guerras civiles acaecidas desde la Segunda Guerra Mundial, un periodo demasiado extenso para compararlo con las guerras del siglo XXI, que además recogía todo tipo de guerras, no las exclusivamente centradas en conseguir el poder político, y con mucho énfasis en el factor étnico, que define como un importante

factor belígeno. Aun así, puesto que hay serias diferencias analíticas, expongo sus principales tesis para compararlas con mis datos y ver las posibles diferencias al contrastar los dos periodos. Además, Walter prestó mucha atención a las guerras balcánicas de los años noventa que no entran en mi estudio. Para esta autora, las guerras civiles rara vez comienzan de forma súbita. No son explosiones repentinas de violencia, sino procesos graduales en los que instituciones políticas, identidades colectivas y tensiones sociales se van deteriorando. El inicio suele estar marcado por una combinación de crisis políticas, pérdida de confianza en el Estado, polarización identitaria y exclusión de ciertos grupos. Walter resalta que los regímenes ni plenamente democráticos ni plenamente autocráticos, las anocracias, son los más proclives a guerras civiles, aspecto que contradeciré con datos referidos a las guerras del siglo XXI con una clara motivación por alcanzar el poder político. Para Walter, las democracias consolidadas ofrecen vías institucionales para tramitar conflictos y las autocracias fuertes imponen control coercitivo, aspectos que comparto; pero en los regímenes híbridos, afirma, la apertura parcial genera expectativas frustradas y luchas por el poder. Quizás fuera más evidente en otro tipo de guerras y del siglo pasado, pero no en las actuales. Una de las aportaciones centrales de Walter es que cuando las líneas de discriminación o exclusión política se estructuran en torno a identidades étnicas, religiosas o raciales, el riesgo de guerra civil se dispara. Lo que más predice la violencia no es la diversidad en sí, sino la politización de la identidad (cuando una comunidad siente que se le niegan recursos, poder político o derechos básicos en función de quiénes son). Cuando líderes políticos movilizan identidades exclusivas y las conectan con agravios ("este país no es para ellos, es solo para nosotros"), se pasa de la competencia política normal a una lógica existencial, donde la otra parte ya no es rival, sino amenaza. Siguiendo a Mark Juergensmeyer[109] o R. Scott Appleby[110], Walter subraya que la transición hacia la violencia casi siempre requiere de líderes que alimenten el miedo y la hostilidad, manipulando agravios históricos o recientes. Estos actores convierten resentimientos latentes en proyectos de movilización armada. En estos últimos apuntes, sí que

coincido y me referiré a ellos posteriormente.

Walter identifica una serie de factores que se repiten en muchos países antes de una guerra civil, que son básicamente cuatro: 1) debilitamiento del Estado (corrupción, pérdida de legitimidad, instituciones frágiles); polarización creciente (cuando la política se organiza en torno a bloques irreconciliables), armas y milicias disponibles, a menudo ligadas a comunidades específicas, y 4) apoyo externo, cuando potencias extranjeras pueden financiar, armar o dar refugio a insurgentes.

Walter forma parte del Grupo de Trabajo sobre Inestabilidad Política (Polity/PITF)[111], junto a Monty Marshall y Benjamin Cole que, tras estudiar los conflictos de setenta años, llegaron a la conclusión de que el faccionalismo, esto es la aparición de una facción en un país, vinculada a la etnia o religión, eran mucho más proclives a sufrir una guerra civil. Sus tesis apuntan a que a medida que pasan los años, el número de países democráticos aumentan, y ofrecen estadísticas que van de 1800 a 2018. Estos datos, sin embargo, a mi parecer no se sostienen, pues vemos que el número de autocracias por desgracia va en aumento desde 2012, como ponen de manifiesto los informes sobre la democracia de V-Dem Institute[112], que coinciden con mis datos. En el informe de 2025, apunta que casi 3 de cada 4 personas en el mundo, el 72%, vivía en autocracias. Era la cifra más alta desde 1978. Los críticos a este Grupo de Trabajo[113] no niegan que la etnicidad importe, pero rechazan que el faccionalismo étnico sea la señal principal y suficiente. Proponen, en cambio, que el riesgo de guerra civil se entiende mejor por la debilidad estatal y oportunidad de la insurgencia, la exclusión política y las desigualdades entre grupos, y las configuraciones de polarización específicas. Estos críticos advierten que hay que tener cuidado con métricas que mezclan resultado y predictor, pues esto desplaza el foco desde cuánta etnicidad hay, hacia cómo está organizada la competencia política y qué capacidades tienen el Estado y los rebeldes. Dicho esto, retomaré el concepto de facción, pero desde otra perspectiva. Michael Doyle y Nicholas Sambanis[114] son algunos de los autores que sostienen que las guerras civiles son más probables en Estados débiles y divididos, especialmente cuando

existen identidades excluidas y liderazgos autoritarios que bloquean demandas democráticas. Es una tesis muy difundida y aceptada, por lo que voy a comentarlo a continuación. En cualquier caso, como bien ha explica Paulo Vesco[115], los efectos de los conflictos van más allá de la destrucción y la devastación inmediatas y efímeras causadas por los combates: la salud y el desarrollo de las madres y los niños sufren efectos duraderos que perpetran el impacto de la violencia a lo largo de las generaciones; la infraestructura hídrica, la salud y la escolarización sufren el desvío de fondos de su mantenimiento, con impactos a largo plazo en la provisión y calidad de los servicios básicos. Es poco probable que el crecimiento económico y las inversiones se recuperen antes de que las perspectivas de paz sean estables y seguras, y la ruptura de la estabilidad política junto con el surgimiento de un *ethos* de conflicto puede contribuir a un mayor riesgo de derivas autoritarias. Todos estos impactos, a su vez, pueden hacer que las sociedades sean más vulnerables a las trampas de los conflictos y a la reaparición. Es probable que el efecto general de la violencia sea mayor que la suma de sus impactos específicos, debido a los efectos dominó en los que los impactos en un resultado se propagan en una multitud de dimensiones sociales.

LA FRAGILIDAD DE LOS ESTADOS

La fragilidad de los Estados es, sin duda, uno de los factores más determinantes y recurrentes para explicar el surgimiento y persistencia de grupos armados en el siglo XXI. La experiencia comparada en África, Oriente Medio, Asia y, en menor medida, América Latina, muestra que los contextos donde aparecen estos actores coinciden casi siempre con Estados débiles o colapsados, con un aparato institucional incapaz de asegurar la provisión de bienes públicos fundamentales, de garantizar seguridad, de ejercer legitimidad y de canalizar los conflictos sociales por vías pacíficas.

TABLA 5
ÍNDICE DE FRAGILIDAD DE LOS ESTADOS

Sudán	**112,3**	**Nepal**	**95,4**

	(2006)		(2006)
RD Congo	110,1 (2006)	Etiopía	94,6 (2020)
Costa de Marfil	109,2 (2006)	Camerún	93,1 (2014)
Iraq	109,0 (2006)	Líbano	92,7 (2024)
Sudán del Sur	108,4 (2012)	Sri Lanka	92,4 (2006)
Siria	108,1 (2024)	Siria	85,9 (2011)
Sudán	106,2 (2023)	Filipinas	79,2 (2006)
Chad	105,9 (2006)	Mali	77,9 (2012)
República Centroafricana	105,3 (2013)	Azerbaiyán	71,3 (2020)
Afganistán	99,8 (2006)	India	70,4 (2006)
Etiopía	99,3 (2022)	Libia	68,7 (2011)
Yemen	98,1 (2009)	Armenia	64,2 (2020)
Burundi	96,7 (2006)		

Fuente: Elaborado a partir de Fund for Peace.

El Fund for Peace[116] desde 2006 publica cada año un índice de la fragilidad de los Estados, con una puntuación máxima de 120. De los 25 países que aquí analizamos, ninguno supera la media del 50%. Todos están por encima y 18, el 72%, tienen un índice superior a 90, los tres cuartos de la puntuación máxima, lo cual expresa el alto nivel de fragilidad de la mayoría de los Estados, tal como muestro en el cuadro en el que me he aproximado al máximo al inicio de la guerra. La media de todos estos países es de 94,2 puntos. En una escala del 0 al 10, esta media supondría un nivel de fragilidad del 7,85, muy elevado y, por ello, digno de analizar, pues la correlación con la conflictividad armada es evidente.

Que tantas guerras por el poder político se produzcan en Estados frágiles y, a la vez, autocracias por gobiernos muy autoritarios puede parecer una contradicción o una paradoja, sin embargo, no lo es. Hay

una explicación. Aquí la paradoja se disuelve cuando distinguimos el tipo de régimen (autocrático vs. democrático), de la capacidad estatal (fiscal-administrativa, coercitiva, territorial). Muchas guerras del siglo XXI estallan en autocracias frágiles, con regímenes cerrados políticamente, pero con baja potencia infraestructural (recaudan poco, administran mal, gobiernan de forma desigual el territorio). Tienen bastante poder despótico (decidir sin negociar), pero poca capacidad para implementar decisiones en todo el país; cuando llegan shocks (sucesiones, crisis económicas, sequías, protestas), cierran vías no violentas y, al mismo tiempo, dejan oportunidades a las insurgencias. No es, por tanto, una contradicción. La autocracia describe quién decide (cierre político), mientras que la fragilidad describe con qué capacidad el Estado gobierna, en especial cuando hay una tradición estatal patrimonialista. Cuando el Estado se concibe como patrimonio privado del gobernante y su círculo cercano, ha sido señalado por muchos académicos como un factor central en la génesis de conflictos armados por el poder político, sobre todo en contextos poscoloniales. El patrimonialismo favorece a clanes, etnias o regiones cercanas al gobernante, marginando a otros grupos que quedan fuera de los circuitos de redistribución. No se construyen burocracias impersonales ni mecanismos de resolución de conflictos, lo que incentiva que los desacuerdos se tramiten por la fuerza. En contextos de pobreza o dependencia de rentas extractivas, capturar el Estado se vuelve la única vía para acceder a riqueza. Los grupos marginados territorial, étnica o culturalmente perciben que el patrimonialismo concentra beneficios en minorías privilegiadas, lo que alimenta demandas de rebelión. La muerte, debilitamiento o aislamiento de un líder patrimonialista abre disputas internas, muchas veces canalizadas en guerras civiles. Además, la política se militariza, porque las instituciones no ofrecen cauces para competir pacíficamente[117]. Muchos Estados africanos son jurídicamente reconocidos, pero empíricamente débiles. Las élites en el poder gobiernan como jefes patrimoniales, manteniéndose mediante clientelismo, represión y alianzas externas. El poder se disputa con lógica de botín, no de institucionalidad[118].

Varios estudios apuntan también a que la variedad de regímenes autoritarios importa para explicar los conflictos, que la capacidad estatal diferenciada es clave para comprender por qué algunos regímenes autoritarios sobreviven sin guerra y otros colapsan en violencia, y que los procesos de transición no son uniformes, pues las salidas de regímenes personalistas tienden a ser más violentas[119].

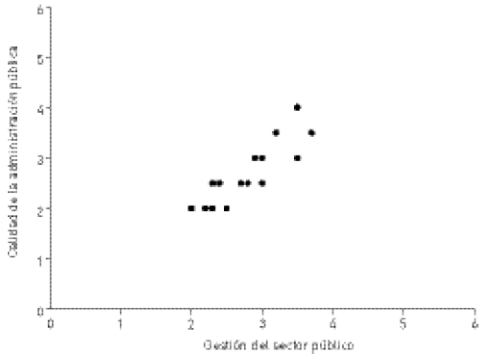
En el siglo XXI, los grupos insurgentes, yihadistas, milicias comunitarias o grupos rebeldes, han encontrado terreno fértil en Estados con estas características. La lógica es clara. La ausencia del Estado en ciertas regiones abre espacios para que actores armados provean seguridad, justicia informal o acceso a recursos. Por ejemplo, los talibanes en Afganistán tras el colapso del Estado después de 2001, Al-Shabaab en Somalia o Boko Haram en el noreste de Nigeria. Cuando las instituciones son corruptas o represivas, parte de la población se siente más representada por líderes insurgentes que por el Gobierno. Los recursos naturales en zonas periféricas (oro, coltán, diamantes, petróleo), a menudo se convierten en fuente de financiamiento para grupos armados en ausencia de una regulación estatal efectiva. Finalmente, en estos contextos hay una crisis de representación política, y la exclusión étnica o religiosa es más probable en Estados débiles, porque carecen de mecanismos institucionales sólidos de inclusión.

Hay tres factores sociopolíticos que refuerzan la fragilidad. Uno es la marginación territorial. Regiones como Darfur (Sudán), el norte de Mali, el noreste de Nigeria o el sur de Yemen, son ejemplos de áreas históricamente marginadas donde grupos armados se fortalecieron. En segundo es la exclusión política. En Estados débiles, las élites centrales monopolizan el poder y excluyen a comunidades periféricas. Esto alimenta agravios y facilita la movilización. En tercer lugar, la baja capacidad administrativa. Sin burocracias efectivas, los Estados frágiles no logran implementar programas sociales ni garantizar el Estado de derecho. La fragilidad estatal no es solo un factor estructural que facilita el surgimiento de grupos armados; es también un catalizador que permite que otras condiciones (agravios étnicos, pobreza, desigualdades, exclusión política) se conviertan en violencia

organizada. En el siglo XXI, donde los conflictos armados tienden a ser prolongados, fragmentados y con múltiples actores, la debilidad del Estado explica no solo el inicio, sino también la persistencia de las guerras. Por eso, el fortalecimiento institucional, la provisión de servicios básicos, la inclusión política y la gobernanza territorial, son condiciones imprescindibles para la prevención de nuevos conflictos armados[120]

El Banco Mundial utiliza varios indicadores para orientar las políticas de desarrollo de los países donantes, de los que hay dos que me parece interesante cruzar en los países que aquí estamos analizando. Son el que indica el promedio del grupo de instituciones y gestión del sector público, y la calificación de la calidad de la administración pública. Nos da una idea aproximada de la calidad de la gobernanza, donde 6 es la puntuación máxima en los dos indicadores. Hay datos sobre 19 países de la lista, y en ninguno de ellos se ha llegado a la puntuación de 4 siendo lo más habitual el 2,5, tal como puede verse en el gráfico siguiente, lo cual nos da una imagen de la pésima calidad de la gobernanza. Dado que los datos son a partir de 2005, he buscado la fecha más aproximada al inicio de la guerra.

GRÁFICO 20
CALIDAD DE LA GOBERNANZA

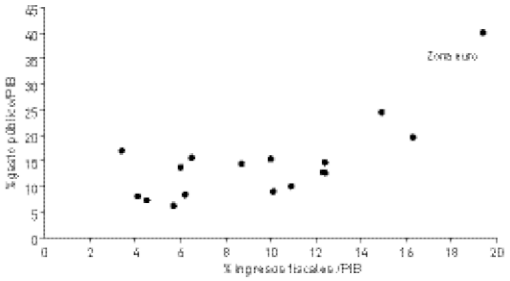


Fuente: Elaborado a partir de Banco Mundial.

Otro indicativo que permite ver la capacidad de un Estado para satisfacer las necesidades básicas de su población, es el porcentaje de sus ingresos fiscales sobre el PIB, esto es, la capacidad recaudatoria para poder repartir estos tributos en áreas esenciales y vitales, como sanidad o educación. Para hacerse una idea, en la zona euro este

porcentaje es del 19,4%, lo que permite que las administraciones públicas puedan tener un gasto equivalente al 40% del PIB. En el gráfico siguiente, muestro la situación de los países de los que disponen datos sobre ambos concetos, al empezar la guerra o en la fecha más próxima.

GRÁFICO 21
CAPACIDADES ECONÓMICAS DEL ESTADO AL EMPEZAR LA GUERRA



Fuente: Elaborado a partir de Banco Mundial.

Al empezar la guerra, había Estados sin apenas capacidad fiscal, como Iraq (0,9% del PIB en 2014), RD Congo (3,4%), República Centroafricana (4,1%), Etiopía (4,5%), Líbano (5,7%), Myanmar (6%), Sudán (6,1%), Afganistán (7%) o Liberia (7,6%). No ha de extrañar, por tanto, que el gasto de las administraciones públicas sobre el PIB sea también muy pequeño en muchos países, como Líbano (6,2%), Etiopía (7,3%), República Centroafricana (8,1%), Costa de Marfil (9%), Sudán (9,7%) o Mali (10%). En los casos en que han existido acuerdos de paz, esta situación supone un inmenso desafío, pues requiere de una gobernanza eficaz, transparente y con capacidad transformadora en el ámbito económico, sin tener que depender totalmente de la ayuda exterior, pues en estos casos aumenta la corrupción y el país pierde la soberanía.

De los países analizados en este libro, su nivel de corrupción al empezar la guerra o en la fecha más próxima, puesto que no han datos anteriores a 2012, es elevadísimo. Según Transparency International[121] que mide los niveles de percepción sobre la corrupción de todos los países, donde 100 significa ausencia total de corrupción y 0 corrupción absoluta, la media es de 25 puntos, un suspenso en toda regla y más en África, con 23 puntos (29 en Asia). Estos contextos no solo padecen

corrupción administrativa o económica, sino un tipo sistémico y políticamente funcional, donde los recursos públicos, las fuerzas armadas, el poder judicial y los contratos del Estado son utilizados como instrumentos de control y recompensa dentro de redes clientelares. En tales condiciones, el poder político se convierte en el principal botín y las luchas armadas por el control del Estado no son tanto ideológicas como distributivas, ya que se combate para apropiarse de las rentas, los ministerios, los presupuestos y las oportunidades de corrupción que acompañan al Gobierno. Este patrón explica por qué muchos grupos rebeldes buscan la inclusión política no solo para participar en la toma de decisiones, sino también para acceder a recursos y privilegios institucionalizados. Por ello, la corrupción no es solo un síntoma del conflicto, sino un factor estructural de su génesis y reproducción, al minar la legitimidad del Estado, alimentar agravios sociales y erosionar la confianza en las vías pacíficas de cambio.

Desde los años noventa, varios académicos han trabajado sobre cómo la debilidad de las instituciones estatales, la falta de legitimidad y la ausencia de capacidad de gobernanza abren la puerta a guerras civiles, insurgencias, violencia etnopolítica o conflictos prolongados. Robert I. Rotberg[122] es uno de los principales teóricos sobre este tema. Su punto de partida es que el Estado moderno existe para proveer bienes políticos, como seguridad, orden, justicia, servicios sociales básicos, infraestructura, y condiciones para el crecimiento económico y la legitimidad política. Cuando el Estado no logra proveer esos bienes de manera suficiente y sostenible, entra en una dinámica de debilidad, fracaso o colapso. Clasifica a los Estados en cuatro categorías: a) Estados fuertes, que proveen ampliamente bienes políticos, sus instituciones son legítimas y funcionales y tienen un alto grado de seguridad, cohesión y gobernanza; b) Estados débiles, que proveen algunos bienes, pero de manera desigual, parcial o limitada. En ellos hay problemas de corrupción, falta de infraestructura, desigualdad regional e instituciones poco efectivas. Persisten tensiones entre grupos sociales o étnicos, con cierto riesgo de violencia, pero sin perder totalmente el control; c) Estados fallidos, que son los incapaces

de proveer seguridad y bienes básicos a gran parte de su población. Su autoridad política está seriamente cuestionada; existe violencia interna generalizada (guerra civil, guerrillas, secesionismo, crimen organizado), la legitimidad se erosiona, pues la población ya no ve al Estado como referente de autoridad legítima y proliferan actores armados no estatales, control de territorios por señores de la guerra y corrupción endémica; d) Estados colapsados que representan la forma extrema del fracaso estatal. El Estado deja prácticamente de existir. No hay autoridad central operativa, ni control sobre el territorio, ni instituciones que funcionen. El poder se fragmenta en manos de clanes, milicias y señores de la guerra, y el territorio se convierte en "zona gris", donde no existe soberanía efectiva ni siquiera mínima. Para este autor, el fracaso estatal es gradual, ya que los Estados suelen pasar de débiles a fallidos y luego —en casos extremos— a colapsados. La fragilidad estatal y el conflicto armado se retroalimentan, pues la debilidad genera conflicto y el conflicto destruye aún más al Estado. En suma, Rotberg desarrolla una tipología funcional de Estados basada en la provisión de bienes políticos, y sostiene que la línea entre Estado débil, fallido y colapsado depende del grado de erosión de la capacidad estatal de garantizar seguridad, justicia, servicios básicos y legitimidad.

Charles T. Call y Elizabeth Cousens[123], en cambio, critican la idea simplista de Estados fallidos. Prefieren hablar de "tipologías de fragilidad", ya que la debilidad estatal se manifiesta en grados y dimensiones diferentes (seguridad, legitimidad, capacidad administrativa). La fragilidad aumenta el riesgo de conflicto armado, pero no lo determina automáticamente, pues intervienen también factores como la exclusión política, la pobreza y los conflictos identitarios.

James D. Fearon y David D. Laitin[124], en su análisis cuantitativo, sostienen que las guerras civiles no se producen por agravios (odio étnico o religioso), sino por las pocas oportunidades estructurales que surgen en los Estados débiles, como baja capacidad administrativa, orografía favorable a guerrillas, baja renta per cápita, etc. En su opinión, los Estados incapaces de controlar su territorio, son más

propensos a conflictos armados persistentes. Los factores que explican qué países han estado en riesgo de guerra civil no son sus características étnicas o religiosas, sino las condiciones que favorecen la insurgencia. Estos incluyen la pobreza, que marca Estados financiera y burocráticamente débiles, y también favorece el reclutamiento de rebeldes, la inestabilidad política, el terreno accidentado y las grandes poblaciones.

Paul Collier y Anke Hoeffler[125], relacionan la fragilidad estatal con la maldición de los recursos y la pobreza. Como ya expliqué, argumentan que los conflictos surgen no tanto por agravios, sino por incentivos económicos. En contextos de Estados frágiles, con recursos naturales y pobreza extrema, los grupos armados encuentran fácil reclutamiento y financiamiento. Los resultados de los autores contrastan con las creencias convencionales sobre las causas del conflicto. Una versión simplificada de estas creencias sería que el agravio genera conflicto, que a su vez genera agravio, que a su vez genera más conflicto. Con este modelo, la única intervención posible es reducir el nivel de agravio objetivo. El modelo de Collier y Hoeffler sugiere que lo que realmente ocurre es que las oportunidades de depredación (controlar las exportaciones de materias primas) causan conflicto, y los agravios que esto genera inducen a las diásporas a financiar más conflictos. El objetivo de la intervención política en este caso es reducir el atractivo absoluto y relativo de la depredación de materias primas y la capacidad de las diásporas para financiar movimientos rebeldes.

Para Robert H. Bates[126], centrado en África, la fragilidad surge de la incapacidad de los Estados de dicho continente para construir instituciones fuertes tras la independencia. Donde no hay instituciones capaces de resolver disputas de forma pacífica, las élites usan la violencia como herramienta política. Bates subraya que los líderes poscoloniales heredaron aparatos estatales precarios y optaron por utilizarlos como instrumentos de patronazgo político más que como mecanismos de gobernanza inclusiva. Según él, la fragilidad surge de que los Estados no pudieron (o no quisieron) construir burocracias meritocráticas (en lugar de consolidar administraciones profesionales,

los gobiernos reforzaron redes clientelares y étnicas para mantener el poder), sistemas fiscales autónomos (la mayoría de los Estados no desarrolló una capacidad impositiva amplia y dependió de exportaciones primarias, lo que los volvió vulnerables a los shocks de precios internacionales). Además de que los gobiernos carecieron de fuerzas de seguridad nacionales cohesionadas y, a menudo, recurrieron a milicias, mercenarios o facciones étnicas, lo que debilitó la autoridad estatal y en vez de institucionalizar el pluralismo político, muchos regímenes reprimieron o cooptaron a la oposición, generando ciclos de exclusión y rebelión.

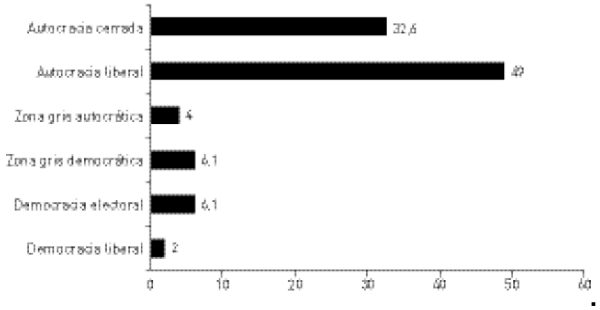
En conjunto, estas perspectivas permiten concluir que la fragilidad estatal no es simplemente un contexto propicio para los conflictos armados, sino un factor causal estructurante, que actúa en múltiples planos: a) institucional (carencia de bienes políticos básicos y mecanismos de resolución pacífica de disputas), b) estructural (oportunidades geográficas y administrativas que facilitan la acción rebelde), c) económico (incentivos ligados a recursos y pobreza que alimentan la movilización armada), y d) histórico-político (trayectorias poscoloniales de construcción estatal incompleta o patrimonialista). Cuando estas dimensiones convergen (déficit institucional, oportunidades estructurales, incentivos económicos y legados históricos de debilidad), el riesgo de guerra civil o violencia prolongada se multiplica. La fragilidad estatal no es solo un síntoma, sino un núcleo generador de dinámicas de conflicto que explica tanto el estallido como la prolongación de muchas guerras contemporáneas.

LAS AUTOCRACIAS Y SUS ELECCIONES COMO FACTORES BELÍGENOS

El ya mencionado V-Dem Institute, en su informe de 2025, hay un cuadro que abarca el periodo 1974-2024, donde todos los países son clasificados, por cada año de ese periodo, en seis categorías: democracias liberales, democracias electorales (hay elecciones, pero sin calidad democrática), zona gris democrática, zona gris autocrática, autocracias electorales y autocracias cerradas. He observado la

situación de los 49 conflictos aquí estudiados, viendo la situación en los tres años anteriores al inicio de la guerra, para ver su posible influencia en el estallido del conflicto. El resultado es abrumador y muy significativo: en el 81,6% de los casos, la situación era de autocracia y solo en el 8,1% existía una democracia, sea cual fuere su calidad. Por tanto, existe un motivo objetivo para el desencadenamiento de serio conflicto armado a partir de la existencia de regímenes autoritarios.

GRÁFICO 22
SITUACIÓN POLÍTICA DE LOS GOBIERNOS EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL INICIO DE LAS GUERRAS, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaborado a partir de V-Dem Institute

Estos datos contradicen la tesis de Barbara F. Walter antes mencionadas, pues los estados de anocracias, que más bien deberían representar las zonas grises, solo abarcan el 10% de los casos[127]. Se trata de dos marcos conceptuales distintos: el de Walter es de escala de transición (Polity IV), y el V-Dem es de tipología electoral-institucional. La primera pregunta es, sin duda, ¿por qué los regímenes autocráticos (cerrados o electorales) han sido, en promedio, más belígenos y proclives al inicio de guerras (internas y externas) en el siglo XXI, mientras que eso ocurre mucho menos en democracias consolidadas? La primera respuesta es que la combinación de incentivos de supervivencia de élites poco responsables ante la ciudadanía, la baja transparencia informativa y la ausencia de canales institucionales para tramitar conflictos hacen que las autocracias recurran más a la represión y a la violencia, incluida la guerra, como instrumento de política. En las democracias, en cambio, los costes políticos, la competencia electoral real, la rendición de cuentas y los

canales legales de disenso, reducen tanto la probabilidad de iniciar guerras interestatales como el estallido de guerras civiles. También hay que aclarar que el derrocamiento de un régimen autocrático no siempre conduce a una democracia, pues puede ser sustituido por otra autocracia[128].

TABLA 6
GUERRAS POR EL PODER POLÍTICO EN EL SIGLO XXI

	AÑOS	SITUACIÓN EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL INICIO DE LA GUERRA
África (17)		
Angola	**1998-2002**	**Autocracia cerrada**
Burundi	**1991-2008**	**Autocracia cerrada**
Camerún	**Desde 2014**	**Autocracia electoral**
Costa de Marfil	**2002-2011**	**Autocracia electoral**
Chad	**2005-2009**	**Autocracia electoral**
Etiopía (Fano-Amhara)	**Desde 2022**	**Autocracia electoral**
Etiopía (Tigray)	**2020-2022**	**Autocracia electoral**
Liberia	**1999-2003**	**Autocracia cerrada**
Libia	**2011-2020**	**Autocracia cerrada**
Mali	**Desde 2012**	**Democracia electoral**
República Centroafricana	**Desde 2013**	**Autocracia electoral**
RD Congo	**Desde 1996**	**Autocracia cerrada**
Sudán (Janjaweed)	**2001-2010**	**Autocracia electoral**
Sudán-SLM/A (Darfur)	**2003-2006**	**Autocracia electoral**
Sudán-RSF	**Desde 2023**	**Autocracia cerrada**
Sudán/Sudán del Sur	**1983-2004**	**-----**

	AÑOS	SITUACIÓN EN LOS TRES AÑOS ANTERIORES AL INICIO DE LA GUERRA
Sudán del Sur	2011-2018	Autocracia cerrada
Asia (7)		
Afganistán	1979-2022	Autocracia cerrada
Filipinas-MILF	1969-2014	Autocracia cerrada
India (Jammu y Cachemira)	Desde 1990	Democracia electoral
Indonesia (Aceh)	1976-2005	Autocracia electoral
Myanmar-NUG	Desde 2021	Autocracia cerrada
Nepal	1996-2006	Autocracia electoral
Sri Lanka	1972-2009	Democracia electoral
Europa (2)		
Armenia/ Azerbaiyán	2020-2023	Zona gris democrático Zona gris autocrático
Chechenia	1994-2007	-----
Oriente Medio (5)		
Iraq	Desde 1991	Autocracia cerrada
Líbano/Israel	Desde 2024	Autocracia electoral (Líbano)
Siria	2011-2024	Autocracia electoral
Siria	2025	Autocracia cerrada
Yemen	Desde 2009	Autocracia electoral
Total 31 (63,3% del total de guerras)		12 autocracias cerradas 13 autocracias electorales 2 zonas gris 3 democracia electoral

Fuente: Elaborado a partir de V-DEM Institute.

Si observamos únicamente los casos de las guerras por el poder político, como se aprecia en la tabla anterior, la proporción es similar, con un 40% de los casos con autocracias cerradas, el 43,3% de autocracias electorales (83,3% entre las dos), un 6,7% en zona gris y

un 10% con democracias electorales. Razones para rebelarse, las hubo.

Veamos los mecanismos causales por los que las autocracias son tan frecuentes y se inician más guerras en su seno:

- Los incentivos de liderazgo y la lógica de supervivencia. Cuando la coalición ganadora es pequeña (típica de autocracias), los líderes maximizan su supervivencia con bienes privados y represión; pueden arriesgar guerras, externas o internas, si ello refuerza su control. Los líderes personalistas carecen de frenos internos, y tienden a sobreestimar sus capacidades y a escalar crisis[129].
- Costes de audiencia, señales y errores de cálculo. En las democracias, los costes de audiencia (castigo electoral, parlamentario o mediático) hacen más creíbles las señales y desincentivan aventuras militares. En las autocracias, en cambio, la opacidad y la censura debilitan las señales creíbles y facilitan el error de cálculo que termina en guerra[130].
- Ausencia de canales de disenso y efecto represión-protesta. La represión, la proscripción de partidos/medios y elecciones sin integridad bloquean la vía institucional, elevando la utilidad esperada de la insurgencia o del uso estratégico de la violencia por la oposición. La represión tiende a generar espirales (represión-resistencia-represión) que desembocan en guerra civil[131].
- Exclusión étnica y desigualdades horizontales. Las autocracias competitivas suelen instrumentalizar identidades, excluyendo grupos de los recursos y del Estado. La exclusión étnica/política aumenta los incentivos para rebelarse; donde hay oportunidades organizativas mínimas, esto precipita guerra. Además, como ha señalado Gurr con su término privación relativa, la discrepancia entre lo que las personas creen que merecen y lo que realmente creen que pueden obtener, es causa frecuente de conflictos[132].
- Capacidad estatal y oportunidad insurgente. El riesgo de

insurgencia depende de la debilidad estatal (baja capacidad fiscal/administrativa, geografía favorable, grandes periferias, etc.), que son rasgos frecuentes en autocracias patrimoniales[133].

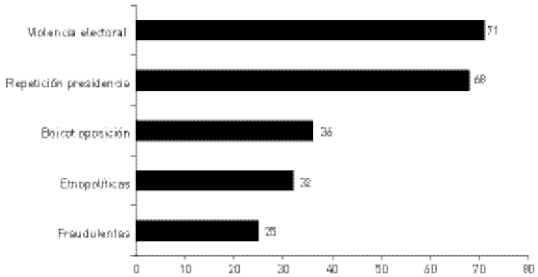
- Autocracias electorales: fraude, milicias y ciclos de violencia. Donde hay elecciones sin integridad, por clientelismo, intimidación o manipulación mediática, las campañas disparan la violencia pre y poselectoral. Esto puede escalar hasta provocar un conflicto armado[134].
- Economía política de los recursos y maldición en regímenes cerrados. La renta de los recursos en autocracias financia aparatos coercitivos y patronazgo, incentiva la exclusión territorial y aumenta la probabilidad de guerras por secesión/control de rentas[135].
- Militarización. Para prevenir golpes, muchos autócratas fragmentan las fuerzas armadas y crean guardias leales; esto reduce la eficacia militar, eleva el riesgo de cálculo en crisis externas y, en el interior del país, facilita la represión descoordinada que escalona hacia la violencia[136].

Como ya he señalado, existe una cierta vinculación, aunque no determinista, entre fragilidad Estatal y autocracia. La fragilidad empuja hacia arreglos autoritarios (securitización, neopatrimonialismo, rentas) y muchas autocracias reproducen fragilidad (personalización, exclusión y subinversión en capacidad). Romper este bucle exige capacidad estatal, pacto fiscal, arreglos inclusivos y rendición de cuentas, secuenciados de forma contextual. En relación al patrimonialismo, cuando el aparato Estatal es débil, el poder se organiza vía clientelas personales; quienes controlan la cúspide, transforman el Estado en un instrumento privado, bloqueando controles y abriendo la puerta a liderazgos autoritarios.

Si observamos las últimas elecciones celebradas antes del inicio de las guerras, se observa que, en el 68% de los casos, los nuevos presidentes (hubo una mujer) repetían cargo, y el 18% llevaban ya más de 20 años en el poder. Un tercio fueron elecciones con una marcada base étnica y una cuarta parte fueron fraudulentas o se debía votar a

solo un partido y en el 36% de los casos hubo boicot por parte de la oposición. Un presidente que consigue reelegirse repetidamente suele beneficiarse de redes clientelares, de control del aparato estatal o de cambios constitucionales que limitan la alternancia. Eso bloquea la competencia, provoca frustración en la oposición y la población percibe que la alternancia democrática es casi imposible por vías pacíficas, lo que eleva el atractivo de la vía armada. Una permanencia tan larga, además, suele consolidar regímenes personalistas o neopatrimoniales, sistemas que debilitan las instituciones, porque la lealtad se concentra en la figura del líder. Cuando un presidente veterano se enfrenta a una pérdida de legitimidad o a crisis sucesorias, los rivales pueden percibir que la única manera de abrir espacio político es mediante la violencia. Cuando la legitimidad de un líder descansa en la pertenencia étnica, las instituciones se interpretan como monopolizadas por un grupo concreto y las minorías se sienten excluidas y vulnerables, lo que incentiva movilizaciones identitarias. La etnopolítica convierte la competencia por el poder en una competencia de supervivencia colectiva. Esto radicaliza las disputas, porque perder las elecciones no significa simplemente perder cargos, sino perder seguridad o acceso a recursos vitales. Finalmente, el fraude electoral erosiona la confianza en las instituciones y convierte las elecciones en un ritual vacío. La oposición, sin cauces legales para impugnar, tiende a movilizarse en la calle y si el régimen reprime esas protestas, la escalada hacia la violencia es más probable. Cuando se suman estos factores, se bloquea la vía institucional de acceso al poder, y la oposición puede percibir la violencia como el único mecanismo para modificar el *statu quo*. Cuando el poder político es el principal acceso a recursos y a seguridad, el cierre de todas las vías pacíficas de alternancia multiplica el riesgo de guerra. En este sentido, los datos sugieren que el desencadenamiento de los conflictos estaba incubado en el modo en que se estructuraba el acceso al poder.

GRÁFICO 23
LAS ELECCIONES PREVIAS AL ESTALLIDO DEL CONFLICTO ARMADO, EN PORCENTAJES



Fuente: Elaboración propia.

La interacción del poder y las expectativas de apoyo popular de los grupos armados con las políticas de tolerancia o represión de los gobiernos, determina las estrategias de participación electoral que persiguen los grupos[137]. Pero lo más significativo es que, en el 71% de los países, hubo protestas y manifestaciones con víctimas mortales, meses antes o justo después de las elecciones. En países con fragilidad estatal o regímenes autoritarios, las elecciones no funcionaron como mecanismos de integración, sino como momentos de alto riesgo que exacerbaron tensiones políticas y étnicas, a menudo derivando en violencia letal. La coincidencia entre elecciones y brotes violentos indica que, lejos de prevenir conflictos, los comicios en estos contextos se convirtieron en desencadenantes o aceleradores de enfrentamientos armados[138]. En regímenes autoritarios o semiautoritarios, las elecciones no cumplen la función clásica de canalizar la competencia política de forma pacífica, sino que se convierten en momentos de máxima vulnerabilidad y confrontación. Esto ocurre por tres dinámicas principales: a) la instrumentalización del poder electoral. La reelección sistemática de presidentes (68%), muestra que las elecciones sirven más como un mecanismo de legitimación formal que como una competencia abierta. Cuando el resultado está prácticamente predeterminado, los grupos opositores perciben que la vía institucional está cerrada y que la única salida es la movilización violenta; b) la violencia como extensión de la política electoral. El hecho de que el 71% de los casos registre muertes en torno al proceso electoral, evidencia que las élites recurren a la coerción, la represión o la manipulación étnica para garantizar resultados. Las elecciones, en vez de pacificar, generan un efecto belígeno, al ser vistas como la última oportunidad de acceso o exclusión del poder; c) crisis de legitimidad

acumulativa. En contextos de Estados frágiles, con instituciones judiciales y parlamentarias débiles, los comicios no resuelven disputas, sino que las profundizan. La represión, el fraude y la exclusión de grupos étnicos o territoriales convierten a las elecciones en un desencadenante inmediato de conflictos que ya estaban incubados.

En estos contextos, las elecciones son catalizadores de guerra, más que garantes de paz. No generan inclusión, sino que cristalizan los clivajes sociales y étnicos, refuerzan el personalismo presidencial y desencadenan violencia al cerrar la vía política. En regímenes autocráticos, los comicios son percibidos como una lucha existencial por el poder, lo que transforma el acto electoral en un detonante belígeno.

Cambiemos la perspectiva para ver el anverso de la cuestión, saliendo de las guerras por el poder político. La experiencia acumulada de las revoluciones y transiciones no violentas de los últimos cincuenta años muestra un patrón claro, ya que en la mayoría de los casos estos movimientos han desembocado en mejoras sustantivas de los sistemas políticos, en términos de pluralismo, libertades públicas y apertura institucional, aunque con trayectorias desiguales en el largo plazo. En primer lugar, la acción colectiva no violenta ha demostrado una capacidad singular para deslegitimar regímenes autoritarios, romper los monopolios de poder y abrir espacios de negociación sin destruir el tejido institucional existente. Al no recurrir a la guerra, estas revoluciones evitan la lógica de la victoria militar que tiende a producir sistemas cerrados, personalistas o militarizados. Por el contrario, suelen generar coaliciones amplias, con participación de sindicatos, iglesias, estudiantes, organizaciones profesionales y ciudadanía organizada que empujan reformas políticas en clave inclusiva. Casos paradigmáticos como Polonia (1989), Checoslovaquia (1989) o Sudáfrica (1990-94) ilustran cómo el tránsito negociado y no violento permitió crear parlamentos pluralistas, sistemas de partidos competitivos y marcos constitucionales más respetuosos de derechos fundamentales.

En segundo lugar, las revoluciones no violentas tienden a producir

resultados menos destructivos y más sostenibles, pues no destruyen infraestructuras ni economías, preservan la administración estatal, evitan desplazamientos masivos y no generan ejércitos paralelos. Esto facilita que, tras el cambio de régimen, pueda consolidarse un nuevo orden político sin el lastre de la devastación bélica. Es por ello que las transiciones en Europa Central y del Este en 1989-1991 tuvieron un impacto rápido y profundo en la democratización, mientras que revoluciones armadas como la iraní (1979) o la libia (2011), derivaron en sistemas represivos o fragmentados.

TABLA 7
REVOLUCIONES NO VIOLENTAS

PAÍS	PERIODO	SITUACIÓN PREVIA	AL CABO DE TRES AÑOS
Filipinas	1986	Autocracia electoral	Democracia electoral
Chile	1988-1990	Autocracia cerrada	Democracia electoral
Polonia	1989	Autocracia electoral	Democracia liberal
Alemania Oriental	1989	Autocracia cerrada	Democracia liberal
Checoslovaquia	1989	Autocracia cerrada	Democracia liberal
Estonia	1987-1991	Autocracia cerrada	Democracia electoral
Letonia	1987-1991	Autocracia cerrada	Democracia electoral
Lituania	1987-1991	Autocracia cerrada	Democracia liberal
Mongolia	1990	Autocracia cerrada	Autocracia cerrada
Indonesia	1998	Autocracia electoral	Democracia electoral
Serbia	2000	Autocracia electoral	Democracia electoral
Georgia	2003	Autocracia electoral	Democracia electoral
Ucrania	2004	Autocracia electoral	Democracia electoral
Nepal	2006	Autocracia cerrada	Democracia electoral
Túnez	2010-2011	Autocracia electoral	Democracia electoral
Armenia	2018	Zona gris democrática	Democracia electoral
Sudán	2018-2019	Autocracia electoral	Autocracia cerrada

Fuente: Elaboración propia a partir de V-DEM Institute.

Como puede verse en la tabla anterior, de los 17 casos en los que han existido movimientos no violentos para cambiar el régimen político, 15 tuvieron resultado positivo, el 88%, pasando de autocracias a democracias. Solo en un caso quedó igual (Mongolia) y en otro empeoró la situación (Sudán).

Por último, estos movimientos logran, en muchos casos, instalar nuevas normas políticas y culturales, como la aceptación de la competencia electoral, la libertad de expresión o la vigilancia ciudadana sobre el poder. Aunque algunos procesos han sufrido regresiones (Georgia, Túnez, Sudán), el cambio inicial generó una apertura que modificó profundamente la relación entre gobernantes y gobernados, creando nuevos actores políticos y una memoria colectiva de resistencia civil que perdura. En suma, los éxitos observados en la mayoría de estas revoluciones no violentas no radican solo en el cambio de régimen inmediato, sino en que han ampliado el horizonte democrático y cívico de sus sociedades, reforzando la idea de que el poder puede cambiarse sin destruir el país y que la legitimidad política nace de la participación y el consenso, no de la fuerza. Este es un contraste decisivo con las guerras civiles o insurgencias armadas, que, aunque derroquen regímenes autoritarios, suelen dejar tras de sí estructuras políticas debilitadas, militarizadas o excluyentes.

DE LA 'BURBUJA DE LA TRIBU' A LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA, PASANDO POR LOS INCENTIVOS DE OPORTUNIDAD

Varias veces he tenido que preguntarme, para buscar respuestas, sobre como las personas construyen y se unen a grupos con afinidades compartidas, sea por convicción o por persuasión externa, de forma inducida, para después integrarse en un grupo armado dispuesto a empezar una guerra para conquistar el poder político. Sabemos que los seres humanos tienden a agruparse en torno a identidades y afinidades comunes, y que estas pueden ser preexistentes (etnia, religión, lengua, región, clase social, experiencias de exclusión, etc.) o fabricadas, construidas y reforzadas, mediante relatos de victimización común, agravios históricos, símbolos nacionales o discursos de injusticia, por ejemplo. Podemos decir, por tanto, que la integración en un grupo armado que busca conquistar el poder político combina varios elementos, como las afinidades previas (etnia, religión, territorio, agravios), la convicción propia (creencia en la causa), la persuasión inducida (propaganda, coerción, incentivos, presión social) o por procesos psicológicos y grupales (identidad social, obediencia, cohesión, sentido de propósito). En la práctica, casi nunca se trata de un único factor: los jóvenes entran al grupo porque viven simultáneamente exclusión estructural, un discurso movilizador y una presión de pares, que juntos los empujan hacia la militancia armada.

Si introducimos la idea de la burbuja de la tribu, es decir, la tendencia a estar fuertemente condicionado por el entorno inmediato (familia, aldea, barrio, etnia, religión, grupo de pares), los factores de adhesión a grupos armados se entienden aún mejor. Por "tribu" entiendo algo más que el tópico estereotipado del individuo primitivo que vive en una choza; me refiero más bien a la "comunidad" más

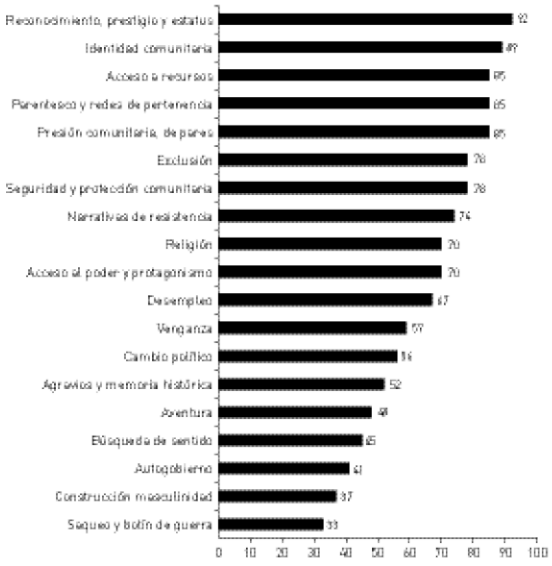
cercana, donde hemos nacido y crecido. El entorno inmediato define qué es normal, qué es honorable, quién es enemigo y quién es aliado. La percepción de la realidad externa llega filtrada por relatos compartidos en el círculo social cercano, lo cual limita la posibilidad de cuestionar o contrastar. En vez de "burbuja", también podemos usar lo que comentaré después de Amartya Sen, cuando recomienda no ser "prisioneros rígidamente encarcelados en pequeños contenedores". Según el antropólogo estadounidense Clifford Geertz[139], los seres humanos viven dentro de "espesas redes de significado" que son locales y comunitarias; la burbuja tribal es precisamente esa red que da sentido a las decisiones. La convicción propia no siempre es fruto de un análisis racional e individual, sino de haber internalizado la narrativa dominante de la comunidad. Lo que se percibe como "mi convicción" es, en gran parte, la convicción de la tribu. La persuasión inducida funciona más fácilmente en contextos tribales cerrados, porque se difunde a través de líderes locales (imanes, ancianos, jefes de clan, excombatientes admirados, etc.). La persuasión externa entra reforzada por la autoridad tribal y se convierte en mandato moral.

Las dinámicas de grupo en burbujas tribales son las siguientes: a) presión de pares, cuando casi todos los jóvenes del entorno se alistan y quedarse fuera equivale a traición o cobardía; b) honor y vergüenza, cuando las categorías comunitarias pesan más que la reflexión individual; c) protección colectiva, cuando se ve al grupo armado como garante de la seguridad de la comunidad frente a enemigos externos (Estado, otra etnia, otra milicia, etc.); d) memoria oral compartida, con historias de agravios, masacres pasadas o héroes del clan, que se transmiten en la burbuja y se actualizan como motivo de lucha. A partir de aquí, la burbuja ayuda a construir las imágenes de enemigo. En burbujas tribales, el enemigo es definido colectivamente. Puede ser el Estado central que margina a la comunidad, un grupo vecino con quien hubo conflictos por tierras o recursos, o un actor externo, interpretado a través del prisma comunitario. Este mecanismo simplifica la realidad, pues todo lo que viene de fuera se percibe como amenaza. La pertenencia a un grupo armado, pues, raramente surge de una elección puramente individual. En contextos de fuerte apego

comunitario, la burbuja de la tribu actúa como catalizador que define las convicciones (lo que parece decisión personal es convicción socialmente inculcada), potencia la persuasión inducida (porque circula dentro de redes de confianza) y reduce la agencia individual, generando presión para integrarse a la lucha. Por eso, en muchas guerras civiles contemporáneas la adhesión juvenil a grupos armados no puede entenderse sin este marco tribal o comunitario, pues la burbuja crea el ecosistema perfecto donde convicción y persuasión se entrelazan.

Intentar cuantificar los principales incentivos que puedan tener quienes en suman a grupos armados, con el fin de hacer una guerra por el poder político, es una tarea imposible, pues requeriría encuestar a un importante número de combatientes, y de diferentes contextos. A pesar de esta limitación metodológica, y mirando los contextos políticos, culturales, históricos, sociales y económicos de los momentos en que los países aquí analizados entraron en guerra, y sin más pretensión de dar una orientación de los factores que parecen más relevantes, hay bastantes que se repiten en la mayoría de las situaciones, por lo que merecen atención para intentar entender los motivos que impulsan a las personas, en su mayoría hombres jóvenes, a estar dispuestos a participar en una guerra.

GRÁFICO 24
APROXIMACIÓN ORIENTATIVA DE LOS PRINCIPALES INCENTIVOS PARA ESTAR EN UN GRUPO ARMADO Y PARTICIPAR EN UNA GUERRA, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

Como puede comprobarse en el gráfico anterior, y volviendo a señalar que se trata solo de una aproximación cuantitativa, los resultados son bastantes sorprendentes y muy significativos, que pueden ayudarnos a entender la misma naturaleza de las guerras, a partir de los incentivos que las provocan o, al menos, permiten hacerlas. La búsqueda del reconocimiento, el prestigio y el estatus personal tiene un peso enorme, lo que desmitifica de buenas a primeras el carácter glorioso, épico, patriótico y altruista que se atribuyen a los guerreros. Súmase a ello el alto porcentaje de la búsqueda a un acceso a los recursos que se deriven de la guerra, que incluye también el hecho de tener asegurado el alimento diario y quizás una paga económica (la milicia como empleo). El acceso al poder político y tener un protagonismo en el futuro del país en caso de ganar la guerra, puede añadirse a los factores antes mencionados, con lo que el factor de mejora personal adquiere una gran relevancia, y está por encima de cualquier consideración política, aunque el sentido de exclusión y el cambio político estén también presentes en la lista, pero en menor medida. El cálculo individual termina pesando más que las grandes banderas ideológicas que se esgrimen como justificación[140]. En el contexto de un conflicto armado, el reconocimiento de los actores armados no estatales es importante, pero puede tener consecuencias tanto positivas como negativas. Los resultados de las prácticas de reconocimiento son difíciles de predecir y esta ambivalencia no puede resolverse por completo[141].

¿Quiere decir esto que, en la mayoría de los grupos armados, la ideología pesa poco? Hace unos años, hice un estudio al respecto[142] donde pude comprobar que, en la mayoría de los casos, de los 45 analizados, los grupos armados eran poco ideológicos y se movían por otros intereses. Hay un estudio interesante de Schubiger y Zelina[143] que, al contrario de lo que acabo de señalar, sostiene que la ideología es un elemento central en la dinámica de los grupos armados, no solo como justificación discursiva, sino como mecanismo de cohesión, movilización y regulación de la violencia. Critican los enfoques excesivamente materialistas e invitan a integrar la ideología como

variable clave en el análisis de conflictos armados. Pero coincido, sin embargo, cuando prestamos atención a su definición de la ideología en los grupos armados, pues dicha ideología no se entiende solo como doctrina abstracta, sino como un conjunto de creencias, narrativas y marcos interpretativos que dan sentido a la acción violenta, en que puedo estar más de acuerdo. Para ellas, la ideología actúa en tres niveles: cognitivo (provee un marco explicativo sobre el enemigo, la injusticia y los objetivos de la lucha), normativo (ofrece criterios sobre lo que es legítimo o ilegítimo en la guerra, incluyendo la violencia contra civiles) y práctico (organiza la acción colectiva, disciplina interna y proyección externa del grupo). Este análisis busca superar la dicotomía codicia vs. agravio (Collier y Hoeffler, 2004), mostrando que la ideología es un recurso híbrido, esto es, puede ser tanto un instrumento estratégico como una convicción genuina, y propone entender la ideología como una variable intermedia que conecta estructuras materiales, identidades colectivas y decisiones estratégicas.

La entrada en la violencia organizada se entiende mejor si partimos de una premisa incómoda, de que los incentivos dominantes suelen ser íntimos, situacionales y aspiracionales. En entornos donde la vida cotidiana ofrece poco reconocimiento, las milicias prometen algo tan tangible como un nombre, un rol y una audiencia. El uniforme, el arma y el estatus dentro de la cadena de mando convierten la pertenencia en una biografía alternativa. Ese ascenso simbólico es un motor poderoso, pues otorga prestigio local, pertenencia a una fraternidad y la expectativa de que otros —enemigos, autoridades, vecinos— te vean y te teman. Cuando ese capital de honor se acopla a beneficios materiales (alimento estable, una paga, botín, acceso preferente a rentas ilícitas o a empleos ligados a la economía de guerra), la milicia deja de ser excepcional y se vuelve un empleo con carrera. La promesa de poder —o, al menos, de poder participar del reparto futuro— cierra el triángulo: reconocimiento, recursos y relevancia política. En conjunto, el vector de "mejora personal" pesa más que las banderas que se agitan en público. Esta lectura desmonta la épica, pues la guerra no surge de ideales puros sino de catálogos de incentivos

individuales agregados, cuidadosamente activados por emprendedores de la violencia que ofrecen recompensas selectivas, identidad y protección, muchas veces ligadas al control de las propias comunidades[144].

El segundo elemento que quiero destacar, es la combinación de tres factores muy ligados entre sí, y presentes en casi todas las guerras analizadas: la identidad comunitaria de los combatientes, la presión comunitaria, de pares, y la influencia del parentesco, las redes de pertenencia y el círculo de amistades, como factores que impulsan a apuntarse a una guerra. Un aspecto fundamental para comprender los incentivos que llevan a un joven a enrolarse en un grupo armado no se explica solo por motivaciones individuales de estatus, reconocimiento o recursos materiales, sino también por dinámicas sociales y comunitarias[145]. En contextos de guerra o preguerra, la presión de pares y la influencia del parentesco y las redes de pertenencia se convierten en motores decisivos. La familia, el clan, la etnia, la aldea o el barrio generan un entramado de expectativas compartidas. Si los hermanos mayores, primos o vecinos se unen a la lucha, el joven siente que debe seguir el mismo camino, a riesgo de ser señalado como cobarde o traidor. En sociedades con fuertes estructuras comunitarias, negarse a participar en la guerra puede significar aislamiento social, pérdida de prestigio o incluso represalias. Del mismo modo, el círculo de amistades juega un papel psicológico enorme. Muchos combatientes han relatado que se unieron "porque todos mis amigos lo hicieron" o porque "no quería quedarme solo en el pueblo". Aquí se activa lo que en psicología social se llama conformidad grupal y lo que en estudios de violencia política se identifica como efecto de pares, que se refiere a la influencia que ejercen los iguales (amigos, vecinos, compañeros de edad, miembros del mismo grupo social) sobre las decisiones y comportamientos de un individuo. En el contexto de la presión comunitaria para unirse a un grupo armado, significa que un joven se siente impulsado a enrolarse porque otros de su entorno cercano ya lo han hecho o esperan que él lo haga. El efecto de pares convierte una decisión individual en un acto casi inevitable dentro de un círculo social, donde la presión y la imitación superan las motivaciones

puramente racionales. En escenarios de marginalización estatal o ausencia de empleo, estas redes ofrecen no solo pertenencia, sino también un sentido de identidad y de destino compartido, reforzando la percepción de que enrolarse es una obligación moral, más que una elección individual. De hecho, la búsqueda de un sentido a la vida, así como la construcción de la masculinidad vinculada a la "hombría", están también presentes en la lista. En suma, la decisión de sumarse a un grupo armado no suele ser estrictamente personal ni puramente ideológica, sino que está profundamente anclada en la presión social inmediata. La guerra, entonces, se convierte en una experiencia de comunidad armada, donde la pertenencia y la lealtad pesan más que el cálculo racional, y donde la línea entre convicción y obligación se difumina bajo el peso de los lazos comunitarios[146].

La importancia de lo local (aldeas, pueblos, ciudades) en el reclutamiento y movilización para conflictos armados es fundamental, pues lejos de ser escenarios pasivos, las comunidades locales son el campo de batalla primario para la conquista de corazones, mentes y combatientes. Lo local no es un simple escenario donde sucede la guerra. Es la fuente principal de reclutamiento, la base logística, el motivo de la lucha y la clave para la legitimidad. Ignorar la dinámica local (los agravios específicos, las redes sociales, las economías de guerra) condena al fracaso cualquier estrategia para prevenir o resolver un conflicto armado. Para entender por qué la gente se une a una guerra, hay que empezar por escuchar lo que pasa en su aldea, en su pueblo, en su barrio. Dicho esto, no comparto totalmente las tesis de Kalyvas[147] sobre las dinámicas de micronivel, para quien "la guerra civil ofrece oportunidades irresistibles para hacer daño a los enemigos de todos los días", por lo que los individuos no pueden ser tratados como actores pasivos, manipulados o invisibles, pues el control territorial requiere de la colaboración exclusiva de civiles individuales. Este autor ha sido bastante criticado por sobredimensionar el peso de las motivaciones privadas y locales, relegando factores ideológicos, étnicos, religiosos o programáticos. Se le acusa de "micro-reduccionismo" al explicar la violencia casi exclusivamente por rivalidades locales, cuando muchas veces los

móviles colectivos (identidad étnica, ideología, religión) son centrales. También generaliza a partir de casos limitados, simplifica la complejidad de las motivaciones en categorías binarias (colaborador/traidor) e ignora la dimensión transnacional y regional de muchos conflictos actuales.

Algunos de los incentivos más poderosos para enrolarse en un grupo armado y lanzarse a la guerra por el acceso al poder político, se encuentran en el terreno simbólico y emocional de las narrativas de resistencia, de victimización y de agravios históricos. Los movimientos armados rara vez se legitiman ante sus bases solo con promesas de recursos o de estatus; necesitan construir un relato colectivo que explique por qué la violencia es necesaria y legítima. En contextos de opresión, discriminación o exclusión política, las organizaciones rebeldes suelen articular discursos de resistencia que presentan al grupo como heredero de una lucha prolongada contra la injusticia. Esta narrativa dota de sentido a la participación en la guerra, pues no se trata solo de enrolarse por interés personal, sino de integrarse en una gesta colectiva de liberación. La victimización colectiva también desempeña un papel central. Cuando comunidades enteras han sufrido violencia estatal, represión, masacres o marginación estructural, se genera una percepción de deuda histórica y de dignidad ultrajada. Reclutadores y líderes políticos explotan esa herida, presentando la insurgencia como el único camino para restaurar el honor, garantizar la supervivencia de la comunidad y hacer justicia frente a un Estado visto como enemigo. En este sentido, el enrolamiento no se percibe como una elección puramente individual, sino como una obligación moral hacia la memoria de las víctimas y hacia la comunidad que aún padece. De igual forma, el peso de la memoria histórica (batallas pasadas, episodios de resistencia, traiciones, tratados incumplidos o represión colonial), alimenta la idea de una continuidad histórica de la lucha. Jóvenes que no vivieron directamente la opresión inicial pueden ser interpelados por relatos transmitidos por padres, ancianos, maestros o líderes religiosos, que sitúan la violencia actual en una larga cadena de agravios. Esta historización del conflicto convierte la adhesión al grupo armado en un acto de fidelidad a la identidad

colectiva y a los antepasados, cargado de legitimidad simbólica. En suma, el agravio y la memoria constituyen un recurso movilizador tan fuerte como las promesas materiales. Son el cemento emocional que permite transformar resentimientos individuales en acciones colectivas de alto costo, justificando la guerra como un deber histórico y moral. Por ello, en muchos conflictos la narrativa del agravio ha demostrado ser un motor de reclutamiento, incluso cuando las condiciones materiales de vida ofrecían pocas ventajas reales a los combatientes[148].

Finalmente, destaco también el rol de la venganza como incentivo, pues es un factor de enorme peso en múltiples contextos de conflicto. La venganza opera tanto a nivel individual como colectivo, transformándose en un poderoso motor de reclutamiento y de cohesión grupal. Jóvenes y adultos se suman a grupos armados movidos por la experiencia personal de pérdida (un familiar asesinado, una violación, una humillación pública o el saqueo de bienes) que se perciben como agravios intolerables. El deseo de vengar la muerte de un hermano, padre o amigo puede convertirse en un imperativo moral que legitima la violencia, transformando el dolor en acción. Aquí la venganza adquiere la forma de justicia sustitutiva, pues ante la incapacidad o ausencia del Estado para ofrecer justicia imparcial, la persona considera que solo a través de las armas puede reparar el agravio. La venganza no se limita a la esfera personal, sino que se integra en narrativas étnicas, religiosas o nacionales. Comunidades enteras se sienten obligadas a vengar agravios históricos sufridos a manos de otras comunidades o del Estado central. Se crean ciclos de violencia recíproca en los que cada ataque justifica el siguiente. En guerras civiles como las de Sudán, Liberia, Bosnia o Afganistán, los discursos de líderes rebeldes y políticos exacerbaron la memoria de masacres previas para legitimar nuevas rondas de violencia. Líderes insurgentes y élites políticas manipulan el sentimiento de venganza para movilizar a sus bases. Transforman tragedias privadas en causas públicas, convirtiendo al mártir en emblema colectivo. Esta narrativa ofrece a los combatientes no solo una motivación emocional inmediata, sino también un marco político: vengar a los caídos equivale a luchar por la dignidad y el poder de la propia comunidad. La venganza como

motivación es particularmente peligrosa porque genera una lógica de espiral interminable, ya que cada acto vengativo alimenta un nuevo agravio que, a su vez, motiva más venganzas. Este fenómeno prolonga y radicaliza los conflictos, bloqueando procesos de reconciliación y haciendo más difíciles las negociaciones de paz[149]. Después de la destrucción de Gaza, con 70.000 muertos, el 90% de las casas destruidas, el hambre y 100.000 toneladas de bombas lanzadas en dos años, ¿cómo evitar que los niños de ahora se conviertan en terroristas en el futuro, por venganza o poder superar el odio acumulado en estos años?

Vemos, por tanto, una aparente paradoja o contradicción en la que, en los grupos armados del presente siglo que han hecho guerras para alcanzar el poder político, sus dirigentes y sus programas pongan el énfasis en lograr la autodeterminación, el reparto del poder político, la democracia, el control de los recursos naturales o derrocar al Gobierno, entre otros aspectos, mientras que los principales incentivos que tienen los hombres jóvenes para alistarse a dichos grupos armados y participar en la guerra, sean la búsqueda de un reconocimiento, prestigio y estatus personal, la identidad comunitaria, las presiones comunitaria y de pares, el parentesco y las redes de pertenencia o la promesa de acceso a los recursos materiales obtenidos por la guerra, y no tanto las cuestiones puramente políticas. Los líderes y sus programas suelen articular un discurso político, porque eso otorga legitimidad interna y externa. Sirve para atraer apoyos internacionales, justificar la violencia como causa justa y construir un marco ideológico que de coherencia al movimiento. En cambio, para los jóvenes reclutas, las motivaciones son más cercanas, tangibles y personales. Esto no es necesariamente contradictorio, pues los discursos políticos de los líderes funcionan como marcos movilizadores, mientras que los incentivos de base corresponden a lo que Collier y Hoeffler llamaron "incentivos de oportunidad". Es decir, el liderazgo necesita un relato de alto nivel, mientras la tropa se mueve por motivaciones mucho más inmediatas[150].

LA FLEXIBILIDAD COGNITIVA COMO ANTÍDOTO

Cuando era muy joven, durante la guerra del Vietnam y en defensa de los objetores de conciencia al servicio militar, utilizábamos el eslogan de "imagina que hay una guerra y que no va nadie", de forma provocativa para hacer ver que las guerras no se producen solas, sino que necesitan planificación, estrategia, medios, propagandistas, liderazgos, narrativas y un sinfín de cuestiones para hacerlas realidad. La gente no va a la guerra por si sola, espontáneamente, sino de forma inducida e incitada. Primero hay que convencerla, pues está en juego la propia vida, y eso siempre será más difícil de conseguir ante personas que tengan bien desarrollado un espíritu crítico y sean inquisitivas, que son prerrogativas exclusivas de los seres humanos. Este tipo de personas siempre pondrán en cuestión la necesidad de la guerra, entre otras cosas porque han desarrollado la flexibilidad cognitiva, la capacidad de cambiar de perspectiva, adaptarse a nuevas informaciones y cuestionar creencias previas, lo cual puede ser un antídoto frente a la obediencia ciega a líderes perversos con ambiciones de poder que desencadenan las guerras.

¿Por qué es importante que hablemos de la flexibilidad cognitiva? Expongo varias razones en su defensa:

- Resistencia a la propaganda. Los líderes autoritarios y belicistas suelen construir narrativas rígidas ("nosotros contra ellos", "enemigos eternos", "un único camino de salvación"). La flexibilidad cognitiva permite reconocer que existen múltiples marcos de interpretación y que las explicaciones simplistas suelen ocultar intereses de poder.
- Detección de inconsistencias. Una persona cognitivamente flexible puede identificar contradicciones en el discurso del líder (predicar sacrificio mientras se enriquece, hablar de paz mientras se arma a milicias).
- Capacidad de dudar. En lugar de adherirse automáticamente a dogmas, se cultiva una duda razonable, evitando la obediencia automática que alimenta la violencia.
- Mayor tolerancia a la ambigüedad. Los líderes perversos suelen prometer certezas absolutas; quien tolera la ambigüedad acepta que la realidad es compleja y no se deja

arrastrar por soluciones radicales.

- Ciudadanía crítica. Las sociedades con mayor flexibilidad cognitiva en sus miembros, desarrollan contrapesos ciudadanos contra los intentos de monopolizar el poder. Esto se traduce en pluralismo, debate público y vigilancia social.
- Empatía intergrupal. La rigidez cognitiva fomenta estereotipos y deshumanización del "otro". La flexibilidad abre espacio para reconocer la legitimidad de otras identidades, culturas y narrativas históricas, reduciendo la predisposición a apoyar guerras de exterminio o conquista.
- Prevención de cultos a la personalidad. La ciudadanía con flexibilidad mental reconoce que ningún líder es indispensable ni infalible, debilitando el carisma autoritario que suele justificar la violencia.
- Procesos deliberativos. Las democracias sólidas funcionan mejor cuando los ciudadanos y líderes practican flexibilidad cognitiva, aceptando la negociación y el compromiso frente al dogmatismo.
- Antídoto frente al populismo. La flexibilidad cognitiva permite detectar la instrumentalización emocional que hacen los líderes perversos (miedo, odio, orgullo nacionalista exacerbado) y responder con racionalidad crítica.
- Mayor apertura a soluciones no violentas. Cuando los individuos y colectivos son flexibles cognitivamente, aceptan reformas graduales, descentralización, estatutos de autonomía u otras fórmulas de compromiso en lugar de recurrir al conflicto armado.
- Humanización del adversario. La flexibilidad mental impide aceptar discursos que justifican el exterminio del otro; se reconoce la dignidad humana incluso en el enemigo.
- Resiliencia frente al miedo. Los líderes autoritarios pros peran en contextos de miedo colectivo. La flexibilidad ayuda a reinterpretar la amenaza, ver opciones más allá del combate y no entregar la libertad a cambio de supuesta seguridad.
- Defensa de la paz como fuerza. Mientras la rigidez asocia paz

con debilidad, la flexibilidad cognitiva permite entender que la negociación, el compromiso y el perdón requieren más fortaleza que la violencia.

En síntesis, la flexibilidad cognitiva es un recurso psicológico y social para inmunizar a las sociedades contra el embrujo de líderes perversos, porque fomenta la duda crítica, la empatía, la apertura a alternativas y la resistencia frente a discursos simplistas que justifican la guerra[151]. Si tomamos un escenario con bajo nivel de alfabetismo, poca movilidad de la gente, referentes cercanos y fuerte sentimiento de pertenencia grupal, se generan varias limitaciones que pueden favorecer la manipulación de las comunidades, ya que el pensamiento queda confinado a lo familiar, reforzando el etnocentrismo o las visiones reducidas de lo posible, el universo mental se construye a partir de lo inmediato, sin contraste con experiencias lejanas y se limita la flexibilidad cognitiva porque cuestionar la norma del grupo equivale a poner en riesgo la pertenencia y seguridad. Cuando las condiciones mencionadas están presentes, la metacognición se empobrece y la flexibilidad se reduce porque se absolutiza la experiencia propia y grupal, se refuerza un pensamiento dicotómico (nosotros/ellos, correcto/incorrecto) y el aprendizaje se vuelve más reproductivo que crítico. Vuelvo a insistir en que esto no significa que las personas que viven en estas condiciones carezcan de toda metacognición. Pueden desarrollar formas muy agudas de sabiduría práctica, intuición social o resiliencia. Lo que queda limitado es la amplitud y plasticidad de la reflexión, porque se restringen los recursos simbólicos, las experiencias diversas y los incentivos para pensar "fuera" del marco del grupo. La metacognitividad es un producto complejo de la interacción entre capacidades individuales, calidad educativa, entorno cultural y condiciones emocionales y socioeconómicas. Se expande cuando hay lenguaje, diversidad, estímulos educativos, seguridad emocional y apertura cultural, y se limita cuando prevalecen rigidez social, pobreza, represión, miedo o ausencia de referentes externos[152].

El psicólogo Philip Zimbardo[153] lo ha explicado muy bien en un estudio sobre la maldad, cuando explica que las personas pueden

hacerse malvadas cuando se enredan en situaciones en que los controles cognitivos que normalmente guían su conducta de una forma aceptable se bloquean, suspenden o distorsionan. La suspensión del control cognitivo, argumenta, tiene múltiples consecuencias, como la suspensión de la conciencia en general y de uno mismo, del sentido de la responsabilidad personal, de la obligación, el compromiso, la moralidad, la culpa o el miedo. Todo ello conduce a procesos de desinvidualización y que la acción sustituya al pensamiento. Aplicadas a contextos políticos en los que líderes con grandes ambiciones de poder manipulan sociedades para iniciar guerras de conquista o dominación política, estas tesis ofrecen una lectura extremadamente lúcida y preocupante. Líderes carismáticos, autoritarios o personalistas crean escenarios en los que la población o sectores clave (militares, juventudes, grupos movilizados), quedan atrapados en dinámicas donde sus controles cognitivos ordinarios se ven sistemáticamente neutralizados. La manipulación de masas para fines políticos belicistas consiste, en esencia, en crear situaciones colectivas que suspenden el control cognitivo ordinario, de manera que personas que en contextos normales no aprobarían la violencia política terminan participando, justificando o tolerando atrocidades. Zimbardo nos advierte que la maldad no surge solo de individuos perversos, sino de contextos estructurados para suspender el control cognitivo y moral. Por ello, frente a líderes que buscan iniciar guerras para alcanzar o consolidar el poder, la defensa más eficaz no es únicamente jurídica o militar, sino cognitiva, educativa y cultural, de tal manera que mantener activos los mecanismos de reflexión, responsabilidad y juicio moral individuales, son esenciales para no ser arrastrados por dinámicas colectivas destructivas.

A partir de aquí, me hago la siguiente pregunta: el colonialismo, el neocolonialismo, la falta de experiencia democrática y el analfabetismo ya citado, además de la inseguridad, por ejemplo, ¿son factores que impiden desarrollar el sentido crítico y la capacidad de tomar decisiones por cuenta propia, sin depender tanto de los líderes ambiciosos?

El colonialismo instauró órdenes autoritarios y prácticas de división

étnica, desmanteló o subordinó instituciones deliberativas locales, e impuso jerarquías raciales y lingüísticas que deslegitimaron saberes propios. El resultado es la socialización en la obediencia y una deferencia frente al poder, más que el escrutinio ciudadano. Ya en los años cincuenta, Frantz Fanon escribió que la deshumanización colonial atrofia el juicio crítico y desplaza la acción hacia catarsis violenta, antes que hacia la deliberación. El neocolonialismo se basa en economías extractivas y dependientes, alianzas entre élites locales y capital externo, condicionamientos de deuda/ayuda y producción simbólica (medios/ONG) que fija marcos interpretativos. El resultado final es el patronazgo y el clientelismo, los incentivos a la lealtad personalista y el debilitamiento de las esferas públicas críticas. La escasa experiencia democrática, supone una ausencia de aprendizaje cívico (aprender a discrepar, negociar, rendir cuentas), así como la represión de sindicatos, prensa y asociaciones. Como consecuencia, existe una baja cultura de control horizontal, "reglas del juego" poco interiorizadas y gobernanza personalizada con más "súbditos" que ciudadanos. En cuanto al analfabetismo y la baja escolaridad, limita el acceso a información plural, la verificación de narrativas y la organización autónoma, reduce la movilización cognitiva y la agencia. Como resultado, aumenta la susceptibilidad a la propaganda y la dependencia de intermediarios. Estos cuatro vectores convergen en liderazgos personalistas y seguimientos clientelares, esferas públicas frágiles, polarización identitaria como atajo de movilización y baja legitimidad de instituciones impersonales. En contextos de competencia por recursos/coerción, esto facilita la escalada violenta. Es evidente que no hay un paradigma cerrado que convierta estos cuatro factores en violencia, de una manera determinista; pero sí configuran un entorno donde se debilita el pensamiento crítico y la autonomía, se refuerza la dependencia de líderes ambiciosos y se reducen los canales institucionales para tramitar conflictos. Cuando a esa estructura se suman choques económicos, competencia por rentas y propaganda deshumanizante, el resultado es un riesgo belígeno elevado. La respuesta pasa por educación crítica, instituciones impersonales, pluralismo informativo y descolonización epistémica,

que devuelvan a la ciudadanía su capacidad de decidir por cuenta propia.

En cuanto a la seguridad o inseguridad, cuando una persona vive en un entorno de violencia, represión política, guerra o precariedad extrema, su sistema cognitivo se adapta para sobrevivir. El cerebro activa con frecuencia la respuesta de estrés (hiperactivación de la amígdala, cortisol elevado), lo que provoca respuestas rápidas (huir, defenderse, obedecer), no la reflexión abstracta, con lo que la atención se vuelve túnel, pues se centra en lo inmediato y urgente, reduciendo la capacidad de análisis amplio y autocrítico. Los efectos sobre la metacognitividad son inmediatos. Hay menos tiempo para reflexionar si el foco está en cómo conseguir comida o protegerse de un ataque; hay una evitación del cuestionamiento, pues en contextos represivos, reflexionar críticamente puede ser peligroso. Se desarrolla autocensura más que autocrítica; aumenta la dependencia de liderazgos autoritarios, ya que la inseguridad lleva a buscar figuras fuertes que prometan orden. Esto inhibe el pensamiento autónomo y crítico porque el costo de disentir es alto y, finalmente, se produce una rigidez identitaria, pues en situaciones de amenaza la pertenencia al grupo se vuelve un refugio. La metacognitividad, que requiere cuestionar el propio marco, queda percibida como traición. ¿Qué pasaría si fuéramos añadiendo otros factores socioculturales o políticos a los mencionados? Posiblemente nos ayudaría a comprender la relativa facilidad con que se puede engañar a la gente, en este caso, para que participe en guerras o las apruebe[154].

LA ELECCIÓN DE LA IDENTIDAD Y LA DIVERSIDAD DE FILIACIONES

Una pregunta pertinente es cómo salir del síndrome de la tribu, esto es, superar identidades cerradas y excluyentes, a través de una democracia plena que respeta la diversidad y fomenta la autocrítica y por qué eso reduce el riesgo de conflicto armado. Señalo algunas opciones que apuntan la mayoría de los académicos que han estudiado este tema[155]:

- Canales institucionales para el disenso. Las democracias consolidadas proveen vías no violentas de competencia (elecciones limpias, oposición protegida, justicia independiente). Eso transforma agravios en reclamaciones procesables.
- Incorporación de identidades al poder. La exclusión étnica y las desigualdades horizontales elevan el riesgo de rebelión; en cambio, los arreglos de reparto de poder (consociación, federalismos asimétricos, autonomías) o incentivos centrípetos que premian coaliciones intergrupales, lo reducen.
- Deliberación y cultura cívica autocrítica. Los espacios de deliberación pública y normas de disenso leal permiten competir sin enemistad existencial; la autocrítica pública desescala la retórica de nosotros vs. ellos.
- Capital social y la construcción de puentes. Las redes cívicas interétnicas, amortiguan llamamientos sectarios y facilitan coordinación para prevenir la violencia.
- Contacto intergrupal y educación cívica. Las interacciones sostenidas bajo condiciones de igualdad, reducen los prejuicios; la alfabetización mediática y el pluralismo informativo, contrarrestan la polarización y las cámaras de eco.
- Instituciones inclusivas y Estado imparcial. Los Estados capaces, no depredadores y que distribuyen bienes públicos sin sesgo desmontan los incentivos a la insurgencia.
- Reglas electorales que premian la transversalidad. Los sistemas de voto preferencial o incentivos al "voto moderado", estimulan campañas intercomunitarias.
- Desmilitarización del orden interno. El control civil y la reforma del sector de seguridad, reducen las espirales de represión-radicalización.
- Memorias y justicia que no esencializan. Se trata de enfrentar agravios sin convertirlos en identidades rígidas, lo que ayuda a cortar ciclos de venganza.

- Cautela con las transiciones. Las semidemocracias y las aperturas mal diseñadas, pueden activar nacionalismos agresivos; el diseño institucional es clave.

En contextos de incertidumbre y amenaza, aumenta la necesidad de cierre cognitivo. Las personas buscan respuestas simples, rápidas y definitivas; eso favorece mensajes binarios (amigo-enemigo) y soluciones "duras". El autoritarismo se activa con la percepción de amenaza, elevando el nivel de conformidad y de mano dura, así como el apoyo al uso de la fuerza externa. Además, los líderes eficaces en el plano grupal nos hacen ser un "nosotros", construyen una identidad compartida ("el pueblo", "la nación verdadera") y se presentan como su prototipo moral. Ese encaje identitario hace que los seguidores obedezcan no por miedo, sino por convicción de pertenencia. Personas corrientes pueden obedecer órdenes destructivas si el contexto legitima la violencia y difumina la responsabilidad; Arendt lo llamó la "banalidad del mal", los crímenes extraordinarios cometidos por personas ordinarias en sistemas que normalizan el daño.

Quisiera ahondar en las reflexiones de Amartya Sen[156] sobre varias cuestiones que he planteado, como la responsabilidad de elegir, priorizar y razonar sobre la identidad, que ha de ser plural o una combinación de identidades, no cultivar el sentimiento de que tenemos supuestamente una identidad única que no permite elección, de aceptar otras filiaciones, de no ser "prisioneros rígidamente encarcelados en pequeños contenedores", la crítica a la "filiación singular" y la denigración singularista de la identidad humana, la necesidad de tener oportunidades sociales de educación y participación en la sociedad civil y en los procesos políticos y económicos del país, salir del reduccionismo, no dejarse engañar por la singularidad de tener una identidad única, y dar importancia a otros vínculos y filiaciones mediante el énfasis y la incitación selectivo.

La identidad no es un destino, sino una responsabilidad práctica de elección. Cada quien porta múltiples pertenencias (lengua, género, oficio, creencias, región, aficiones, proyectos cívicos) y puede priorizarlas razonadamente según el contexto. El peligro no está en sentirnos parte de algo, sino en absolutizar una sola filiación hasta

convertirla en un corsé que clausura otras lealtades. De ahí se siguen tres tesis normativas: capacidades y oportunidades (sin educación, voz pública y participación económica, la elección es ficticia), antirreduccionismo (ninguna etiqueta, sea etnia, nación, religión o clase), agota a la persona, política de la coexistencia (las instituciones deben desincentivar la "singularización beligerante" de la identidad). Los singularismos identitarios son peligrosos porque reduce la complejidad humana a una sola dimensión, habilitan estrategias políticas de movilización, que presentan al disidente interno como "traidor" y al diferente externo como "amenaza existencial"; e institucionalmente, porque bloquean la igualdad ciudadana, ya que la pertenencia única se usa como llave de acceso a recursos y reconocimiento. Elegir la pluralidad no implica diluir pertenencias, sino ordenarlas deliberativamente bajo instituciones que amplíen capacidades, multipliquen puntos de contacto y desactiven la tentación de la "filiación única". Una democracia madura organiza la convivencia de identidades móviles, no las congela.

A partir de ahí, ¿cuál sería la arquitectura institucional para poder formar identidades elegibles? Propongo ocho ejes: educación cívica y crítica para cultivar imaginación moral, y las artes y humanidades como entrenamiento en "ver al otro"; capacidades materiales, como salud, educación, ingresos y tiempo, que son precondiciones para ejercer afiliaciones múltiples; diseño político a partir de igualdad de derechos, más garantías diferenciadas que hagan vivible la diversidad sin fijarla en esencialismos; el pluralismo de valores y de esferas de justicia, para evitar hegemonías morales únicas; pluralismo narrativo para impulsar relatos de mestizaje, hibridez y cosmopolitismo cotidiano; ciudadanía por iteraciones, es decir, reglas que permitan revisar criterios de pertenencia y ampliar el círculo de reconocimiento; políticas urbanas y redes cívicas, con instituciones puente (escuelas, asociaciones, mercados) que generen interdependencia práctica entre grupos; y lenguaje y medios para contrarrestar "comunidades imaginadas" exclusivistas, desnaturalizar tradiciones inventadas y hablar de procesos, más que de grupos reificados[157]. En suma, una arquitectura institucional capaz de formar identidades elegibles debe

orientarse menos a definir pertenencias cerradas y más a habilitar condiciones de coexistencia reflexiva, movilidad simbólica y reconocimiento recíproco. No se trata de sustituir unas identidades por otras, sino de construir un marco de ciudadanía dinámica en el que las diferencias sean fuente de aprendizaje común y no de frontera, y donde las instituciones actúen como mediadoras de pluralidad, no como reproductoras de exclusión.

LA INFLUENCIA DE LA ANALFABETIZACIÓN

Hace muchos años, en 1968, el pedagogo Paulo Freire[158] reflexionaba sobre cómo el analfabetismo genera "conciencia ingenua", que dificulta el pensamiento crítico. Afirmaba que, sin alfabetización crítica, los oprimidos son más vulnerables a discursos de dominación. Años más tarde, el antropólogo James C. Scott,[159] aunque no hablaba del analfabetismo en sí, explicaba cómo las poblaciones rurales con bajo acceso educativo, solían depender de narrativas orales y eran susceptibles a ser cooptadas por élites que monopolizaban los discursos escritos del poder. El político estadounidense Jack Snyder[160], vinculó los bajos niveles de educación cívica con el éxito de élites nacionalistas en manipular masas. Aunque se centró más en el déficit de institucionalización democrática, subrayó que la falta de alfabetización política facilitaba la propaganda violenta. Para este autor, las transiciones a medias hacia la democracia en contextos autoritarios débiles, son inestables. Los líderes manipulan el nacionalismo, el miedo étnico y la polarización para mantenerse en el poder. Esto genera guerras civiles, limpiezas étnicas y autoritarismos renovados.

Paul Collier y Anke Hoeffler[161], en sus estudios econométricos sobre guerras civiles, han mostrado que el bajo nivel educativo y el analfabetismo, correlacionan con mayor probabilidad de reclutamiento armado, pues reduce los costos de movilización para líderes rebeldes. Donald Horowitz[162], por su parte, explicó cómo la falta de alfabetización refuerza identidades primordiales (étnicas, religiosas) que son instrumentalizadas por líderes emprendedores étnicos. James

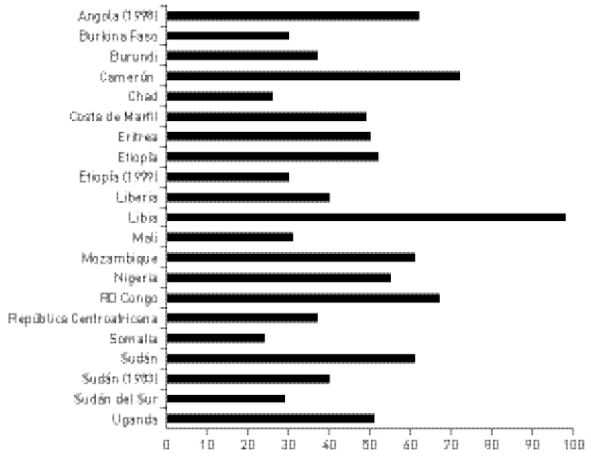
D. Fearon y David D. Laitin[163], desde el enfoque de seguridad étnica, remarcan cómo las comunidades con baja alfabetización dependen de líderes para interpretar amenazas, lo que facilita que éstos exageren el peligro y legitimen la violencia preventiva. Dicho esto, ¿podemos afirmar que existe una vinculación entre el analfabetismo y los conflictos armados? En cierta forma, sí.

Sabemos que el analfabetismo limita la metacognitividad, la capacidad de reflexionar los propios procesos de pensamiento, ya que reduce la capacidad de manejar conceptos abstractos, textos complejos, metáforas o contraargumentos. Sin herramientas de lectura y escritura, es más difícil externalizar el pensamiento y revisarlo críticamente. El analfabetismo no significa ausencia de inteligencia, pero reduce la capacidad de distanciarse críticamente de los discursos, especialmente cuando éstos se transmiten en forma oral, repetitiva, emocional y simbólica. Líderes con ansias de poder político pueden aprovecharlo en varias formas: a) simplificación binaria de la realidad, esto es, transformar conflictos complejos en narrativas de ellos contra nosotros, sin matices, sin necesidad de justificar con datos, documentos o comparaciones históricas; b) uso de símbolos, mitos y relatos colectivos, de manera que, en lugar de argumentos escritos o debates con evidencias, se emplean metáforas simples, proverbios, religiosidad popular o apelaciones a la memoria oral de agravios; c) promesa de seguridad o venganza inmediata, pues al carecer de acceso a lecturas críticas sobre experiencias pasadas de guerra o sobre alternativas de negociación, las audiencias analfabetas tienden a valorar más la inmediatez (seguridad, alimento, protección), que proyectos de largo plazo; d) dificultad para evaluar contraargumentos. La oralidad deja menos espacio para comparar versiones. Un discurso carismático puede arrastrar más fácilmente sin posibilidad de confrontar documentos alternativos o medios escritos; y e) dependencia de autoridades locales, puesto que en comunidades con bajo acceso a la lectura, el líder político, religioso o militar es la fuente principal de interpretación del mundo. Esto otorga un poder enorme para moldear percepciones y justificar violencia.

En resumen, el analfabetismo reduce la metacognición, y por ende

la capacidad de cuestionar relatos políticos. Por otra parte, líderes ambiciosos utilizan narrativas orales simplificadas, emotivas y binarias para convencer. Esto se refuerza en contextos de pobreza, marginación y ausencia de medios plurales, donde la voz del líder se convierte en la "única verdad disponible". Así, el analfabetismo no solo es una limitación individual, sino un recurso estratégico para élites que buscan movilizar masas hacia el conflicto armado. De los 23 conflictos africanos aquí analizados, y con la excepción de Libia, en todos ellos los países afectados han tenido tasas de alfabetización sumamente bajas, con una media del 48%, 35 puntos menos de la media mundial. Este dato influye de alguna manera en la tipología de los conflictos, y en las formas en que los líderes que han encabezado las rebeliones han adoptado para seducir a la población para entrar en conflicto.

GRÁFICO 25
POBLACIÓN ALFABETIZADA EN LOS PAÍSES AFRICANOS AL EMPEZAR LA GUERRA, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial.

Este aspecto afecta en menor media a los países asiáticos, excepto en Afganistán, India, Indonesia, Nepal y Pakistán, la mitad, en ninguno de los europeos y solo en dos de los de Oriente Medio, Iraq y especialmente Yemen. Se trata, por tanto, de un problema que afecta de forma particular al continente africano. La baja alfabetización no es la causa única, evidentemente, pero sí un factor de vulnerabilidad añadido en África al privar a las sociedades de herramientas críticas para disputar narrativas de guerra y exigir alternativas de paz. Donde el analfabetismo es masivo, la gente depende de estructuras

clientelares o étnicas para acceder a recursos, lo que refuerza formas de política identitaria y patrimonialista proclives a la violencia. En África, además, los Estados con baja capacidad educativa y altos índices de analfabetismo suelen ser también los más débiles institucionalmente, lo que permite que milicias armadas sustituyan al Estado en provisión de seguridad. En Europa, conflictos como los de Chechenia, Ucrania o los Balcanes se han dado en contextos de alta alfabetización, pero allí la movilización no dependía de la manipulación sobre masas analfabetas, sino de proyectos nacionalistas explícitos, liderados por élites políticas que actúan en sociedades plenamente alfabetizadas.

LA DIMENSIÓN DE GÉNERO. LA MILITARIZACIÓN DE LA MASCULINIDAD Y LAS MASCULINIDADES BELICISTAS

Todos los nombres citados en este libro, sean gobernantes o líderes de grupos armados, son hombres. No hay ninguna mujer. Esto es así, porque existe una vinculación entre el patriarcado, la masculinidad hegemónica, el belicismo y la militarización[164]. La masculinidad hegemónica es el conjunto de normas que privilegian dureza, autocontrol emocional, predisposición al riesgo, jerarquía y heterosexualidad normativa, y legitima la dominación de unos hombres sobre otros hombres y sobre las mujeres. Esta noción permite entender por qué ciertas formas de "ser hombre" se convierten en recurso político-militar en contextos de guerra. La militarización es un proceso social y político que militariza instituciones, economías, identidades y afectos, produce y premia masculinidades militarizadas (guerrero, protector, proveedor armado), a la par que invisibiliza el trabajo de cuidados y reproduce jerarquías de género[165]. Añadamos que, en los lenguajes técnicos de la seguridad, el discurso estratégico, desexualiza la muerte y normaliza la violencia mediante eufemismos y tecnicismos; esta racionalidad desencarnada también es un performativo de género. El lenguaje experto en defensa crea mundos morales donde la destrucción deviene pensable y limpia; despolitiza la muerte[166].

El feminismo contemporáneo ha desarrollado varias tesis que ayudan a explicar por qué en la gran mayoría de los casos son los hombres quienes promueven y dirigen los conflictos políticos y armados con el objetivo de conquistar el poder político. Estas tesis se articulan en torno a estructuras de género, masculinidades hegemónicas, desigualdades históricas de acceso al poder y construcción simbólica de la guerra. Estas aportaciones se pueden sintetizar en la socialización de género (los hombres son educados para

ver la violencia y el control como legítimos modos de afirmación política), las estructuras patriarcales (las instituciones militares, políticas y religiosas han sido diseñadas y ocupadas por hombres, reforzando su monopolio sobre la guerra), la legitimidad simbólica (la guerra y el poder político se codifican culturalmente como espacios de virilidad), la exclusión de las mujeres que, relegadas al cuidado, no acceden a los canales donde se disputa el poder armado, y la reproducción del patriarcado, pues los conflictos no solo redistribuyen poder político, sino que también refuerzan jerarquías de género.

La socióloga australiana Raewyn Connell[167], ha desarrollado uno de los marcos más influyentes para comprender las relaciones de género, en particular el papel de las masculinidades en la organización social, cultural y política. Su aporte es fundamental para entender cómo las identidades masculinas no son estáticas ni universales, sino construcciones históricas, sociales y relacionales que intervienen en fenómenos como la violencia, el poder político y los conflictos armados. La masculinidad hegemónica es la forma culturalmente dominante de ser hombre en un contexto dado. No significa que la mayoría de los hombres la encarnen, sino que es el ideal normativo que legitima la dominación masculina sobre las mujeres y sobre otras masculinidades. Se vincula con valores como la fuerza, el control, la autoridad, la heterosexualidad normativa, la agresividad y la autosuficiencia. Connell argumenta que la violencia es una práctica masculina estructural, utilizada para afirmar poder o resolver contradicciones en contextos de competencia. La violencia de género, la militarización y la represión política se entienden como prácticas en las que se juega y refuerza la hegemonía masculina. Los ejércitos, milicias y grupos armados, son espacios privilegiados para la construcción de masculinidades guerreras. En la política y la guerra, la masculinidad hegemónica se traduce en liderazgos autoritarios, culto al sacrificio y legitimación de la violencia como medio de resolución de conflictos.

La ausencia de los cuidados en la socialización masculina, es un factor que explica muchas de las cosas que cuento en este libro[168]. Desde edades tempranas, a las mujeres se les asignan tareas de

cuidado de la vida (del hogar, de los niños y niñas, de la gente mayor), lo que fomenta habilidades de empatía, escucha, negociación y paciencia. En cambio, a los hombres se les socializa hacia la competencia, la afirmación de la autoridad y la resolución rápida de problemas mediante el control o la fuerza. Las guerras no solo destruyen cuerpos e infraestructuras, sino también las redes de cuidado que sostienen a las comunidades. La decisión de ir a la guerra refleja una jerarquía política que coloca el prestigio nacional o el honor por encima de las vidas concretas que requieren cuidado[169]. El cuidado implica reconocer la fragilidad humana (propia y ajena). Al estar alejados de estas experiencias, muchos hombres crecen con una identidad vinculada a la negación de la debilidad, lo cual los lleva a ver la fuerza y la imposición como recursos legítimos. Los comportamientos de cuidado suelen ser invisibilizados y poco valorados en términos sociales, mientras que la violencia o la capacidad de imponerse se premia en la construcción de la masculinidad. La ausencia de prácticas de cuidado refuerza una lógica jerárquica en las relaciones, donde se mide la valía a través del poder sobre otros, en lugar de la interdependencia. Esta realidad tiene un impacto en la comprensión del poder político, pues mientras que una concepción del poder atravesada por el cuidado lo entiende como responsabilidad hacia otras personas, en el modelo masculino sin cuidados se concibe como capacidad de mandar, imponer y controlar. La política se convierte en un espacio de competición y confrontación, más que de construcción común. El adversario es visto como enemigo a derrotar, no como interlocutor válido. El monopolio masculino de las armas y la política, desvinculado de prácticas de cuidado, normaliza la guerra como vía legítima para conquistar el poder o mantener privilegios.

Los conflictos armados reproducen la lógica de que el poder se obtiene y se conserva mediante la fuerza. La guerra se justifica como defensa del honor o protección del territorio, cuando en realidad responde a un modelo de masculinidad que no contempla alternativas basadas en el cuidado de la vida. Cuanto más alejada está una sociedad de una ética del cuidado, más probable es que su política

esté militarizada. El liderazgo se mide en términos de capacidad bélica, y la negociación aparece como debilidad. Como consecuencia, el sufrimiento de las víctimas, el hambre y el desplazamiento forzado son vistos como daños colaterales, invisibles para quienes no han interiorizado la centralidad de cuidar la vida como principio político. En síntesis, la ausencia de la práctica de los cuidados en la socialización masculina ha producido una masculinidad que privilegia la fuerza y la violencia como recursos relacionales y políticos. Esto explica en parte por qué los hombres han sido protagonistas mayoritarios de las guerras y de la concepción del poder como dominación. Incorporar el cuidado como práctica política permitiría transformar las relaciones de poder, desmilitarizar la política y reducir la centralidad de los conflictos armados en la historia contemporánea.

Hay varios mecanismos que vinculan todos estos factores. Señalo algunos:

- Lógica del protector masculinista. El Estado-nación se narra como "protector varonil" de una población feminizada (la patria, "nuestras" mujeres, niños y niñas). Esta lógica exige obediencia y justifica expansión de poder coercitivo; convierte la disidencia en traición.
- Nacionalismo y género. Los proyectos nacionales moldean "ciudadanos-soldados" (virilidad) y "madres de la patria" (reproducción y honor); la pertenencia nacional se codifica en términos de género. En cambio, está probado que la igualdad de género en un país, tiene un efecto pacificador en el comportamiento del Estado a nivel internacional. Donde las mujeres sufren altos niveles de violencia, discriminación y subordinación, los Estados son más propensos a la inestabilidad política, al autoritarismo y a entrar en guerras. En cambio, sociedades más igualitarias tienden a generar paz interna y externa[170].
- Instituciones armadas como fábricas de masculinidad. La socialización castrense (entrenamiento, camaradería, disciplina del cuerpo, rituales de humillación), produce disposiciones a la violencia y a la lealtad homosocial.

- Economía material de las armas. La proliferación de armas ligeras se imbrica con identidades de género, rituales de estatus y guiones de dominación.
- Violencia sexual en guerra. Varía por conflicto y por grupo armado; no es "inevitable" ni uniforme. Responde a reglas organizativas, cohesión de grupo y estrategias de control territorial y socialización violenta[171].
- Las reformas del sector seguridad (RSS) deben transformar normas masculinas de las instituciones armadas, no solo agregar mujeres al sector.

Sabemos que cuanto mayor es la igualdad de género y la seguridad de las mujeres, disminuye la propensión estatal al uso de la fuerza y menor riesgo de conflicto interno. También, que la gobernalidad militarizada gestiona quién puede vivir y morir; las masculinidades violentas se articulan con raza, edad, clase y geopolítica en "zonas de muerte". La militarización es capilar; (re)produce jerarquías de género y dependencias económicas/emocionales que hacen "natural" la guerra.

Cynthia Enloe es una politóloga estadounidense, pionera en los estudios sobre la relación entre el militarismo y su impacto sobre las mujeres, que me influyó notablemente durante mi juventud[172]. Parte de la base de que la militarización no es un fenómeno aislado ni estrictamente militar, sino un proceso que atraviesa la vida cotidiana, los roles de género, la economía y la política internacional. El núcleo de su pensamiento es que la militarización es como un proceso capilar, es decir, no empieza ni termina en los cuarteles; penetra la vida civil, la cultura popular, la economía doméstica y las relaciones íntimas. Las mujeres son centrales en la militarización, aunque a menudo en roles invisibilizados: como esposas de soldados, trabajadoras en industrias bélicas, trabajadoras sexuales cerca de bases, refugiadas, diplomáticas, activistas antimilitaristas. Para ella, el patriarcado y el militarismo son mutuamente constitutivos, pues el militarismo necesita de ciertos ideales de masculinidad y feminidad, y a su vez reproduce esas normas de género. La naturalización de la guerra y del militarismo es un proceso político. Se nos hace ver como normales los desfiles, las

bases militares, el sacrificio "heroico" masculino y la subordinación femenina. Ante ello, propone el internacionalismo feminista, pues para comprender la política internacional (guerra, diplomacia, economía global), hay que mirar desde abajo las experiencias y trabajos de mujeres. Sintetizando sus tesis, afirma que la guerra no es un ámbito exclusivamente masculino, pero se sostiene sobre jerarquías de género; el militarismo depende del trabajo de las mujeres, aunque las margina en la memoria histórica; la feminidad y la masculinidad son militarizadas para sostener proyectos nacionales y bélicos; nada es natural en la guerra o la seguridad: son construcciones que pueden (y deben) ser transformadas; el feminismo internacionalista es un método analítico y político para desenmascarar estas dinámicas.

A partir de estas reflexiones de Enloe, podemos plantear la relación entre ciertos modelos de masculinidad hegemónica, las ansias de poder, los liderazgos políticos y militares, y su papel en el desencadenamiento y perpetuación de conflictos armados. Para empezar, veamos algunas de las características de este modelo de masculinidad: agonismo (la identidad basada en la competición, la rivalidad y el juego de suma cero, el culto a la fuerza (glorificación del poder físico, del dominio del territorio y del armamento), el autoritarismo y la jerarquía (preferencia por estructuras verticales de mando y obediencia), emociones reprimidas (desvalorización del cuidado, empatía o vulnerabilidad, exaltación de la dureza), virilidad heroica (construcción del "líder fuerte" como encarnación de la nación o del grupo), la "virilidad política", que refuerza el culto al líder y aparece como encarnación de la fuerza y la nación. Esto facilita el decisionismo bélico, las guerras emprendidas para "probar la hombría" del Estado y del líder y la defensa del honor (la ofensa exige revancha; las disputas se resuelven mediante violencia).

Este ideal de masculinidad no es universal ni innato, sino un modelo cultural que ciertos líderes políticos y militares activan, performan y legitiman en contextos de crisis. La masculinidad militarizada convierte la contención y la negociación en signos de debilidad y, como resultado, hay una preferencia por la escalada militar sobre la diplomacia, y por el "honor" frente al compromiso. En

suma, la masculinidad hegemónica militarizada promueve liderazgos que asocian el poder con virilidad, la negociación con debilidad, y la violencia con prestigio. Esta lógica alimenta la escalada y prolongación de los conflictos, pues hace de la guerra no solo un medio político, sino una prueba de hombría para líderes y comunidades.

Varias autoras han señalado que la poca presencia de las mujeres en la vida política en la esfera pública era un factor a tener en cuenta en la toma de decisiones, pues son hombres quienes deciden si se va a una guerra. Un indicador que puede orientarnos, es el porcentaje de mujeres en los parlamentos nacionales al iniciarse una guerra. Con los datos de 25 países aquí analizados, la media es de solo el 13%, algo muy significativo, pues nos obliga a plantear qué es lo podría ocurrir si la toma de decisiones estuviera, mayormente, en manos de mujeres.

TABLA 8
PORCENTAJE DE MUJERES EN LOS PARLAMENTOS AL INICIARSE LA GUERRA

MENOS DE 10%	ENTRE EL 10 Y EL 15%	ENTRE EL 20 Y EL 30%	ENTRE EL 30 Y EL 40%
Yemen	Mali	Israel	Camerún
Nepal	Sudán	Afganistán	Etiopía
Sri Lanka	Filipinas	Sudán del Sur	
Iraq	Indonesia		
Líbano	Burundi		
Chad	RD Congo		
India	Siria		
Liberia	República Centroafricana		
Libia	Myanmar		
Costa de Marfil	Angola		

Fuente: Elaboración propia a partir de Unión Interparlamentaria.

Imaginemos que los parlamentos, en vez del 13% de mujeres, tuvieran paridad o mayoría de mujeres. ¿Qué podría ocurrir? La representación de mujeres no es automáticamente pacifista, pero sí introduciría nuevas prioridades de agenda (cuidado, cohesión social, bienestar, negociación). Una masa crítica de mujeres parlamentarias (40-60%), podría inclinar los debates hacia la búsqueda de alternativas políticas antes de recurrir a la fuerza, promoviendo

mecanismos y la incorporación de marcos discursivos de cuidado, prevención humanitaria y protección de comunidades vulnerables, lo cual conduciría a una mayor presión por explorar mediaciones, federaciones, descentralizaciones o poder compartido, en vez de escalada militar. Con mayoría femenina, la agenda parlamentaria podría desplazar la noción de seguridad nacional, hoy militar, hacia una noción de seguridad humana: hambre, cuidados, educación, salud, etc. Esto no eliminaría el riesgo de guerra, pero cambiaría el marco normativo desde el cual se justifica o cuestiona el uso de la fuerza. En sociedades donde la identidad nacional está ligada a masculinidades militarizadas, una mayoría femenina en el parlamento podría debilitar la narrativa del honor guerrero que suele legitimar la entrada en guerra.

Laura Sjoberg[173], profesora estadounidense de relaciones internacionales, ofrece una de las obras más influyentes dentro de los estudios feministas de las relaciones Internacionales y de la guerra, que también quisiera destacar. Su planteamiento es una crítica directa tanto a las teorías tradicionales de la seguridad internacional (realismo, liberalismo, constructivismo), como a los enfoques de guerra centrados únicamente en factores materiales, estratégicos o institucionales. Sjoberg sostiene que la teoría clásica de la guerra ignora cómo las construcciones de género (masculinidad/feminidad) organizan el poder, el uso de la violencia y las justificaciones del conflicto. La guerra es presentada como un terreno de hombres (valentía, agresión, liderazgo, racionalidad), mientras que lo femenino se asocia a vulnerabilidad, pasividad o necesidad de protección. Esto no solo excluye a las mujeres como sujetos políticos, sino que refuerza jerarquías patriarcales. Sostiene que el género no es solo un discurso, sino que produce efectos concretos en la medida que determina quién combate, quién lidera, quién es protegido y quién se convierte en objetivo. Enfatiza que la violencia sexual en los conflictos no es un subproducto inevitable, sino una estrategia de guerra generalizada que busca humillar, dominar y desestructurar comunidades. Bajo esta óptica, el cuerpo femenino se convierte en un "campo de batalla", donde se inscribe la identidad nacional y étnica. Además, muestra

cómo el estudio de la guerra ha tendido a minimizar o naturalizar estas violencias, perpetuando la invisibilidad de las experiencias de las mujeres. Finalmente, esta autora propone reconceptualizar la guerra, es decir, no verla únicamente como enfrentamiento militar interestatal, sino como un entramado de violencias múltiples (estructurales, simbólicas, sexuales, económicas) que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres.

La idea de la paz como debilidad es central para entender por qué muchos conflictos armados se prolongan, incluso cuando el coste humano y material es devastador. No basta con intereses geoestratégicos o económicos: hay también un sustrato cultural y psicológico asociado a la masculinidad hegemónica militarizada y a los liderazgos que la encarnan. Es un fenómeno que actúa tanto en la subjetividad del líder, como en el imaginario colectivo de su base social o militar. Hay cuatro aspectos a tener en cuenta: 1) el honor masculino y la disuasión. El líder o el grupo armado, teme que ceder en negociaciones lo convierta en menos hombre frente a rivales y seguidores. En culturas de honor, no responder a una ofensa con fuerza significa perder estatus y ser percibido como vulnerable; 2) legitimidad del hombre fuerte. Muchos líderes autoritarios han cimentado su poder en el mito del hombre fuerte. Si ese líder se sienta a negociar, su legitimidad se resquebraja porque la paz contradice la narrativa de dureza que lo llevó al poder; 3) cohesión de los grupos armados. En ejércitos o milicias, el *ethos* viril de resistencia y lucha permanente, actúa como pegamento social. Firmar la paz amenaza esa cohesión; 4) cultura política nacional. En sociedades donde la guerra se vincula a la defensa del honor colectivo, los acuerdos de paz son vistos como traiciones a la nación[174]. Resumiendo, la percepción de la paz como debilidad es un obstáculo estructural en muchos conflictos, pues la paz amenaza la identidad masculina militarizada de líderes y combatientes, negociar o ceder se interpreta como emasculación política, y este imaginario explica por qué la guerra suele prolongarse más allá de la racionalidad estratégica o económica, ya que la masculinidad en juego impide reconocer la paz como fortaleza.

Joshua S. Goldstein[175], profesor de relaciones internacionales, ha

desarrollado un pensamiento sistemático sobre la relación entre sexo, género y guerra. Argumenta que, aunque existen diferencias sexuales en promedio (fuerza, hormonas, agresividad), la magnitud de esas diferencias no explica por sí sola la exclusión femenina de la guerra. Más bien, son las estructuras culturales, sociales y de poder las que refuerzan la división sexual del trabajo bélico. Goldstein examina cómo la sexualidad masculina se entrelaza con la violencia armada y pone dos ejemplos: la erotización de las armas y del poder militar, el uso de la violación como arma de guerra, donde el cuerpo femenino se convierte en campo de batalla simbólico entre comunidades. Subraya que el control sobre las mujeres y su sexualidad está ligado al mantenimiento del sistema bélico y a la reafirmación de jerarquías masculinas. La guerra no solo refleja diferencias de género, sino que las produce y reproduce. Es decir, la propia práctica bélica refuerza las nociones de masculinidad (fuerza, disciplina, agresión) y feminidad (cuidado, vulnerabilidad, pasividad). De este modo, la guerra se convierte en un sistema de género en sí mismo, generando incentivos para que los hombres se identifiquen con la agresividad militar y las mujeres con el cuidado.

Esto nos lleva a otra pregunta: ciertos modelos de masculinidad asociadas a la violencia, la fuerza, el dominio y el poder, ¿son un obstáculo para las negociaciones de paz en conflictos armados? La respuesta nos lleva de nuevo a la masculinidad hegemónica, que define el modelo cultural dominante de lo que "debe" ser un hombre: fuerte, agresivo, racional, capaz de dominar. En contextos de guerra, este modelo se convierte en masculinidad militarizada, donde la identidad masculina se vincula directamente al uso de la fuerza, al heroísmo guerrero, al sacrificio violento por la nación, la etnia o la religión. La negociación, el compromiso o la renuncia a la violencia suelen percibirse en estos marcos como debilidad, traición o falta de hombría. Los líderes que se han construido a sí mismos como hombres fuertes (señores de la guerra, caudillos militares, presidentes autoritarios, etc.) temen que aceptar concesiones o sentarse a negociar los deslegitime frente a sus seguidores, al proyectar falta de firmeza. La masculinidad militarizada valora la jerarquía rígida y el mando

incuestionable. En mesas de negociación, esto se traduce en intransigencia, rechazo al compromiso horizontal y dificultad para reconocer al enemigo como interlocutor válido. Para superar esos escollos hay que incluir liderazgos no militarizados en las negociaciones (mujeres, líderes comunitarios, juventudes, religiosos), reformular la narrativa de la paz no como debilidad, sino como un acto de valentía y honor; planificar procesos de DDR con enfoque de género, que permitan a excombatientes redefinir su identidad masculina fuera de la violencia, y una educación en masculinidades alternativas que valoren el cuidado, la negociación y la cooperación.

En síntesis, los modelos de masculinidad hegemónica, asociados a la fuerza, la violencia y el dominio, actúan como un obstáculo en las negociaciones de paz porque trasladan la lógica del campo de batalla a la mesa de diálogo, donde ceder se percibe como debilidad y se privilegia la imposición sobre el compromiso; además, refuerzan jerarquías verticales y excluyen voces alternativas (mujeres, comunidades civiles), dificultan el reconocimiento de responsabilidades y la empatía hacia las víctimas, y priorizan mantener reputaciones guerreras y heroicas antes que pactar soluciones inclusivas y sostenibles, lo que reduce la viabilidad de los acuerdos alcanzados. La alternativa pasa por desmilitarizar y transformar las nociones de masculinidad para que la paz no sea vista como debilidad sino como fortaleza colectiva; esto implica promover modelos de liderazgo basados en el cuidado, la empatía, la cooperación y la responsabilidad compartida, integrando voces diversas —mujeres, comunidades civiles, jóvenes, minorías— en los procesos de negociación. También supone cambiar la cultura política de la negociación: de una arena de poder y dominio a un espacio de reconocimiento mutuo, inclusión y reparación, donde el prestigio no dependa de imponer, sino de construir acuerdos duraderos que respondan a las necesidades de todas las partes.

NEGOCIAR SOBRE EL PODER POLÍTICO EN LOS PROCESOS DE PAZ

Un proceso de paz es un esfuerzo para lograr un acuerdo que ponga fin a la violencia, así como para implementarlo, mediante negociaciones que pueden requerir la mediación de terceros. Con esta definición inicial quiero destacar la idea de que un proceso no es un momento puntual, sino un conjunto de fases o etapas repartidas en el tiempo en las que intervienen todos los actores afectados, en un esfuerzo colectivo por alcanzar, en un momento determinado, acuerdos que permitirán acabar con la situación anterior, dominada por la violencia y el enfrentamiento armado, para dar paso, mediante el diálogo y el consenso, a pactos o acuerdos que pongan fin a la violencia física, e iniciar, a través de la implementación de los acuerdos, una nueva etapa de progreso y desarrollo que permita superar igualmente las violencias estructurales que propiciaron el surgimiento del conflicto.

Por tanto, un "proceso de paz" incluye obviamente la fase de negociación y de mediación, pero la trasciende completamente al referirse también, y de manera esencial, al cumplimiento de lo acordado. De ahí que el proceso de paz vaya más allá del acuerdo o pacto de paz que, si bien se trata de un momento cumbre y es, sin duda, el más visible, no es más que el punto de partida de unas etapas decisivas en las que se verá si realmente el cese de la violencia es capaz de generar una nueva situación de paz positiva, entendida esta como prosperidad, armonía, desarrollo humano, crecimiento personal y justicia social, entre otros aspectos. En este sentido, hay procesos que han logrado materializarse y otros que se han quedado con las intenciones y se han malogrado en el camino, precisamente, porque no han sido capaces de implementar lo acordado, por lo que han generado una enorme frustración ya que no han cumplido con las expectativas

creadas. Además, en estos casos, y Centroamérica es testigo de ello, es frecuente constatar el surgimiento de nuevas violencias comunes, desvinculadas de la violencia política del pasado, que pueden ocasionar un número de víctimas igual o superior al que se produjo durante la etapa de confrontación armada[176].

Todo proceso de paz requiere de una gran inversión de tiempo, y muestra de ello es la gran cantidad de años que normalmente hay que dedicar para que un proceso de paz se inicie y fructifique. En términos generales, y salvo muy pocas excepciones, sigue una pauta con fases más o menos conocidas, en las que el mayor tiempo es el dedicado a las negociaciones. Funciona con una primera fase exploratoria, o de tanteo, también llamada de prenegociación, en la que las personas que intervienen en ella (exploradoras) calibran el convencimiento de las partes, es decir, si están realmente convencidas de que van a iniciar un proceso negociador en el que tendrán que ceder algo. Ese momento es decisivo, pues con frecuencia se negocia sin el convencimiento de alguna de las partes, ya sea el Gobierno o el grupo armado, bien para ganar tiempo, como maniobra de distracción para rearmarse, bien por inercia o, simplemente, por cálculo estratégico. De ser así, las negociaciones, en caso de abrirse, están condenadas al fracaso. Es lo que ocurrió en el año 2001 en las conversaciones fallidas en El Caguán, en Colombia, entre las FARC y el Gobierno de Andrés Pastrana. Las FARC, que se sentían fuertes y poderosas, manejaron las negociaciones en términos de aprovechar el momento para fortalecerse aún más, por lo que escogieron una metodología sumamente lenta que les beneficiaba en el tiempo, pero que no conducía a ninguna parte. Faltó un detonante, el secuestro de un avión, para que el experimento fracasara estrepitosamente, lo que dio paso a una década de no negociación. Y es que en términos de paz o de confrontación, los engaños se pagan con una moneda muy cara.

En la fase exploratoria también se tantean los términos de una completa y absoluta seguridad para los futuros negociadores, ya que existen precedentes de asesinato o de atentados contra ellos y nadie se aventura a entablar unos diálogos sin plenas garantías de seguridad que hay que establecer con normas muy bien definidas. Asimismo, se

buscan ciertas garantías para el cumplimiento de lo acordado en esta etapa, en la que se convienen los cronogramas y la metodología a seguir, se define una preagenda o agenda inicial, se establecen los términos de una primera hoja de ruta y se clarifican los aspectos conflictivos del desacuerdo básico o de las incompatibilidades fundamentales (el metaconflicto). En esta etapa se busca, en suma, generar confianza en el propio proceso, se acuerda el rol que pueden jugar terceras partes, se renuncia a la imposición de proyectos (base de la negociación misma) y se acaba reconociendo al adversario, dándole la legitimidad necesaria para intermediar. Una vez realizado este trabajo exploratorio se llega a un "acuerdo sobre lo que hay que acordar" para así avanzar en "cómo hacerlo". La suma de todos estos pasos es lo que a veces constituye una hoja de ruta o marco inicial de lo que hay que realizar para que todo salga bien. La hoja de ruta no es más que un esquema de trabajo, con frecuencia un diagrama, en el que se dibujan los pasos a seguir y constituye la orientación del proceso.

Una vez abierta la negociación, las partes se cercioran de que los interlocutores son válidos, es decir, son los representantes de los actores primarios con capacidad para tomar decisiones. En la mesa de negociación no caben actores de tercera fila, por lo que siempre es necesario partir de un planteamiento inclusivo que de voz a los actores, aunque éstos no sean los deseados, pero que son claves en la resolución del conflicto. No tiene sentido invitar a una mesa a los actores amigos, más cómodos por supuesto, sino a los auténticos adversarios. La razón de ser de esa negociación será que las partes opuestas se sienten a dialogar, bajo un prisma mental de alcanzar un beneficio mutuo mediante el esquema de "todos ganan, nadie pierde", es decir, "yo gano, tú ganas", prescindiendo de los planteamientos de suma cero en los que uno gana y el otro pierde.

Si la negociación avanza satisfactoriamente se podrán discutir los temas de la agenda sustantiva (los de la agenda procedimental ya se habrán acordado con anterioridad) y, dado que se habrá ganado confianza, se transformarán igualmente las relaciones personales, lo que permitirá llegar con más facilidad a un acuerdo, o al menos a acuerdos parciales, con sus respectivos protocolos que permitirán

llegar a un acuerdo final, en el que se especificará cómo se implementará y quien lo llevará a cabo. Eso nos conducirá, finalmente, a los acuerdos de implementación, a los de las formas de verificación y a los de cómo solucionar los posibles desacuerdos que puedan surgir en las etapas finales.

En medio de este proceso habrá que gestionar posibles declaraciones de alto el fuego o de cese de hostilidades, entendida esta última como el alto el fuego más el cese de actividades sobre la población civil (hostigamiento, amenazas, destrucción de infraestructuras, secuestro, etc.), por lo que está vinculado al cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

¿Cuánto se tarda en iniciar una negociación, una vez empezada la guerra? Casi en la mitad de los casos en que ha habido un acuerdo de paz, las negociaciones suelen empezar en los dos primeros años, y en el 20%, en el mismo año, en pocos meses. Como contraposición, en el 15% de los casos se ha tardado más de 20 años. Una pregunta muy frecuente que se hacen las partes que entran en una negociación, es la duración de la misma. Normalmente hay interrupciones, pausas y crisis, que obligan a realizar varias rondas. Dos de cada tres negociaciones que han conducido a un acuerdo de paz final en los últimos 35 años han necesitado al menos cinco años, y el 27%, menos de dos. Solo una de cada cinco necesita más de 15 años, muestra de que en algunos contextos no ha sido nada fácil llegar a un acuerdo. A veces hay que intentarlo varias veces y con diferentes mediaciones.

Pensando en las fases del posconflicto, los politólogos Caroline Hartzell y Matthew Hoddie[177] han estudiado y puesto el énfasis en la inclusión institucional, la distribución de poder y los acuerdos de paz. Su análisis se centra en la forma en que los acuerdos de paz, especialmente aquellos alcanzados mediante la negociación en conflictos internos o guerras civiles, pueden diseñarse para transformar relaciones de confrontación en mecanismos que eviten la recaída en el conflicto. En lugar de ver la negociación de paz como un mero cese de hostilidades, ellos proponen que la clave está en la construcción de instituciones en las que se redistribuya y regule el uso del poder entre

los antiguos adversarios. Esto es especialmente relevante en contextos etnopolíticos, donde las diferencias étnicas subyacen a profundas tensiones, y donde la acumulación o concentración del poder en manos de un solo grupo puede agravar la sensación de vulnerabilidad en otros. Argumentan que los conflictos civiles, muchos de los cuales son de tipo etnopolítico, pueden resolverse de forma más estable si los acuerdos de paz incluyen mecanismos institucionales de reparto de poder. Esto se basa en la idea de que los grupos enfrentados necesitan garantías mutuas para comprometerse con la paz. Sostienen que los acuerdos inclusivos que institucionalizan la participación étnica (por ejemplo, cuotas parlamentarias, autonomías territoriales), son más estables que aquellos que se basan solo en el desarme o promesas informales. Estas tesis también han sido discutidas, por ejemplo, por Philip Roeder y Donald Rothchild[178], que han advertido que el reparto de poder puede cristalizar en divisiones étnicas y dificultar la integración. Roeder sostiene que los arreglos de poder compartido (como gobiernos de unidad nacional, cuotas étnicas, veto mutuo o federalismo étnico) perpetúan las divisiones étnicas y, en lugar de promover la integración, institucionalizan la segmentación identitaria. Roeder defiende lo que llama *power-dividing*, una fórmula institucional que no se basa en representar grupos étnicos sino en separar poderes a través de instituciones neutrales, como cortes independientes y descentralización no étnica, para evitar que los grupos étnicos capturen el aparato estatal. Rothchild, por su parte, reconoce que el poder compartido puede ser necesario en la fase inicial del posconflicto, pero advierte que no es sostenible a largo plazo si no se transforma en instituciones más integradoras. Critica la dependencia excesiva en estos mecanismos sin construir confianza ni estructuras inclusivas de gobernanza. Propone una transición desde el poder compartido hacia una gobernanza cooperativa e interdependiente que involucre instituciones que fomenten la moderación y la competencia democrática[179].

Como bien recuerda Bell[180], el reparto de poder político es fundamental para los procesos de paz y su configuración suele ser muy controvertida. Reestructura la forma en que se ostenta y ejerce el

poder en las instituciones políticas, de maneras que presentan tanto desafíos como oportunidades para la participación de las mujeres. Si bien suele ser una forma clave de lograr un acuerdo entre grupos en conflicto y oponentes políticos, busca un pacto de élites que con frecuencia puede excluir a sectores e intereses más amplios, incluidos los de las mujeres.

En síntesis, la discusión revela una tensión estructural entre estabilidad y transformación, ya que los mecanismos de poder compartido pueden ser un punto de partida indispensable para detener la violencia y asegurar la representación de antiguos contendientes, pero si se mantienen sin evolución institucional, cristalizan las divisiones que pretendían superar. La clave, como sugieren Roeder, Rothchild y Bell, reside en convertir el reparto de poder en un tránsito hacia una arquitectura más inclusiva, donde la legitimidad emane de instituciones imparciales, de una ciudadanía plural y de una participación política que trascienda pactos de élites y permita ampliar, de manera sostenida, los márgenes de inclusión y de igualdad sustantiva.

EL DIVIDENDO DE LA PAZ

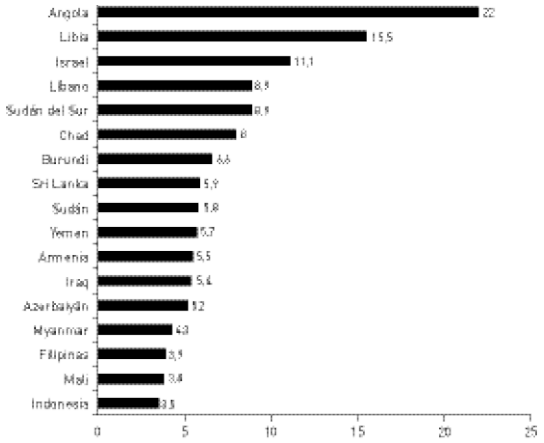
Toda guerra comporta aumentos significativos de los gastos militares, aunque depende de numerosos factores, como el tipo de armamento y su coste, el número de efectivos, la duración de la guerra o la estrategia seguida. De los 21 países en que hay datos, la media de los gastos militares sobre el Producto Interior Bruto (PIB) de estos países, pasó de ser del 2,38% tres años antes de empezar la guerra a una media del 5,12% en el momento más álgido de la guerra, un aumento del 115%. Superar la barrera del 3% ya afecta directamente a la economía de un país, al desviarse el gasto gubernamental para fines militares, en detrimento de los sociales. Si el gasto supera el 5%, el impacto negativo es enorme.

Cuando termina la guerra, lo normal es que el gasto militar vaya disminuyendo, en lo que se denomina el dividendo por la paz. En los 11 países en que hay datos para comparar (Angola, Burundi, Costa de

Marfil, Chad, Etiopía, Sudán, Sudán del Sur, Filipinas, Indonesia, Nepal y Sri Lanka), de tener una media de gasto militar del 6,2% en el pico más alto de la guerra, pasaron a una media del 2,4% tres años después de terminar la guerra, una disminución del 154%. En el gráfico siguiente expongo algunos ejemplos.

GRÁFICO 26

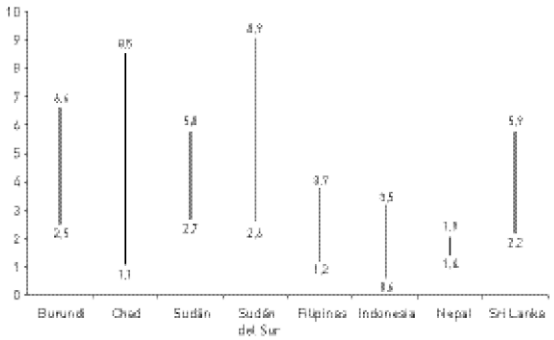
PORCENTAJE DE LOS GASTOS MILITARES SOBRE EL PIB DURANTE LA GUERRA. NIVEL MÁXIMO ALCANZADO EN LOS PAÍSES CON NIVELES SUPERIORES AL 3%



Fuente: Elaboración propia a partir de SIPRI.

GRÁFICO 27

EJEMPLOS DE REDUCCIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS GASTOS MILITARES SOBRE EL PIB, DURANTE LA GUERRA Y TRES AÑOS DESPUÉS DE TERMINARLA



Fuente: Elaboración propia a partir de SIPRI.

En teoría, los beneficios al rebajar los gastos militares son muchos y en varios ámbitos. Su reducción permite reasignar fondos a salud, educación, vivienda, infraestructuras y seguridad alimentaria. Estudios empíricos muestran que el gasto militar excesivo limita la inversión productiva, por lo que su reducción genera confianza en los mercados y

atrae inversión extranjera. Al reducir el gasto en armamento y salarios de ejércitos sobredimensionados, se baja la presión fiscal y el endeudamiento externo. El traslado de recursos hacia educación, sanidad y servicios públicos, aumenta el bienestar social y reduce las causas estructurales de futuros conflictos. También permite financiar programas de reintegración, compensaciones y reconstrucción comunitaria. Si el gasto se reorienta a regiones marginadas, disminuye la percepción de exclusión y se refuerza la cohesión social, al tiempo que se evita que las Fuerzas Armadas mantengan un papel sobredimensionado en la política, y contribuye a consolidar gobiernos civiles y democráticos. Si realmente hay un trasvase de fondos para fines sociales, la población percibe beneficios tangibles de la paz cuando se reducen los recursos para la guerra y se invierten en necesidades cotidianas. También se produce una mayor confianza internacional, pues muchos países donantes y organismos financieros suelen condicionar ayuda al desarrollo a reducciones en gasto militar. En suma, se fomenta la seguridad humana, ya que se prioriza la protección de personas (salud, educación, derechos) sobre la seguridad del régimen.

EL PODER POLÍTICO DESPUÉS DE LOS ACUERDOS DE PAZ

De los ocho procesos de paz que han existido a lo largo de este siglo, como culminación de las guerras por el poder político, al empezar la guerra todos los países eran autocracias, cinco cerradas y tres electorales. Tres años después de firmarse los acuerdos de paz, la situación era la misma en un caso (Sudán del Sur), y había mejorado algo en los otros seis casos, aunque tres países continuaban siendo autocracias y ninguno una democracia plena (democracia liberal en los términos del V-Dem Institute). Como contrapunto, y de forma bastante predecible, los países con guerras desactivadas sin acuerdo de paz o que han terminado con la victoria militar de algunas de las partes, dos mejoraron su estatus (Costa de Marfil y Chad), quedando igual en 6 casos y peor en dos (Sri Lanka y Siria).

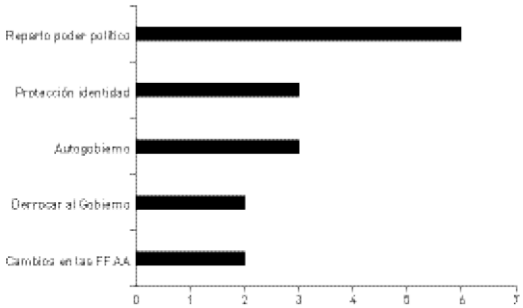
TABLA 9
TIPO DE RÉGIMEN POLÍTICO EN LOS PAÍSES CON PROCESOS DE PAZ

PAÍS	AL EMPEZAR LA GUERRA	TRES AÑOS DESPUÉS DE FINALIZAR LA GUERRA
Burundi	Autocracia cerrada	Autocracia electoral
Liberia	Autocracia electoral	Democracia electoral
Sudán	Autocracia cerrada	Autocracia electoral
Sur de Sudán	Autocracia cerrada	Autocracia cerrada
Sudán del Sur	Autocracia cerrada	Autocracia cerrada
Filipinas	Autocracia cerrada	Democracia electoral
Indonesia	Autocracia electoral	Democracia electoral
Nepal	Autocracia electoral	Democracia electoral

Fuente: Elaboración propia a partir de V-Dem Institute.

En regímenes autocráticos cerrados (sin pluralismo político, sin elecciones competitivas, sin libertades básicas), las guerras por el poder político suelen cuestionar la exclusión total de actores armados y sociales. Los acuerdos de paz, casi siempre incluyen cláusulas de inclusión política o reparto del poder, como legalización de partidos opositores, cupos parlamentarios o participación en elecciones o en gobiernos de unidad. Estas concesiones fuerzan al régimen a abrir espacios institucionales, aunque sean limitados. Los acuerdos frecuentemente introducen reformas constitucionales (nuevas reglas electorales, descentralización, reformas judiciales, límites al poder ejecutivo) y, aunque la élite gobernante conserve gran parte del control, estas reformas generan cambios graduales en la calidad democrática (mayor transparencia, cierta rendición de cuentas, instituciones mixtas).

GRÁFICO 28
LOGROS EN LOS ACUERDOS DE PAZ EN LAS GUERRAS POR EL CONTROL POLÍTICO



Fuente: Elaboración propia.

Tras años de guerra, los gobiernos buscan legitimidad renovada frente a sus poblaciones y para prevenir nuevas insurgencias. Introducen entonces mecanismos de participación y toleran mayor pluralismo, aunque controlado, para mostrar un nuevo pacto político. Los excombatientes que se convierten en partidos políticos, si es el caso, presionan por espacios de competencia electoral y garantías democráticas mínimas. Aunque no siempre ganan el poder, su mera participación amplía la esfera política y erosiona el monopolio autoritario. El resultado más común no es la democracia plena, sino un régimen híbrido, con elecciones con irregularidades, algo de pluralismo, pero con persistencia de prácticas autoritarias. Sin embargo, esos híbridos representan un salto respecto al autoritarismo cerrado y a veces evolucionan gradualmente hacia democracias más consolidadas. Veamos brevemente lo que ocurrió en los ocho casos[181].

En Burundi, hubo un primer acuerdo en el 2000, con reparto del poder político y militar. El acuerdo final fue en 2003, con integración de los combatientes del CNDD-FDD en el ejército y el Gobierno, reparto del poder, cuotas políticas, amnistía parcial y desarme, desmovilización y reintegración (DDR). En 2005, el líder del CNDD-FDD fue elegido presidente y pasó a ser el partido hegemónico, el ejército estuvo compartido, y con cuotas hutu-tutsi en el Gobierno y el Parlamento. En 2014 se instauró una Comisión de Verdad y Reconciliación. La crisis de 2015 supuso una ruptura política con el espíritu del acuerdo de paz de Arusha y un debilitamiento sostenido de los mecanismos de reparto; desde entonces, la relevancia práctica del marco de Arusha en la gobernanza disminuyó, aunque algunas cuotas formales siguieron en el texto. En 2023-2024 se discutió incluso evaluar/eliminar instituciones de cuotas étnicas. El resultado final ha

sido el de un cumplimiento parcial y en retroceso[182].

En la segunda guerra civil de Liberia, en agosto de 2003, el presidente Taylor renunció y se exilió. Se firmó un Acuerdo de Paz en el mismo mes, se estableció un alto al fuego, DDR, inclusión de los combatientes en el Gobierno de Transición y el despliegue de una misión de la ONU. El acuerdo se implementó, se convocaron elecciones y hubo reparto de poder temporal en el Gobierno de Transición (2003-2006), bajo tutela internacional, y con una teórica dimensión de género, que no se cumplió. El expresidente Taylor fue condenado por crímenes de guerra y lesa humanidad. Las deficiencias se dieron más en la integridad y eficacia del poder compartido (corrupción, disputa por carteras) que en su implementación formal[183].

En Sudán, en 2006 se firmó el Acuerdo de Paz de Abuja con el SLM/A, pero no se cumplieron los compromisos, excepto que uno de los líderes, Minnawi, fue nombrado asesor presidencial. En 2011, el SLM/A fue uno de los grupos que estableció una coalición armada llamada Frente Revolucionario de Sudán (SRF), produciéndose una ruptura en 2016. Lograron muy parcialmente el acceso a cargos gubernamentales en 2006 y en 2020 para algunas facciones, el reconocimiento de Darfur como una cuestión nacional en las agendas de paz de Sudán, pero no lograron cambiar el régimen político de Sudán, democratizar, secularizar ni federalizar el Estado. El SLM/A se fragmentó en múltiples facciones. En términos de cumplimiento, el acuerdo fue parcial en lo formal y fallido en lo sustantivo[184].

En la guerra en el sur de Sudán, el Acuerdo General de Paz se firmó en enero de 2005, entre el Gobierno de Sudán (Omar al-Bashir y el Partido del Congreso Nacional) y el SPLM/A. Los términos principales del acuerdo fueron los siguientes: 1) alto el fuego permanente y mecanismos conjuntos de verificación; 2) autonomía del sur de Sudán; se establecía un Gobierno Autónomo del Sur con su propio parlamento y ejército (SPLA); 3) distribución del poder, con la inclusión del SPLM en el Gobierno Nacional, en Jartum, con cargos clave; 4) reparto de recursos petroleros. Los ingresos del petróleo extraído en el sur serían compartidos al 50% entre Jartum y el Gobierno del Sur; 5) periodo de transición de seis años (2005-2011) con instituciones comunes, pero

autonomía clara en el sur. Después, se haría un referéndum de autodeterminación y la población del Sur votaría entre permanecer en un Sudán unificado o independizarse. Este referéndum se celebró en enero de 2011, con un resultado abrumador: 98,8% a favor de la independencia. Sudán del Sur se proclamó Estado soberano el 9 de julio de 2011. De todas formas, en 2013 empezó una guerra civil en Sudán del Sur entre facciones del SPLM. Los mecanismos políticos se activaron solo de forma nominal (nombramientos y órganos), pero no se tradujeron en poder efectivo ni gobernanza sustentable. El núcleo de reparto de poder del acuerdo se cumplió en su arquitectura (Gobierno, cuotas en la legislatura, primera vicepresidencia para el SPLM, autogobierno del Sur, elecciones y referéndum), pero la democratización sustantiva del centro y las garantías de inclusión política (comisiones con base legal sólida, metas de servicio civil), quedaron incompletas, y las consultas populares en Nilo Azul/Kordofán del Sur no se realizaron, derivando en nuevo conflicto. Por tanto, el objetivo político del acuerdo se cumplió a medias, pues, aunque fue suficiente para la autodeterminación del Sur, fue insuficiente para una transformación política inclusiva del Sudán "remanente"[185].

En Sudán del Sur, como acabo de comentar, se inició una guerra poco después de la independencia, muy personalizada por las disputas del presidente y el vicepresidente. Se firmó un acuerdo de paz en 2015, pero que colapsó. En 2018 se firmó el Acuerdo Revitalizado de Paz (R-ARCSS), con un alto al fuego permanente, el retorno de Machar como vicepresidente en 2020 y la creación de un Gobierno transitorio de unidad. El cumplimiento fue parcial, con un Gobierno de unidad, pero con tensiones iniciales y avanzando muy lentamente la integración de fuerzas conjuntas, la desmilitarización y la redacción de una nueva Constitución. En 2025, el ejército de Kiir y las fuerzas de Machar, que estaba detenido, se enfrentaron nuevamente, provocando cientos de muertos.

En Filipinas, tras años de negociaciones, en 2014 se firmó un Acuerdo de Paz que puso fin al conflicto, con la creación de una nueva entidad autónoma, Región Autónoma Bangsamoro en Mindanao

Musulmán (BARMM), DDR, y autonomía fiscal, política y cultural. La nueva entidad no pudo ponerse en marcha hasta 2019, por problemas en el Congreso. La arquitectura política comprometida (nueva entidad, parlamento, competencias, régimen fiscal, etc.) se materializó, así como la puesta en marcha de BARMM/BTA. La normalización electoral (parlamento elegido) llegó tarde, pero estaba en la fase final con la elección de 2025. En términos comparados, el grado de cumplimiento político-institucional es alto, con rezagos derivados de tiempos legislativos, judiciales y de coordinación centro-región[186].

En Indonesia (Aceh), en el año 2000 el Gobierno ofreció una autonomía que fue rechazada. En 2004 se produjo el tsunami que devastó Aceh y que provocó una negociación inmediata, mediada por Finlandia, logrando un Acuerdo de Paz en 2005, por el que el GAM aceptaba una autonomía, el desarme, el retiro de las tropas indonesias, una amnistía, la creación de un nuevo partido, el control local sobre los recursos naturales y el establecimiento de una misión internacional de verificación. Se cumplieron todos los compromisos y un excomandante del GAM fue elegido gobernador de Aceh. En lo estrictamente político-institucional, el acuerdo sí cumplió lo central: partidos locales, elecciones competitivas, acceso del ex-GAM al Gobierno y un régimen de autonomía y fiscalidad robusto. Donde no se cumplió el estándar es en la justicia transicional y en parte del autogobierno que quedó más acotado de lo esperado. Aun con tensiones puntuales, el canal de poder político pactado funciona y ha estructurado la disputa por el poder en clave electoral provincial[187].

En Nepal, finalmente, en 2006 se formó una alianza entre partidos democráticos y maoístas contra la monarquía, que desembocó en un Acuerdo de Paz Integral, que puso fin al conflicto. El Acuerdo fijaba el fin de las hostilidades, el ingreso de los maoístas en la política legal, la integración parcial de excombatientes en el ejército, la convocatoria de una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución, y la supervisión del desarme por parte de la ONU. En 2008 se abolió la monarquía y Nepal pasó a ser una República Federal Democrática. Los maoístas se convirtieron en la fuerza política dominante y su líder fue el primer ministro. La nueva Constitución no fue aprobada hasta

2015, y las reformas sociales y federales avanzaron con lentitud. Sí se cumplió la inclusión de los maoístas en las instituciones y la federalización con elecciones subnacionales. La inclusión sustantiva de todas las identidades (Madhesi/Tharu/Janajati) y en la profundidad del reparto territorial y fiscal del poder, fue parcial. La frágil gobernabilidad y los ciclos de coalición diluyeron la promesa de un reparto de poder estable, aunque el marco democrático-federal se consolidó[188].

En tres de los acuerdos de paz se ha conseguido autogobiernos (Mindanao en Filipinas y Aceh en Indonesia, en forma de autonomía), solo en un caso se consiguió la independencia (Sudán del Sur en 2011). Sin acuerdos de paz, pero con arreglos políticos, los kurdos de Iraq lograron también una autonomía; en tres casos (Angola, Burundi y Nepal), se lograron legalizar a los grupos armados, convertidos ya en partidos políticos; en otros casos (Etiopía-Tigray, Libia y Sudán), se consiguieron ceses de hostilidades, en espera de un futuro más esperanzador, y en tres casos más (la CNDP en RD Congo y el SLM-A y JEM en Sudán), se consiguió una cierta integración política. Estos ejemplos demuestran que la transformación de actores armados no siempre requiere un tratado de paz definitivo, sino que puede ser producto de arreglos pragmáticos, coyunturales o de la necesidad de los Estados en estabilizar el frente político. Los rasgos más comunes del fenómeno son la legalización sin paz definitiva, cuando los Estados permiten la conversión en partidos para desactivar parcialmente el conflicto o dividir a la insurgencia; las cesiones pragmáticas, con cargos en el parlamento, ministerios o acceso a rentas estatales que funcionan como incentivo para dejar (o reducir) las armas sin resolver las causas de fondo; en muchos casos, sin embargo, las alas armadas se mantienen activas o surgen disidencias que rechazan el proceso político[189]. Finalmente, otro factor que puede influir es la legitimación internacional, pues organismos como la ONU o la Unión Africana han avalado la inclusión de exrebeldes en transiciones políticas, incluso sin paz definitiva, priorizando la estabilidad sobre la resolución estructural del conflicto.

Si ampliamos el foco y miramos los acuerdos de paz existentes entre

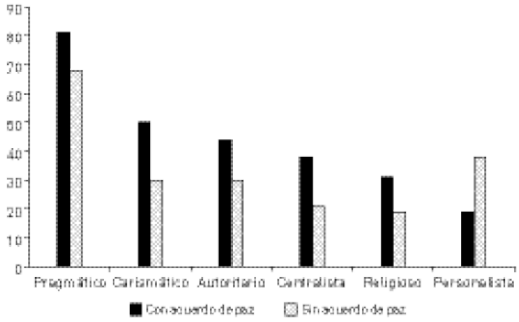
1990 y 2025, en especial los que tuvieron una vinculación con la lucha por obtener el poder político, viendo sus éxitos y fracasos, podemos sacar varias lecciones que podrían servir de inspiración para abordar los conflictos armados actuales. Sobre lo que sí ha funcionado relativamente bien, los patrones de éxito, hay cinco aspectos que me gustaría destacar: 1) transiciones pactadas con hoja de ruta y cronogramas concretos, con calendarios claros que atan hitos políticos a seguridad y recursos, como en Mozambique (1992), El Salvador (1992), Nepal (2006), o Aceh (2005); 2) conversión creíble de los grupos armados en partidos políticos, con reglas electorales adaptadas (umbral razonable, financiamiento público, garantías de seguridad) y cuotas temporales, como en Burundi (2003-2005), Liberia (2003) o Colombia/FARC (2016); 3) descentralización/federalismo con transferencias automáticas, competencias reales y financiación asegurada, como en Aceh (2005); 4) garantías de seguridad, con buenos programas de DDR y reforma del sistema de seguridad; 5) A ser posible, con garantías externas, como en Mindanao (2014).

Existe una base de datos sobre partidos formados a partir de grupos rebeldes que participaron en guerras civiles y luego hicieron la transición a la arena política legal. El PREP dataset[190] abarca el periodo 1990-2021 e incluye información sobre 56 actores de 39 países[191]. La tesis central del estudio es que la transición de un grupo rebelde a partido, no es excepcional sino recurrente. Desde los años noventa, con la tercera ola de democratización y los acuerdos de paz, es común que los grupos armados devengan en partidos políticos legales. La variación en el éxito político depende de múltiples factores, como el contexto institucional (sistemas proporcionales que tienden a favorecer mayor inclusión), la naturaleza del conflicto (los grupos con base étnica clara suelen tener votantes asegurados), las fortalezas organizativas heredadas de la estructura rebelde (disciplina, redes territoriales) o los incentivos ofrecidos en los acuerdos de paz. Para los autores, el desempeño de los partidos creados por los antiguos grupos armados es clave para la estabilidad posconflicto, pues si se institucionalizan y obtienen representación parlamentaria, pueden contribuir a la paz, y si fracasan o son marginados, aumenta el riesgo

de retorno a la violencia o de crisis de gobernabilidad. Estos partidos, por tanto, son actores ambivalentes, pues pueden fortalecer la democracia mediante pluralismo y representación de antiguos marginados, pero también pueden reproducir prácticas militarizadas, clientelares o autoritarias.

Aunque la literatura sobre la transformación de grupos armados tras la guerra civil ha estado dominada por el estudio de su paso a partidos políticos[192], como la referencia anterior, me parece muy interesante las aportaciones de Dudouet y Almeida[193], cuando señalan que esto invisibiliza otros caminos de participación política, que no pasan necesariamente por la arena electoral o parlamentaria y aunque no sea lo más habitual. Los excombatientes no siempre buscan institucionalizarse en partidos; pueden crear movimientos sociales, ONG, asociaciones de veteranos, cooperativas económicas o plataformas comunitarias que cumplen funciones políticas y sociales. Sostienen que la participación política debe entenderse en un sentido más amplio: defender intereses, negociar recursos, influir en agendas públicas o mantener la capacidad de movilización social. De este modo, incluso cuando un antiguo grupo armado no se convierte en partido, puede seguir teniendo peso en la configuración de la vida política nacional o local. Estas analistas subrayan que reconocer la importancia de estas formas no partidarias es crucial para el diseño de la paz sostenible y la reintegración. Si los acuerdos de paz solo ofrecen la vía de los partidos, pueden dejar de lado dinámicas políticas significativas que ayudan a estabilizar comunidades o a dar voz a excombatientes. Por tanto, la inclusión política posconflicto debe concebirse de una manera más amplia, no solo como acceso al parlamento, sino como derecho a influir en la vida pública en múltiples formas.

GRÁFICO 29
RASGOS DE LA PERSONALIDAD DE LOS LÍDERES DE GRUPOS ARMADOS, EN PORCENTAJE



Fuente: Elaboración propia.

También sabemos lo que suele fallar en muchos acuerdos y qué hay que tener muy presente, para evitarlo. Por ejemplo, el reparto de cargos políticos, pero sin reformas del poder; las secuencias imposibles, como imponer elecciones rápidas sin seguridad ni reglas mínimas o con programas de DDR sin contrapartida política visible; descentralización simbólica, sin transferencias predecibles, administración propia ni justicia local, lo cual se percibe como trampa; exclusiones "técnicas" que vuelven como *spoilers*, al dejar fuera a actores de poder efectivo (milicias, líderes regionales, diásporas, mujeres, comunidades desplazadas, etc.) o dejar que la economía política de guerra quede intacta. Si las redes de saqueo (minerales, petróleo, peajes) no se tocan, el incentivo a volver a las armas persiste.

¿Hay alguna diferencia entre el perfil de los dirigentes de grupos armados que han negociado y firmado un acuerdo de paz, respecto a los que no lo han hecho? La respuesta es que sí, y es bastante significativa.

Los líderes de grupos armados que consiguen firmar un acuerdo de paz suelen ser más pragmáticos, carismáticos, autoritarios, centralistas (respecto al mando de la organización) y religiosos, y, en cambio, son menos personalistas. Esto no es una casualidad. Respecto al pragmatismo, sin una mentalidad flexible y calculadora, capaz de evaluar costes y beneficios más allá de la victoria militar, resulta imposible sentarse a negociar y aceptar compromisos dolorosos. El carisma facilita la cohesión interna en momentos críticos, cuando las bases o los mandos intermedios podrían sentirse traicionados por la negociación. Un líder que sabe comunicar, puede "vender" la paz como victoria parcial o como un paso hacia un objetivo mayor. En

cuanto al centralismo en el mando, sin disciplina interna y control férreo de la cadena de mando, cualquier intento de acuerdo de paz puede fragmentar la organización en facciones disidentes. Los líderes exitosos en pactar suelen garantizar que sus órdenes se cumplen. La dimensión religiosa, aunque no siempre presente, puede aportar legitimidad moral y un marco simbólico fuerte, que dota de sentido trascendente al cambio de estrategia: aceptar un acuerdo puede enmarcarse como cumplimiento de una misión superior, no como claudicación. En cambio, los líderes de grupos armados que no han firmado acuerdos de paz suelen ser más personalistas, con un mando basado en el culto a su figura y en la acumulación de beneficios individuales. Este tipo de liderazgo es un obstáculo para pactar, pues el personalismo hace que el líder confunda el destino del grupo con el suyo propio, temiendo perder prestigio o poder personal si firma un acuerdo. La falta de pragmatismo o de estructuras centralizadas, aumenta el riesgo de divisiones internas, escisiones y radicalización. Al no disponer de una narrativa legitimadora (carismática o religiosa) capaz de "sacralizar" el compromiso, se percibe la paz como derrota o traición.

En síntesis, la diferencia clave es que los líderes negociadores actúan como arquitectos políticos colectivos, mientras que los líderes que rechazan pactos actúan como caudillos personalistas. Los primeros ponen la supervivencia y transformación del movimiento por encima de sí mismos; los segundos tienden a confundir su permanencia en el poder con la causa en sí. Esto sugiere que, para fomentar salidas negociadas, no basta con tener condiciones externas propicias, sino que también es fundamental identificar y potenciar dentro de los grupos armados aquellos liderazgos con pragmatismo, carisma comunicativo, centralismo disciplinado y legitimidad moral.

MÁS ALLÁ DEL REPARTO DEL PODER. EL RECONOCIMIENTO DE LAS DEMANDAS ÉTNICAS

Muchos acuerdos con reparto del poder político, han incluido compromisos explícitos o implícitos para atender demandas étnicas,

como por ejemplo redistribución institucional, representación o autonomía territorial. Pero ese vínculo no es universal ni automático, pues hay acuerdos sobre este aspecto que no adoptan el reparto del poder y, en cambio, otros que sí lo adoptan, aunque sea en forma limitada o simbólica, sin asegurar plenamente las demandas étnicas. Aunque la base de datos sobre acuerdos de paz (PA-X)[194] no codifica directamente todas las dimensiones de las demandas étnicas (en el sentido cultural, identitario, simbólico) en todos los casos, muchos estudios sobre reparto del poder político parten de la idea de que las demandas étnicas son parte del conflicto subyacente que se busca moderar, normalmente a través del concepto "inclusión", que intenta incluir grupos minoritarios o redistribuir su representación política, que muchas veces corresponde a líneas étnicas. El enfoque inclusión suele vincularse a demandas de representación política, participación en instituciones estatales, reconocimiento de derechos, etc. En muchos casos, los grupos armados étnicos buscan justamente acceso al poder o reconocimiento cultural/comunitario, y esos acuerdos con reparto del poder político han sido uno de los mecanismos para abordar esas demandas.

En muchos acuerdos, incluso cuando hay reparto del poder político, los compromisos en cuanto a aspectos culturales, identitarios, simbólicos o de reconocimiento no siempre son robustos o prescriptivos; pueden aparecer como cláusulas generales, sin mecanismos claros de implementación ni sanciones específicas. Algunos acuerdos optan por arreglos de descentralización o autonomía territorial en lugar de un estricto reparto del poder político, lo que puede responder parcialmente a demandas étnicas (autonomía local, control sobre recursos, etc.). En algunos conflictos, las demandas étnicas han sido ignoradas o subestimadas, incluso cuando se llegó a algún tipo de acuerdo de poder compartido, lo que ha generado críticas sobre la insuficiencia del diseño institucional para resolver las raíces del conflicto étnico.

¿Cuáles suelen ser los compromisos típicos en acuerdos de paz sobre aspectos culturales, simbólicos e identitarios? Entre otros aspectos, incluir en la constitución o en la legislación nacional

disposiciones que reconozcan derechos colectivos de grupos étnicos o identitarios, garantizar que los grupos étnicos pueden recibir educación en sus idiomas o en sistema bilingüe, permitir o institucionalizar símbolos (banderas locales, himnos, emblemas) o festividades étnicas, protección del patrimonio tangible e intangible del grupo étnico, que los grupos étnicos puedan estar representados en órganos encargados de memoria, verdad y reconciliación; cláusulas que prohíban discriminación basada en etnicidad, idioma o cultura, o delegar al grupo étnico competencias para gestionar aspectos culturales dentro de un territorio o ámbito local.

A continuación, expongo una lista seleccionada de acuerdos de paz y arreglos vinculados, que reconocen derechos de minorías étnicas o incluyen compromisos culturales, identitarios o simbólicos:

- Guatemala (1995). Reconocimiento de los pueblos maya, garífuna y xinca; reforma constitucional para ese reconocimiento, combate a la discriminación, compromiso con instrumentos internacionales, educación y lengua, difusión e implementación contra racismo.
- Irlanda del Norte (1998). Paridad de estima entre comunidades, reconocimiento del derecho de identificarse como británico, irlandés o ambos (y ciudadanía correspondiente); respeto a la diversidad lingüística (irlandés y otras lenguas de minorías), fuerte andamiaje de igualdad y no discriminación.
- Bosnia y Herzegovina (1995). Reconocimiento de los pueblos constituyentes (bosníacos, croatas, serbios), con representación garantizada y protecciones colectivas; arquitectura consociacional y salvaguardias para minorías.
- Macedonia del Norte (2001). Cooficialidad lingüística cuando una lengua supera el 20% a nivel municipal (prácticamente el albanés), representación equitativa en el sector público, descentralización, uso de símbolos y salvaguardias identitarias.
- RD Congo (2002-2003). Resolución específica sobre protección de minorías, proclamación de no discriminación

por etnia, religión o lengua; varias resoluciones laborales y de derechos con enfoque antidiscriminación.

- Nepal (2009). Reconocimiento de identidad distinta de adivasi/janajati, madheshi, tharu, dalit y musulmanes; inclusión proporcional en todos los órganos del Estado, garantías de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y educativos; creación de Comisión Nacional Musulmana, reconocimiento de festividades.
- Myanmar (2015). Principio de reconocer historia, prácticas culturales, literatura, lengua y características de todas las nacionalidades étnicas; compromisos de no discriminación por etnia/religión/cultura, preservación y promoción de lenguas y cultura.
- Sudán (2005). Reconocimiento de la diversidad cultural del país, creación de mecanismos para proteger derechos de no musulmanes en Jartum, símbolos (por ejemplo, el diseño de la moneda) que reflejen diversidad, reformas constitucionales en esa línea.
- Filipinas (2012 y 2014). Reconocimiento de la identidad Bangsamoro y sus agravios, autonomía asimétrica, protección de costumbres y derechos consuetudinarios (incluida referencia a justicia con respeto a costumbres indígenas), comisión de Derechos Humanos y garantías de religión y usos locales.
- Bangladesh (1997). Reconocimiento y protección de la identidad indígena, órganos autónomos regionales, preferencias y cupos para "residentes tribales permanentes" en consejos de distrito, medidas sobre tierra y retorno, énfasis en preservar carácter indígena de la región.
- India (Assam) (2003 y 2020). Autonomía subestatal, protección del idioma bodo, garantías para no-tribales, protección de derechos y tierras, paquete de identidad y cultura bodo.
- República Centroafricana (2019). Compromiso de representatividad de la diversidad nacional, con atención

especial a grupos menos representados; medidas de inclusión en instituciones y supervisión de implementación.

- Etiopía (2018). Garantía de que los líderes/miembros de ONLF gozaran de derechos constitucionales (identitarios y de participación), conforme al marco federal de naciones y nacionalidades; reintegración y apertura política en región somalí.
- Colombia (2016). Garantía de consulta previa a pueblos indígenas y afrodescendientes en la implementación del acuerdo con las FARC, reconocimiento de victimización étnica, y medidas de memoria colectiva.

En resumen, lo acordado se refiere a aspectos relacionados con el reconocimiento constitucional y legal de la identidad, derechos lingüísticos y educativos, autonomía cultural y territorial ligada a identidad, representación y participación política de las minorías, protección contra la discriminación étnica y cultural; símbolos, festividades y patrimonio; medidas de reparación y memoria simbólica, y garantías institucionales permanentes.

La experiencia comparada de los procesos de paz desde 1990, muestra con claridad que el mero reparto de poder político o la integración militar no bastan para consolidar la paz si no se atienden las dimensiones profundas de identidad, cultura y reconocimiento. En sociedades atravesadas por guerras de raíz étnica o cultural, la exclusión simbólica y la negación de la identidad han sido motores de resentimiento y movilización armada, tanto o más poderosos que las desigualdades materiales. Por ello, los acuerdos de paz que se limitan a fórmulas de élites —ministerios, cuotas parlamentarias, DDR— sin abrir espacios al reconocimiento de la pluralidad cultural, suelen quedarse en una paz frágil y reversible.

El reconocimiento constitucional y legal de las identidades, junto con los derechos lingüísticos y educativos, actúa como salvaguarda contra la asimilación forzada y la marginación estructural. La autonomía cultural y territorial, cuando está vinculada a una identidad históricamente marginada, permite transformar el control político en un derecho de autogobierno legítimo y no en un botín de guerra. La

representación política de las minorías en parlamentos, gobiernos y órganos judiciales evita que la mayoría étnica monopolice las decisiones. Las medidas de protección contra la discriminación y las garantías institucionales permanentes son un recordatorio de que la igualdad no depende de la buena voluntad coyuntural de las mayorías, sino de marcos normativos duraderos. Los símbolos, festividades y el patrimonio son componentes de la memoria colectiva. Su inclusión en los acuerdos de paz otorga visibilidad, dignidad y pertenencia, contribuyendo a desmontar jerarquías culturales implícitas. De la misma forma, las medidas de reparación y memoria simbólica (monumentos, museos, disculpas oficiales), reconstruyen el tejido social y permiten que las generaciones futuras no repitan el ciclo de negación y violencia.

En definitiva, cuando un acuerdo de paz incorpora estas dimensiones identitarias y culturales, no solo se trata de reconocer derechos particulares, sino de redefinir el contrato social en clave pluralista. Se pasa de una paz mínima (silencio de armas) a una paz con legitimidad, basada en la inclusión y en la aceptación de la diversidad como parte constitutiva del Estado. La sostenibilidad de la paz, en contextos etnopolíticos, depende menos de los equilibrios tácticos entre élites y más de la capacidad de las instituciones para ofrecer a todas las comunidades un lugar seguro, respetado y visible en el proyecto común.

PROPUESTAS PARA EL FUTURO. LA CAJA DE HERRAMIENTAS PARA LA PAZ POLÍTICA

¿Qué podríamos sugerir, como incentivos, para terminar con los conflictos actuales, donde es importante la lucha por el poder político? Por la experiencia de casos anteriores, se podrían considerar propuestas como las siguientes:

- Identificar, reconocer y abordar las raíces del conflicto armado.
- Tener en cuenta el peso de los agravios, que en gran parte condicionan el tipo de demandas de los grupos armados y en particular los vinculados con la exclusión política.
- Constituciones transicionales con cláusulas caducables, es decir, con mecanismos de reparto de poder y cuotas temporales para los grupos que abandonen la lucha armada, y con evaluación posterior.
- Integración política, mediante la conversión de un grupo armado en partido político, con derechos electorales.
- Amnistías para quienes abandonen la lucha armada.
- Reparto del poder e inclusión política. Los instrumentos pueden ser gobiernos de unidad con carteras clave compartidas, y las reformas electorales, con sistemas mixtos, umbrales razonables, financiamiento público y escaños temporales para los antiguos combatientes, condicionados al cumplimiento del DDR.
- Democratización, con hojas de ruta y objetivos verificables (libertades civiles, ley de partidos, observación electoral, censo de desplazados, etc.).
- Presupuestos participativos en zonas posconflicto, donde las

comunidades puedan decidir directamente sobre una parte del gasto público local, vinculando la paz con beneficios tangibles y visibles.

- Observatorios ciudadanos de la paz y la gobernanza con participación de universidades, medios y organizaciones locales que documenten avances y alerten sobre riesgos de regresión.
- Autogobierno (autonomía o federalismo), mediante estatutos/constituciones subnacionales, con competencias exclusivas (policía, educación, tierras, fiscalidad parcial) y coparticipación automática de los ingresos. Revisión al cabo de unos años, con cláusula de "no regresión" y tribunal/arbitraje constitucional mixto en caso de conflictos.
- Descentralización política y fiscal (simétrica o asimétrica, según el caso), con fórmulas de coparticipación cuando hay demandas de autogobierno. Confederalismo cuando proceda. Clarificar las competencias y la coparticipación automática federal-regiones; estatutos especiales para determinadas regiones, con control real sobre policía, educación y tierras.
- Acceso y control de los recursos naturales, a través de fondos fiduciarios, con reglas de reparto para los territorios productores, licitación transparente y auditorías independientes.
- Fin de la marginación política o económica, con planes territoriales de inversión (salud, educación, conectividad, etc.), con contratación local y monitoreo ciudadano; microcréditos y banca de desarrollo con líneas para pequeñas y medianas empresas en zonas afectadas por el conflicto.
- Fin a la discriminación étnica, con leyes de igualdad y cuotas de representación, con acciones afirmativas temporales y defensoría autónoma.
- Reconocimiento y respeto a la identidad, con cooficialidad lingüística, educación intercultural, toponimia, y consejos de identidad con capacidad consultiva vinculante en la cultura, la educación y los medios de comunicación.

- Elecciones adaptativas, inclusivas, con umbrales moderados y calendario que garantice la verificación de la seguridad y el retorno de la población desplazada.
- Programas de DDR para los grupos armados consolidados, con perspectiva política y económica, con escaños parlamentarios temporales condicionados al buen funcionamiento del mismo, con empleo público local y contratos comunitarios de obras para su buen funcionamiento.
- Desmilitarización programada de las milicias locales o regionales, con cuotas políticas temporales condicionadas al desarme y reinserción; policía regional bajo estándares nacionales.
- Reforma del sistema de seguridad, para que sea inclusivo.
- Integración total o parcial de los excombatientes a las Fuerzas Armadas del país.
- Garantías de seguridad comunitaria.
- Justicia secuenciada, una combinación de verdad-reparación temprana, amnistías condicionadas y persecución focalizada de crímenes atroces, evitando vetos totales a la reintegración política.
- Foros de reconciliación y diálogo intercomunitario, auspiciados por instituciones religiosas, tradicionales o culturales, que permitan reconocer los daños sufridos y promover la empatía y la coexistencia.
- Programas de educación para la paz, con currículos escolares que incluyan memoria histórica, resolución no violenta de conflictos, igualdad de género y educación cívica, orientados a romper los ciclos de odio y venganza.
- Protección del retorno y el voto para la población desplazada, con seguridad electoral, padrón de desplazados y distritos especiales para zonas devastadas.
- Mecanismos de verificación de los acuerdos.
- Garantías externas.
- Estrategias de seguridad humana, que prioricen la protección

de personas sobre la defensa de fronteras o la mera estabilidad militar, mediante la presencia civil del Estado (salud, educación, justicia) en zonas históricamente marginadas.

Estas propuestas buscan convertir la paz en una experiencia cotidiana y material, no solo en un acuerdo político. En conjunto, apuntan a crear un ecosistema de incentivos positivos que reemplace la lógica del dominio por la de la cooperación. Y así transformar la lógica del poder armado en una lógica de poder civil y legítimo. La clave está en ofrecer salidas realistas y verificables a los actores del conflicto que reduzcan los costos de la paz frente a los beneficios de la guerra y en crear instituciones capaces de absorber la competencia política sin recurrir a la violencia. Pero ningún incentivo será sostenible si no se articula con una estrategia de reconstrucción moral del contrato social, es decir, reconstruir confianza, garantizar la igualdad de trato entre grupos y asegurar que el acceso al poder y a los recursos no vuelva a depender de la fuerza de las armas, sino de la legitimidad democrática, la inclusión efectiva y la justicia restaurativa.

La paz en el siglo XXI no puede reducirse a la ausencia de conflicto, sino que debe traducirse en una cultura de paz aplicada que aborde de raíz las dinámicas de poder, exclusión y vulnerabilidad que alimentan la violencia. En contextos de Estados frágiles o autoritarios, el control del poder político y de los recursos determinará la persistencia de la violencia; por ello, las soluciones deben basarse en gobernanza inclusiva, derechos reconocidos, desarrollo humano y seguridad real para la ciudadanía, evitando victorias militares que generen resentimiento y ciclos de violencia. Es clave enfrentar la dimensión etnopolítica con mecanismos de participación, reconocimiento y autogobierno que concilien identidades y ciudadanía, y desactivar incentivos de captura de rentas por actores armados mediante instituciones transparentes y rendición de cuentas.

Para avanzar, es necesario fortalecer marcos multilaterales y regionales, apoyar procesos endógenos y promover acuerdos duraderos de desarme, reparación y desarrollo, junto con educación para la convivencia y mediación comunitaria. La paz positiva exige planes

integrados para las comunidades afectadas, revisar las dinámicas de poder y garantizar seguridad, derechos y oportunidades reales, de modo que la gobernanza inclusiva y el desarrollo humano reduzcan la polarización, la desconfianza y la violencia, logrando una cultura de paz sostenible frente a las lógicas de conflicto del siglo XXI.

NOTAS

1 . Vicenç Fisas, *Los conflictos etnopolíticos. ¿Podemos vivir juntos?*, Los Libros de la Catarata, 2025.

2 . Vicenç Fisas, *Geopolítica de los dioses. La religión en los conflictos armados del siglo XXI*, Los Libros de la Catarata, 2025.

3 . Mary Kaldor, *Las nuevas guerras*, Tusquets, 2001.

4 . Médicos sin Fronteras, *Poblaciones en peligro*, Acento, 1993 y *Escenarios de crisis*, Acento, 1995; Vicenç Fisas, *Cultura de paz y gestión de conflictos*, Icaria/UNESCO, 1998; Jean-Marc Balencie y Arnaud de La Grange, *Mondes Rebelles*, Michalon, 1996.

5 . Paul Collier, *Guerra en el club de la miseria*, Turner, 2009.

6 . Vicenç Fisas, *El engaño de la ayuda al desarrollo en el mundo*, Icaria, 2022.

7 . Al respecto, recomiendo mirar la web de Small Arms Survey: https://n9.cl/ag51b.

8 . UNITA en Angola, CNDD-FDD y FNL en Burundi, grupos anglófonos en Camerún, FN en Costa de Marfil, FUC, UFDD y UFR en Chad, Fano y TPLF en Etiopía, LURD y MODEL en Liberia, ENL en Libia, MNLA (CMA) y FLA en Mali, Séléka y Anti-balaka en República Centroafricana, CNDP y M23/AFC en RD Congo, JEM, SLM/A, RSF y SRF en Sudán, SPLM/A en el sur de Sudán, SPLM-IO en Sudán del Sur, talibanes en Afganistán, MILF en Filipinas, insurgentes de Jammu y Cachemira, GAM en Indonesia, NUG en Myanmar, CPN en Nepal, LTTE en Sri Lanka, Ejército de la República de Ichkeria en Chechenia, grupos armados de Iraq, Hezbolá en Líbano, HTS y SNA en Siria, Ansar Allah y Al-Hirat al Janoubi en Yemen.

9 . Adrian Florea y Romain Malejacq, "The Supply and Demand of Rebel Governance", *International Studies Review*, vol. 26, nº 1, marzo de 2024.

10 . Vicenç Fisas, *Los conflictos etnopolíticos. ¿Podemos vivir juntos?*, Los Libros de la Catarata, 2025.

11 . Dawn Brancati, "Decentralization: Fueling the Fire or Dampening the Flames of Ethnic Conflict and Secessionism?", *International Organization*, vol. 60, nº 3, 2006; Stefan Wolff, "Conflict Management in Divided Societies: The Many Uses of Territorial Self-Governance, International Journal on Minority and Group Rights", *International Journal on Minority and*

Group Rights, vol. 20, nº 1, 2013.

12 . Klaus Schlichte y Ulrich Schneckener, "Armed Groups and the Politics of Legitimacy", *Civil Wars*, vol. 17, nº 4, 2015, pp. 409-424.

13 . Paul Collier y Anke Hoeffler, "Greed and Grievance in Civil War", *Oxford Economic Papers*, vol. 56, nº 4, 2004, pp. 563-595; Karen Ballentine y Jake Sherman, *The Political Economy of Armed Conflict: Beyond Greed and Grievance*, Lynne Rienner, 2003; William Reno, *Warfare in Independent Africa,* Cambridge University Press, 2012; David Keen, *Useful Enemies: When Waging Wars is more Important Than Winning Them*, Yale University Press, 2014; Jeremy Weinstein, *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*, Cambridge University Press, 2007.

14 . Achim Wennmann, "Economic dimensions of armed groups: profiling the financing, costs, and agendas and their implications for mediated engagements", *International Review of Red Cross*, vol. 93, nº 882, 2011.

15 . Juan Linz, *Sistemas totalitarios y regímenes autoritarios*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009.

16 . Alex de Waal, Benjamin Spatz y Aditya Sarkar, *Situating the Contribution of the Political Market Framework to Peace Processes,* PeaceRep: The Peace and Conflict Resolution Evidence Platform, 2022.

17 . Felix Haass y Martin Ottmann, "Profits from Peace: The Political Economy of Power-Sharing and Corruption, World Development", *World Development,* vol. 99, 2017, pp. 60-74; Chelsea Johnson, "Political power sharing in post-conflict democracies: investigating effects on vertical and horizontal accountability", *Democratization*, vol. 30, nº 6, 2023.

18 . Jai Kwan Jung, "Power-Sharing and Democracy Promotion in Post-Civil War Peace--Building", *Democratization*, vol. 19, nº 3, 2012.

19 . Katia Papagianni, "Power-sharing: A conflict resolution tool?", *Centre for Humanitarian Dialogue*, 2016.

20 . Helga Malmin Binningsbø, "Power sharing, peace and democracy: Any obvious relationships?", *International Area Studies Review*, vol. 16, nº 1, 2013.

21 . Chelsea Johnson, "Power-sharing, conflict resolution, and the logic of pre-emptive defection", *Journal of Peace Research*, 2020.

22 . Laura Wise, "Territorial Power-sharing and Inclusion in Peace Processes", *PA-X Report*, 2018.

23 . Aila M. Matanock, *Electing Peace: From Civil Conflict to Political Participation*, Cambridge University Press, 2017; Christine Bell, "Political Power-sharing and Inclusion: Peace and Transition Processes", *Global Justice Academy,* University of Edinburgh, 2018, y "What we talk about when we talk about Political Settlements", *Political Settlements Research Programme*, 2015; Philip Roessler y David Ohls, *Self-Enforcing Power Sharing in Weak States*,

Cambridge University Press, 2018; Barbara F. Walter, "The Extremist's Advantage in Civil Wars", *International Security*, vol. 42, nº 2, 2017; Madhav Joshi, Erik Melander y Jason Michael Quinn, "Sequencing the Peace: How the Order of Peace Agreement Implementation can Reduce the Destabilizing Effects of Post-accord Elections", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, nº 1, 2015; Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer y Brian Min, *Why do Ethnic Groups Rebel?*, Cambridge University Press, 2009.

24 . La trampa del conflicto es un concepto acuñado por Paul Collier y Anke Hoeffler a finales de los años noventa y sistematizado en el libro *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*, editado por el Banco Mundial en 2003.

25 . Hannes Mueller y Christopher Rauh, "Building bridges to peace: a quantitative evaluation of power-sharing agreements", *Economic Policy*, vol. 39, nº 118, 2024.

26 . Scott Gates y Kaare Strøm, Power-sharing, "Agency and Civil Conflict-Power-sharing Agreements, Negotiations and Peace Processes", *CSCW Policy Brief*, nº 1, 2007.

27 . Andreas Juon y Daniel Bochsler, "The two faces of power-sharing", *Journal of Peace Research*, vol. 59, nº 4, 2021.

28 . Mahmood Mamdani, *Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism*, Princeton University Press, 2018; Basil Davidson, *The Black Man's Burden*, James Currey, 1992.

29 . Jean-François Bayart, *L'État en Afrique: La politique du ventre,* Fayard, 1989; Crawford Young, *The African Colonial State in Comparative Perspective*, Yale University Press, 1994.

30 . Ali Mazrui, *The Africans: A Triple Heritage,* Little Brown & Co 1987; Paul Nugent, *Africa since Independence*, Palgrave Macmillan, 2004.

31 . Alex de Waal, *The Real Politics of the Horn of Africa: Money, War and the Business of Power*, Polity Press, 2015.

32 . Achille Mbembe, *On the Postcolony*, University of California Press, 2001; Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz, *Africa Works: Disorder as Political Instrument*, James Currey, 1999.

33 . Nic Cheeseman, *Democracy in Africa: Successes, Failures, and the Struggle for Political Reform*, Cambridge University Press, 2015.

34 . UNESCO, *From a culture of violence to a culture of peace*, 1996; Vicenç Fisas, *Cultura de paz y gestión de conflictos*, Icaria, 1998.

35 . Laura Sjoberg, *Gendering Global Conflict: Toward a Feminist Theory of War*, Columbia University Press, 2013.

36 . Axel Honneth, *La lucha por el reconocimiento*, Crítica, 1997.

37 . Robin Luckham, *La cultura de las armas*, Lerna, 1986.

38 . Vicenç Fisas, *Manual para crear miedo*, Icaria, 2025.

39 . Andrew Hoskins y Ben O'Loughlin, *War and Media: The Emergence of Diffused War,* Polity Press, 2010; James Der Derian, *Virtuous War: Mapping the Military-Industrial-Media-Entertainment Network*, Routledge, 2009; Susan L. Carruthers, *The Media at War: Communication and Conflict in the Twentieth Century,* Palgrave Macmillan, 1999; Gadi Wolfsfeld, *Media and the Path to Peace*, Cambridge University Press, 2004.

40 . Robert Powell, "Power sharing with weak institutions", *Journal of Theoretical Politics*, vol. 36, nº 2, 2024; Anne Meng, Jack Paine y Robert Powell, "Authoritarian Power Sharing: Concepts, Mechanisms, and Strategies", *Annual Review of Political Science*, vol. 26, 2023; Caroline A. Hartzell y Matthew Hoddie, "State of the Art", *Power Sharing and Democracy in Post-Civil War States,* Cambridge University Press, 2020.

41 . Paul Staniland, *Ordering Violence: Explaining Armed Group-State Relations from Conflict to Cooperation*, Cornell University Press, 2021; John Ishiyama y Gyda M. Sindre, *The Effects of Rebel Parties on Governance, Democracy and Stability after Civil Wars: From Guns to Governing*, Routledge, 2022; Megan Stewart, *Governing for Revolution: Social Transformation in Civil War*, Cambridge University Press, 2021; Shelley Liu, *Governing after War: Rebel Victories and Post-War Statebuilding*, Oxford University Press, 2024.

42 . Por ejemplo, Angola de 1975 a 1991, Burundi en 1988, Liberia entre 1989 y 1997, Mali entre 2006 y 2009, República Centroafricana entre 2004 y 2007, Armenia y Azerbaiyán entre 1988 y 1994, Iraq entre 1980 y 1988 y en 1990, Líbano e Israel en 2006 o Yemen en 1994 y 2004.

43 . Paul Collier, *Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy*, Banco Mundial, 2003. Este estudio, que abarcaba el periodo 1960-1999, mostró que un país que había tenido una guerra civil, tenía un 40% de probabilidad de recaer en otra en los primeros 10 años. Las causas principales eran un bajo crecimiento económico, baja legitimidad institucional, abundancia de recursos naturales mal gestionados y divisiones sociales. No cubre, por tanto, el periodo que yo abarco en este libro.

44 . Naciones Unidas, *Lessons Learned in Post-Conflict State Capacity: Reconstructing Governance and Public Administration Capacities in Post-Conflict Countries*, 2009; World Bank y UNDP, *Rebuilding Post-Conflict Societies: Lessons from a Decade of Global Experience,* 2005; Fernanda Buril y Bailey Dinman, *Overcoming Challenges to Democracy and Governance Programs in Post-Conflict Countries-CEPPS Lessons Learned*, IFES, 2021.

45 . OECD, "Supporting Statebuilding in Situations of Conflict and Fragility", *Policy Guindance*, 2011.

46 . Véronique Dudouet y Stina Lundström, *Post-war Political Settlements. From Participatory Transition Processes to Inclusive Statebuilding and Governance*, Berghof Foundation, 2016.

47 . Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann, *The Political Transformation of Armed and Banned Groups. Lessons Learned and Implications for International Support*, UNDP y Berghof Foundation, 2016.

48 . C. Steenkamp, "The Legacy of War: Conceptualizing a 'Culture of Violence' to Explain

Violence after Peace Accords", *The Round Table*, vol. 94, nº 379, 2005.

49 . Keith Krause, *Armed Groups and Contemporary Conflicts. Challenging the Weberian State*, Routledge, 2010.

50 . Vicenç Fisas, *Los conflictos etnopolíticos. ¿Podemos vivir juntos?,* Los Libros de la Catarata, 2025.

51 . Lars-Erik Cederman, Kristian S. Gleditsch y Halvard Buhaug, *Inequality, Grievances, and Civil War*, Cambridge University Press, 2013.

52 . Kanchan Chandra, *Why Ethnic Parties Succeed: Patronage and Ethnic Head Counts in India*, Cambridge University Press, 2004.

53 . Philip Roessler, *Ethnic Politics and State Power in Africa*, Cambridge University Press, 2016.

54 . Leonardo Arriola, *Multiethnic Coalitions in Africa: Business Financing of Opposition Election Campaigns*, Cambridge University Press, 2012.

55 . Ernesto Verdeja, *Unchopping a Tree: Reconciliation in the Aftermath of Political Violence*, Temple University Press, 2009.

56 . Roland Breton, *L'ethnopolitique*, PUF, 1995.

57 . Stuart J. Kaufman, *Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War*, Cornell University Press, 2001.

58 . Anthony D. Smith, *The Ethnic Origins of Nations*, Wiley-Blackwell, 1991.

59 . Vicenç Fisas, *Los conflictos etnopolíticos. ¿Podemos vivir juntos?,* Los Libros de la Catarata, 2025.

60 . Marc Howard Ross, *The Culture of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative Perspective*, Yale University Press, 1993; Cynthia Enloe, *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics,* University of California Press, 1990.

61 . Emma Elfversson y Anders Sjögren, "Do Local Power-Sharing Deals Reduce Ethnopolitical Hostility? The Effects of 'Negotiated Democracy' in a Devolved Kenya", *Formerly Global Review of Ethnopolitics*, vol. 19, nº 1, 2020.

62 . Michel Foucault, *Microfísica del poder*, Siglo XXI, 2019; *Vigilar y castigar*, Siglo XXI, 2005; *Historia de la sexualidad*, Siglo XXI, 1978; *Nacimiento de la biopolítica*, Akal, 2009; *El orden del discurso*, Austral, 2022; *Espacios de poder*, Endymion, 1991.

63 . Josep Ramoneda, *Poder y libertad*, Galaxia Gutenberg, 2025.

64 . Zachariah Mampilly, *Rebel Rulers: Insurgent Governance and Civilian Life during War*, Cornell University Press, 2015; Lars-Erik Cederman, Kristian Skrede Gleditsch y Halvard Buhaug, *Inequalities, Grievances, and Civil War*, Cambridge University Press, 2013.

65 . Véase https://n9.cl/rk3jsx.

66 . Frances Stewart, *Horizontal Inequalities and Conflict: Understanding Group Violence in Multiethnic Societies*, Palgrave Macmillan, 2008.

67 . Lars-Erik Cederman, Kristian S. Gleditsch y Halvard Buhaug, *Inequality, Grievances, and Civil War*, Cambridge University Press, 2013.

68 . James D. Fearon y David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War", *American Political Science Review*, vol. 97, nº 1, 2002.

69 . Paul Collier y Anke Hoeffler, "Greed and Grievance in Civil War", *Oxford Economic Papers*, vol. 56, nº 4, 2004.

70 . Existe una base de datos, Rebel Organization Leaders (ROLE) Database, que codifica para líderes de organizaciones rebeldes con variables como la edad, la educación, la religión, el tipo de entrada al mando, la experiencia militar/combate, el exilio, la prisión, la salud, etc., pero no los perfiles psicológicos. Además, el problema es que se basa en el análisis de 425 líderes rebeldes de 1980 a 2011, una muestra demasiado amplia para considerar realmente "líderes" a tantas personas, por lo que no la considero compatible con mi propósito de describir los rasgos más comunes de los 63 líderes más importantes de los grupos armados del siglo XXI, que suelen ser uno o dos por grupo armado. Para ver sus conclusiones puede consultarse en: Benjamin Acosta, Reyko Huang y Daniel Silverman, "Introducing ROLE: A database of rebel leader attributes in armed conflicto", *Journal of Peace Research*, vol. 60, nº 2, 2022; "Friends in the Profession: Rebel Leaders, International Social Networks, and External Support for Rebellion", *International Studies Quarterly*, nº 66, 2022; "Rebel Leader Age and the Outcomes of Civil Wars", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 68, nº 2-3, 2024, https://n9.cl/kq9a1.

71 . Arie W. Kruglanski, Antonio Pierro, Lucia Mannetti y Eraldo de Grada, "Groups as Epistemic Providers: Need for Closure and the Formation of Epistemic Authority", *Psychological Review*, vol. 113, nº 1, 2006, pp. 84-100.

72 . Barbara Geddes, Joseph Wright y Erica Frantz, *How Dictatorships Work: Power, Personalization, and Collapse*, Cambridge University Press, 2018; Daniel Treisman y Sergei Guriev, *Spin Dictators: The Changing Face of Tyranny in the 21st Century*, Princeton University Press, 2023; Jessica L. Weeks, "Strongmen and Straw Men: Authoritarian Regimes and the Initiation of International Conflict", *American Political Science Review*, vol. 106, nº 2, 2012.

73 . Barbara Geddes, *Autocratic Breakdown and Regime Transitions*, Cambridge University Press, 2014; Jack Snyder, *From Voting to Violence*, WW Norton & Co, 2000; Robert B. Cialdini, *Influence: New & Expanded*, Harper Business, 2021; Jean Lipman-Blume, *The Allure of Toxic Leaders*, Oxford University Press, 2006.

74 . Jonas Savimbi (UNITA), Pierre Nkurunziza (CNDD-FDD), Agathon Rwasa (Palipehutu-FNL), Guillaume Soro, Ibrahim Coulibaly y Alassane Ouattara (Costa de Marfil), Mahamat Nour Abdelkerim (RDL), Mahamat Nouri (UFDD), Timan Erdimi (UFR), Zemene Kassie

(Fano), Debretsion Gebremichael (TPLF), Sekou Conneh (LURD), Thomas Nimely (MODEL), Mustafa Abdul Jalil (CNT), Khalifa Haftar (Libia), Bilal Ag Acherif (MNLA), Amadou Sanogo (CNRDRE), Michel Djotodia, Noureddine Adam y Ali Darassa (Séléka), Laurent-Désiré Kabila (AFDL), Corneille Nangaa (CNDP/M23), Abdul Wahid al-Nur y Minni Minnawi (SLM/A), Khalil Ibrahim (JEM), Musa Hilal (Janjaweed), Mohamed Hamdan Dagalo "Hemedti" (RSF), John Garang (SPLM/A), Salva Kiir Mayardit (SPLM), Riek Machar (SPLM-IO), Mohammad Omar, Burhanuddin Rabbani, Akhtar Mansour y Hibatullah Akhunzada (Afganistán), Hashim Salamat y Al Haj Murad Ebrahim (MILF), Syed Salahuddin (Hizbul Mujahideen), Yasin Malik (JKLF), Hasan di Tiro y Irwandi Yusuf (GAM), Duwa Lashi La (NUG), Pushpa Kamal Dahal "Prachanda" y Baburam Bhattarai (CPN), Velupillai Prabhakaran (LTTE), Arayik Harutynyan (Artsaj), Muqtada al-Sadr (Ejército del Mahdi), Hassan Nasrallah y Naim Qassem (Hezbolá), Hay'at Tahrir al-Shan y Ahmed al-Sharaa (Siria), Sheik Hikmat al-Hijri (drusos Siria), Hussein Badreddin al-Houti y Abdul-Malik al-Houthi (Ansar Allah), Aidarus al-Zoubaidi (Al-Hirat al-Janoubi).

75 . Ana Arjona, Nelson Kasfir y Zachariah Mampilly, *Rebel Governance in Civil War*, Cambridge University Press, 2015; Paul Staniland, *Networks of Rebellion: Explaining Insurgent Cohesion and Collapse*, Cornell University Press, 2014; John Darby y Roger Mac Ginty, *Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence and Peace Processes*, Palgrave Macmillan, 2003; Francisco Gutiérrez Sanín y Elisabeth J. Wood, "Ideology in Civil War: Instrumental Adoption and Beyond", *Journal of Peace Research*, vol. 51, nº 2, 2014.

76 . Sara Ahmed, *The Cultural Politics of Emotion*, Edinburgh University Press, 2004.

77 . Robert D. Benford y David A. Snow, "Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment", *Annual Review of Sociology*, vol. 26, nº 1, 2000; Ervin Goffman, *Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience*, Harvard University Press, 1974.

78 . Ernesto Laclau, *La razón populista*, Fondo de Cultura Económica, 2005.

79 . Francesca Polletta, *It Was Like a Fever: Storytelling in Protest and Politics*, University of Chicago Press, 2006.

80 . Anthony D. Smith, *The Ethnic Origins of Nations,* Blackwell, 1986; Eric Hobsbawm y Terence Ranger, *La invención de la tradición,* Crítica, 2005.

81 . James M. Jasper, *The Art of Moral Protest*, University of Chicago Press, 1999; Roger D. Petersen, *Understanding Ethnic Violence*, Cambridge University Press, 2002.

82 . Scott Atran y Jeremy Ginges, *Religious and Sacred Imperatives in Human Conflict,* Science, vol. 336, nº 6083, 2012.

83 . Vicenç Fisas, *Fabricando al enemigo*, Los Libros de la Catarata, 2020.

84 . Robert B. Cialdini, *Influencia, la psicología de la persuasión*, Harper Collins, 2022.

85 . Paul Collier y Anke Hoeffler, *Greed and Grievance in Civil War*, Banco Mundial, 2000.

86 . Lars-Erik Cederman, Kristian Skrede Gleditsch y Halvard Buhaug, *Inequalities,*

Grievances, and Civil War, Cambridge University Press, 2013.

87 . Donald Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict*, University of California Press, 2001.

88 . Paul R. Brass, *Ethnicity and Nationalism: Theory and Comparison*, Sage, 1991.

89 . Los citados Paul Collier y Anke Hoeffler, por ejemplo.

90 . Robert E. Entman, "Framing: toward clarification of a fractured paradigm", *Journal of Communication*, vol. 43, nº 4, 1993.

91 . John D. McCarthy y Mayer N. Zald, "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory", *American Journal of Sociology*, vol. 82, nº 6, 1977.

92 . David A. Snow y Robert D. Benford, "Ideology, Frame Resonance, and Participant Mobilization", *International Social Movement Research*, nº 1, 1988.

93 . Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution*, Random House USA Inc, 1988; Sidney Tarrow, *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*, Alianza, 1997.

94 . Raeymaekers Timothy, *The Social Geography of Armed Conflict,* Oxford Academic, 2013.

95 . Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Routledge, 2012.

96 . Al iniciarse las guerras aquí comentadas, los países más pobres eran, por orden, Libera, RD Congo, República Centroafricana, Nepal, Burundi, Sudán, Siria (en 2025), Afganistán, Etiopía (en 2022), Mali e India.

97 . Frances Stewart (ed.), *Horizontal Inequalities and Conflict*, Palgrave Macmillan, 2008.

98 . Johan Galtung, *Paz por medios pacíficos*, Bakeaz y Gernika Gogoratuz, 2003.

99 . Manfred Max-Neef, *Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas reflexiones*, Icaria, 1994.

100 . John Burton, *Conflict: Human Needs Theory*, Palgrave Macmillan, 1990.

101 . Véase https://n9.cl/fu9nn.

102 . Noah Rosen, *Five Years After Pathways: Evolving Research on Inequality, Grievance, and Inclusion*, Banco Mundial y ONU, 2023.

103 . Encarnación Fernández Ruiz-Gálvez, *¿Estados fallidos o Estados en crisis?*, Comares, 2009.

104 . La teoría de la movilización de recursos, desarrollada principalmente por McCarthy y Zald en los años setenta, entiende los movimientos sociales como organizaciones racionales cuyo éxito depende de su habilidad para reclutar, organizar y administrar recursos, más que de la mera existencia de agravios sociales.

105 . Daron Acemoğlu y James A. Robinson, *Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza*, Deusto, 2012.

106 . Martha C. Nussbaum, *Emociones políticas, ¿Por qué el amor es importante para la justicia?*, Paidós, 2014.

107 . El promotor originario del concepto fue Nietzsche, en sentido filosófico. En la psicología política moderna, los desarrollos más influyentes vienen de Adorno y la Escuela de Frankfurt en los años cuarenta o cincuenta, y de Ted Gurr en el ámbito de los conflictos.

108 . Barbara F. Walter, *Cómo empezar una guerra civil y cómo evitar que ocurra*, Península 2025.

109 . Mark Juergensmeyer, *Terrorismo religioso. El auge global de la violencia religiosa*, Siglo XXI, 2000.

110 . R. Scott Appleby, *The Ambivalence of the Sacred: Religion, Violence and Reconciliation*, Rowman & Littlefield, 2000.

111 . Véase https://n9.cl/zas2po.

112 . Véase https://n9.cl/es/r/0t9ke.

113 . Håvard Hegre y Nicholas Sambanis, "Sensitivity Analysis of the Empirical Literature on Civil War Onset", *Journal of Conflict Resolution*, vol. 50, nº 4, 2006; José G. Montalvo y Marta Reynal-Querol, "Ethnic Polarization, Potential Conflict, and Civil Wars", *The American Economic Review*, vol. 95, nº 3, 2005.

114 . Michael Doyle y Nicholas Sambanis, *Making War and Building Peace: United Nations Peace Operations*, Princeton University Press, 2011.

115 . Paulo Vesco, "The impacts of armed conflict on human development: A review of the literature", *World Development*, vol. 187, 2025.

116 . Véase https://n9.cl/a2bdh.

117 . Patrick Chabal y Jean-Pascal Daloz, *Africa Works: Disorder as Political Instrument*, James Currey, 1999; Michael Bratton y Nicholas van de Wallem, *Democratic Experiments in Africa: Regime Transitions in Comparative Perspective*, Cambridge University Press, 1997; Pierre Englebert, *State Legitimacy and Development in Africa*, Lynne Rienner, 2000; Jean François Bayart, *The State in Africa: The Politics of the Belly*, Pearson Education Limited, 1993; William Reno, *Warlord Politics and African States*, Lynne Rienner, 1999.

118 . Robert H. Jackson y Carl G. Rosberg, *Personal Rule in Black Africa*, University of California Press, 1982.

119 . James D. Fearon y David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War", *American Political Science Review*, vol. 97, nº 1, 2002; Håvard Hegre, Tanja Ellingsen, Scott Gates y Nils Petter Gleditsch, "Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816-1992", *American Political Science Review*, vol. 95, nº 1, 2001; Hanne Fjelde,

"Generals, Dictators, and Kings: Authoritarian Regimes and Civil Conflict", *Conflict Management and Peace Science*, vol. 27, nº 3, 2010; Cullen S. Hendrix, "Measuring State Capacity: Theoretical and Empirical Implications for the Study of Civil Conflict", *Journal of Peace Research*, vol. 47, nº 3, 2010; Barbara Geddes, Joseph Wright y Erica Frantz, "Autocratic Breakdown and Regime Transitions: A New Data Set", *Perspectives on Politics*, vol. 12, nº 2, 2014; Steven Levitsky y Lucan A. Way, *Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War*, Cambridge University Press, 2010.

120 . Kenneth Watkin, *States, "Proper Authority" and Conflict*, Oxford Academic, 2016.

121 . Véase https://n9.cl/jwyrxc.

122 . Robert I. Rotberg, *When States Fail: Causes and Consequences*, Princeton University Press, 2004.

123 . Charles T. Call y Elizabeth M. Cousens, "Ending Wars and Building Peace", *International Peace Academy*, 2007; Charles T. Call, "Beyond the 'Failed State': Toward Conceptual Alternatives", *European Journal of International Relations*, vol. 17, nº 2, 2011.

124 . James D. Fearon y David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War", *American Political Science Review*, vol. 97, nº 1, 2002.

125 . Paul Collier y Anke Hoeffler, *Greed and Grievance in Civil War*, Banco Mundial, 2000.

126 . Robert H. Bates, *When Things Fell Apart: State Failure in Late-Century Africa*, Cambridge University Press, 2008.

127 . Una posible explicación, ya que utilizan metodologías distintas, es que el equipo de Walter incluya como anocracia a las autocracias liberales, lo que me parece una simplificación.

128 . Barbara Geddes, *Autocratic Breakdown and Regime Transitions,* Cambridge University Press, 2014.

129 . Jessica L. Weeks, *Dictators at War and Peace*, Cornell Studies in Security Affairs, 2014; Erica Frantz, *Authoritarianism: What Everyone Needs to Know,* Oxford University Press, 2018.

130 . Kenneth A. Schultz, *Democracy and coercive diplomacy*, Cambridge University Press, 2004.

131 . Christian Davenport, *State Repression and the Domestic Democratic Peace*, Cambridge University Press, 2007; Milan Svolik, *The Politics of Authoritarian Rule,* Cambridge University Press, 2012.

132 . Vicenç Fisas, *Los conflictos etnopolíticos. ¿Podemos vivir juntos?*, Los libros de la Catarata, 2025; Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, Routledge, 2012; James D. Fearon y David D. Laitin, *Ethnicity, Insurgence and Civil War*, American Political Science Association, octubre de 2002; Frances Stewart (ed.), *Horizontal Inequalities and Conflict*, Palgrave Macmillan, 2008.

133 . Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer y Brian Min, *Why Do Ethnic Groups Rebel?*, Cambridge University Press, 2009.

134 . Andreas Schedler (ed.), *Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition,* Lynne Rienner, 2006; Steven Levitsky y Lucan A. Way, *Competitive Authoritarianism*, Cambridge University Press, 2011.

135 . Matthias Basedau y Jann Lay, "Resource Curse or Rentier Peace", *Journal of Peace Research*, vol. 46, nº 6, 2009; Miachael T. Klare, *Guerras por los recursos*, Urano, 2003.

136 . Ulrich Pilster y Tobias Böhmelt, "Coup-Proofing and Military Effectiveness", *Conflict Management and Peace Science*, vol. 28, nº 4, 2011.

137 . Aila Matanock y Paul Staniland, "How and Why Armed Groups Participate in Elections", *Perspectives on Politics*, vol. 16, nº 3, 2018.

138 . Hanne Fjelde y Kristine Höglund, "Electoral Institutions and Electoral Violence in Sub-Saharan Africa", *British Journal of Political Science*, vol. 46, nº 2, 2014; Emilie Hafner-Burton, Susan D. Hyde y Ryan Jablonski, "When Do Governments Resort to Election Violence?", *British Journal of Political Science*, vol. 44, nº 1, 2014; Edward D. Mansfield y Jack Snyder, *Electing to Fight: Why Emerging Democracies Go to War,* MIT Press, 2005; Pippa Norris, *Why Electoral Integrity Matters*, Cambridge University Press, 2014; Jack Snyder, *From Voting to Violence: Democratization and Nationalist Conflict*, WW Norton & Co, 2000.

139 . Clifford Geertz, *La interpretación de las culturas,* Gedisa, 1990.

140 . Jeremy M. Weinstein, *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*, Cambridge University Press, 2007.

141 . Hanna Pfeifer, Anna Geisy Maéva Clément, "The politics of recognition, armed non-state actors, and conflict transformation", nº 4, *PRIF Report*, 2022.

142 . Vicenç Fisas, *Anuario de procesos de paz 2009*, Escola de Cultura de Pau, 2009.

143 . Livia I. Schubiger y Matthew Zelina, "Ideology in Armed Groups", *Political Science & Politics*, vol. 50, nº 4, 2017.

144 . Ibraheem Bahiss, Ashley Jackson, Leigh Mayhew y Florian Weigand, "Rethinking armed group Control", Centre for Study of Armed Groups, *working paper*, 2022.

145 . Sukanya Podder, "Understanding the Legitimacy of Armed Groups: A Relational Perspective", *Small Wars and Insurgencies,* vol. 28, nº 4-5, 2017.

146 . Carolyn Nordstrom, *A Different Kind of War Story*, University of Pennsylvania Press, 1997.

147 . Stathis N. Kalyvas, *La lógica de la violencia en la guerra civil*, Akal, 2010. También sostiene sus tesis su colaboradora Laia Balcells, en *Rivalidad y venganza. La política de la violencia en las guerras civiles*, Bellaterra e ICIP, 2020.

148 . James C. Scott, *Domination and the Arts of Resistance*, Yale University Press, 1990; Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer y Brian Min, "Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and Analysis", *World Politics* vol. 62, nº 1, 2010; Lars-Erik Cederman, Kristian Skrede Gleditsch y Halvard Buhaug, *Inequalities, Grievances, and Civil War*, Cambridge University Press, 2013.

149 . Laia Balcells, *Rivalidad y venganza. La política de la violencia en las guerras civiles*, Bellaterra e ICIP, 2020.

150 . Stathis N. Kalyvas y Matthew Adam Kocher, "How *Free* is Free Riding in Civil Wars? Violence, Insurgency, and the Collective Action Problem", *World Politics*, vol. 59, nº 2, 2007; Jeremy Weinstein, *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*, Cambridge University Press, 2007; Paul Collier y Anke Hoeffler, "Greed and grievance in civil war", *Oxford Economic Papers*, vol. 56, nº 4, 2004.

151 . Hannah Arendt, *Eichmann en Jerusalén*, Debolsillo, 2006; Theodor Adorno, *The Authoritarian Personality,* Norton, 1950; Amartya Sen, I*dentidad y violencia*, Katz, 2007.

152 . En los años sesenta, aunque no empleó el término metacognitividad, las nociones de *B-cognition, metamotivation*, experiencias cumbre y autorrealización de Abraham H. Maslow, pueden entenderse como un marco precursor de la metacognición moderna. Para él, el ser humano autorrealizado es aquel que no solo piensa y actúa, sino que se observa, se evalúa y se trasciende a través de una conciencia reflexiva sobre su propio pensar (*El hombre autorrealizado. Hacia una psicología del ser,* Kairós, 1987).

153 . Philip Zimbardo, *El efecto Lucifer*, Paidós, 2008.

154 . Vicenç Fisas, *Manual para crear miedo. Discursos belicistas y rearme militar*, Icaria, 2025.

155 . Daron Acemoğlu y James A. Robinson, *Por qué fracasan los países: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza,* Deusto, 2012; Lars-Erik Cederman, Andreas Wimmer y Brian Min, *Why Do Ethnic Groups Rebel?*, Cambridge University Press, 2009; James D. Fearon y David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War", *American Political Science Review*, vol. 97, nº 1, 2002; Benjamin Reilly, *Democracy in Divided Societies*, Cambridge University Press, 2001; Håvard Hegre, Tanja Ellingsen, Scott Gates y Nils Petter Gleditsch, "Toward a Democratic Civil Peace? Democracy, Political Change, and Civil War, 1816–1992", *American Political Science Review*, vol. 95, nº 1, 2001.

156 . Amartya Sen, *Identidad y violencia*, Katz, 2007.

157 . Kwame Anthony Appiah, *The Ethics of Identity*, Princeton University Press, 2007; Amin Maalouf, *Identidades asesinas,* Alianza Editorial, 2012; Stuart Hall, *Modernity and Its Futures*, Polity, 1992; Homi K. Bhabha, *The Location of Culture,* Routledge, 2004; Martha C. Nussbaum, *Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities*, Princeton University Press, 2012; Will Kymlicka, *Multicultural Odysseys*, Oxford University Press, 2007; Bhikhu Parekh, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory,* Palgrave Macmillan, 2000; Isaiah Berlin, *El estudio adecuado de la humanidad,* Turner, 2009; Rogers Brubaker, *Ethnicity without Groups,* Harvard University Press, 2006.

158 . Paulo Freire, *Pedagogía del oprimido*, Siglo XXI, 2023.

159 . James C. Scott, *Los dominados y el arte de la resistencia*, Txalaparta, 2003.

160 . Jack Snyder, *From Voting to Violence*, WW Norton & Co, 2000.

161 . Paul Collier y Anke Hoeffler, "On Economic Causes of Civil War", *Oxford Economic Papers,* vol. 50, nº 4, 1998; "Greed and grievance in civil war", *Oxford Economic Papers*, vol. 56, nº 4, 2004.

162 . Donald Horowitz, *Ethnic Groups in Conflict*, University of California Press, 1985.

163 . James D. Fearon y David D. Laitin, "Ethnicity, Insurgency, and Civil War", vol. 97, nº 1, *American Political Science Review*, 2003.

164 . Vicenç Fisas, *El sexo de la violencia*, Icaria, 1998.

165 . Cynthia Cockburn, *From where We Stand: War, Women's Activism and Feminist Analysis*, Zed Books, 2007.

166 . Cynthia Enloe, *Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives,* Cambridge University Press", 2000; Carol Cohn, "Sex and Death in the Rational World of Defense Intellectuals", *Signs,* vol. 12, nº 4, 1987; Joshua S. Goldstein, *War and Gender*, Cambridge University Press, 2001; Paul Higate, *Military Masculinities: Identity and the State*, Praeger, 2003; Laura Sjoberg, *Gendering Global Conflict*, Columbia University Press, 2013; Mary Caprioli, "Gendered Conflict", *Journal of Peace Research,* vol. 37, nº 1, 2000; Erik Melander, "Gender Equality and Intrastate Armed Conflict", *International Studies Quarterly*, vol. 49, nº 4, 2005; Valerie M. Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli, and Chad F. Emmett, *Sex and World Peace* Columbia University Press, 2012; Rita Laura Segato, *La guerra contra las mujeres*, Traficantes de Sueños, 2016.

167 . Raewyn Connell, *Masculinities*, University of California Press, 2005.

168 . Joan Tronto, *Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care*, Routledge, 1994, y *Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice*, NYU Press, 2013.

169 . Fiona Robinson, "Globalizing Care: Ethics, Feminist Theory, and International Relations", *Alternatives*, vol. 22, nº 1, 1997, y *The Ethics of Care: A Feminist Approach to Human Security*, Temple University Press, 2011.

170 . Valerie M. Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli y Chad F. Emmett, *Sex and World Peace,* Columbia University Press, 2012; Mary Caprioli, "Gender Equality and State Aggression", *International Interactions*, vol. 29, nº 3, 2003.

171 . M. Eriksson Baaz y M. Stern, *Sexual Violence as a Weapon of War?,* Zed Books, 2013; Dara Kay Cohen, *Rape during Civil War,* Cornell University Press, 2016; "Sexual violence in armed conflict", *International Review of the Red Cross*, nº 894, 2015.

172 . Cynthia Enloe, *Globalización y militarismo. Las preguntas feministas*, Trama, 2022; *Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics*, University of

California Press, 2014; *Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives*, University of California Press, 2000.

173 . Laura Sjoberg, *Gendering Global Conflict: Toward a Feminist Theory of War*, Columbia University Press, 2013.

174 . Victor Seidler, *Unreasonable Men. Masculinity and Social Theory (Male Orders)*, Routledge, 2003; Iris Marion Young, "The Logic of Masculinist Protection", *University of Chicago Press,* vol. 29, nº 1, 2003.

175 . Joshua S. Goldstein, *War and Gender*, Cambridge University Press, 2001.

176 . Vicenç Fisas, *Negociar la paz en tiempos de guerra*, Los Libros de la Catarata, 2025; *Manual de negociación de conflictos políticos*, Icaria, 2021.

177 . Caroline Hartzell y Matthew Hoddie, "Institutionalizing Peace: Power Sharing and Post-Civil War Conflict Management", *American Journal of Political Science,* vol. 47, nº 2, 2003, pp. 318-332.

178 . Philip Roeder y Donald Rothchild, *Sustainable Peace: Power and Democracy after Civil Wars*, Cornell University Press, 2005.

179 . Donald Rothchild, "Settlement Terms and Post-agreement Stability," *Ending Civil Wars: The Implementation of Peace Agreements*, Stephen John Stedman, Donald Rothchild y Elizabeth M. Cousens, Lynne Rienner Publishers, 2002.

180 . Christine Bell, *Accessing political power: women and political power-sharing in peace processes,* UN Women, 2018.

181 . No comento el caso de Tigray, en Etiopía, pues, aunque en noviembre de 2022 se firmó un frágil Acuerdo de Paz, mediado por la Unión Africana, con los compromisos de un cese de hostilidades, el desarme progresivo del TPLF, restablecimiento de los servicios básicos y el retiro de las fuerzas extranjeras y de milicias no federales, continuaron las tensiones con el riesgo de volver a la guerra. El TPLF fue retirado de las listas terroristas, pero el ejército mantuvo su presencia en las zonas fronterizas con Tigray y permanecía la tensión. No hubo reparto del poder, aunque el líder del TPLF regresó a la vida política. En 2025 se produjo una escisión en el TPLF.

182 . Stef Vandeginste, *Arusha at 15: reflections on power-sharing, peace and transition in Burundi,* Institute of Development Policy and Management, 2015.

183 . Tyler McBrien, *A bumpy road to peace and democracy: Liberia's power-sharing government, 2003-2005, Innovations for Successful Societies*, Princeton University, 2020.

184 . International Crisis Group, "Darfur's Fragile Peace Agreement", 2006, y "Darfur: Revitalising the Peace Process", 2007.

185 . International Crisis Group, "Sudan's Comprehensive Peace Agreement: The Long Road Ahead", 2006, y notas en 2010-2011.

186 . International Crisis Group, “Southern Philippines: Making Peace Stick in the Bangsamoro”, report 331, 2023.

187 . Bernhard May, “The Law on the Governing of Aceh: The way forward or a source of conflicts?”, *Conciliation Resources*, Accord nº 20, 2008.

188 . International Crisis Group, “Nepal’s Peace Agreement: Making It Work”, 2006, y “Nepal’s Fitful Peace Process”, 2011.

189 . Veronique Dudouet, Katrin Planta y Hans J. Giessmann, *The Political Transformation of Armed and Banned Groups,* Berghof Foundation y UNDP, 2016.

190 . Véase https://n9.cl/vt5gxe.

191 . Carrie Manning, Ian Smith y Ozlem Tuncel, “Rebels with a cause: Introducing the Post-Rebel Electoral Parties dataset”, *Journal of Peace Research*, vol. 61, nº 2, 2022.

192 . Carrie Manning, Ian O. Smith, Ozlem Tuncel Gurlek, *Parties, Politics, Peace Electoral Inclusion as Peacebuilding*, Routledge, 2023.

193 . Véronique Dudouet y Claudia Cruz Almeida, *Political Engagement by Former Armed Groups Outside Party Politics,* Folke Bernadotte Academy, 2022.

194 . Véase https://n9.cl/rnnp8.